

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Penal



TESIS DOCTORAL

La codificación penal en Panamá

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Carlos Enrique Muñoz Pope

Madrid, 2015

TP
1226
001

Carlos Enrique Muñoz Pope



X-53-278181-0

LA CODIFICACION PENAL EN PANAMA

Departamento de Derecho Penal
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
1986



BIBLIOTECA

Colección Tesis Doctorales. Nº 1/86

© Carlos Enrique Muñoz Pope
Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía
Noviciado, 3 28015 Madrid
Madrid, 1986
Xerox 9400 X 721
Depósito Legal: M-27547-1985

U N I V E R S I D A D C O M P L U T E N S E
F A C U L T A D D E D E R E C H O
D E P A R T A M E N T O D E D E R E C H O P E N A L

Tesis Doctoral

LA CODIFICACION PENAL EN PANAMA

por

Carlos Enrique Muñoz Pope

Director: Prof. Dr. D. José Ma. Rodríguez Devesa

MADRID
1981

INDICE

Abreviaturas utilizadas	xv
Preámbulo	xxi

Capítulo Primero

ANTECEDENTES DE LA CODIFICACION PENAL PANAMEÑA

I. Introducción	2
II. El código penal colombiano de 1890	8
A) Antecedentes	8
B) Estructura	10
C) Contenido	11
D) Consideración final	18
III. Modificaciones producidas por la Constitución de 1904	19
A) Generalidades	19
B) Modificaciones producidas por el texto original de la Constitución de 1904	19
C) Modificaciones producidas por las reformas a la Consti tución de 1904	20
IV. Leyes reformatorias del código penal	21
Notas	26

Capítulo Segundo

EL CODIGO PENAL PANAMEÑO DE 1916

I. Introducción	32
II. Fuentes del código penal de 1916	35

A) El código penal español de 1870	35
B) El código penal hondureño de 1906	40
III. El código penal de 1916	44
A) Introducción	44
B) Estructura	48
C) Contenido	50
D) Juicios sobre este código	56
E) Consideraciones finales	58
Notas	61

Capítulo Tercero

EL CODIGO PENAL PANAMEÑO DE 1922

I. Introducción	68
II. Fuentes del código penal de 1922	70
A) El código penal italiano de 1889	70
1. Antecedentes	70
2. Contenido	72
3. Juicios sobre este código	77
B) El proyecto colombiano de 1912 (Proyecto Concha)	79
1. Antecedentes	79
2. Contenido	82
3. Principales diferencias con el código italiano de 1889	86

III. El código penal de 1922	88
A) Introducción	88
B) Contenido	90
C) Principales semejanzas y diferencias con el proyecto colombiano de 1912	97
1. Principales semejanzas	97
2. Principales diferencias	99
D) Juicios sobre este código	101
E) Consideración final	105
Notas	107

Capítulo Cuarto

LA LEGISLACION COMPLEMENTARIA

I. Introducción	123
II. Legislación sobre extradición	123
A) Introducción	123
B) Antecedentes	124
C) Régimen actual	125
III. Legislación penitenciaria	128
A) Introducción	128
B) Antecedentes	129
C) Régimen Actual	131
IV. Legislación de menores	134
A) Introducción	134

B) Antecedentes	135
C) Régimen actual	136
V. Legislación sobre medidas de seguridad	138
A) Introducción	138
B) Régimen actual	139
Notas	143

Capítulo Quinto

LA LEGISLACION ESPECIAL

I. Introducción	149
II. Legislación en materia de salud pública	149
A) Introducción	149
B) Los delitos en materia de drogas	150
1. Antecedentes legislativos	150
2. Legislación vigente	153
3. Consideraciones críticas	154
C) Los delitos de contagio venéreo y nutricio	155
1. Introducción	155
2. Contagio venéreo	156
3. Contagio nutricio	156
III. Legislación en materia de delitos contra el honor..	157
A) Introducción	157
B) Antecedentes legislativos	157

1. La Ley 80 de 1941	157
2. Decreto de Gabinete 343 de 1969	159
3. Legislación vigente	161
IV. Legislación sobre usura	163
V. Legislación sobre delitos contra la seguridad del Estado	164
A) Introducción	164
B) Distintas hipótesis delictivas	165
VI. Legislación sobre cheques sin provisión de fondos ..	167
A) Introducción	167
B) Distintas infracciones incriminadas	168
1. Delito y falta (dolo y culpa)	168
2. Conductas dolosas	169
3. Conductas culposas	169
C) Naturaleza jurídica: delito de estafa o delito autónomo	170
D) El proyecto de la "Asociación Bancaria Panameña".....	171
VII. Legislación sobre delitos contra la seguridad pública	172
A) Introducción	172
B) Distintas hipótesis delictivas	173
VIII. Legislación sobre delitos contra el orden público.	175
A) Introducción	175
B) Concepto de orden público.....	176

C) Distintas hipótesis delictivas	177
Notas	179

Capítulo Sexto

LAS REFORMAS AL CODIGO PENAL

I. Introducción	187
II. Ley 25 de 1927	188
III. Ley 3 de 1931	190
IV. Ley 5 de 1933	193
V. Ley 34 de 1941	197
VI. Ley 80 de 1941	198
VII. Decreto-Legislativo 11 de 1945	199
VIII. Ley 24 de 1951	199
IX. Ley 22 de 1954	200
X. Ley 43 de 1958	201
XI. Ley 1 de 1959	202
XII. Ley 68 de 1961.	203
XIII. Ley 6 de 1963	204
XIV. Ley 11 de 1963	205
XV. Ley 1 de 1964	206
XVI. Ley 9 de 1964	207
XVII. Ley 9 de 1967	207
XVIII. Decreto de Gabinete 141 de 1969	209
Notas	210

Capítulo Séptimo

LAS INFRACCIONES PENALES ADMINISTRATIVAS

I. Introducción	239
II. El código administrativo	240
III. Legislación sobre vagancia	242
A) Introducción	242
B) Antecedentes legislativos	242
C) Ley 57 de 1941	243
IV. Legislación sobre peligrosidad social	245
V. Legislación sobre justicia administrativa	247
Notas	250

Capítulo Octavo

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS NORMAS PENALES EN LA CONSTITUCION DE 1972.

I. Introducción	255
II. Prisión por obligaciones civiles	257
A) Declaración constitucional	257
B) Antecedentes constitucionales	257
C) Observaciones al texto constitucional	259
III. Extradición	262
A) Declaración constitucional	262
B) Antecedentes constitucionales	262

C) Observaciones al texto constitucional	263
IV. Sistema penitenciario	265
A) Declaración constitucional	265
B) Antecedentes constitucionales	266
C) Observaciones al texto constitucional	268
V. Penas prohibidas	271
A) Declaración constitucional	271
B) Antecedentes constitucionales	272
C) Observaciones al texto constitucional	273
VI. El principio de legalidad	276
A) Declaración constitucional	276
B) Antecedentes constitucionales	276
C) Observaciones al texto constitucional	278
VII. Obediencia jerárquica	280
A) Declaración constitucional	280
B) Antecedentes constitucionales	280
C) Observaciones al texto constitucional	281
VIII. Retroactividad penal	283
A) Declaración constitucional	283
B) Antecedentes constitucionales	283
C) Observaciones al texto constitucional	285
IX. Amnistía	286
A) Declaración constitucional	286

B) Antecedentes constitucionales	287
C) Observaciones al texto constitucional	288
X. Indultos y rebaja de penas	289
A) Declaración constitucional	289
B) Antecedentes constitucionales	290
C) Observaciones al texto constitucional	291
XI. Irresponsabilidad parlamentaria	293
A) Declaración constitucional	293
B) Antecedentes constitucionales	294
C) Observaciones al texto constitucional	295
XII. Inviolabilidad presidencial	296
A) Declaración constitucional	296
B) Antecedentes constitucionales	297
C) Observaciones al texto constitucional	299
XIII. Otras cuestiones	301
XIV. Consideraciones finales	303
Notas	305

Capítulo Noveno

LA PROBLEMÁTICA DE LA "ZONA DEL CANAL" Y EL TRATADO DE 1977 (TRATADO TORRIJOS-CARTER).

I. Introducción	311
II. La "zona del canal": su legislación	313
A) Antecedentes	313

B) El "Canal zone code" de 1963	315
1. Introducción	315
2. Garantías penales fundamentales	318
3. Ambito de aplicación del código	319
4. Consideraciones generales sobre las "infracciones penales" en el Código de 1963	320
5. Consideraciones generales sobre las sanciones	322
6. Los crímenes en particular	327
III. El Tratado de 1977 (Tratado Torrijos-Carter)	330
A) Introducción	330
B) El nuevo régimen jurisdiccional	332
1. La jurisdicción panameña	332
2. El llamado "período de transición"	333
3. Régimen jurídico de los empleados ciudadanos norteamericanos y sus dependientes	337
4. Régimen jurídico de los miembros de las fuerzas armadas norteamericanas, miembros del componente civil y sus dependientes	341
5. Régimen de garantías penales	343
6. La ejecución de sentencias penales	345
IV. La "public law 96-70" (Sep. 27, 1979)	346
Notas	347

Capítulo Décimo

LOS PROYECTOS DE REFORMA

I. Introducción	356
II. Los primeros intentos de reforma del código penal de 1922	357
III. El proyecto de código penal de 1928	362
A) Introducción	362
B) Fuente y contenido	363
C) Principales diferencias con el código penal de 1922..	365
D) Consideración final	369
IV. El proyecto revisado de 1943	370
V. El proyecto de 1952	372
A) Introducción	372
B) Fuentes del proyecto de 1952	373
C) Contenido	374
D) Principales diferencias con el código penal de 1922 .	377
E) Consideración final	378
V. El anteproyecto de código penal de 1970	380
A) Introducción	380
B) Fuentes del anteproyecto	382
1. Generalidades	382
2. El proyecto de código penal tipo para latinoaméri- ca	385

3. Otras fuentes	391
C) Estructura del anteproyecto	392
D) Contenido del anteproyecto	392
E) Innovaciones respecto del código penal vigente	398
1. Generalidades	398
2. Innovaciones en la teoría de la ley	399
3. Innovaciones en la teoría del delito	399
4. Innovaciones en la teoría de la pena y medidas de seguridad	400
5. Innovaciones en el Libro II	401
F) Juicios emitidos sobre el anteproyecto	402
G) La revisión del anteproyecto	405
1. Introducción	405
2. La "Comisión Revisora" del anteproyecto	406
3. Principales modificaciones al anteproyecto de 1970	412
4. El anteproyecto revisado (Proyecto de 1978)	416
5. Consideraciones finales	417
Notas	419
Conclusiones ,	439
Bibliografía	445

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ANTON ONECA

José ANTON ONECA,
Derecho Penal. Parte General,
Madrid, 1949.

Anuario

Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales (Madrid),
se cita por tomo y año.

AROSEMENA GUARDIA

Rubén AROSEMENA GUARDIA, "No-
tas y documentos sobre el có-
digo penal panameño", Anuario
de Derecho, VolV(1962).

Actas

Actas. Primer Seminario de -
Actualización en Ciencias Pe-
nales, Departamento de Cien-
cias Penales y Criminológi-
cas, Universidad de Panamá,
Panamá, 1977.

BACIGALUPO

Enrique BACIGALUPO, "El siste-
ma de reacciones penales en
las recientes reformas y pro-
yectos latinoamericanos" Cua-
ternos de Política Criminal,
1977, Nº 2.

BUENOS ARUS

Francisco BUENO ARUS, "Las -
normas penales de la Constitu-
ción española de 1978" en Re-
vista General de Legislación
y Jurisprudencia, julio de
1979.

BUSTOS RAMIREZ

Juan BUSTOS RAMIREZ, "Consideraciones respecto a la estructura del delito en la reforma penal latinoamericana" en La reforma del Derecho Penal, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1980.

CEVILLE

Oscar CEVILLE, "Motivos orientadores de la revisión (del anteproyecto de 1970)" en Actas. Primer Seminario de Actualización en Ciencias Penales. Panamá, 1977.

COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON

Mamuel COBO DEL ROSAL y Tomás S. VIVES ANTON, Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Valencia, 1980.

CONCHA

José Vicente CONCHA, "Proyecto de Código Penal y Exposición de Motivos" en La reforma penal en Colombia, Bogotá, 1924.

CUELLO CALON

Eugenio CUELLO CALON, Derecho Penal, Tomo I, Vol. 1, por Cargado, Bosch, Barcelona, 1980.

DEL ROSAL

Juan DEL ROSAL, Tratado de Derecho Penal Español. Parte General, Tomo I, Madrid, 1968.

- ECHEVERS Fabián ECHEVERS, "Cincuenta años de vigencia del código penal" en Anuario de Derecho, Año IX (1970-71), Nº 9.
- ESTRADA VELEZ Federico ESTRADA VELEZ, Manual de Derecho Penal, Edijus, Medellín, 1975.
- GIMBERNAT ORDEIG Enrique GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la parte general del derecho penal español, Universidad Complutense, 1979.
- GRISPIGNI Filippo GRISPIGNI, Diritto Penale Italiano, Volume primo, Milano, 1952.
- JIMENEZ DE ASUA Luis JIMENEZ DE ASUA, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, 2ª. edición, Losada, S.A., Buenos Aires, 1956.
- LEX LEX, Revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (Rep. de Panamá), se cita por número y año.
- MANZINI Vincenzo MANZINI, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Ediar Buenos Aires, 1948.

MESA VELASQUEZ

Luis Eduardo MESA VELASQUEZ, Lecciones de Derecho Penal, 2ª. edición, Bogotá, 1974.

MUÑOZ CONDE

Francisco MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Sevilla, 1979.

MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ

Campo Elías MUÑOZ RUBIO y - Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, Derecho Penal Panameño. Parte General, Panamá, 1980.

MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, Observaciones

Campo Elías MUÑOZ R. y Aura E.G. DE VILLALAZ, Observaciones al anteproyecto de código penal elaborado por el Dr. Aristides Rojo, Panamá, 1975.

PEREZ

Luis Carlos PEREZ, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Temis, 1967.

PIOLETTI

Ugo PIOLETTI, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, Jovene, Napoli, 1969

QUINTANO RIPOLLES

Antonio QUINTANO RIPOLLES, La influencia del derecho penal español en las legislaciones hispanoamericanas, Madrid, 1953.

QUINTERO

César QUINTERO, Derecho Constitucional, Tomo I, San José, 1967.

RANIERI

Silvio RANIERI, Manuale di Diritto Penale, volume primo, Padova, 1968.

REYES ECHANDIA

Alfonso REYES ECHANDIA, Derecho Penal, Bogotá, 1979

RICORD

Humberto E. RICORD, "Los derechos humanos penales en el derecho panameño y en el código de la zona del canal" en Anuario de Derecho, Año IX (1970-71), Nº. 9.

RODRIGUEZ DEVESA, P. General

José M^a. RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español. Parte General, 7^a. edición, Madrid 1979.

RODRIGUEZ DEVESA, P. Especial

José M^a. RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español. Parte Especial, 8^a edición, Madrid, 1980.

RODRIGUEZ MOURULLO

Gonzalo RODRIGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Civitas, Madrid, 1977.

II

ROMERO SOTO

Luis Eduardo ROMERO SOTO, De-
recho Penal. Parte General,
Tomo I, Temis, Bogotá, 1969.

ROYO

Aristides ROYO, Proyecto de
Código Penal. Exposición de
Motivos, Panamá, 1970 (edi-
ción mecanográfica).

SAINZ CANTERO

José A. SAINZ CANTERO, Leccio-
nes de Derecho Penal. Parte
General, I, Bosch, Barcelona,
1979.

SANTORO

Arturo SANTORO, Manuale di Di-
ritto Penale, volume primo,
Torino, 1958.

SEGURA

Pablo A. SEGURA, Evolución -
del Derecho Penal Colombiano,
Bogotá, 1924.

SERRANO GOMEZ

Alfonso SERRANO GOME, "Temas
de Derecho Penal en la nueva
Constitución" en Lecturas so-
bre la Constitución Española,
Tomo II, UNED, 1978.

SOSA y ARCE

Juan B. SOSA y Enrique J. ARCE,
Compendio de historia de Pa-
namá, Editorial Universita-
ria, Panamá, 1977.

PREAMBULO

Preteader elaborar un trabajo de investigación sobre la codificación penal panameña presenta una serie de incentivos que tornan atrayente la elaboración del mismo.

En gran parte ello se debe a la poca bibliografía existente sobre el derecho penal panameño, que hace de este estudio el primer trabajo al respecto.

Cierto es que algunos autores panameños se han ocupado de numerosas de las cuestiones aquí tratadas, pero ello en nada afecta lo antes señalado, ya que se trata, en la mayoría de los casos, de breves trabajos sobre aspectos muy concretos.

En Panamá es poco lo que se conoce sobre la legislación penal que rigió en nuestro país durante la época en que fuimos parte de Colombia (1821-1903), aunque esta carencia pueda ser suplida con el estudio de algunos autores colombianos que han dedicado cierta atención a la legislación vigente el siglo pasado en su respectivo país.

Algo similar ocurre con el Código Penal panameño de 1916, que estuvo vigente menos de seis años y del que no conocemos ningún estudio particular. Afortunadamente sobre dicho código podemos recurrir a los autores españoles que han estudiado el Código Penal español de 1870.

Esta alarmante realidad se ha mantenido durante muchos años de estar vigente el Código Penal de 1922, si bien en la pasada década han comenzado a tener los estudios penales en nuestro país una creciente significación.

Desde la vigencia del Código de 1922 se han dictado numerosas leyes que complementan el Código, otras que crean nuevas figuras delictivas al margen del mismo o que lo reforman sucesivamente.

Un conocimiento cabal del Derecho penal panameño vigente no está exento de peligros, toda vez que desde que se aprobó el código en cuestión (17 de noviembre de 1922) no se ha efectuado ninguna edición oficial del mismo, salvo la que apareció en la respectiva Gaceta Oficial y la primera edición oficial del mismo código.

El trabajo que elaboramos, en consecuencia, presenta sus peligros en este sentido, pero sus incentivos se nos muestran notablemente halagadores: presentar un panorama amplio de cuál ha sido y cuál es el derecho penal que rige en este momento. Se trata de una materia inédita que ahora presentamos a grandes rasgos.

Lo antes expresado cobra mayor actualidad y trascendencia a propósito de lo expuesto sobre nuestras constituciones, la zona del canal de Panamá y los proyectos de reforma del Código vigente. En particular, lo relativo a la legislación vigente en la zona del canal que ha estado prácticamente abandonada por los autores patrios.

Con respecto a los proyectos de reforma ha ocurrido algo similar que lo sucedido con la zona del canal, pero con mayor significación -a nuestro entender- puesto que estimamos inconcebible que -al igual que como ocurrió con el Código Penal de 1916- no haya estudio alguno sobre la mayoría de los proyectos mencionados, o, lo que es más grave, no exista ningún ejemplar del texto de 1943 en ningún archivo o biblioteca.

Elaborar este trabajo, que nos ha sido sugerido por el profesor RODRIGUEZ DEVESA, nos obliga a trabajar pronto sobre la legislación vigente en Panamá durante la época en que pertenecemos a Colombia, al igual que sobre la legislación que rigió durante la época en que fuimos parte de la Corona Española y alguna indagación sobre la legislación penal de los pobladores del

país en la época en que llegan a Panamá los primeros españoles - (siglo XVI).

La historia del Derecho penal panameño está todavía, al menos parcialmente, pendiente de investigación.

Capítulo Primero

ANTECEDENTES DE LA CODIFICACION

PENAL PANAMEÑA

- I. INTRODUCCION
- II. EL CODIGO PENAL COLOMBIANO DE 1890
- III. MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LA
CONSTITUCION DE 1904
- IV. LEYES REFORMATARIAS DEL CODIGO PENAL

I. INTRODUCCION

El proceso de separación política de lo que hoy constituye la República de Panamá de la Corona española se inicia el día 10 de noviembre de 1821 y culmina, pocos días después, el 28 del mismo mes, aunque ya otros pueblos del istmo centroamericano, y en general muchos países del Continente, habían logrado la independencia desde mucho antes.

De acuerdo con MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ "según la Declaración de la Academia Panameña de la Historia acerca de la Independencia del Istmo, los pueblos del Istmo obtuvieron su independencia de España mediante un proceso espontáneo que se inicia con el Grito de la Villa de Los Santos el 10 de noviembre de 1821, se confirma y robustece con la acción de los Ayuntamientos y pueblos de Natá, San Francisco de la Montaña y Panamá y concluye con la adhesión de las ciudades de Santiago de Veraguas y Portobelo, según consta en las Actas levantadas con motivo de aquellos sucesos" (1).

Concluye la separación el 28 de noviembre de 1821 cuando se redacta el "Acta de Independencia" y se señala en el artículo 1º de la misma que "Panamá se declara espontáneamente soberana del gobierno español".

Ello, no obstante, no significó que Panamá se constituyera en Estado independiente, ya que en el art. 2º del "Acta de Independencia" los próceres de aquella, imbuidos por el pensamiento del Libertador SIMON BOLIVAR, acuerdan voluntariamente incorporar el territorio del istmo de Panamá a la "Gran Colombia" que dirigía aquél.

Panamá se constituyó en un Departamento (o Provincia) de "Nueva Granada", como se denominaba en aquella época Colombia, situación que se mantuvo hasta 1903, a pesar de que a los pocos

años de su unión a la "Gran Colombia" ésta se disolvía y las naciones que la formaron se constituían en Estados independientes.

A principios de este siglo los historiadores SOSA y ARCE señalaban que "Bolívar supo en Enero de 1822 las ocurrencias del Istmo y desde su Cuartel General de Popayán destacó á uno de sus edecanes, el Coronel Daniel Florencio O'Leary, para que se trasladara á Panamá como portador de una nota laudatoria para Fábrega y para que presentara á los istmeños las congratulaciones á que eran acreedores por la libertad de su patria" (2).

"La incorporación espontánea del territorio panameño á la Gran Colombia dió motivo a que el Ejecutivo de aquel país expediera el decreto de 9 de Febrero de 1822, por el cual se creó con "las provincias á donde se extendía bajo el gobierno español la antigua Comandancia General de Panamá, con los límites que tenían", el Departamento del Istmo" (3).

Por lo que respecta al estado de la legislación penal, que es la que nos interesa en esta oportunidad, en la Nueva Granada de aquellos días continuaron rigiendo las disposiciones vigentes al momento de la separación de España, si bien con algunas modificaciones hasta que en 1837 se dicta el primer Código Penal colombiano, conocido como el Código Penal de 1837.

Esa fue, en términos generales, la situación en aquellos días. En la doctrina penal colombiana actual hay prácticamente unanimidad de criterios a este respecto. Entre otros, podemos mencionar, los siguientes autores: Luis Carlos PEREZ (4), Luis Eduardo MESA VELASQUEZ (5), Alfonso REYES ECHANDIA (6), Luis Eduardo ROMERO SOTO (7) y Federico ESTRADA VELEZ (8).

"La lucha por la independencia -señala ROMERO SOTO- con centró todos los esfuerzos en el propósito de la emancipación, y de ahí que no sea posible pedir que se dedicara tiempo a la com-

posición de un código penal" (9).

Anota MESA VELASQUEZ que "Al producirse la emancipación (año 1810 en adelante), se dispuso por el Constituyente de las Provincias Unidas de Nueva Granada que continuara la vigencia de las leyes españolas en estas Provincias, pero con carácter subsidiario, en cuanto no pugnaran con el nuevo orden institucional y con la legislación nacional, a medida que ésta se fuese expidiendo" (10).

"La legislación penal española, -advierte REYES ECHANDIA- vigente en el Nuevo Reino de Granada durante el periodo de la dominación ibérica, continuó rigiendo aún después de obtenida la emancipación. Sólo en forma paulatina y parcial comenzó a ser sustituida por leyes nacionales" (11).

Si bien es cierto que en la Nueva Granada siguieron rigiéndose por la legislación hispánica, no deja de tener razón PEREZ (12) cuando señala que las mismas fueron "atemperadas en lo tocante a garantías penales y procesales por las declaraciones de la Constitución".

No fue, sin embargo, hasta 1823, después de haber sido consolidada definitivamente la independencia de la Corona española, hecho ocurrido en 1821, cuando se presentó el primer proyecto de Código Penal.

Este Proyecto era, en esencia, el mismo que en 1821 había sido presentado a las Cortes españolas, con las variaciones que sus redactores estimaron necesario introducir al texto de éste.

Respecto a las causas que justificaron la no aprobación de este proyecto, no hay dato cierto, SEGURA cree que "no fue discutido probablemente por falta de tiempo" (13). Otros autores, no obstante, piensan que es posible que ello se debiera a la aversión por la materia hispánica.

"Por ser una codificación -comenta ROMERO SOTO- estructurada dentro del derecho penal español, no llegó a convertirse en ley" (14).

PEREZ se muestra de acuerdo, en parte, con la opinión anterior, aunque advierte que la misma puede no ser la única razón de tal rechazo. " a no adopción -añade este autor- del proyecto de 1823 se debió, seguramente, a las resistencias que despertaban todas las iniciativas de origen español. El cansancio y la repugnancia hacia la Corona, de un lado, y el reconocimiento de los derechos del hombre por las leyes francesas, de otro, determinaron la conversión hacia estas, mirándolas no sólo por su aspecto novedoso, sino por sus conveniencias para las naciones libertadas" (15).

Un nuevo proyecto se redactó en 1833, esta vez por los miembros del "Consejo de Estado", que luego se convirtió en ley siendo el Código Penal de 1837.

En la doctrina colombiana MESA VELASQUEZ señala que "se afirma que ese Código fue calcado del Código francés de 1832, que tuvo por matriz el llamado Código napoleónico de 1810, en el que se inspiraron bastantes legisladores" (16).

Esta referencia a un supuesto Código penal francés de 1832 no es correcta, toda vez que el viejo Código penal de 1810 todavía está vigente, a pesar de las innumerables modificaciones que se le han hecho a través de los años.

A pesar de que el Código de 1837 se inspira en numerosos aspectos de la legislación francesa de 1810, es preciso reconocer, como lo hace PEREZ "que en muchas materias de las tratadas en sus cuatro libros se aparta de dicho texto, principiando por el rechazo de la división tripartita de crímenes, delitos y contravenciones" (17).

Los dos primeros libros tratan de cuestiones que hoy denominamos de "parte general": el 1º, entre otras cosas, trae una definición del delito que se concibe como una "voluntaria y maliciosa violación de la ley", enumera las penas aplicables, entre las cuales se encontraban la de muerte, sanciones de tipo aflictivas e infamantes (como la vergüenza pública) y la ejecución de las penas, trata de la tentativa, de la conspiración, etc.; el 2º. versa sobre los delincuentes: trata de las personas responsables criminalmente, personas excusables y de las circunstancias modificadoras de la responsabilidad.

En los libros restantes encontramos la regulación de cuestiones que hoy conforman lo que se denomina "parte especial": el 3º, trata de los delitos y culpas contra la sociedad: incluye lo relativo a las infracciones contra la religión, contra la seguridad exterior del Estado, contra la tranquilidad social y el orden público, contra los funcionarios, contra la salud, contra la moral, contra la hacienda nacional y contra la fe pública; finalmente, el 4º, trata de los delitos y culpas contra los particulares: contra las personas, contra la honra y contra la propiedad. Omite, por cierto, la regulación de las contravenciones (18).

Este proyecto de 1833 fue aprobado en 1837 y se convirtió en la Ley de 27 de junio de 1837.

A pesar de la enorme cantidad de modificaciones que se le introdujeron al proyecto en el Senado y Cámara de Representantes de aquél país, el nuevo Código "siguió la distribución del proyecto del Consejo de Estado" (19) ya antes comentado.

ROMERO SOTO señala que este Código "se distingue por su tendencia humanitaria en la fijación de las penas, corrigiendo las atrocidades de la legislación española e implantando la igualdad en el tratamiento de los sujetos penales, Sin embargo,

no pudo librarse por completo de los resabios de tal legislación, y es así como consagra la pena de infamia y la de muerte, ejecutadas con el aparato acostumbrado en la Colonia y que tenía por fin conmover y atemorizar a los circunstantes" (20).

Ello, no obstante, no significa que la legislación penal española que se utiliza de modelo pueda ser calificada de inhumana ni cruel, ya que desde el siglo XVIII numerosas disposiciones que podrían calificarse de tales no tenían aplicación real y efectiva (21).

Además, es preciso recordar que, aunque habían penas privativas de libertad de larga duración, y en ocasiones de reclusión perpetua, ya en 1834 la Ordenanza general de los presidios del Reino prohibía la aplicación efectiva de privación de libertad por más de 10 años, como bien ha puesto de manifiesto recientemente el profesor RODRIGUEZ DEVESA (22).

Aunque reconoce la influencia de la escuela de J. BENTHAM y de la legislación francesa, SEGURA le critica a este Código que "establece penas draconianas, desproporcionadas, atroces, copia disposiciones españolas y bajo su amparo se levantaron muchos cadalsos por delitos políticos" (23).

Por su parte PEREZ señala que el Código de 1837 siguió del proyecto las "definiciones sobre el delito, la conjuración, la tentativa, etc., la adopción de las penas de muerte, trabajos forzados, presidio, reclusión en una casa de trabajo, vergüenza pública, prisión, expulsión del territorio nacional y confinamiento (art. 19). Aceptó igualmente las penas no corporales: declaración expresa de infamia, privación de los derechos políticos y civiles, suspensión de los mismos, sujeción a la vigilancia de las autoridades, inhabilitación para ejercer algún oficio, privación y suspensión de empleos, arrestos, apercibimiento judi

cial, caución de buena conducta, multa (art. 20)" (24).

Respecto a la pena de muerte, el Código de 1837 establece que se ejecutará por medio de "garrote".

En la regulación de la pena de muerte el Código distingue diversas categorías de delincuentes: traidor, asesino y parricida (art. 34), que implican diversas formas de ejecución de la pena capital (25).

Dicho artículo establecía que "Los reos condenados a muerte serán conducidos al suplicio con túnica y gorro negro, y con las manos atadas por delante con una cuerda, cuyo extremo llevará el ejecutor de la justicia vestido de negro. Si el delincuente fuere asesino, llevará la túnica blanca y ensangrentada; si traidor, irá descalzo, la túnica hecha pedazos y las manos atadas a la espalda; si parricida, irá igualmente, descalzo, con la túnica blanca ensangrentada y desgarrada, con una cadena al cuello y con las manos atadas a la espalda.

En todo caso, los reos irán acompañados de los ministros de la religión, del subalterno de justicia que presida la ejecución, del escribano y alguaciles, en traje de luto, y de la escolta correspondiente".

Sin duda la influencia del proyecto español de 1821, que después sería el Código Penal de 1822, es evidente en la regulación de las penas que aparecen en el Código colombiano de 1837, que en cierta medida procede del proyecto colombiano de 1823.

II. EL CODIGO PENAL COLOMBIANO DE 1890

A) ANTECEDENTES

Durante el siglo XIX Colombia, en alguna época conocida como la "Gran Colombia" o "Nueva Granada", tuvo tres códigos penales, frutos todos ellos de la realidad política del momento.

La continua sucesión de gobiernos autoritarios o democráticos dieron por resultado, en el plano de la legislación penal, textos punitivos represivos o humanitarios según el modelo político imperante.

Cada "Constitución" vigente suponía la elaboración de le yes que hicieran del Código Penal un fiel reflejo de las concepciones dominantes.

Es por ello que encontramos numerosos textos promulgados para colocar la legislación a tono con los principios contenidos en la Ley fundamental del momento.

Los constantes movimientos políticos de aquella época dan por resultado diversos códigos penales en 1837, 1873 y 1890 de aplicación en todo el territorio colombiano, numerosos proyec tos legislativos y una profusión de leyes especiales y modificatorias del Código Penal.

Cabe señalar, por otra parte, que en momentos de régimen federalista cada uno de los estados federados tenía su particular legislación penal.

El antecedente inmediato del Código Penal de 1890 lo encontramos en el Proyecto que en 1888 elabora Demetrio PORRAS (26), en esa fecha miembro del "Consejo de Estado", pero que sólo abar ca la parte general (27).

Dicho proyecto fue objeto de numerosas críticas en el se ño del propio "Consejo de Estado" y en éste se dispuso que otro miembro del mismo se encargara de su corrección, Esta tarea fue encomendada al consejero Juan Pablo RESTREPO, quien realizó una viva defensa de los textos vigentes a los que consideraba debía refundirse en un texto único (28).

En este sentido, procedió a efectuar una simple recopila ción del derecho vigente en aquel momento, sin ningún criterio

científico y para ello se basó en las codificaciones anteriores que fueron refundidas en un texto único a fin de presentar un documento coherente.

Ocupa en este trabajo de RESTREPO un papel fundamental el Código colombiano de 1837, "con adiciones y modificaciones tomadas del Código de 1873" (29). En este mismo sentido se pronuncian PEREZ (30) y REYES (31); de distinta opinión, ROMERO SOTO (32).

La labor de RESTREPO constituyó un notable retroceso en la ciencia penal colombiana, pues el Proyecto de PORRAS descansaba en postulados filosóficos y científicos definidos, lo que no consta en aquél. Por todo ello ESTRADA VELEZ no ha dudado en afirmar categóricamente que "el Código Penal de 1890 significó un regreso en las instituciones penales del país" (33).

A pesar de esta realidad el trabajo del consejero RESTREPO causa una buena impresión en el Congreso Colombiano, que lo discute rápidamente, y en poco tiempo se convierte en ley vigente aprobado mediante la Ley 19 de 1890.

Al separarse Panamá de la República de Colombia en 1903, luego de nuestra voluntaria unión a ésta en 1821, continúa rigiendo la Ley 19 de 1890 en el joven Estado, ya que una de las primeras normas jurídicas dictadas por las autoridades de nuestro país así lo ordenó (34).

B) ESTRUCTURA

El Código Penal colombiano de 1890 constaba de 911 artículos y estaba dividido en tres libros.

En el LIBRO PRIMERO sobre "Delitos, delincuentes y penas en general. Graduación de los delitos y aplicación de las penas" encontramos los siguientes aspectos: "Disposiciones preliminares" (Título I), "Delincuentes" (Título II), "Penas y su ejecu-

ción" (Título III) y "Circunstancias agravantes y atenuantes... Graduación de los delitos y aplicación de las penas" (Título IV), Contenia, pues, disposiciones de carácter general.

Su LIBRO SEGUNDO trataba sobre "Delitos que afectan principalmente a la Nación o a la sociedad o que sean cometidos por empleados públicos": "Delitos contra la nación" (Título I), "Delitos contra la religión y el culto" (Título II), "Delitos contra la tranquilidad y el orden público" (Título III), "Delitos contra los funcionarios o empleados públicos" (Título IV), "Alla namiento de cárceles u otros establecimientos de corrección o castigo. Presos y detenidos que se fugan y responsabilidad de la fuga" (Título V), "Delitos contra la salud pública" (Título VI), "Delitos contra la fe pública" (Título VII), "Delitos contra la moral pública" (Título VIII), "Delitos contra la hacienda pública" (Título IX) y "Delitos de los empleados públicos en ejercicio de sus funciones y de particulares relacionados con el ejercicio de dichas funciones" (Título X).

El LIBRO TERCERO trataba de los "Delitos contra los particulares y sus penas": "Delitos contra la persona" (Título I), "Delitos contra la honra, fama y tranquilidad de los particulares" (Título II) y "Delitos contra la Propiedad" (Título III).

Carecía de una regulación de las "contravenciones".

C) CONTENIDO

A pesar de incluir el enunciado del libro primero la palabra "delitos", en el mismo no se incluye la regulación de los diferentes tipos delictivos. Esta regulación está contenida en los libros restantes, dedicados ambos a la descripción de las diversas hipótesis delictivas.

La referencia a "delitos" alude al concepto de delito que encontramos en este título. A este respecto, sobresale en

primer término la definición de delito, cuando se expresa lo siguiente: "Es delito la voluntaria y maliciosa violación de la ley, por la cual se incurre en alguna pena" (35). Muy relacionada con la anterior definición, es la noción legal de culpa, en los siguientes términos: "Es culpa la violación imputable, pero no maliciosa y voluntaria de la ley, por la cual se incurre en alguna pena" (36).

Aquí subyace la vieja concepción de que la "culpa" no constituye, ciertamente, un delito sino un "cuasi-delito", como ocurría en el Código Penal español de 1822.

El profesor RODRIGUEZ DEVESA, al respecto, refiriéndose al Código Penal de 1822 anota que ello "responde todavía a la idea de que hay dos fuentes de responsabilidad criminal, considerando que la sustancia del delito es la voluntad contraria a la ley, y que la culpa no es precisamente un delito (culposo), sino un "cuasi-delito", siguiendo viejas teorías de los juristas italianos" (37).

Y, si tenemos en cuenta que el Código Penal colombiano de 1890 constituye, en esencia el mismo Código Colombiano de 1837, con las modificaciones introducidas por RESTREPO, esta identidad en el tratamiento de los conceptos en cuestión, es plenamente explicable, ya que el colombiano de 1837 se inspira, en cierta medida, en el proyecto español que luego fue el Código de 1822 (38).

El Código al definir el delito en los términos utilizados en el art. 1º, quiso aludir al "delito doloso". Corrobora esta aseveración que a continuación se señale que "En toda violación de la ley se supone voluntad y malicia, mientras no se pruebe o resulte claramente lo contrario" (39).

Se pretendió, no muy acertadamente, señalar que sólo es delito la conducta realizada con la intención de cometer un de-

lito y que, excepcionalmente, aunque no haya intención, en determinados supuestos, se incurre en responsabilidad.

La regulación del concepto de delito que encontramos en este Código se conoce modernamente como la definición formal del delito, en donde lo característico del delito es su sanción penal. Sólo es delito aquella conducta incriminada con una pena (40).

Sentado lo anterior, hay que reconocer que "por muy inhumano y socialmente dañosa que sea una conducta, si su ejecución no ha sido prohibida por la ley bajo la amenaza de pena, no constituirá delito" (41).

Como formas imperfectas de ejecución del hecho punible se reconocen tanto la tentativa como la frustración (42) y reconoce el desistimiento voluntario de la consumación del delito (43).

Especial mención merece la conspiración, según la cual dos o más personas resolvían cometer un delito (44), que se sancionaba con una pena no mayor de la cuarta parte de la señalada para el delito ni menor de la octava parte. Por lo que respecta a la proposición, se disponía que la proposición no aceptada no era punible, a menos que así se dispusiera expresamente (45).

El Código definía el concepto de hábito o costumbre criminal; se entiende por tales conceptos la ejecución de tres o más hechos de una misma especie en un lapso que no excediese de un mes (46). Lo que determinaba la condición de delincuente "habitual" era la reiteración de hechos delictivos en muy corto tiempo y la identidad del hecho punible repetidamente cometido.

Este Código consagraba el principio de legalidad de los delitos y las penas (47) y reconocía la retroactividad de la ley penal más favorable al reo (48).

Por lo que respecta al ámbito territorial de la ley pe-

nal colombiana se establecía que la ley penal regía a todos los habitantes del territorio y que excepcionalmente se aplicaba a hechos cometidos fuera del territorio de la República (49).

El Código declaraba responsables no sólo a los autores, sino también a los cómplices, auxiliadores y encubridores (50).

Dentro del concepto de autor se incluía toda una gama de actividades consideradas como de autoría, aunque en estricto sentido no lo fuesen. Se incluían en esta regulación las nociones de autor y coautor e instigador o inductor. Existía la modalidad de autoría que consiste en utilizar a otra persona sin uso de razón o en virtud de violencia para la realización del hecho delictivo (autoría mediata) (51).

Nada clara ni precisa era la distinción entre cómplices (52) y auxiliadores y fautores (53). En términos generales, la misma radicaba en el grado de intervención del sujeto en la realización material del hecho punible.

Al igual que numerosos códigos de la época, encontramos aquí la regulación del encubrimiento, en sus modalidades de receptación o favorecimiento real y protección de malhechores (54).

Además, se consideraba como encubridor a los que no denunciaban que se iba a cometer un delito si no avisaban para que fuese impedido y los que no denunciaban el lugar donde se encontraban los delincuentes para que fueran aprendidos (55).

La pena prevista para los autores era la señalada para el delito respectivo; la de los cómplices era la de dos terceras partes de la impuesta a los autores; a los auxiliadores se les sancionaba con no menos de la mitad ni más de las dos terceras partes de la pena impuesta a los autores y, a los encubridores se les imponía no menos de la cuarta parte ni más de la mitad de la pena impuesta a los autores del hecho punible (56).

Estaban exentos de responsabilidad criminal el enfermo mental, el sometido a violencia, ya sea física o moral, el menor de siete años y el que actuaba conforme a derecho y causaba un mal por mero accidente (57); también lo era la embriaguez que no hubiera sido voluntaria (58).

El Código disponía que la responsabilidad civil podía ser exigida subsidiariamente a otras personas, cuando se trataba de hechos cometidos por quienes estuvieren bajo dependencia o sometidos a otros (59).

Había en el Código una serie de disposiciones relativas a los aumentos de pena correspondiente a los reos que quebrantaban sus condenas y a los que incumplían las obligaciones impuestas por la autoridad judicial al momento de determinar la pena. En ese sentido, se disponía que los que se evadían de la prisión y los que quebrantaban el destierro o confinamiento a que estaban sometidos se les tenía por no cumplida la parte de la condena que habían cumplido antes del respectivo quebrantamiento, en cuyo caso debían empezar nuevamente el cómputo de tiempo respectivo (60).

Por lo que respecta a las penas, se distinguía entre penas corporales y penas no corporales (61).

Se consideraban como penas corporales las de muerte, presidio, reclusión, prisión, destierro y confinamiento; como penas no corporales figuraban: privación temporal o perpetua de los derechos políticos o de alguno de ellos, inhabilitación temporal o perpetua para ejercer empleo público, profesión u oficio determinado, privación o suspensión de empleo o pensión, obligación de dar fianza de buena conducta, sujeción a la vigilancia de las autoridades, multa y apercibimiento.

La imposición de las penas de presidio y reclusión supo

nían para el sujeto la pérdida de todo cargo público, pensión y la privación perpetua de todos los derechos políticos (62).

En cuanto a las penas corporales, se disponía que la pena de muerte se debía ejecutar por medio del "fusilamiento" y en un lugar público (63). Se regulaba también la forma de trasladar al reo al lugar de la ejecución y la compañía que debía tener el condenado en ese momento.

La duración de las penas privativas de libertad era diversa, según la gravedad de la misma: la pena de presidio duraba hasta 20 años; la reclusión hasta 15 años; la prisión duraba hasta 10 años y el arresto tenía una duración máxima de 4 años (64).

Cuando se cometían dos o más delitos, no podía imponerse más del máximo legal señalado para cada pena, por lo que la diferencia se aplicaba como impuesta para la pena inferior en gravedad, sin que el máximo total de privación de libertad así resultante pudiera exceder de 25 años (65).

Tratándose de la pena de destierro, el máximo previsto para un sólo delito era de 20 años y, en caso de excedente el resto se sustituía por confinamiento. (66).

Se determinaban específicamente cuáles eran los efectos de la inhabilitación para ejercer empleo público y la privación o suspensión del empleo. De igual manera se establecían las obligaciones que se imponían a quien se exigía dar fianza de buena conducta y al sometido a la vigilancia de las autoridades (67).

Características muy especiales revestía la pena de multa, que podía ser determinada o indeterminada. En este último caso, se establecía que recaía sobre una parte o cuota del patrimonio del condenado sin que pudiera en ningún caso exceder de la quinta parte del mismo (68).

Los instrumentos utilizados en la comisión del delito y

los efectos del mismo se atribuían al Estado como parte de la pena de multa, a no ser que debieran ser destruidos o restituidos a terceras personas (69). Se trata, evidentemente, de un caso de "comiso" pena accesoria vigente en otros ordenamientos penales de aquella época (70).

La rehabilitación del sancionado procedía a los 8 años de estar cumpliendo la inhabilitación perpetua, si había observado buena conducta; si la inhabilitación estaba acompañada de alguna pena, debía el condenado cumplir ésta antes de obtener la rehabilitación. Esta regulación de la rehabilitación se aplicaba también cuando el sujeto había sido condenado a la privación de los derechos políticos (71).

Respecto a la prescripción existía una gran imprecisión. El Código trataba en forma conjunta tanto la prescripción de la acción como la prescripción de la pena (72). También extinguían la acción penal y la pena de muerte del sindicado y del condenado (73).

Existían en el Código disposiciones particulares que señalaban el término de duración de la prescripción de la acción penal (74) y de la pena (75).

Otras formas de extinción de la acción y de la pena eran la amnistía y el indulto, regulados en términos bastante acceptables para nuestros días (76).

Por lo que respecta a las circunstancias, resulta importante señalar que expresamente se permitía la aplicación de atenuantes y agravantes por su semejanza o analogía con las expresamente enunciadas como tales (77). Se regulaba la calidad de reincidente y se establecía el mecanismo necesario para determinar el aumento de pena que la reincidencia necesariamente implicaba.

D) CONSIDERACION FINAL

Un estudio pormenorizado de este Código nos obliga a reconocer la veracidad de las críticas al mismo formuladas por la más autorizada doctrina penal colombiana (78).

Es un texto punitivo sumamente represivo, adornado por un casuismo exagerado. Con toda razón señala ESTRADA VELEZ que "significó un regreso en las instituciones penales del país"(79).

Los autores colombianos han destacado "serias incongruencias" en el articulado de la parte especial. PEREZ ha recalcado algún aspecto -a su juicio- arcaico que inspiró la obra de RESTREPO cuando éste trató de justificar la imposición de penas por delitos contra la religión de la siguiente forma: "La legislación mosaica -dijo RESTREPO-, inspirada por Dios para el régimen del pueblo hebreo, castigaba con la supresión de la vida al blasfemo. Ni aún en los tiempos presentes podría tacharse de injusta esa severidad, pues es claro que no merece disfrutar de la vida el que insulta al Ser a quien se le debe. Pero las calamidades de los tiempos han sido tales, que ha llegado caso a sancionarse la impunidad completa, pues el Código vigente sólo castiga la blasfemia pública, y eso con la insignificante pena de uno a cuatro meses de prisión".

"El proyecto eleva la pena de reclusión por uno a cuatro años, y todavía es muy poco, pero si de un golpe se eleva más, se corre el peligro de fomentar la impunidad por la repugnancia de aplicar las penas que se creen demasiado severas, aunque esa creencia sea errónea e infundada" (80).

No está demás señalar, finalmente, que este cuerpo legal continuó vigente en Colombia hasta la entrada en vigor del Código de 1936 el 1 de julio de 1938, que ya no rige.

III. MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LA CONSTITUCION DE 1904

A) GENERALIDADES

En febrero de 1904 se dicta la primera Constitución patria que se mantuvo vigente, con diversas modificaciones, hasta 1940.

La exposición de este apartado requiere el tratamiento de dos aspectos fundamentales: a) las modificaciones a la ley penal introducidas por el texto original de la Constitución de 1904 y, b) las modificaciones producidas en virtud de las distintas reformas a que fue sometida dicha Constitución.

B) MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR EL TEXTO ORIGINAL DE LA CONSTITUCION DE 1904.

El Código Penal colombiano no consagraba el principio según el cual se aplica a un hecho cometido una ley posterior cuando la misma sea favorable al reo. La fórmula contenida en el segundo párrafo del art. 12 dejaba al sancionado la facultad de escoger la ley que quisiera.

La Constitución de 1904 en la segunda oración del art. 32 establece, en forma categórica e imperativa, que en materia penal la ley más favorable, aunque sea posterior, se aplicará en beneficio del sujeto.

Respecto de la amnistía e indulto la Constitución adopta una regulación similar a la de la legislación ordinaria.

En efecto, el Código de 1890 permite la extensión de las mencionadas causas de extinción de la acción o de la pena a la cancelación de la indemnización de perjuicios a particulares cuando sea otorgada por el Congreso (Asamblea Nacional), en cuyo caso el reconocimiento de esta quedará a cargo de la Nación (es decir, al Estado).

La norma constitucional reduce esta facultad únicamente a propósito de la amnistía, por lo que no puede la Asamblea indultar en lo sucesivo.

El Código prohibía al Gobierno -y la Constitución mantuvo este principio- conceder indultos que implicaran exonerar de la indemnización de perjuicios pues nunca podía aquel reconocer esta por cuenta del Estado.

Consideramos que es a propósito de la pena de muerte en donde se encuentra la modificación de mayor trascendencia al Código por obra de la Constitución de 1904. "El Código penal colombiano -hemos advertido con anterioridad (81)- sancionó con pena de muerte no sólo el asesinato y la traición, sino que agravó la pena impuesta en otros cuando se producía la muerte de alguna -persona (piratería, grave, cuadrilla de malhechores, envenenamiento, incendio, privación ilegal de libertad y daños)". Ahora la -Constitución, en su art. 139, sólo permitía la pena de muerte en caso del homicidio considerado como atroz.

De esta forma solamente habría pena de muerte por homicidio. Los demás casos estarían sujetos a penas de privación de libertad.

C) MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION DE 1904.

Al igual que con el texto original de la Constitución de 1904 es el problema de la pena de muerte el que capta toda nuestra atención en cuanto a las reformas de la misma.

Desde la vigencia de la Constitución de 1904 hasta 1914 hubo pena de muerte en Panamá cuando se trataba de delitos de homicidio considerados atroces, pues nunca se crearon los adecuados centros penitenciarios que la Constitución mencionaba en el artículo 139.

Por otra parte, es importante dejar constancia de que

durante el período en que la pena de muerte estuvo vigente en la República de Panamá (noviembre de 1903-noviembre de 1914), jamás se ejecutó una pena capital.

En la época en que formamos parte de Colombia (noviembre de 1821-noviembre de 1903) si hubieron numerosas ejecuciones capitales. La última, en la persona del caudillo liberal General Victoriano Lorenzo, ocurrida el 15 de mayo de 1903, al término de la llamada "guerra de los mil días" (82).

La reforma de la Constitución de 1904 mediante los Actos Legislativos de 1917 y 1918 declaran, en forma por demás terminante, que "no habrá pena de muerte en Panamá". Esta reforma - Constitucional, de 26 de diciembre de 1918, consolidó el abolicionismo de Panamá que en 1914 había derogado la pena capital de sus leyes penales (83).

De esta forma se derogó el artículo 139 de la Constitución, cuyo texto ya hemos citado.

IV. LEYES REFORMATARIAS DEL CODIGO PENAL

Después de iniciada nuestra vida como estado independiente, hasta la aprobación del primer código penal patrio continuó rigiendo el Código Penal Colombiano de 1890 con muy contadas modificaciones.

En los casi tres lustros transcurridos entre 1903 y 1917 se dictaron pocas disposiciones legislativas de importancia, Las más significativas se describen a continuación.

Mediante la ley 1 de 1909 se derogaron los artículos 452 y 692 del Código Penal, disposiciones estas que no contenían disposiciones de carácter sustantivo sino adjetivo.(84).

Con posterioridad se dictó la Ley 24 de 1910 que adicionó y reformó el Código Penal. La Ley en referencia trata sobre pe-

nas a las personas que enganchaban empleados, operarios o trabajadores en la obra del Canal de Panamá (85).

La Ley 54 de 1911, fue dictada con el mismo propósito que la citada anteriormente, en el sentido de adicionar y reformar lo relativo a la prohibición del enganche de empleados, operarios y trabajadores del Canal y llegó incluso a disponer la derogación de la Ley 24 de 1910 (86).

En virtud de lo dispuesto por la Ley 45 de 1912 se derogaron los artículos 634 a 643 (castración y aborto), 676 a 718, 720 a 724 (raptos, fuerzas y violencias contra las personas; violación de los enterramientos); adulterio, estupro alevoso y seducción), 725 a 738 (personas que exponen a niños, que comprometen de otro modo la existencia natural o civil de ellos o que los ocultan o cambian), 866 a 873 (daños que supongan un peligro común) del Código Penal (87).

Salvo lo anotado en el párrafo anterior, las reformas legislativas hasta ahora reseñadas no han implicado grandes modificaciones a la legislación colombiana vigente todavía en esa época de Panamá.

No es sino hasta 1914 cuando se produce la primera gran reforma a la legislación penal de la joven república.

En efecto, en virtud de la Ley 3 de 1914 se reforman y derogan varias disposiciones del Código Penal. Por la significación y trascendencia de esta Ley, estimamos imprescindible una mayor consideración de la misma por nuestra parte (88).

En su punto medular la ley bajo observación erradica del Código Penal la pena de muerte para los delitos que aún la mantenían y deroga, entre otros, el artículo 48 del citado Código que establecía el fusilamiento como forma de ejecutar la pena de muerte.

El único delito para aquel entonces castigado con pena de muerte era el delito de homicidio considerado atroz; a partir de dicha ley se dispuso en el artículo 2 que "El asesino en los casos más graves especificados en los ocho primeros números del artículo 586 del Código Penal, sufrirá la pena de quince a veinte años de presidio; y en el caso menos grave que señala el número 9 del mismo artículo, la pena de doce a quince años de la misma pena".

"Podemos advertir, en consecuencia -hemos señalado anteriormente-, que es a partir de la vigencia de la Ley 3 de 1914 en que desaparece del ordenamiento penal panameño la sanción capital. Desde esa fecha hasta nuestros días la situación no ha variado" (89).

La citada ley, por otra parte, establece también la posibilidad de rebajas de pena a favor de sancionados que hayan sido declarados responsables de delitos de escasa gravedad ("tercer grado de culpabilidad" señala la mencionada ley) o hagan algún descubrimiento de interés en beneficio de la colectividad, ciencias, artes o industrias.

El texto de la citada ley es el siguiente:

LEY 3 DE 1914
(DE 19 DE OCTUBRE)

que reforma y deroga varias disposiciones del Código Penal.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:

Artículo 1º. La acción para la imposición de la pena

por delito que no pueda investigarse sino a virtud de acusación legalmente intentada, prescribe por el transcurso de seis meses.

El establecimiento oportuno de la acusación interrumpe el término para la prescripción a que se refiere el inciso anterior.

Caducará la acción si sus trámites se paralizan durante seis meses consecutivos, por culpa del actor. En tal caso se decretará el desistimiento de ella y el negocio será archivado, sin perjuicio de las reclamaciones a que tenga derecho el acusado por costas y gastos de la acusación.

Artículo 2º. El asesino en los casos más graves especificados en los ocho primeros números del artículo 586 del Código Penal, sufrirá la pena de quince a veinte años de presidio; y en el caso menos grave que señala el número 9º del mismo artículo, la pena de doce a 15 años de la misma pena.

Parágrafo. Las mismas penas, según los casos, se aplicarán a los delitos que determinan los artículos 174 y 644 del Código Penal y el aparte primero del artículo 624 del mismo Código.

Artículo 3º. A los reos de los delitos de homicidio simplemente voluntario, homicidio involuntario, heridas o malos tratamientos de obra, que sean padres de familia, que hayan cometido el delito por primera vez, que hayan sido calificados en la sentencia en tercer grado de culpabilidad habiendo sido constantemente buena su conducta anterior al delito cometido y que en cumplimiento de su pena hayan observado conducta intachable, podrá el Poder Ejecutivo, previo informe favorable del Director del Presidio, rebajarles hasta la mitad de la pena que les haya sido impuesta.

Artículo 4º. La misma rebaja será concedida al reo de

cualquier delito que, habiendo observado conducta intachable, en cumplimiento de su pena, descubra o invente algo que pueda ser calificado como beneficio público necesario o que favorezca de manera notable alguna de las ciencias, de las industrias o de las artes.

Parágrafo. Para el reconocimiento de esta gracia es indispensable que se pruebe de manera irrefutable que el reo ha sido realmente el descubridor o inventor.

Artículo 59. Quedan derogados los artículos 48, 94, 597, 599, 622 y el aparte final del artículo 624; reformados los artículos 57, 152, 174 y 644, y reformado y adicionado el artículo 144 del Código Penal.

Dado en Panamá a los diez y seis días del mes de Octubre de mil novecientos catorce.

El Presidente

Ciro Urriola

El Secretario

J.M.Fernández

República de Panamá.- Poder Ejecutivo Nacional. Panamá 19 de Octubre de 1914.

Publíquese y ejecútese.

BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Justicia

Juan B. Sosa.

NOTAS

- (1) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 91.
- (2) SOSA y ARCE, p. 201.
- (3) SOSA y ARCE, p. 202.
- (4) PEREZ, ps. 217 y sgts.
- (5) MESA VELASQUEZ, p. 44.
- (6) REYES ECHANDIA, p. 41.
- (7) ROMERO SOTO, p. 169.
- (8) ESTRADA VELEZ, ps. 28-29.
- (9) ROMERO SOTO, p. 169.
- (10) MESA VELASQUEZ, p. 44.
- (11) REYES ECHANDIA, p. 41.
- (12) PEREZ, p. 206. Este autor señala en otra obra que "Declarada la independencia política de España, continuaron rigiendo los viejos estatutos peninsulares con las modificaciones hechas por las primeras constituciones que reconocieron los derechos individuales, las garantías penales y procesales, e implantaron algunas normas coercitivas para asegurar su eficacia" (Manual de Derecho Penal, 2ª edición, Bogotá, 1969, p. 29).
- (13) SEGURA, p. 26. El proyecto español de 1821 se convirtió luego en el C.P. de 1822 (Al respecto véase: José ANTON ONECA, "Historia del Código Penal de 1822" en Anuario, Tomo XVIII (1965), ps. 263 y sgts.
- (14) ROMERO SOTO, p. 169.
- (15) PEREZ, p. 212.
- (16) MESA VELASQUEZ, p. 44. Otros autores colombianos, sin embargo, señalan al Código Francés de 1810 como la fuente del colombiano de 1837. "Este importante estatuto se inspiró en el Código Francés de 1.810" advierte ESTRADA VELEZ (p.29) refiriéndose al Código colombiano de 1837. También comparte esta opinión: PEREZ, p. 214.

- (17) PEREZ, p. 214.
- (18) Véase, en general: PEREZ, p. 215; MESA VELASQUEZ, p. 44.
- (19) PEREZ, p. 217.
- (20) ROMERO SOTO, p. 169.
- (21) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 94.
- (22) José María RODRIGUEZ DEVESA, "Inobservancia de los principios básicos y reglas establecidas en la parte general del Proyecto de 1980 en su parte especial, con algunos otros de hechos sobresalientes de éste" en La reforma penal y penitenciaria, Universidad de Santiago de Compostela, 1980, p. 160.
- (23) SEGURA; p. 27.
- (24) PEREZ, p. 217
- (25) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, La pena capital en centroamérica, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1978, ps. 63-64.
- (26) PEREZ, p. 226
- (27) El Proyecto consta de una exposición de motivos y de una parte general. Fue editado en 1889 y la muerte de su autor dejó la obra inconclusa.
- (28) PEREZ, p. 228
- (29) Así: ESTRADA VELEZ, p. 30
- (30) PEREZ, p. 229
- (31) REYES ECHANDIA, p. 42
- (32) ROMERO SOTO, p. 171
- (33) ESTRADA VELEZ, p. 30
- (34) Se trata del Decreto número 4 de 4 de noviembre de 1903, dictado por la Junta de Gobierno Provisional al día siguiente de la separación de Colombia que disponía: "Regirán en

la República de Panamá las leyes que han estado rigiendo hasta hoy, con las modificaciones y alteraciones que requiera el cambio político efectuado y con las que la Junta acuerde, en decretos posteriores" (Gaceta Oficial número 1, de 14 de noviembre de 1903).

- (35) El subrayado es del propio texto.
- (36) El subrayado es del propio texto.
- (37) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 97, nota 7.
- (38) Supra, Introducción.
- (39) C.P. 1890, art. 2.
- (40) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 171; RODRIGUEZ DEVESA, P. General, ps. 313 y sgts.
- (41) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 171.
- (42) C.P. 1890, arts. 4 y 5 respectivamente.
- (43) C.P. 1890, art. 11.
- (44) C.P. 1890, art. 8
- (45) C.P. 1890, art. 9.
- (46) C.P. 1890, art. 14
- (47) C.P. 1890, art. 12.
- (48) C.P. 1890, art. 16
- (49) C.P. 1890, art. 20.
- (50) C.P. 1890, art. 21.
- (51) C.P. 1890, art. 22.
- (52) C.P. 1890, art. 23.
- (53) C.P. 1890, art. 24.

- (54) C.P. 1890, art. 25, inc. 1ª.
- (55) C.P. 1890, art. 25, inc. final.
- (56) C.P. 1890, art. 28.
- (57) C.P. 1890, art. 29.
- (58) C.P. 1890, art. 30.
- (59) C.P. 1890, art. 33.
- (60) C.P. 1890, arts. 36 y sgts.
- (61) C.P. 1890, arts. 40 y 41 respectivamente.
- (62) C.P. 1890, art. 42.
- (63) C.P. 1890, art. 48.
- (64) C.P. 1890, art. 54
- (65) C.P. 1890, art. 71.
- (66) C.P. 1890, art. 72.
- (67) C.P. 1890, arts. 73 y sgts.
- (68) C.P. 1890, art. 80.
- (69) C.P. 1890, art. 85.
- (70) Como sucedía en el Código Penal italiano de 1889, art. 36.
- (71) C.P. 1890, art. 90.
- (72) C.P. 1890, arts. 93 y sgts.
- (73) C.P. 1890, art. 92.
- (74) C.P. 1890, arts. 95 y 96.
- (75) C.P. 1890, arts. 97 y 98.
- (76) C.P. 1890, art. 100.

- (77) C.P. 1890, art. 119.
- (78) PEREZ, p. 230; ESTRADA VELEZ, p. 30; MESA VELASQUEZ, p. 47; ROMERO SOTO, ps. 170-171.
- (79) ESTRADA VELEZ, p. 30.
- (80) PEREZ, p. 230.
- (81) MUÑOZ POPE, La pena capital en centroamérica, p. 68.
- (82) Humberto E. Ricord, "Motivaciones político-sociales del juicio contra Victoriano Lorenzo" en Revista Jurídica Panameña, Marzo-Diciembre de 1974, N° 4, ps. 121-125; Campo Elías - MUÑOZ RUBIO, "Examen de la competencia de la jurisdicción militar y del procedimiento seguido en el juzgamiento de Victoriano Lorenzo" en, Revista Jurídica Panameña citada, ps. 126-138.
- (83) La historia de la regulación de la pena de muerte en la legislación Panameña aparece en nuestro trabajo La pena capital en centroamérica citado.
- (84) Ley 1 de 2 de enero de 1909. Publicada en la Gaceta Oficial número extraordinario de 4 de enero de 1909.
- (85) Ley 24 de 5 de diciembre de 1910. Publicada en la Gaceta Oficial número 1303, de 19 de diciembre de 1910.
- (86) Ley 54 de 6 de octubre de 1911. Publicada en la Gaceta Oficial número 1550, de 10 de octubre de 1911.
- (87) Ley 45 de 17 de diciembre de 1912, Publicada en la Gaceta Oficial número 1840, de 20 de diciembre de 1912.
- (88) Ley 3 de 19 de octubre de 1914. Publicada en la Gaceta Oficial número 2139, de 23 de octubre de 1914.
- (89) Cf: La pena capital en centroamérica, p. 71.

Capítulo Segundo

EL CODIGO PENAL PANAMEÑO DE 1916

I. INTRODUCCION

II. FUENTES DEL CODIGO PENAL DE 1916

III. EL CODIGO PENAL DE 1916

I. INTRODUCCION

Luego de nuestra voluntaria separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1904, continuaron rigiendo en Panamá las leyes colombianas, con las modificaciones propias del cambio político operado. Continuó rigiendo, en consecuencia, el Código Penal colombiano de 1890.

Ello no significa, sin embargo, que las autoridades panameñas quisieran que el cambio político operado dejase intactas las estructuras jurídicas colombianas existentes en ese momento en Panamá, pues pronto existió en el ánimo de nuestros gobernantes el deseo de expedir una legislación netamente panameña.

Al igual que cuando Colombia se separó de España en el siglo pasado y se produjo la ruptura política con respecto a la Corona española, más no legislativa, en Panamá siguieron vigentes las leyes colombianas aún después de la separación ocurrida el 3 de noviembre de 1903.

Cuando tan sólo habían transcurrido unos días después de la declaración de independencia del Istmo de Panamá de Colombia, se designó la primera comisión codificadora de Panamá a fin de que el país se rigiera por leyes auténticamente panameñas.

La ruptura política con Colombia requería su consolidación a través de unas leyes propias, por lo que era lógico de esperar que en los deseos de codificación existentes se rehusara todo acercamiento a la materia colombiana que durante tanto tiempo rigió en nuestro país.

Por medio de un Decreto se crean dos comisiones integradas por abogados y presididas ambas por el Secretario de Justicia (equivalía a Ministro de Justicia), encargadas de redactar los proyectos de código (1).

De estas comisiones, una debía redactar los proyectos de Códigos Civil y Procesal; la otra, los proyectos de Códigos de Comercio, Minas y Penal.

Para la redacción del proyecto de Código Penal se nombró a los señores Inocencio GALINDO, Juan A. HENRIQUEZ y Abraham JESURIN, quienes debían cumplir su labor a más tardar el día 15 de enero de 1904. (2).

De los trabajos realizados por la comisión antes señalada no tenemos constancia. Es de suponer que dicha Comisión no dió los resultados esperados, toda vez que en el mismo año, mediante la Ley 37 de 1904 (3), sobre "adopción de códigos y reformatoria de una disposición del Código Civil", la Asamblea Nacional autorizó al señor Presidente de la República para que designara, con carácter permanente una comisión de tres ciudadanos "competentes e idóneos" para que asumiese el compromiso de redactar los proyectos que se convertirían en Códigos de la joven república.

Producto de la autorización antes mencionada el señor Presidente de la República, Dr. Manuel AMADOR GUERRERO, mediante Decreto 114 de 1904 (4) designó al Dr. Belisario PORRAS encargado de redactar los proyectos de Códigos penal y procesal.

Para completar dicha labor se le concedió al Dr. PORRAS, en el Decreto citado, el pazo de un año.

Vencido el plazo en cuestión, PORRAS no presentó los proyectos que le fueron encomendados. Respecto a los trabajos por él realizados, podemos señalar que, no hemos encontrado constancia alguna.

Al cabo de varios años desde que fuera PORRAS comisionado para tan magna obra, sin que se presentaran los proyectos deseados, el Gobierno Nacional, haciéndose eco del clamor tanto del pueblo como de los especialistas, dicta el Decreto 136 de 1907 (5)

mediante el cual se fija la fecha tope en la que deben ser presentados al Ejecutivo los proyectos encomendados a la Comisión Codificadora.

El Decreto en cuestión, de 12 de noviembre, establece que los proyectos deberían ser entregados a más tardar el día 15 de noviembre de ese mismo año.

Los rotundos y sucesivos fracasos que se producían motivan la expedición del Decreto 127 de 1913 (6), mediante el cual se crea una nueva Comisión encargada de redactar los proyectos en cuestión, siendo en aquella fecha Presidente de la República el Dr. Belisario PORRAS.

El referido Decreto señala en su parte motiva que "la codificación nacional es una obra de imperiosa necesidad según el parecer de la mayoría de los juristas del país, por lo que debe acometerse su ejecución sin retardo alguno, por cuanto será un gran beneficio para todos los habitantes de la República presentarle ordenados, claros y accesibles a todas las inteligencias, las leyes permanentes que en ésta deben observarse".

En sus inicios la Comisión estuvo compuesta por tres miembros: Facundo MUTIS DURAN, Julio J. FABREGA y Juan A. HENRIQUEZ. Posteriormente, por Decreto 141 de 1913 (7), se incorporaron a la citada Comisión los señores Carlos A. MENDOZA, Santiago DE LA GUARDIA, Angel UGARTE, Ricardo J. ALFARO, Luis ANDERSON y Oscar TERAN.

Mediante la Ley 49 de 1914 (8), por medio de la cual se dictan algunas disposiciones relativas a la Codificación Nacional, se establecieron -en forma por demás suscita- las bases sobre las que debía expedirse el nuevo Código Penal (9), cuyo texto reproducimos a continuación:

1. Inviolabilidad de la vida humana.

2. Prescripción de penas perpetuas, infamantes, de confiscación y las que impliquen incapacidad civil permanente, lo mismo que prohibición de aplicarlas antes del fallo definitivo.
3. Retroactividad de las disposiciones penales en cuanto favorecen al reo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes.
4. Imposición de penas solamente por actos u omisiones calificados de delitos por leyes anteriores a su perpetración.

Correspondió directamente al Dr. Angel UGARTE, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, especialmente contratado para este fin, redactar el proyecto de Código Penal que, lógicamente, tenía como modelo inmediato al Código Penal hondureño vigente en aquel momento, que a su vez se inspiraba en el Código Penal español de 1870.

No en vano ha dicho JIMENEZ DE ASUA respecto del Código hondureño que "no sólo pertenece a la familia de los Códigos estrechamente derivados del español, sino que es este mismo, con ligeras diferencias, hasta el punto de que en la mayor parte de los artículos se han hecho una transcripción literal" (10).

II. FUENTES DEL CODIGO PENAL DE 1916

A) EL CODIGO PENAL ESPAÑOL DE 1870

El Código Penal español de 1848 ha servido de base para la elaboración de los siguientes textos penales que han regido hasta el momento actual en España (11). "Con él -advierte RODRIGUEZ MOURULLO- comienza ya la formación histórica del actual" (12).

De esta forma, como antecedente del Código de 1870 en-

contramos el de 1848 y las modificaciones que éste sufrió con la reforma penal de 1850, producto de una insatisfacción respecto de cierta liberalidad contenida en aquél.

En 1869 se plantea la urgente necesidad de hacer cónsona la legislación penal vigente con la nueva Constitución que se había aprobado ese año, como consecuencia del cambio político ocurrido.

La contradicción existente entre la Constitución de corte eminentemente liberal, y la legislación punitiva en aquél entonces vigente desde 1850, de acentuado carácter conservador, puso de relieve la necesidad de reformar la legislación penal a corto plazo, en aquellos aspectos cuyo enfrentamiento con el texto constitucional mantenía un clima de desasosiego e inseguridad.

El Código tenía 626 artículos y estaba dividido en tres libros, que a su vez estaban estructurados en títulos, capítulos y secciones.

En el LIBRO PRIMERO sobre "Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas" encontramos los siguientes aspectos: "De los delitos y faltas, de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan" (Título I), "De las personas responsables de los delitos y faltas" (Título II), "De las penas" (Título III), "De la responsabilidad civil" (Título IV), "De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena delinquen de nuevo" (Título V) y "De la extinción de la responsabilidad criminal" (Título VI).

Por su parte el LIBRO SEGUNDO sobre "Delitos y sus penas" trata a propósito de los "Delitos contra la seguridad exterior del Estado" (Título I), "Delitos contra la Constitución (Título II), "Delitos contra el orden público" (Título III), "De las fal

sedades" (Título IV). "De la infracción de leyes sobre inhumaciones, de la violación de sepulturas y de los delitos contra la salud pública" (Título V), "De los juegos y rifas" (Título VI), "De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos" (Título VII), "Delitos contra las personas" (Título VIII), "Delitos contra la honestidad" (Título IX), "De los delitos contra el honor" (Título X), "Delitos contra el estado civil de las personas" (Título XI), "Delitos contra la libertad y seguridad" (Título XII), "De los delitos contra la propiedad" (Título XIII), "De la imprudencia temeraria" (Título XIV) y "Disposiciones generales" (Título XV).

El LIBRO TERCERO trata "De las faltas y sus penas" que se refiere a: "De las faltas de imprenta y contra el orden público" (Título I), "De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones" (Título II), "De las faltas contra las personas" (Título III), "De las faltas contra la propiedad" (Título IV), y "Disposiciones comunes a las faltas" (Título V). Posee el Código, además, una "Disposición final".

"La reforma de 1870 -señala JIMENEZ DE ASUA- fue para poner de acuerdo la ley penal con la Constitución de 1869" (13).

No en vano ha señalado SAINZ CANTERO que la reforma de la legislación anterior al Código de 1870 "había de tener lugar impulsada por el cambio de rumbo político del país, que se inicia con la Revolución liberal y progresista de 1868" (14).

"La reforma penal de 1870 -preparada fundamentalmente por los prácticos, y en particular, por Groizard- pretendió ante todo poner de acuerdo el Código Penal con una Constitución que era radicalmente distinta a la de 1845" ha señalado con notable énfasis BARBERO SANTOS (15).

El trasfondo político de esta reforma de 1870 es induda-

ble, si bien esto no significa que sea la única finalidad que en ella subyace.

En opinión de ANTON ONECA (16), el fin que se propusieron los legisladores de 1870 podemos analizarlo en tres órdenes distintos, a saber:

- "Proteger penalmente la Constitución de 1869 tanto en la organización de los poderes políticos de la Nación como en el reconocimiento de los derechos individuales.
- "Humanizar el Código conforme a los ideales mitigadores de los partidos representados en las Cortes, cuyas ideas en materia penal procedían de la Ilustración.
- "Corregir algunos preceptos que aparecían defectuosos técnicamente considerados y aún en el común sentir de las gentes".

De la misma opinión que la anterior es BARBERO SANTOS cuando afirma que "No se limitó, empero, la reforma de 1870 a armonizar el Código Penal con los preceptos constitucionales. Los legisladores del año 1870 aprovecharon la ocasión para realizar otras dos clases de modificaciones: una de carácter técnico; otras de carácter político o tendientes a otorgar una mayor humanización al Código" (17).

Con relación a la legislación vigente desde 1850 la reforma de 1870 suprimió el título referente a los "delitos contra la religión" y añadió los "delitos relativos al libre ejercicio de los cultos" y los "delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos individuales" reconocidos en la Constitución de 1869.

A pesar de las importantísimas críticas que contra este Código formuló en su oportunidad SILVELA, utilizando el seudónimo de Elías Visllá (18), destaca JIMÉNEZ DE ASUA, en favor de di

cho texto, que "difícilmente puede lograrse hoy un lenguaje más elegante y claro, a las veces castizo y sonoro que el que usó - nuestro legislador del 70" (19), calificación que también ha puesto de manifiesto DEL ROSAL al plantear la elegante terminología de este Código en la "Commemoración" de su centenario (20).

De una forma más particular podemos señalar que en 1870 se suprimieron respecto del Código anterior, entre otros aspectos, la agravante de usar armas prohibidas; la pena de sujeción a la vigilancia de las autoridades; la regulación sobre vagos y maleantes; las penas privativas de libertad perpetuas, pues se incluyó la libertad de los sancionados después de cumplir 30 años de privación de libertad; la pena de argolla; la existencia de la pena capital como pena única; y, la sustitución -a propósito del concurso de delitos- del sistema de acumulación material por el de acumulación jurídica.

Además, es preciso señalar que también se restringió considerablemente el castigo de la "conspiración" y "proposición", regresándose así al sistema utilizado en el Código de 1848 y se atenúa notablemente la forma de ejecutar la pena de muerte, que aún se mantiene en este Código (21).

Como cuestiones incongruentes para aquella época JIMENEZ DE ASUA y ANTON ONECA destacan la existencia de la llamada "pena del torpe", "el triunfo de Celestina" a propósito del adulterio y la "pena de herencia" (22).

Finalmente, podemos señalar que este Código introduce la agravante de vagancia; el delito de disparo de armas de fuego; y, la agravante de publicidad mediante uso de medios gráficos, entre otras novedades.

Si bien es cierto que no pretendemos hacer un estudio sobre el Código Penal español de 1870, no podemos dejar pasar por

alto alguna consideración al respecto, pues como bien anota MEZGER el estado actual de la legislación no puede comprenderse sin conocer la tradición legislativa que antecede a aquella (23).

Referencias muy precisas y completas sobre este Código pueden ser encontradas en las obras citadas en este apartado, así como en las obras españolas de "Parte General" (24) y, particularmente, en NUÑEZ BARBERO que ha escrito detenidamente al respecto (25).

B) EL CODIGO PENAL HONDUREÑO DE 1906

El Código Penal hondureño de 1906 (26) es el producto de la mezcla o combinación de los textos penales de 1898 y 1880. El Código de 1898 tenía como antecedente al Código español de 1870 y el de 1880 al chileno de 1874, que se basaba en el español de 1848 (27).

Como resultado de esta fusión de diversos textos el Código hondureño de 1906, todavía vigente, sigue con bastante fidelidad al modelo español de 1870 y una comparación del articulado y estructura de ambos textos nos obliga a tener que reconocer tal realidad.

Este Código de 1906 es el resultado de la labor de una subcomisión de la Comisión General de Legislación designada el 14 de noviembre de 1904, formada por los abogados Rafael ALVARADO MANZANO y Jerónimo ZELAYA (28).

Con toda razón ha señalado JIMENEZ DE ASUA que este Código hondureño "no sólo pertenece a la familia de los Códigos estrechamente derivados del español, sino que es este mismo, con ligeras diferencias, hasta el punto de que en la mayor parte de los artículos se ha hecho una transcripción literal" (29).

Más recientemente, AROSEMENA GUARDIA se manifiesta en igual sentido cuando al mencionar la estrecha relación entre el

texto hondureño y el código español de 1870, advierte que "muy pocas diferencias tenía el código hondureño del español, al que copiaba casi literalmente" (30).

No quiere esto significar que el Código hondureño sea el mismo español, pero las diferencias son tan mínimas que se podría entender de esa forma.

El Código Penal de Honduras de 1906, actualmente vigente, consta de 595 artículos y una "disposición final", en la que se ordena que empiece su vigencia a partir del día 1º de marzo de 1906 y deroga, en consecuencia, el Código anterior de 29 de julio de 1898.

Dicho Código consta de tres libros, divididos en títulos, capítulos y secciones. El contenido de sus libros es el siguiente:

LIBRO PRIMERO "(sin denominación)", "De los delitos y faltas y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan" (Título I), "De las personas responsables de los delitos y faltas" (Título II), "De las penas" (Título III), "De la responsabilidad civil" (Título IV), "De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena delinquen de nuevo" (Título V) y "De la extinción de la responsabilidad penal" (Título VI); LIBRO SEGUNDO trata de los "Delitos y sus penas": "Delitos contra la seguridad exterior del Estado" (Título I), "Delitos contra la Constitución" (Título II), "Delitos contra el orden público" (Título III), "Delitos relativos a los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y correos" (Título IV), "De las falsedades" (Título V), "De la infracción de las leyes sobre inhumación, de la violación de sepulturas y de los delitos contra la salud pública" (Título VI), "De los juegos y rifas" (Título VII), "De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones" (Título VIII), -

"Delitos contra las personas" (Título IX), "Delitos contra la honestidad" (Título X), "De los delitos contra el honor" (Título XI), "Delitos contra el estado civil" (Título XII), "De los delitos contra la libertad y seguridad" (Título XIII), "Delitos contra la propiedad" (Título XIV) y "De la imprudencia temeraria" (Título XV); el LIBRO TERCERO trata "De las faltas y sus penas": "De las faltas de imprenta y contra el orden público" (Título I), "De las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones" (Título II), "De las faltas contra las personas" (Título III), "De las faltas contra la propiedad" (Título IV) y "Disposiciones comunes a las faltas" (Título V).

En cuanto a la parte general de ambos textos casi no hay diferencias sustanciales, sino meramente formales.

Establece que los delitos se clasifican, de acuerdo con su gravedad, en crímenes, simples delitos y faltas. Los crímenes son sancionados con penas mayores, los simples delitos con penas menores y las faltas con penas correccionales (31).

La "escala general" de penas establece diferentes clases de penas a imponer. Estas pueden ser: penas aflictivas, penas no aflictivas, penas correccionales, penas comunes y penas accesorias (32).

Son penas aflictivas: muerte, presidio mayor, reclusión mayor, relegación, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial; como penas no aflictivas: presidio menor, reclusión menor, confinamiento, destierro y suspensión; como pena correccional solo aparece la prisión; constituyen penas comunes: multa, caución y la sujeción a vigilancia; y, finalmente, aparecen como penas accesorias: cadena o grillete, degradación, interdicción civil, comiso y pago de costas.

Mediante una reforma constitucional posterior a la expe-

dición del Código Penal de 1906 se declaró abolida la pena de muerte.

El límite máximo de duración de las penas privativas de libertad es de 12 años y el propio Código establece, en una "tabla demostrativa" señala los diversos grados (mínimo, medio y máximo) de duración de las penas.

Por lo que se refiere a la parte especial, en el Libro II de éste Código encontramos las pequeñas diferencias que existen entre ambos textos, algunas de las cuales son dignas de mención:

La regulación sobre los "delitos contra la constitución" presenta modalidades muy peculiares en ambos textos, debidas más que nada a la respectiva forma de gobierno en cada Estado.

Por ser Honduras un país republicano y presidencialista encontramos que el Código incluye los "delitos contra el Presidente de la República" y "los Supremos Poderes" mientras que en España, por el contrario, se alude, con justificación, a los "delitos de lesa majestad" y "contra las Cortes y sus individuos y contra el Consejo de Ministros".

En el Código hondureño aparecen una serie de delitos "relativos a los ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y correos" que no aparecen en el modelo español.

Por lo que respecta a las falsedades, en el texto penal centroamericano no existen los "delitos de falsificación de la firma o estampilla Real y firma de los Ministros", aunque las conductas que supongan el último supuesto quedan abarcadas por el delito de "falsificación de documentos públicos".

Por último, debemos señalar que el título final de este libro (Título XV: "Disposiciones generales") en el Código español ha desaparecido en el hondureño que termina el mencionado li

bro con la "imprudencia temeraria".

III. EL CODIGO PENAL DE 1916

A) INTRODUCCION

Doce años después de nuestra separación de Colombia se aprueba el primer Código Penal panameño, mediante la Ley 2 de 1916 (33), que rigió desde el 1º de julio de 1917 hasta el 16 de enero de 1923, ya que a partir del 17 de enero de 1923 empezó a regir el Código siguiente.

Un balance del estado de nuestra legislación para comienzos de la segunda década del presente siglo nos muestra la nula evolución legislativa del país, a pesar de que nos habíamos separado de Colombia a partir del 3 de noviembre de 1903, puesto que aún regía en Panamá la legislación colombiana vigente al momento de la separación de aquel hermano país.

La "Disposición Final" del Código de 1916 decía así: "El presente Código comenzará a regir el 1º de Julio de 1917, y desde esa fecha queda derogado el Código Penal Colombiano de 18 de Octubre de 1890, vigente hoy en esta República, así como todas las leyes y disposiciones que se opongan a las del presente".

Siendo esta la situación, carece de veracidad la aseveración de QUINTANO RIPOLLES cuando señala que "Aún después de lograda la plena soberanía siguió prevalente el sistema colombiano, no promulgándose un Código penal panameño hasta el 17 de noviembre de 1922, que es, con algunas modificaciones no sustanciales, el mismo actualmente en vigor" (34) (El subrayado es nuestro).

Cierto es que el Código Penal aludido es el actualmente vigente, con una gran cantidad de modificaciones, sustanciales unas y desafortunadas otras, pero no fue el primer Código Penal panameño, ya que tal honor le correspondió al Código de 1916.

La Ley 2 de 1916 no recogió el texto del Código Penal, ni el de los otros Códigos que mediante ella fueron sancionados por el Presidente de la República, Dr. Belisario PORRAS.

Mediante la Ley en cuestión se aprobaron los Códigos Penal, de Comercio, de Minas, Fiscal, Civil y Judicial y se dispuso que dos ejemplares de una edición correcta y esmerada de cada uno de estos códigos, autorizados con la firma del Presidente de la República y del Secretario de Gobierno y Justicia, debían ser depositados en el despacho de este funcionario, dos en la Corte Suprema de Justicia y dos en el Archivo Nacional.

El art. 3 de esta ley señalaba que "El texto de los ejemplares impresos autorizados del modo que se expresa en el artículo anterior, se tendrá por el texto auténtico de los Códigos en referencia, deberán contener al principio, el texto de la presente Ley; y las firmas autógrafas de que trata el artículo 2º, serán puestas al pie de ella en el lugar correspondiente en los ejemplares que deben ser autorizados y depositados conforme a dicho artículo".

La edición oficial mencionada anteriormente fue realizada en el año 1917. Según consta en la portada del Código la edición fue impresa en la ciudad de Barcelona, en los "Talleres de Artes Gráficas de Henrich y Cª". situados en la calle de Córcega, 348.

Inexplicablemente la edición oficial en cuestión carece de la "exposición de motivos" del Código, fechada el día 10 de agosto de 1916 (35), que debido a su brevedad nos permitimos transcribir a continuación:

"A la legislación penal se concede hoy en los países más adelantados, excepcional importancia. Y el fenómeno se explica perfectamente; es que las sociedades modernas no ven ya las leyes penales como instru-

mento de tortura o de castigo, sino por medio de defensa de los intereses individuales y colectivos. Los pueblos de más intensa civilización no pretenden ya castigar a los que atacan los intereses sociales, sino defenderse de ellos en forma adecuada y conveniente. Cambio tan radical, que ha variado el concepto de la función penal, ennobleciéndola al mismo tiempo, ha traído consigo donde quiera la necesidad de revisar los viejos Códigos y de dictar nuevas leyes basadas, no ya en el empirismo medieval, sino en fundamentos perfectamente científicos.

"Siguiendo la ley fatal del progreso, a la cual no pueden sustraerse ni hombre ni pueblos, hemos sentido también nosotros la necesidad de revisar muestras instituciones penales, y de ahí que aunque en ellas no existieran la dispersión y confusión que en las leyes civiles procesales, porque, a diferencia de éstas las teníamos en un solo cuerpo, considera el Poder Ejecutivo indispensable encomendar también a la honorable Comisión Codificadora a la preparación de un nuevo Código Penal que venga a sustituir al que hoy nos rige.

"Desgraciadamente las condiciones del país, no han permitido hacer un Código absolutamente moderno, para aplicar el cual nos habría faltado personal convenientemente preparado; pero con todo, el Proyecto viene a mejorar un estado de cosas contra el cual ha venido clamando de tiempo atrás la conciencia pública.

"Adolece el Código colombiano hasta hoy vigente, entre otros defectos, de exceso de rigor, en muchos casos, contra los particulares delincuentes y extremada

lenidad para con los funcionarios públicos infieles en una u otra forma al mandato recibido del pueblo, En el nuevo código no existe esta injustificable diferencia.

"También ha desaparecido la sutil distinción entre la tentativa y el delito frustrado. Tal distinción, - sin alcance práctico alguno, no tiene más valor que el puramente académico, y ha parecido por tanto conveniente eliminarla para evitar lamentables y enojosas confusiones entre los encargados de aplicar la ley.

"La pena máxima que ahora se fija para un solo delito, alcanza únicamente a veinte años de presidio, en tanto que el Código colombiano consignaba la pena de muerte y fijaba el máximo de la pena temporal en veinticinco años. Los países que más han estudiado estas cuestiones -ello es sabido- mantienen todos la separación absoluta de los antisociales natos e incorregibles, difiriendo únicamente en la manera de practicarla: unos la cumplen por medio de eliminación y otros por la segregación definitiva que en principio la sustituyen; pero como no debe legislarse contra la conciencia de los pueblos, únicos soberanos de las democracias, y como aquí repugnan al sentimiento público tanto las ejecuciones capitales como la prisión perpetua, la Honorable Comisión Codificadora ha estado indudablemente en lo justo fijando el límite máximo de la pena tal como lo ha hecho.

"Sustituye el nuevo Código la rebaja de pena por la libertad condicional y establece también el aumento de pena para los delincuentes que observen mala conducta en la prisión. Ambas innovaciones que guardan entre

si íntimas relaciones y que se fundan en un mismo principio son recomendables.

"Considerando en conjunto el proyecto, puede decirse que es un cuerpo de leyes metódico, claro y sencillo, superior con mucho al Código Penal vigente".

La República de Panamá se mantuvo fiel a la tradición punitiva hispánica al momento de adoptar su primer Código, si bien no podemos afirmar que fue ese el propósito de nuestras autoridades al contratar al Dr. Angel UGARTE para elaborar el Proyecto de nuevo Código Penal.

Resulta lógico, no obstante, que UGARTE siguiera el modelo de su país, ya que lo conocía muy bien, que se inspiraba en la legislación española, pues como ha señalado BACIGALUPO "si hubiera que distinguir etapas en la historia de la legislación penal Latinoamericana, podría afirmarse que existe una primera época, posterior a la independencia, que se caracteriza por la adopción de modelos hispánicos de legislación penal" (36).

Una comparación del Código hondureño con el Código panameño nos lleva a la conclusión de que el Código panameño de 1916 superó algunas de las deficiencias que se contenían en aquél, de modo que si bien es cierto que se basa en él, lo mejora en varias cuestiones.

B) ESTRUCTURA

El Código Penal de 1916 constaba de 570 artículos y una "disposición final" relativa a su vigencia; estaba dividido en dos libros y estos, en títulos, capítulos y secciones.

Estaba estructurado de la siguiente forma: LIBRO PRIMERO sobre "Delitos, circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de responsabilidad penal" (Título II), "Personas responsa-

bles de los delitos" (Título III), "De las penas" (Título IV), "Quebrantamiento de sentencias y nueva delincuencia" (Título V) y "Extinción de la responsabilidad penal" (Título VI); LIBRO SEGUNDO sobre "Clasificación de delitos y aplicación de penas"; "Delitos contra la seguridad del Estado" (Título I), "Delitos contra la Constitución" (Título II), "Delitos contra el orden público" (Título III), "Delitos relativos a ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y correos" (Título IV), "Falsedades" (Título V), "Infracción de las leyes sobre inhumaciones y violación de sepulturas y delitos contra la salud pública" (Título VI), "Juegos y rifas" (Título VII), "Delitos de los empleados públicos en el ejercicio de su cargo" (Título VIII), "Delitos contra las personas" (Título IX), "Delitos contra la honestidad" (Título X), "Delitos contra el honor" (Título XI), "Delitos contra el estado civil" (Título XII), "Delitos contra la libertad y seguridad" (Título XIII), "Delitos contra la propiedad" (Título XIV) e "Imprudencia Temeraria" (Título XV).

Aunque este Código carece de un libro a propósito de las faltas, que en Panamá se regula a través de leyes administrativas (37), una comparación de su estructura con la del Código hondureño de 1906 no deja duda acerca de la influencia de éste en aquél.

El Código panameño, sin embargo, no es una copia exacta del hondureño de 1906, si bien en muchos aspectos la semejanza es enorme y en muchos artículos se ha hecho una transcripción que pudieramos calificar de "literal".

Totalmente nuevo es el "Título Primero" del Libro I que se refiere a "disposiciones generales" en donde encontramos insertadas, y claro está forzadas, numerosas cuestiones de carácter adjetivo. En dicho título aparecen mezcladas nociones de De-

recho penal material y formal, tan variadas como "jurisdicción penal" (38), "extradición" (39), "excarcelación" (40), "reincidencia" (41), "libertad condicional y aumento de pena" (42) e "indultos y conmutaciones" (43).

C) CONTENIDO

Por lo que respecta al Libro Primero podemos señalar que consagra una definición del delito y determina en qué casos se extiende la responsabilidad penal a un sujeto por hechos que, aunque no constituyen delito consumado, son merecedores de pena a juicio del legislador (44).

Entiende por delito "las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley", que "se reputan voluntarias, salvo que conste lo contrario" y sin tomar en consideración si "el mal ejecutado fuere distinto del que se propuso" el sujeto realizar.

El Código declara punible "no sólo el delito consumado, sino también la tentativa" (45) y señala que la conspiración y la proposición para cometer delito sólo son sancionadas cuando la ley expresamente lo determine (46).

Consagra un amplio catálogo de circunstancias eximentes (47), atenuantes (48) y agravantes (49) de responsabilidad penal.

Como personas responsables de los delitos señalados a los autores (50), cómplices (51) y encubridores (52), de modo que incluía en la regulación de la participación figuras como la recepción y la protección de malhechores.

Respecto de las penas, sienta el principio de que no se castigaran los delitos con pena que no esté establecida por ley anterior a su perpetración (53) y, además, reconoce la retroactividad de la ley penal favorable, salvo que haya sentencia ejecutoriada (54). Establece, por otra parte, que el perdón del ofendido en aquellos delitos que se consideran de carácter públicos

no extingue la acción penal, pero si la civil en lo que respecta al que perdona (55).

Clasifica las penas en principales y accesorias (56). Como penas principales señalaba las siguientes: presidio, reclusión, relegación, extrañamiento, prisión, confinamiento, destierro, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, suspensión, multa y caución y sujeción a la vigilancia de las autoridades; como penas accesorias, tenía solamente el comiso y el pago de costas, a las que añadía la inhabilitación y la suspensión cuando la ley declaraba que otras penas las llevaban consigo - (57).

El Código disponía que el límite máximo de pena por un solo delito era de veinte años (58) y en cuanto a la multa, se disponía que no podía exceder de 2.000 balboas (59).

Se establece que la pena de "presidio" imponía al sujeto la obligación de trabajar en obras públicas y el deber de usar cadena o grillete cuando se considere necesario (60).

Las penas privativas de libertad de "reclusión" y "prisión" suponen para el reo el deber u obligación de trabajar en las labores normales y ordinarias del establecimiento carcelario donde cumplen su pena (61).

La "relegación" consiste en la traslación de un reo a una colonia penitenciaria, establecida en una isla habitada de la República, con la obligación de residir en ella, sometido a la obligación de observar los reglamentos allí establecidos (62).

El "extrañamiento" supone la expulsión del reo del territorio de la república (63).

Se entiende por "confinamiento" la traslación del reo a otra población de la República con la prohibición de salir de ella (64). Implica, además, la sujeción a la vigilancia de las

autoridades.

Por "destierro" se entiende la expulsión del reo de un radio determinado del lugar donde se celebró el juicio, que en ningún caso podía exceder de los cien kilómetros (65).

La pena de "inhabilitación" está concebida en forma "absoluta" y "especial". La primera comprende cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares; la segunda, algún cargo y oficio público, derecho político o profesión titular en concreto (66).

La "suspensión" aparece configurada como la inhabilidad para el ejercicio de algún cargo u oficio público, derecho político o profesión titular y la incapacidad para obtener otros ánlogos durante el tiempo de condena (67).

Por medio de la pena de "caución" se impone al sancionado la obligación de presentar un fiador solvente que responda de que aquél no ejecutará el mal que se trata de evitar, pagando en caso de ejecutarse, la cantidad que el tribunal haya establecido (68).

Como complemento de la pena de caución, se dispone que si el sujeto no cumpliera con rendir la fianza señalada, el tribunal correspondiente le aplicará la pena de "destierro" por el término que estime conveniente.

El arbitrio judicial concedido de esta forma era extremadamente amplio, pues se podía imponer cualquier término de duración para el "destierro" aunque el límite máximo de esta pena, como el de cualquier otra, era de 20 años.

Como la última de las penas principales aparecía la "sujeción a la vigilancia de las autoridades", de modo que el penado se encontraba sometido a una serie de obligaciones establecidas en el Código, que en caso de incumplimiento podía significar

para el sujeto la imposición de una pena de prisión no mayor de un año (69).

En lo que atañe a las "penas accesorias" el Código entiende por "comiso" la pérdida de los efectos que provienen del delito, así como los instrumentos utilizados en la ejecución del mismo, salvo que se demuestre pertenecer a terceras personas no responsables del delito (70).

El pago de "costas" comprende tanto las procesales como las personales y otros gastos ocasionados por el juicio que no es tén incluidos como costas (71).

Se establece un orden de prelación en caso de que los ha- beres del sujeto no sean suficientes para cubrir la responsabilidad pecuniaria del mismo (72).

Las penas de "reclusión" y "confinamiento" llevan como "accesorio" la de inhabilitación especial; la "prisión" y el "des- tierro" llevan como "accesorio" la pena de suspensión (73); la inhabilitación, sea absoluta o especial, cuando se impone como pena principal lleva la accesorio de multa que fijaba prudencialmente el Tribunal, aunque no debe exceder del máximo establecido para dicha pena principal (74).

Para el supuesto de un concurso material de delitos la pena señalada sería la resultante de la suma de todas las que co- rrespondería por dichos delitos, aunque en una sola sentencia no podía condenarse a más de 30 años (75).

En caso de un "concurso ideal" la sanción correspondiente era la prevista para el delito más grave (76).

A propósito del destino que debía darse al producto del trabajo de los condenados, se disponía que el mismo debía ser destinado así (77): a) al pago de la responsabilidad civil prove- niente del delito o falta (78); b) a la satisfacción de los gas-

tos que ocasionaba el recluso en el establecimiento penitenciario en donde estaba internado; y, c) a la acumulación de un fondo de reserva que se les entregaba a los reclusos al ser puestos en libertad, o a sus herederos, si fallecieran cumpliendo su condena.

Al inicio de la exposición de este apartado dejamos constancia de la agrupación incoherente de una amplia gama de disposiciones penales sustantivas y adjetivas en el título I (Disposiciones generales) del Libro Primero del Código de 1916.

Traemos esta alusión a este lugar, toda vez que estimamos necesario hacer alguna mención de la regulación de la "reincidencia", la "libertad condicional y aumento de pena" y los "indultos y conmutaciones" allí reunidos.

Por "reincidencia" se entiende cometer un nuevo hecho punible después de haber sido condenado el sujeto por sentencia firme (79). No procedía la calificación de reincidente cuando se ha cometido con anterioridad faltas; para la reincidencia en materia de faltas, sin embargo, si se toman en cuenta los delitos antes cometidos.

Esta regulación queda sin sentido en nuestra legislación, ya que la reincidencia estaba prevista en el Código Penal, que solo regulaba delitos más no faltas, mientras que las faltas reguladas en otras leyes carecían del instituto de la "reincidencia".

En lo que respecta a la "libertad condicional y aumento de pena" (80) se establece que se podía aumentar la pena impuesta al sancionado que observaba mala conducta dentro del establecimiento penitenciario donde cumplía condena, mientras que a los que habían observado buena conducta se les podía conceder la libertad condicional.

El aumento de pena ni la libertad condicional, en cues-

ción, podían exceder de una tercera parte de la pena impuesta al sujeto.

Quedaba el favorecido con la libertad condicional sujeto a la vigilancia de las autoridades, con las obligaciones que ello conllevaba, durante el resto de su condena.

Se revocaba la libertad condicional concedida en caso de que el sujeto incumpliera alguna de las obligaciones a que quedaba sujeto o cometiera algún nuevo delito.

Sobre "indultos" se establece que corresponde al Presidente de la República la facultad de conceder indultos por delitos políticos, ya sea durante el juicio o después de él, previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia.

La "conmutación" corresponde al Ejecutivo previa recomendación de la Corte Suprema de Justicia, salvo que el tribunal sentenciador la haya recomendado en el fallo mismo.

Ni el indulto ni la conmutación extinguen la responsabilidad civil del sujeto, que puede hacerse exigible en cualquier momento (81).

Por lo que respecta al Libro Segundo, podemos señalar que la regulación del mismo no presenta sustanciales modificaciones respecto de los Códigos hondureño y español ya señalados, salvo que en el nuestro se ha añadido un título nuevo que no figura en el español.

En efecto, en nuestro Código, como en el de Honduras, figura en el Libro Segundo una especial protección a favor de los "ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y correos" que no se encuentra en el Código Español de 1870.

Otra diferencia fundamental entre los dos textos centroamericanos y el Código español la encontramos en la regulación de los delitos contra el Estado.

Esto se debe a que en ambas naciones centroamericanas la forma de gobierno es la republicana y no la monarquía, por lo que encontramos especial protección para el Presidente de la República, más nunca se menciona la figura del Rey.

Esta realidad política implica la ausencia de los típicos delitos contra la monarquía y otros como la falsificación de sellos y marcas reales que aparecen en el texto español.

D) JUICIOS SOBRE ESTE CODIGO

El Código Penal de 1916 estuvo vigente durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1917 y el 16 de enero de 1923, lapso durante el cual transcurrieron aproximadamente casi 4 años y medio.

Durante este período, sin embargo, no tenemos conocimiento de que se hayan realizado estudios sobre dicho Código. Es más, aún hoy este Código está falto de una mayor consideración por parte de nuestra doctrina.

Las pocas referencias que conocemos sobre el Código Penal de 1916 han sido realizadas cuando el Código ya no estaba vigente.

Por otra parte, los autores que fuera de Panamá se han ocupado de nuestra legislación, tales como JIMENEZ DE ASUA y QUINTANO RIPOLLES, al referirse a Panamá aluden al Código de 1922.

En nuestro medio es muy poco lo que se sabe sobre este Código Penal. Casi se podría decir que su efímera existencia lo ha mantenido en el olvido.

Los testimonios que tenemos de este Código se reducen a dos trabajos ya antes citados: AROSEMENA GUARDIA (1962), MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ (1977, 2ª edición 1980) y PUERTA GOMEZ (82), quienes le han dedicado cierta consideración.

En forma tangencial se han referido a este Código ECHE-

VERS (83), GUERRA DE VILLALAZ (84) y CEVILLE (85); nosotros en una ocasión nos hemos ocupado de alguna cuestión (86), aunque sea en forma breve e histórica.

Ha señalado respecto al Código de 1916 PUERTA GOMEZ, en su obra El Libro Primero de un Proyecto de Código Penal, que "Este Código que es el español o hondureño reemplazó al colombiano y pertenece también en su fundamento básico a la misma escuela de éste pero tiene diferencias en detalle tan apreciables y de tanta ventaja sobre el sucedido que, sin duda alguna, hubo un evidente progreso en la materia, comprimida la sustancia, atempera la rudeza y drasticidad del antiguo, eliminando sus anacronismos y establecidas algunas diferencias en cuanto a la división de los delitos y clasificación de las penas, todo más de acuerdo con el ambiente panameño harto desigual del colombiano a causa de la situación geográfica de Panamá, su cosmopolitismo y la laxitud de sus costumbres, la innovación tenía que resultar, como resultó de gran efecto" (87).

Por su parte MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ anotan que este Código "siguió los lineamientos generales del Código Penal hondureño de 1906". Más adelante señalan que "se consideró en esa época (se refieren los autores a 1916) que ese Código tenía algunas ventajas sobre el Código Penal colombiano de 1890 que rigió hasta ese año (88).

Fuera de estas consideraciones, nada se ha escrito respecto del Código de 1916. Los otros autores citados e incluso AROSEMENA GUARDIA y MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ se limitan a formular consideraciones de carácter objetivas: fecha de aprobación, Ley que lo aprueba, fecha en que empieza a regir, autor, etc.

La materia sigue aún virgen. La naturaleza del presente trabajo no nos permite mayores consideraciones sobre él.

E) CONSIDERACIONES FINALES

Sin lugar a dudas, nos atrevemos a señalar, que el Código Penal de 1916, primer código punitivo patrio, supuso un avance en materia criminal para la sociedad panameña de aquella época respecto del anterior texto vigente,

Cierto es que tanto el Código colombiano de 1890 como el Código panameño de 1916 están inspirados en las concepciones clásicas de origen hispánico, pero el texto colombiano que se derogó con el Código Panameño de 1916 resultaba antagónico con la sociedad panameña en la que regía, que muy poco se parecía a la colombiana de aquella época.

Es sumamente elocuente la extensión del catálogo de delitos previstos en la parte especial del Código colombiano respecto de la brevedad del Libro Segundo de nuestro Código.

En efecto, de casi 760 artículos que contenían los Libros II y III del Código colombiano, que no regulaba las faltas tampoco, el nuestro sólo tenía alrededor de 340 artículos en el Libro II a propósito de los delitos en particular.

El casuismo del Código Penal colombiano era extremado, frente a la brevedad y sencillez del nuestro.

La evidente desproporción entre ambos textos, a propósito de los delitos tipificados, significó un notable progreso al respecto, toda vez que se suprimieron innecesarias descripciones penales y se redujo sensiblemente el catálogo punitivo en más del cincuenta por ciento de los artículos.

Por otra parte, el Código de 1916 estructuró la parte especial en orden de los diferentes bienes jurídicos dignos de protección por parte del legislador, desechando el sistema del Código colombiano de dividir la parte especial en dos libros, dedicados el primero a los "delitos que afectan principalmente a la Na

ción o a la sociedad, o que sean cometidos por empleados públicos" y el segundo a los "delitos contra los particulares y sus penas".

En cuanto a las principales innovaciones de nuestro Código de 1916 respecto al colombiano de 1890, podemos mencionar brevemente, las siguientes:

- a) Desaparecen las definiciones que contenía el Código colombiano sobre delito frustrado y delincuencia habitual;
- b) La punibilidad de la conspiración y proposición se reduce a los supuestos en que la ley las sanciona expresamente;
- c) Se declara expresamente que son responsables criminalmente de los delitos los autores, cómplices y encubridores, variándose el criterio anterior que distinguía entre autores, cómplices, auxiliadores y encubridores;
- d) En cuanto a las eximentes de responsabilidad, el Código panameño regula la materia con amplitud, como antes lo había hecho el Código español de 1870, ampliando de esta manera el catálogo reducido que contenía el Código Colombiano;
- e) Sobre circunstancias agravantes, el Código panameño incluyó un numeroso catálogo de 20 agravantes comunes, que abarcaba la mayoría de las contenidas en el Código colombiano y añadía otras;
- f) Contiene el Código patrio un amplio catálogo de atenuantes, que toma en cuenta las eximentes cuando no concurren todos los requisitos necesarios para la existencia de las mismas, mientras que el catálogo de atenuantes del Código colombiano es extremadamente reducido;
- g) No incluye nuestro Código la pena de muerte, que si consagraba el Código colombiano;
- h) El Código panameño establece un límite máximo para la

pena de multa, que no existe en el Código colombiano, ya que éste permite la imposición de multa por cualquier cantidad hasta un veinte por ciento de los bienes del condenado;

i) Existe en el nuestro una amplia regulación de la extinción de la responsabilidad penal, que no figura en el Código del vecino país;

j) El Código regula la responsabilidad civil derivada del delito, que no se mencionaba en el Código colombiano.

Hechas las anteriores observaciones, nos falta señalar que si bien este Código trajo una mejor legislación punitiva para el país, esto no significa que no tuviera alguna que otra deficiencia en su articulado.

No pretendemos señalarlas todas, pero nos basta mencionar dos cuestiones: por un lado, resulta inexplicable que el Código mencione en ocasiones las faltas, si no las regula y nuestro legislador de 1916 omite incluir el Libro Tercero que trata el Código hondureño de 1906 sobre "las faltas" (89); por otro, resulta superflua la distinción entre "homicidio", "asesinato" y "parricidio", puestos que para efectos de penalidad tanto el asesinato como el parricidio son sancionados con la misma pena, de 15 a 20 años de presidio (90) mientras que el homicidio tenía previsto de 10 a 15 años de reclusión (91).

NOTAS

- (1) Decreto 4 de 21 de noviembre de 1903. Publicado en la Gaceta Oficial número 3, de 28 de noviembre de 1903.
- (2) En el mismo Decreto antes citado.
- (3) Ley 37 de 4 de mayo de 1904. Publicada en la Gaceta Oficial número 20, de 13 de mayo de 1904.
- (4) Decreto 114 de 7 de septiembre de 1904. Publicado en la Gaceta Oficial número 55, de 23 de septiembre de 1904.
- (5) Decreto 136 de 12 de noviembre de 1907. Publicado en la Gaceta Oficial número 541, de 13 de noviembre de 1907.
- (6) Decreto 127 de 26 de septiembre de 1913. Publicado en la Gaceta Oficial número 1985, de 3 de octubre de 1913.
- (7) Decreto 141 de 6 de noviembre de 1913. Publicado en la Gaceta Oficial número 1997, de 14 de noviembre de 1913.
- (8) Ley 49 de 29 de diciembre de 1914. Publicada en la Gaceta Oficial número 2168, de 28 de enero de 1915.
- (9) AROSEMENA GUARDIA ha señalado que correspondió al propio UGARTE redactar las Bases sobre las que se fundamentaría el futuro Código y que presentadas por éste el 20 de enero de 1904, fueron consignadas en la ley señalada.
- (10) JIMENEZ DE ASUA, p. 1118.
- (11) Así, entre otros: RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 99; SAINZ CANTERO, ps. 229 y sgts; GIMBERNAT, p. 19.
- (12) RODRIGUEZ MOURULLO, p. 41.
- (13) JIMENEZ DE ASUA. p. 713. En igual sentido se ha manifestado ANTON ONECA cuando advierte que "la Constitución de 1869 - obligó a reformar el Código Penal con gran rapidez" (José ANTON ONECA, "El Código Penal de 1870" en Anuario, 1970 (Fac. II), p. 235. De la misma opinión: Federico CASTEJON, Derecho Penal, Tomo I, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1931, p. 59. Véase: DEL ROSAL, ps. 197-198.

- (14) SAINZ CANTERO, p. 232.
- (15) Marino BARBERO SANTOS, Política y derecho penal en España. Tucur Ediciones, S.A. Madrid, 1977, p. 41.
- (16) ANTON ONECA, "El Código Penal de 1870" en, Anuario cit., p. 237. Véase también: CUELLO CALON, p. 153
- (17) BARBERO SANTOS, Política cit., p. 42.
- (18) Joaquín GARRIGUEZ y DIAZ-CANABATE, Sobre algunos puntos del Código Penal, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1920, p. 5.
- (19) JIMENEZ DE ASUA, p. 716
- (20) Juan DEL ROSAL, "La palabra y la expresión en el Código Penal de 1870" en, Conmemoración, ps. 203 y sgts. (especialmente, p. 208).
- (21) Cf: BARBERO SANTOS, Política cit., p. 43; CASTEJON, Derecho cit., p. 59.
- (22) Luis JIMENEZ DE ASUA y José ANTON ONECA, Derecho Penal conforme al Código de 1928, Editorial Reus, S.A. Tomo I, Madrid, 1929, p. 47.
- (23) Edmund MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Trad. esp. de J.A. Rodríguez Muñoz, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, Madrid, 1935, p. 37.
- (24) Además, en forma muy particular el volumen editado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación bajo el título Conmemoración, ya citado, en el que figuran contribuciones de Federico CASTEJON, Manuel COBO, Francisco-Felipe - OLESA-MUÑO, Gonzalo RODRIGUEZ MOURULLO, el propio, Juan DEL ROSAL y José LATOUR BROTONS.
- (25) Ruperto NUÑEZ BARBERO, La reforma penal de 1870. Salamanca, 1970.
- (26) Código Penal de Honduras. Aprobado mediante Decreto 76 de 19 de enero de 1906, publicado en la Gaceta número 2664 de 1906. Empezó a regir el 1 de marzo de 1906.

- (27) Agradecemos al Prof. Dr. D. René Suazo Lagos, de la Universidad Autónoma de Honduras, por la información que nos ha suministrado a este respecto.
- (28) Información suministrada por el Prof. Dr. D. René Suazo Lagos.
- (29) JIMENEZ DE ASUA, p. 1118.
- (30) AROSEMENA GUARDIA, p. 260.
- (31) El artículo 3 de este Código señala lo siguiente:
"Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas.
Son crímenes los que la ley castiga con penas mayores.
Son simples delitos los que la ley reprime con penas menores.
Son faltas las infracciones a que la ley señala pena correccional".
- (32) Código Penal de Honduras, art. 24.
- (33) Ley 2 de 22 de agosto de 1916. Publicada en la Gaceta Oficial número 2404, de 22 de agosto de 1916 y vuelta a publicar en la Gaceta Oficial número 2418, de 7 de septiembre - de 1916.
- (34) QUINTANO RIPOLLES, p. 148.
- (35) Publicada en la Gaceta Oficial número 2413 de 1 de septiembre de 1916.
- (36) BACIGALUPO, p. 4.
- (37) En concreto, en el Libro III sobre "Policía" del Código Administrativo, en la Ley 112 de 1974 sobre "justicia administrativa policial" y demás leyes especiales.
- (38) C.P. 1916, arts. 1-5.
- (39) C.P. 1916, arts. 6-12.
- (40) C.P. 1916, art. 13.
- (41) C.P. 1916, arts. 14-17.

- (42) C.P. 1916, arts. 18-31.
- (43) C.P. 1916, arts. 32-39.
- (44) Sólo regula la tentativa, más no el delito frustrado.
- (45) C.P. 1916, art. 43.
- (46) C.P. 1916, art. 44.
- (47) C.P. 1916, art. 45 que señala 13 eximentes, en términos muy parecidos al art. 8 del Código español de 1870.
- (48) C.P. 1916, art. 46, que contiene 6 atenuantes en forma semejante al art. 9 del Código español de 1870.
- (49) C.P. 1916, art. 47 que incluye un amplio catálogo de agravantes -son exactamente 20-, parecido al del art. 10 del Código español de 1870.
- (50) El art. 50 del C.P. de 1916 textualmente señala:
"Se consideran autores:
1º Los que toman parte directa en la ejecución del hecho
2º Los que fuerzan o inducen a otros directamente a ejecutarlo.
3º Los que cooperaren a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado".
- (51) El art. 51 del C.P. de 1916 textualmente señala:
"Son cómplices los que no estando comprendidos en el artículo anterior ayudan a la ejecución del delito por hechos anteriores o simultáneos".
- (52) C.P. 1916, art. 52.
- (53) C.P. 1916, art. 56 (Cf. art. 22 del C.P. español de 1870).
- (54) C.P. 1916, art. 57 (Cf. art. 23 del C.P. español de 1870)
- (55) C.P. 1916, art. 58 (Cf. art. 24 del C.P. español de 1870)
- (56) C.F. 1916, art. 60.
- (57) C.P. 1916, art. 62.

(58) C.P. 1916, art. 64.

(59) C.P. 1916, art. 61.

(60) C.P. 1916, art. 67.

(61) C.P. 1916, art. 68.

(62) C.P. 1916, art. 69.

(63) C.P. 1916, art. 70.

(64) C.P. 1916, art. 71.

(65) C.P. 1916, art. 72.

(66) C.P. 1916, arts. 73 y 74.

Cuando la inhabilitación es absoluta produce:

1º la privación de los cargos y oficios públicos de que estuviere en posesión el penado, aún cuando fueren de elección popular;

2º la privación del ejercicio de las profesiones titulares;

3º la privación de todos los derechos políticos activos y pasivos;

4º la incapacidad para obtener tales cargos, oficios, profesiones y derechos durante el tiempo de la condena; y,

5º la pérdida de todo derecho para obtener jubilación u otra pensión por los empleos servidos con anterioridad;

La inhabilitación especial, por su parte, implica:

1º la privación del cargo, oficio, derecho o profesión sobre que recae, por el tiempo de la condena; y,

2º la incapacidad para obtener dicho cargo, oficio, derecho o profesión u otros análogos.

(67) C.P. 1916, art. 75.

(68) C.P. 1916, art. 83.

(69) C.P. 1916, art. 84.

(70) C.P. 1916, art. 80.

(71) C.P. 1916, art. 81.

(72) C.P. 1916, art. 82.

- (73) C.P. 1916, art. 86.
- (74) C.P. 1916, art. 87. Sucede, sin embargo, que la pena de multa no figura, en la escala general de penas del art. 60 como pena accesoria, sino únicamente como pena principal.
- (75) C.P. 1916, arts. 106 y 107.
- (76) C.P. 1916, art. 108.
- (77) C.P. 1916, art. 119.
- (78) Esta referencia a las "faltas" es superflua toda vez que el Código no contiene la regulación de las mismas, como si ocurre en los Códigos de Honduras y España.
- (79) C.P. 1916, art. 14.
- (80) C.P. 1916, arts. 18 y 19.
- (81) C.P. 1916, arts. 32, 35 y 37.
- (82) J.M. PUERTA GOMEZ, El libro primero de un proyecto de Código Penal, Panamá, 1929, citado por AROSEMENA GUARDIA, p.260.
- (83) ECHEVERS, p. 123.
- (84) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "Breves comentarios sobre el proyecto de Código Penal de Royo" en LEX, Mayo de 1973, nº 2, ps. 23-24.
- (85) Oscar CEVILLE, "Motivos orientadores de la Revisión (del Anteproyecto de 1970)" en ACTAS, p. 15.
- (86) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "El concepto de autor de los delitos dolosos en la legislación penal panameña" en LEX, 1976, nº 3, ps. 147-168 (especialmente ps. 160-161).
- (87) PUERTA GOMEZ citado por AROSEMENA GUARDIA, p. 260.
- (88) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 95.
- (89) C.P. 1916, arts. 16 y 119, ordinal 1º
- (90) C.P. 1916, arts. 404 (parricidio) y 405 (asesinato)
- (91) C.P. 1916, art. 406.

64

Capítulo Tercero

EL CODIGO PENAL PANAMEÑO DE 1922

- I. INTRODUCCION
- II. FUENTES DEL CODIGO PENAL DE 1922
- III. EL CODIGO PENAL DE 1922

I. INTRODUCCION

Desde el preciso momento en que empezó a regir el Código de 1916, hecho ocurrido el 1º de julio de 1917, se produjeron - críticas adversas contra él, poniendo de relieve la falta de adecuación del mismo a la sociedad panameña. Si bien es cierto que este Código era mejor que el colombiano de 1890, hasta ese momento vigente, hay que señalar que no era lo que en nuestro medio se quería.(1).

Esta realidad fue determinante para que en poco tiempo se nombrara una nueva Comisión para la revisión, entre otros, del Código Penal de 1916. En efecto, mediante Decreto 25 de 1918 (2) se creó una "Comisión Revisora" de los códigos nacionales, que quedó integrada por los señores Francisco A. FILOS, Ricardo J. ALFARO, Julio J. FABREGA y Héctor VALDES, a la que se encomendó la labor de efectuar un estudio comparativo de los diversos códigos y preparar las reformas que dichos códigos necesitasen.

De los trabajos efectuados por esta comisión no hemos encontrado información alguna.

En 1922 el doctor Juan LOMBARDI presentó un proyecto de Código Penal que antes el Gobierno le había encomendado (3). En este proyecto se seguía casi literalmente el texto del Proyecto de Código Penal que para Colombia había elaborado en 1912 José Vicente CONCHA.

El Proyecto de LOMBARDI se aprobó mediante la Ley 6 de 1922 (4) y empezó a regir a los sesenta días de su sanción, tal como disponía el art. 380. La sanción de dicha ley se efectuó el 17 de noviembre de 1922 por el entonces Presidente de la República doctor Belisario PORRAS.

La vigencia efectiva del Código comenzó el 17 de enero de

de 1923 y desde esa fecha rige en Panamá.

En Panamá siempre se ha sostenido que el Código Penal de 1922 es una copia casi literal del Código Penal italiano de 1889 (5) y además se señala que éste último código se inspiró en el llamado "positivismo crítico" (6).

Sucede, no obstante, que ambas afirmaciones carecen de respaldo científico. Ni el Código patrio de 1922 es una copia casi literal del italiano de 1889 ni éste se inspiró en el positivismo crítico.

El Dr. LOMBARDI al efectuar el trabajo que se le había encomendado no tuvo como antecedente directo al Código italiano de 1889, sino que, por el contrario, utilizó el trabajo del Dr. José Vicente CONCHA.

Arribamos a esta conclusión ya que un detallado examen del Código Penal de 1922 nos demuestra que el articulado nuestro es casi igual al texto colombiano, siendo que nuestro Código contiene las principales modificaciones que CONCHA introdujo en su Proyecto al tomar del Código italiano la redacción de los diversos artículos.

Así, por ejemplo, bástenos indicar que nuestro Código, al igual que el Proyecto colombiano de CONCHA, distribuyen de la misma forma el contenido del Libro Primero, lo que también sucede en el Código italiano de 1889, pero aquellos se diferencian de éste en la nomenclatura de los diversos títulos que integran dicho Libro. Cosa igual sucede con el Libro Segundo de nuestro Código que es igual al Libro Segundo del Proyecto colombiano, pero ambos difieren en la nomenclatura que utilizan frente al Código italiano de 1889 (7).

No se crea, sin embargo, que nuestro Código es una fiel copia del Proyecto colombiano, pues en algunas pocas ocasiones

se aparta de éste: así, por ejemplo, omite la regulación de las faltas que en el Proyecto colombiano están incluidas en el Libro Tercero.

II. FUENTES DEL CODIGO PENAL DE 1922

A) EL CODIGO PENAL ITALIANO DE 1889

1. Antecedentes

Una gran cantidad de códigos penales rigieron en Italia antes de la unificación de ésta. A comienzos del siglo XIX rigen en varios Estados las leyes francesas y, en no pocos, las austriacas; en algunos otros, las codificaciones nativas. Señala - MANZINI que para el año 1846 Italia estaba dividida en 15 diferentes Estados, 7 de los cuales estaban sometidos a dominación extranjera (8).

A lo largo del mencionado siglo se suceden en algunos Estados de la península itálica, al igual que antes en otras latitudes, las reformas legislativas debidas, principalmente, a las obras de BECCARIA y los enciclopedistas. De los distintos códigos promulgados en Italia durante dicho período, dos textos punitivos merecen especial mención: el Código Penal sardo de 1859, que derogó el anterior de 1839, y el Código Penal toscano de 1853 (9).

El primero, sobre todo, porque fue el Código Penal que rigió en Italia, salvo en Toscana, cuando se produjo la unificación del reino y hasta la entrada en vigencia del Código de 1889; el segundo, toda vez que se cuenta a Giovanni CARMIGNANI entre los penalistas que participaron en su elaboración.

Lograda la unificación nacional, una de las necesidades más urgentes de la nueva Italia fue la de unificar su legislación

positiva.

Esta necesidad, sin embargo, no pudo ser concretada en forma inmediata. Diversos proyectos de Código se discutieron en el parlamento italiano de 1860 hasta que se aprueba el Código de 1889 (10). Con toda razón ha dicho SANTORO que fue "lenta la empresa de dar a la Italia unificada un código nuevo y sólo después de diversos proyectos, que no fueron sucesivos, se llega al Código Zanardelli de 1889" (11).

Luego de numerosos intentos, fallidos todos, por dotar a Italia de un Código Penal único Giuseppe ZANARDELLI, en su primer período como Ministro de Justicia y Gracia, presentó en 1883 su propio proyecto de Código que no pudo concluir cuando dejó el cargo antes aludido.

Este proyecto de 1883 constituye el antecedente del Código de 1889, toda vez que en 1887 el propio ZANARDELLI, designado nuevamente como Ministro de Justicia y Gracia, lo presentó a la Cámara de Diputados, aprovechando los excelentes estudios realizados sobre su proyecto, al que incorpora las modificaciones que se estimaron necesarias.

Aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de junio de 1888 y el Senado el 7 de noviembre siguiente, fue sancionado por el Rey HUMBERTO I por Ley de 22 de noviembre de 1888 y publicado mediante Decreto de 30 de junio de 1889, después de pasar a una "Comisión Real" encargada de efectuar las sugerencias necesarias al texto aprobado por el parlamento y después de proponer "las disposiciones transitorias y aquellas otras que resultaren necesarias para la actuación de dicho Código" (12), teniendo siempre presente las opiniones expresadas en el Parlamento.

En la elaboración de este Código fue decisiva la intervención de quien fuera dos veces Ministro de Justicia y Gracia, Giu-

seppe ZANARDELLI, por lo cual la historia ha vinculado su nombre con dicho texto (13). Esto, sin dejar de reconocer con PESSINA (14) que el Código es el resultado de una larga elaboración de proyectos sucesivos, obra de diversas comisiones parlamentarias y de comisiones integradas por diversos ministros y de notables criminalistas.

2. Contenido

Este Código constaba de 498 artículos y estaba dividido en tres libros, de la siguiente forma:

LIBRO PRIMERO denominado "De las infracciones y de las penas en general": "De la aplicación de la ley penal" (Título I); "De las penas" (Título II); "De los efectos y de la ejecución de las sentencias penales" (Título III); "De la imputabilidad y de las causas que la excluyen o la disminuyen" (Título IV); "De la tentativa" (Título V); "De la concurrencia de varias personas en una misma infracción" (Título VI); "Del concurso de delitos y penas" (Título VII); "De la reincidencia" (Título VIII); "Extinción de la acción penal y de las condenas penales" (Título IX); LIBRO SEGUNDO denominado "De los delitos en particular": "De los delitos contra la seguridad del Estado" (Título I); "De los delitos contra la libertad" (Título II); "De los delitos contra la administración pública" (Título III); "De los delitos contra la administración de justicia" (Título IV); "De los delitos contra el orden público" (Título V); "De los delitos contra la fe pública" (Título VI); "De los delitos contra la incolumidad pública" (Título VII); "De los delitos contra las buenas costumbres y el orden de las familias" (Título VIII); "De los delitos contra la persona" (Título IX); "De los delitos contra la propiedad" (Título X); LIBRO TERCERO denominado "De las faltas en particular": "De

las faltas concernientes al orden público" (Título I); "De las faltas concernientes a la incolumidad pública" (Título II); "De las faltas concernientes a la moralidad pública" (Título III); y, "De las faltas concernientes a la defensa pública de la propiedad" (Título IV).

Respecto de la ley penal este Código contiene una amplia regulación del ámbito de aplicación de la ley penal italiana en el tiempo, espacio y referente a las personas (15). De estas disposiciones merece destacarse la aceptación del principio de legalidad (16) y la regulación de la extradición (17).

Por otra parte, adopta la clasificación de las infracciones penales en delitos y faltas (18).

Para los delitos señala como penas aplicables las siguientes: ergastolo (que equivale a privación perpetua de la libertad), reclusión, prisión, confinamiento, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos; para las faltas señalaba como penas: - arresto, multa y suspensión en el ejercicio de una profesión o arte (19).

El término de duración de las penas de "reclusión" y "prisión" oscilaba entre tres días y veinticuatro años; se diferenciaban entre sí, en la ejecución de las mismas, siendo más rígida la primera que la segunda (20).

El "confinamiento" aparecía concebido como la obligación de residir no menos de un mes ni más de tres años en algún Municipio designado en la sentencia, a no menos de 60 kilómetros del Municipio donde el sujeto cometió el delito o del lugar en donde ofendido o penado tengan su residencia (21).

La multa oscilaba entre 10 y 10.000 liras. Se establecía que se pagaba en beneficio del erario público y en caso de impago podía convertirse en prisión de un día por cada diez liras o

fracción no pagada; en este caso, la prisión sustitutoria resultante no podía exceder de un año (22).

Por lo que respecta a la pena de "inhabilitación" se establecía que podía ser perpetua o temporal. La inhabilitación perpetua implicaba la pérdida de todos los derechos políticos, de la posibilidad de ocupar cargo público, de grados, títulos y condecoraciones, de los derechos lucrativos y honoríficos de las calidades antes indicadas, de los cargos de tutor y curador y de la capacidad de adquirir cualquier derecho, empleo, cargo, grado, título y distinción antes mencionados; la inhabilitación temporal abarcaba las mismas restricciones, pero por un período no menor de tres meses ni mayor de cinco años (23).

Respecto de las penas previstas para las faltas hay que señalar que el arresto no podía ser menor de un día ni mayor de dos años (24).

La pena de multa para las faltas se consideraba como una multa menor y oscilaba entre una y dos mil libras. (25).

La suspensión del ejercicio de una profesión o arte se extendía de tres días a dos años (26).

A propósito de penas de escasa gravedad el Código permitía la sustitución de ésta por la "reprensión judicial". En este caso la prisión o arresto que no excedía de un mes, la multa menor de 300 libras o el confinamiento menor de tres meses eran susceptibles de ser favorecidos con la medida en cuestión (27).

Respecto de las penas accesorias debemos señalar que la pena de privación perpetua de libertad o de reclusión por más de cinco años suponían para el sujeto la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos, pero si la reclusión era por más de tres años y menos de cinco, la inhabilitación sería por el mismo tiempo que la condena principal; cuando procedía la sustitu-

ción de la pena privativa de libertad perpetua por la de treinta años de reclusión, al sujeto se le imponía como pena accesoria la sujeción a la vigilancia de las autoridades (28).

Como si lo anterior no fuera poco, se disponían otras penas accesorias de notable incidencia en el sujeto condenado a pena privativa de libertad perpetua o de reclusión por más de cinco años, que prácticamente implicaban la muerte civil del condenado (29).

La comisión del delito con abuso del cargo público desempeñado, arte o profesión implicaban la inhabilitación o suspensión del sujeto en forma temporal (30).

Se establecía también la posibilidad de ordenar la configuración de los objetos o provechos provenientes del delito o que fueran utilizados en su comisión, así como el pago de las costas por parte del condenado (31).

Respecto de la imputabilidad y las causas que la excluyen o la disminuyen encontramos en este Código disposiciones sobre inimputabilidad (32), causas de justificación (33), culpabilidad (34) y alguna disposición relativa a atenuantes (35).

Sobre la inimputabilidad encontramos normas a propósito de la enfermedad mental, sea total o parcial (36), embriaguez (37), menor edad (38) y sordomudez (39).

Entre las causas que excluyen la responsabilidad penal el Código señala la legítima defensa (40), el estado de necesidad (41) y cumplimiento de la ley y obediencia jerárquica (42). Se re conoce una disminución de pena en caso de que haya algún exceso (43).

Se dispone que el desconocimiento o ignorancia de la ley no es excusa para su incumplimiento (44).

El Código sienta el principio de que nadie podía ser san-

cionado por la comisión de un delito si no había actuado con intención, salvo los casos en que la propia ley le atribuya dicho hecho al sujeto como consecuencia de su acción u omisión (45), lo que trae como consecuencia de que en el Libro Segundo se describan expresamente las figuras culposas que se deseaban sancionar y algunos casos de delitos agravados por el resultado (46).

Respecto de las formas imperfectas de ejecución, el Código italiano distingue entre tentativa y delito frustrado (47).

En cuanto a la pluralidad de sujetos, se distinguía entre ejecutores, cooperadores inmediatos, instigadores (48) y cómplices secundarios y cómplices necesarios, imponiéndose en ocasiones la misma pena para todos, excepto para los cómplices secundarios (49).

Se regulaba el concurso material, que podía presentar diversas formas (50), el concurso ideal (51) y se consagraba la figura del delito continuado (52).

En caso de reincidencia (53) se disponía que no procedía imponer al sujeto calificado de reincidente el mínimo de la pena establecida para la nueva infracción cometida (54).

Como causas que producían la extinción de la acción penal se señalaban la muerte del inculcado (55), la amnistía (56), la prescripción (57) y el perdón del ofendido (58); entre las causas de extinción de la pena se incluían la muerte del condenado (59), la amnistía (60), el indulto o gracia (61), el perdón del ofendido (62), la prescripción (63) y la rehabilitación (64).

Aunque el Código no regulaba la responsabilidad civil derivada del delito, disponía a este respecto que la extinción de la acción penal y de la pena no afectaban o perjudicaban la acción civil correspondiente (65).

Si tomamos en cuenta que la regulación de las distintas

especies delictivas se iniciaba con los delitos contra la seguridad del Estado, podemos colegir que el legislador italiano le concedió primacía a los bienes jurídicos estatales antes que a los bienes jurídicos individuales.

Esto queda confirmado cuando observamos que el delito de traición era sancionado con pena privativa de libertad perpetua, mientras que el homicidio simple y el homicidio agravado solo estaban incriminados con una pena privativa de libertad no mayor de 24 años. Solo excepcionalmente los homicidios especialmente agravados eran sancionados con privación perpetua de libertad (66).

3. Juicios sobre este Código.

De la pluma de JIMENEZ DE ASUA son dos frases elocuentes sobre este Código: "Trátase de uno de los Códigos mejores de Europa". "Técnicamente es una obra casi perfecta" (67).

Sin lugar a dudas este Código constituyó un gran adelanto para la ciencia penal y, no hay duda al respecto, se inspiró en los postulados de la llamada "Escuela Clásica". En este mismo sentido se manifiesta PIOLETTI cuando afirma que "representa una obra jurídica que no sólo realizó un grandioso progreso a todas las legislaciones hasta entonces vigente, sino con su válida estructura forma los fundamentos del código vigente" (68).

BETTIOL, no obstante, ha dicho que se trata de "un Código inspirado por una ideología liberal de derechas, vinculada al criterio de la precisión y de la seguridad jurídica, precisión por los conceptos y en consecuencia por la certeza del Derecho de la que deriva la seguridad de los asociados" (69).

El Código italiano de 1889 fue un primer modelo de precisión de conceptos en lo referente a la estructura del delito, pero olvidó por completo que la pena recae sobre el ser humano; no

hay en este Código mayores objetivos que la retribución por el mal causado.

Como principios básicos informadores de la codificación que comentamos la doctrina italiana señala, entre otros, los siguientes: el principio fundamental de la seguridad jurídica; el elemento esencial de la imputabilidad moral; el moderno concepto de tutela del ciudadano frente a los eventuales abusos de la autoridad; la individualización moderada y armónica de la pena por el juzgador; la abolición de la pena de muerte; el sistema de acumulación jurídica a propósito de la rigurosa regulación del concurso material y algunas otras más (70).

La pena estaba concebida, al igual que para los clásicos, como una medida "represiva, aflictiva y personal" (71) y las medidas de seguridad, que tanto propugnaban los positivistas, no tenían en él acogida. La peligrosidad, tal como recién se planteaba, no tuvo ninguna aceptación en este código, aunque luego fuera una de las nociones que justificaron la reforma penal encomendada a Enrico FERRI.

Si bien es cierto que este Código se fundamenta en las concepciones clásicas, hay que señalar que no fue totalmente insensible a los postulados positivistas que lo combatieron cuando todavía no era más que un proyecto.

En este sentido, cabe señalar la dura oposición de Cesare LOMBROSO al proyecto presentado por G. ZANARDELLI en 1887, que en Troppo presto (Demasiado pronto), publicado en 1888, hace "un alegato en defensa de sus ideas" positivistas (72).

SANTORO y GRISPIGNI, entre otros, señalan que el Código italiano de 1889 toma varios postulados de los positivistas, entre otros: el principio de la imputabilidad moral y prescinde del libre albedrío, incluye medidas administrativas para algunos inim

putables, elimina la pena de muerte, introduce el criterio de que las penas se establecen de acuerdo con la índole del delito cometido y regula la reincidencia, la reprensión judicial y la libertad condicional (73).

B) EL PROYECTO COLOMBIANO DE 1912 (PROYECTO CONCHA)

1. Antecedentes

Estando vigente en la República de Colombia el Código Penal de 1890 el Dr. José Vicente CONCHA, presentó en 1912 un proyecto de Código Penal para sustituir al entonces Código vigente.

Ya hemos visto anteriormente que el Código colombiano de 1890 no respondía a ninguna dirección científica en particular y que, en esencia, constituía la recopilación de diversos textos hasta esa fecha vigentes en aquel país, con el fin de reunir en un solo cuerpo de leyes las diversas disposiciones penales.

CONCHA en la exposición de motivos con que acompañó a su proyecto justifica la labor por él realizada, señalando que "La opinión unánime de los hombres peritos en la ciencia del Derecho, como la de Jueces y Magistrados, y aún la de quienes intervienen sólo accidentalmente en calidad de Jurados en la administración de justicia, pide con insistencia hace muchos años la expedición de un Código Penal para Colombia, concebido y ordenado conforme a los principios de la ciencia penal moderna, que en un siglo ha hecho mayores progresos que cualquier otro ramo de la legislación" (74).

"El Código Penal vigente en Colombia es, decía CONCHA, con algunas reformas no siempre felices, un traslado literal del que se adoptó para el Estado de Cundinamarca en 1858, que a su vez reprodujo, casi en su totalidad el de la Nueva Granada de 1837, tomado de la legislación española y de la francesa de prin

cipios del siglo XIX, época en que apenas se iniciaba la reforma penal que, de consiguiente, no había logrado aún introducir en los Códigos el desarrollo de los principios filosóficos y humanitarios que la ciencia penitenciaria tiene consagrados ya en los comienzos del siglo XX" (75).

La orientación que siguió CONCHA en su proyecto, a diferencia de la del Código de 1890, es bien definida. En efecto, el propio autor del proyecto comentado señalaba lo siguiente al respecto: "Adoptando la tesis más generalmente aceptada hoy de dividir las violaciones de la ley en delitos y contravenciones sin entrar en la distinción de crímenes, delitos y culpas de los antiguos Códigos, el proyecto sigue el plan de la ley italiana, como también el de la holandesa, y se divide en tres partes: la primera, que se refiere a los delitos y penas en general; la segunda, a las diferentes clases de delitos y penas de cada uno; la tercera, a las contravenciones" (76).

Para justificar la elección del Código italiano vigente en aquella época como fuente primaria de su proyecto, al que reconoce "sigue en muchas partes literalmente" CONCHA razona de la siguiente forma: "La razón principal que ha habido para adoptar preferentemente como modelo el Código de Italia, es la de que en él resume y sintetiza el trabajo de treinta años de los primeros juristas de aquel pueblo, de su Corte de Casación y de las de Apelaciones, de sus Academias, Facultades de Derecho, Colegios de Abogados, Cámaras Legislativas, y, por último, de Ministros tan eminentes como los Guardasellos, que presentaron los diversos proyectos e hicieron la exposición de motivos de cada uno de ellos. Por otra parte, en la obra de la codificación italiana se tuvieron siempre presente los últimos códigos promulgados en Europa, para discutir sus innovaciones, y por esta causa

puede concluirse que en la ley penal de Italia se contienen, analizadas, y si así pudiera decirse, depurados, todas las grandes reformas que consagra la ciencia penal contemporánea" (77).

El proyecto fue presentado por el propio CONCHA, Senador de la República por el Departamento de Santander, al Senado colombiano con fecha de 8 de agosto de 1912. Estaba dividido en tres libros y constaba de 416 artículos.

Su estructura era la siguiente: LIBRO PRIMERO denominado "De la ley penal en general": "De la vigencia y aplicación de la ley penal" (Título I); "De las penas" (Título II); "De la ejecución de las penas y de sus consecuencias" (Título III); "De la responsabilidad penal y de las causas de justificación, de excusa y de atenuación" (Título IV); "De las tentativas y del delito frustrado" (Título V); "De la cooperación de varios individuos en la comisión de un mismo hecho punible" (Título VI); "De la concurrencia de hechos punibles ejecutados por un mismo individuo" (Título VII); "De la reincidencia" (Título VIII); y, "De la extinción de la acción y de la condena penales" (Título IX); LIBRO SEGUNDO denominado "De las diferentes especies de delitos": "De los delitos contra la patria" (Título I); "De los delitos contra los poderes de la nación" (Título II); "De los delitos contra las naciones extranjeras y los jefes y representantes de ellas" (Título III); "Disposiciones comunes a los títulos precedentes" (Título IV); "De los delitos contra la libertad" (Título V); "De los delitos contra la cosa pública" (Título VI); "De los delitos contra la administración de justicia" (Título VII); "De los delitos contra el orden público" (Título VIII); "Delitos contra la fe pública" (Título IX); "Delitos contra la seguridad pública" (Título X); "De los delitos contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia" (Título XI); "De los delitos contra las personas" -

(Título XII); "De los delitos contra la propiedad" (Título XIII); LIBRO TERCERO denominado "De las contravenciones": "De las contravenciones referentes al orden público" (Título I); "De las contravenciones respecto a la seguridad pública" (Título II); "De las contravenciones referentes a la moralidad pública" (Título III); "De las contravenciones referentes a la propiedad" (Título IV); y, "De la publicación y vigencia del Código Penal y de la autoridad encargada de resolver las dudas que se presenten en su aplicación" (Título V).

2. Contenido

Refiriéndonos únicamente a las cuestiones básicas o fundamentales podemos señalar que en este Proyecto se prescindía de toda clase de definiciones; sin definir el concepto de delito, comenzaba con la declaración de la irretroactividad de la ley penal (78). La doctrina panameña, no obstante, interpreta en el art. 1º la declaración del principio de legalidad (79).

El proyecto reconocía expresamente la retroactividad de la ley penal favorable al reo (80) y establecía una amplia regulación del ámbito de aplicación del mismo al consagrar el principio de la ley penal y sus excepciones(81).

La regulación de la extradición se dejaba a lo dispuesto en los tratados internacionales y, solo subsidiariamente se aplicaba al respecto lo dispuesto en el propio proyecto (82).

Se acogía la distinción entre penas principales y penas accesorias (83). Como penas principales se incluían: la reclusión, la prisión, el arresto, el confinamiento y la multa; como penas accesorias, la interdicción, la sujeción a la vigilancia de las autoridades y la confiscación de ciertos objetos.

En la concepción de José Vicente CONCHA la pena "es la

salvaguarda del derecho y medida necesaria de defensa, a cuyas - leyes sirve de sanción para asegurar su obediencia y cumplimiento, a la vez que restablece el orden turbado por el delito" (84).

Esto no significa, sin embargo, que este autor conciba la pena con un fin exclusivamente retributivo, es decir, que se sanciones porque se delinquirió sin perseguir ninguna finalidad ulterior, ya que luego señala que la pena "tiende por medio de la expiación a la enmienda del delincuente, y a devolverlo sano y útil al medio social a que pertenecía" (85), puesto que la pena además de "aflictiva y ejemplar" debía ser "reformadora y correc cional" (86).

Para lograr el fin antes indicado se establecía un siste ma de cumplimiento de las diversas penas privativas de libertad que "se inspira -decía CONCHA- en el denominado irlandés, de William Crofton, que combina la prisión celular con otras medidas encaminadas todas al mejoramiento del individuo sometido a la pe na, y a procurar que vuelva a ocupar en la sociedad la posición que antes tenía" (87), ya que según la clase y duración de las penas privativas de libertad se establecía un determinado modo pa ra su cumplimiento (88).

El Proyecto facultaba al juzgador para suspender la ejecu ción del fallo si se trataba de penas de arresto, prisión o confi namiento que no excedieran de cuatro meses o de 50 pesos de multa "si el condenado no había incurrido nunca antes en pena y se de muestra que observó siempre conducta intachable" (89).

Como penas accesorias de la reclusión fija por treinta años se señalaban la interdicción perpetua de las funciones pú- blicas, la sujeción a la vigilancia de las autoridades y la pri- vación de la patria potestad y de la potestad marital (90).

Por lo que respecta a la responsabilidad penal CONCHA sos

tiene que "basándose en la teoría espiritualista del libre albedrío, única que puede servir de fundamento racional a la pena - puesto que la ley no puede ~~propó~~ponerse o imponerse sino a seres - que tengan capacidad de obrar libremente, conforme a su voluntad- se resuelven equitativamente en cuanto lo permiten los medios humanos y los datos actuales de la ciencia, las dificultades que se presentan a la administración de justicia cuando se va a juzgar violaciones de la ley que, por las condiciones especiales de los delincuentes, no se pueden someter a las sanciones ordinarias - sin desconocer la equidad" (91).

El proyecto consagraba el principio de que la ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento de ésta (92) y para poder imponer pena alguna exigía "voluntad determinada de ejecutar" el hecho criminal, "a menos que la ley disponga expresamente otra - cosa, o que haga imputable el hecho u omisión a su autor como responsable del acto u omisión de los cuales resultó la infracción" (93) (94).

Se incluyeron en el libro primero del proyecto las causas de justificación tales como la legítima defensa (95), estado de necesidad (96), cumplimiento de la ley (97) y obediencia jerárquica (98), "puesto que se trata del ejercicio de un derecho, no hay lugar a la aplicación de pena, porque no ha existido en realidad infracción" (99). "Pero si el individuo, aún hallándose en una situación que le permite ejercer un legítimo derecho, excede sus justos límites, sólo hay lugar a una atenuación de la pena" (100).

Entre las causas de inimputabilidad se mencionaban la enfermedad mental (101), la embriaguez (102), la menor edad (103) y la sordomudez (104). Respecto de la enfermedad mental, se distinguía entre personas imputables y semiimputables (105).

A propósito de la embriaguez el Proyecto consagraba distintas categorías de la misma: accidental o casual, voluntaria, habitual y preordenada (106). Para la menor edad se establecía la presunción de inimputabilidad de todos los menores de 12 años y la inimputabilidad de los mayores de 12 pero menores de 14 años se dejaba a la prueba del discernimiento (107). Para la sordomudez se establecía una regulación igual que la señalada para la menor edad (108).

Salvo el haber ejecutado el hecho delictivo en un arrebatado de ira o de resentimiento y las atenuantes genéricas (109), poco disponía el proyecto sobre circunstancias atenuantes; por otra parte, cabe señalar que el proyecto no establecía circunstancias agravantes genéricas.

El Proyecto de CONCHA distinguía, a propósito de las formas de ejecución, entre tentativa y delito frustrado (110) y señalaba diversas penas en ambos casos, ya que para CONCHA "la distinción de responsabilidad y la consiguiente de penas en los casos de tentativa, delito frustrado y consumado, es hoy, así puede decirse, un dogma del Derecho penal, al que han precedido los más profundos y sagaces estudios de psicología, suficientes por sí solo para dar victoria a las escuelas espiritualistas, que levantan la fábrica de la represión sobre la base del libre albedrío. A tal respecto no puede hacerse otra cosa que reproducir textualmente el modelo fruto de aquellos estudios" (111).

Por lo que respecta a la participación criminal se diferenciaba entre cooperadores inmediatos (112), instigadores (113), cómplices secundarios (114) y cómplices necesarios (115).

En cuanto al concurso de delitos, el proyecto regulaba ampliamente el concurso material, atendiendo a las posibles clases de penas que se establecían para los delitos (116); señalaba

la pena del delito más grave en caso de concurso ideal (117) y reconocía la figura del delito continuado (118).

Una amplia regulación de la reincidencia (119) contenía el proyecto colombiano, así como los efectos que de tal calidad se producían y los supuestos en que no podía apreciarse la calidad de reincidente (120).

Como causas de extinción de la acción penal y de la pena figuraban la muerte (121), la amnistía (122), el indulto (123) y la prescripción (124). En aquellos delitos que exigían acusación de la parte ofendida, el desistimiento hacía extinguir la acción penal y, en algunos casos, la condena (125).

La rehabilitación hacía cesar los efectos de la interdicción y de las penas accesorias (126).

Nada disponía el proyecto de José Vicente CONCHA sobre la responsabilidad civil derivada del delito, salvo que ni la extinción de la acción penal afectaba la acción civil del lesionado (127) ni la extinción de la pena hacía cesar los efectos de la condena civil o del pago de las costas procesales (128).

3. Principales diferencias con el Código italiano de 1889

La primera modificación que se hace del texto italiano en el proyecto colombiano radica en la denominación de los libros que componen éste último y, también, en la distinta denominación de los títulos que integran el libro primero y algunos de los del libro segundo.

En el Código italiano la clasificación de las penas se hacía distinguiendo entre penas para delitos y faltas, mientras que en el proyecto colombiano se señalaban sólo penas principales y penas accesorias (129).

El Código italiano consagraba la pena privativa de liber

tad perpetua, que no aparecía en el proyecto de CONCHA (130).

La suspensión de la ejecución del fallo condenatorio aparecía regulada con mayor amplitud en el Código italiano respecto del texto colombiano (131).

En la regulación de la pena de inhabilitación CONCHA eliminó la interdicción.

En la regulación de las consecuencias de las diferentes penas el proyecto de CONCHA suprime la privación del derecho del penado a efectuar testamento y la anulación del testamento anterior, que si figuraban en el Código italiano (132).

Respecto de la inimputabilidad el Código italiano usa la expresión "enfermedad mental" mientras que el proyecto colombiano emplea una terminología algo confusa que, aunque alude a ella, no la menciona correctamente (133).

La menor edad en el texto italiano se señalaba en nueve años, mientras que en el proyecto colombiano se señalaba en doce años (134).

El Código italiano regulaba expresamente la figura del ejecutor del hecho delictivo, cosa que no ocurre en el proyecto CONCHA. (135).

Respecto de la instigación en el Código italiano se establecían diversas penas de acuerdo con las motivaciones del instigado, lo que no sucedía en el texto colombiano (136).

En cuanto al libro segundo de ambos textos, es preciso señalar la diversa regulación de los delitos contra el Estado, tanto en el aspecto formal como material (137). Desde el punto de vista material, dicha diferencia se debía fundamentalmente a las dispares formas de gobierno existentes en ambos países (138).

Si bien es menester señalar que en ambos textos se regulaban los mismos delitos y faltas, con una secuencia idéntica en

ambos textos, es frecuente que encontremos que CONCHA al realizar la descripción de las diversas figuras típicas, haya modificado la redacción de los artículos respectivos aunque sin modificar el contenido material de los mismos.

Además, cabe anotar que la terminología utilizada para denominar los títulos del libro segundo es uniforme en el Código italiano, lo cual no sucede en el proyecto colombiano que en varios títulos ha dejado de lado el sistema utilizado (139).

Por último, debemos señalar que en el Proyecto de José Vicente CONCHA se establecen penas distintas para las diversas infracciones penales que difieren de las contenidas en el Código italiano, toda vez que aquél no consagra las mismas penas que éste y, por ende, se funda en una diversa escala valorativa (140).

III. EL CODIGO PENAL DE 1922

A) INTRODUCCION

Sin lugar a dudas nos atrevemos a afirmar que el Código Penal panameño de 1922, hoy vigente, sigue muy de cerca al Proyecto de Código Penal elaborado en 1912 por el Doctor José Vicente CONCHA para la República de Colombia y en no pocos casos efectúa una copia literal de diversos artículos.

Este hecho nos obliga a reconocer la orientación clásica del Código de 1922, toda vez que el Código italiano de 1889, orientado según los postulados de la llamada Escuela Clásica, es el modelo directo del Proyecto colombiano como bien lo reconoce el propio CONCHA.

Una simple verificación de la estructura y contenido de estos textos punitivos respaldan nuestra afirmación, aunque haya que señalar que el Código panameño eliminó la regulación de las

"faltas" o "contravenciones" que en nuestro país se regulan en el Código Administrativo (141).

La distribución de los título tanto en el Código panameño como en el Proyecto colombiano es idéntica, llegando nuestro Código, incluso, en ocasiones a transcribir las mismas modificaciones, no siempre felices, que CONCHA le introdujo a su Proyecto cuando se inspiró en el texto del Código italiano de 1889.

En algunos casos el Código panameño no se limita a efectuar una copia literal del Proyecto colombiano, sino que nuestro codificador juzgó necesario introducir algunas modificaciones - terminológicas o de diversa índole que para nada afectan el contenido de la regulación que le sirvió de modelo.

Varios artículos del texto colombiano fueron suprimidos al momento de redactarse nuestro Código, ya que indudablemente el autor del proyecto que luego se convirtió en nuestro Código estimó necesaria tal medida. Así, entre otras, algunas disposiciones contenidas en el Proyecto colombiano sobre la "ejecución penal".

El Código de 1922 consta de 383 artículos. Del art. 380 en adelante se ocupa de la entrada en vigencia del mismo y contiene dos disposiciones acerca de la "reglamentación de las colonias penales y del cumplimiento de las penas" en el título XIV con la denominación ya antes señalada.

Este Código consta de dos libros y su estructura es la siguiente: LIBRO PRIMERO denominado "De la ley penal en general": "De la vigencia y aplicación de la Ley Penal" (Título I); "De las penas" (Título II); "De la ejecución de las penas y de sus consecuencias" (Título III); "De la responsabilidad penal y de las causas de justificación, de excusa y de atenuación" (Título IV); "De la tentativa y del delito frustrado" (Título V); "De la cooperación de varios individuos en la comisión de un mismo he-

cho punible" (Título VI); "De la concurrencia de hechos punibles ejecutados por un mismo individuo" (Título VII); "De la reincidencia" (Título VIII); "De la extinción de la acción y de la condena penales" (Título IX); LIBRO SEGUNDO denominado "De las diferentes especies de delitos": "De los delitos contra la patria" (Título I); "De los delitos contra los poderes de la nación" (Título II); "De los delitos contra las naciones extranjeras y los jefes y representantes de ellas" (Título III); "Disposiciones comunes a los títulos anteriores" (Título IV); "De los delitos contra la libertad" (Título V); "De los delitos contra la cosa pública" (Título VI); "De los delitos contra la administración de justicia" (Título VII); "De los delitos contra el orden público" (Título VIII); "Delitos contra la fe pública" (Título IX); "Delitos contra la seguridad pública" (Título X); "De los delitos contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia" (Título XI); "De los delitos contra la persona" (Título XII); "De los delitos contra la propiedad" (Título XIII); "De la publicación y vigencia del Código Penal y de la Reglamentación de Colonias Penales y del cumplimiento de las penas" (Título XIV).

B) CONTENIDO

El Código aunque no define el delito, consagra expresamente el principio de legalidad y establece que tanto los delitos como las faltas constituyen infracciones de la ley penal. La regulación de las faltas, sin embargo, se deja al Código Administrativo(142).

Se declara la territorialidad de la ley penal panameña y se establecen las excepciones a este principio (143).

Expresamente quedan excluidos del ámbito de aplicación del Código los delitos de contrabando, defraudación fiscal y elec

torales (144), que son de competencia de autoridades públicas distintas de los miembros de Organo Judicial (145).

El Código contenía, en su versión original, una amplia regulación de la extradición, hoy derogada (146).

Por lo que respecta a las penas, éstas se dividen en penas principales y penas accesorias (147). Como penas principales señala las siguientes: reclusión, prisión, arresto, confinamiento (148), multa e interdicción del ejercicio de derechos o de funciones públicas; como accesorias figuran la interdicción del ejercicio de derechos o de funciones públicas, o del de ciertas profesiones, artes u oficios, la sujeción a la vigilancia de las autoridades y el comiso.

Las penas privativas de libertad tienen una diversa duración, según la gravedad que ellas impliquen: si bien el mínimo es de un día (149) para todas el máximo llega a dieciocho meses para el arresto, dieciocho años en la prisión y veinte años para la reclusión (150).

Se establece la posibilidad de conceder al condenado la libertad condicional, que depende entre otros factores, del término de duración de la condena efectivamente cumplida según la clase de pena impuesta (151).

Para cada pena privativa de libertad se establece un régimen de trabajo que, en todo caso, debe cumplirse con separación absoluta entre los sometidos a diversas clases de pena (152).

La cuantía de la multa oscilaba entre uno y mil balboas, que de no cancelarse en el plazo señalado en el Código se podía sustituir por "arresto" (153).

A propósito de la interdicción del ejercicio de derechos o funciones públicas, se establece que esta pena puede ser perpetua o temporal (154).

Existe la llamada "pena moral" o "reprensión judicial" en virtud de la cual se permite que los que delinquen por primera vez y no hayan sido condenados a más de cuatro meses de prisión, arresto o confinamiento o a menos de 50 balboas de multa sean favorecidos con la suspensión de su condena, en cuyo caso el tribunal les amonestará. Para la concesión de este beneficio, negado a los condenados a la pena de reclusión, se requiere que el sujeto haya observado buena conducta y que asista a la sesión donde el Tribunal le comunique tal decisión, que en todo caso debe adoptar el tribunal de primera instancia (155).

La condena a reclusión fija por veinte años implica la interdicción permanente del ejercicio de funciones públicas y lleva aparejada también la sujeción a la vigilancia de las autoridades (156).

Entre las causas de justificación consagradas en el Código figuran la legítima defensa (157), el estado de necesidad - (158), el cumplimiento de la ley (159) y la obediencia jerárquica (160). Además, respecto a las dos primeras, se consagra la figura del "exceso" (161).

Respecto a las causas de inimputabilidad, aunque el Código no use esta terminología, se regulan la enfermedad mental, la embriaguez, la menor edad y la sordomudez.

Por lo que respecta a la enfermedad mental, la misma puede ser total o parcial (162), con lo cual se puede exonerar de responsabilidad al sujeto o atenuar significativamente su pena.

La embriaguez puede ser casual, voluntaria, habitual y preordenada, estableciéndose que sólo la primera, si es total, hace al sujeto irresponsable (163).

El Código contiene una amplia regulación de la menor edad. Declara exento de responsabilidad al menor de doce años y

señala la prueba del discernimiento para los mayores de 12 y menores de 14 años (164), La sordomudez se rige por reglas semejantes a la menor edad (165).

La ignorancia de la ley por parte del sujeto no es excusa para que éste desconozca la propia ley (166).

La responsabilidad criminal la fundamenta el Código, para imponer pena por hechos u omisiones que la ley define como criminosos, cuando se demuestra que en el agente hubo voluntad determinada de ejecutar dicho hecho, salvo que la propia ley disponga otra cosa o considere al sujeto responsable del hecho u omisión de los cuales resultó la infracción; cuando se trata de "contravenciones" el Código expresa que hay responsabilidad por el acto u omisión, aunque no se llegue a demostrar que el sujeto actuó con voluntad deliberada de violar la ley penal (167).

Cómo únicas atenuantes reconoce incurrir en violación de la ley penal en un momento de arrebató o de resentimiento causados por un ultraje o provocación injustos y la facultad concedida a los tribunales de apreciar atenuantes genéricas (168). El Código carece de agravantes comunes.

Consagra el Código la tentativa y el desistimiento voluntario de la consumación (169), así como también el delito frustrado (170).

Por lo que se refiere al concurso de personas el Código consagra las figuras de cooperadores inmediatos (171) y cómplices necesarios (172), a los que impone la misma pena que la prevista para el delito en que participan; sanciona a los instigadores, pero con menor pena que aquellos (173) y a los cómplices secundarios con una menor que a los instigadores (174).

El concurso de delitos es objeto de una particular regulación. En especial el concurso material en vista de las diver-

sas penas privativas de libertad que pueden concurrir cuando son varios los delitos cometidos; para este concurso el Código acoge el sistema de acumulación jurídica (175).

Con la pena prevista para el delito más grave se sanciona el concurso ideal (176). y con un aumento de la sexta parte a la mitad de la pena prevista para el delito cometido la figura del delito continuado (177).

Se establece la figura de reincidencia, sus efectos y - los casos en que no procede apreciar la calidad de reincidente (178) que, por otra parte, debe ser investigada en todo juicio criminal (179).

Como causas de extinción tanto de la acción penal como de la pena figuran la muerte del sujeto (180), la amnistía y el indulto (181) y la prescripción (182).

También aparece como causa de extinción de la acción penal el desistimiento de la parte agraviada en los delitos que requieren "acusación particular" que, excepcionalmente, en ocasiones hace cesar la ejecución de la pena cuando expresamente así lo dispone la ley (183). La rehabilitación también figura como causa de extinción de las penas accesorias (184).

Sobre la responsabilidad civil, que el Código Penal no regula, se dispone que la misma no se afecta por la extinción de la acción penal, salvo que el perjudicado haya desistido de la acusación formulada "sin hacer reservas a este respecto" (185). De la misma forma, la extinción de la pena no afecta la condena civil en lo referente a indemnización de perjuicios y costas procesales, salvo que sea por causa de un delito político en cuyo caso el Tesoro no puede exigir el pago de las costas (186).

En cuanto a las diferentes especies de delitos incluidas en el Libro II del Código, es preciso anotar que el Código

panameño en muchas ocasiones efectúa una copia literal de los - distintos delitos consagrados en el Proyecto colombiano de 1912, pero en no pocas otras ocasiones introduce algunas modificaciones en la formulación de la conducta y otros elementos del tipo que se desea incriminar, pero sin modificar los respectivos verbos rectores que permanecen iguales.

Así sucede, por ejemplo, en el art. 98 del Código Penal panameño que señala lo siguiente: "El responsable de un acto que tenga por objeto someter la República en todo o en parte a un Poder extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad, será castigado con veinte años de reclusión"; en el Proyecto colombiano la disposición equivalente es también el art. 98 que dice así: "El responsable de un acto que tenga por objeto someter la República en todo o en parte a un poder extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad, será castigado con treinta años de reclusión". En los artículos 316 del Código panameño y 314 del Proyecto colombiano sobre infanticidio encontramos ligeras variantes que en nada alteran el sentido de dichas normas, - que dicen así: "Cuando el delito previsto en el artículo 311 se cometa en la persona de un niño no inscrito todavía en el Registro Civil, y en los cinco primeros días después de nacido para salvar el honor del culpable o el de su mujer, su madre, su descendiente, su hija adoptiva o su hermana, la pena será de prisión por uno a seis años" (C.P. panameño) y "Cuando el delito previsto en el artículo 305 se comete en la persona de un niño no inscrito todavía en los registros parroquiales o notariales, y en los cinco primeros días después de nacido, para salvar el honor del culpable o el de su mujer, su madre, su descendiente, su hija adoptiva o su hermana, la pena será de prisión por dos a ocho años" (Proyecto colombiano).

El Código omite la regulación de los delitos de contagio venéreo (187), sobre drogas (188), cheques sin provisión de fondos (189) y algunos relativos a la seguridad pública (190). Los delitos contra el honor fueron sustraídos del Código en 1941 y desde entonces han estado regulados en leyes especiales (191).

En la actualidad el Libro II del Código difiere notablemente con respecto a su versión de 1922, puesto que hay diversos títulos que han sido sometidos a completas reformas, siendo característica de dichas reformas modificar exclusivamente las penas impuestas para los delitos. Así ha ocurrido, entre otros títulos, con los delitos contra la seguridad pública, contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia y contra la propiedad. Otras figuras aisladas, tales como el peculado y las lesiones han sido modificadas en cuanto a la pena, en forma radical.

Un detenido repaso a los fallos judiciales nos muestra que nuestros tribunales dedican casi exclusiva atención a un grupo pequeño de delitos, siendo cosa fuera de lo común encontrar la aplicación de una gran cantidad de delitos previstos en el Código.

Entre los delitos que más aplicación han tenido por parte de nuestros tribunales podemos mencionar el homicidio y sus diversas modalidades (agravados, concausal, preterintencional y culposos) (192), las lesiones, sean dolosas o culposas (193), el hurto, sea la figura básica o las agravadas (194), el robo (195), la estafa (196), la apropiación indebida (197), la violación carnal (198), la seducción o estupro (199), la falsedad en documento, público o privado (200) y el peculado o malversación (201). Por el contrario, el aborto (202) tiene una notable incidencia en la realidad panameña y casi no llega a los tribunales de jus-

ticia (203).

C) PRINCIPALES SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL PROYECTO
COLOMBIANO DE 1912

1. Principales semejanzas

Las principales semejanzas entre ambos textos comienzan ya con la división y nomenclatura de los libros I y II de ambos, que tienen la misma denominación, estructura y casi idéntico contenido. Además, en los dos textos el Libro I está dividido en títulos, más no en capítulos. En el Libro II del Código Panameño y del Proyecto colombiano los títulos se dividen en capítulos a partir del Título V sobre "delitos contra la libertad".

Por lo que respecta a cuestiones de carácter general, debemos señalar que en ambos textos hay una exactitud en la regulación de diversos aspectos, siendo la numeración de los artículos la que varía.

En este sentido, hay completa identidad en la regulación de la legítima defensa (204), estado de necesidad (205), cumplimiento de la ley (206), obediencia jerárquica (207), enfermedad mental (208), menor edad (209), sordomudez (210), atenuantes comunes (211), tentativa y desistimiento de la consumación (212), frustración (213), cooperadores inmediatos (214), instigación (215), cómplices secundarios (216), cómplices necesarios (217), concurso ideal (218) y delito continuado (219) entre las cuestiones más importantes y trascendentales.

Aunque en ninguno de los dos textos se menciona expresamente las nociones de dolo o culpa, la fórmula que en ellos se utiliza para referirse a dichos conceptos es igual (220). Carecen ambos textos de una regulación de la autoría y no tienen un catálogo de agravantes.

En lo que respecta al Libro II de ambos textos la descripción de casi todas las figuras típicas del Código panameño coincide con la existente en el Proyecto colombiano de 1912. Incluso ambos comienzan la parte especial con el art. 98 y hasta el art. 153, que trata del peculado (malversación), la correspondencia es exacta.

A partir de dicho artículo la correspondencia se altera, toda vez que en el Código panameño se introducen varios artículos como más adelante señalaremos.

Luego, continúa en ambos el delito de concusión manteniéndose la exactitud a lo largo de los artículos subsiguientes, aunque en ocasiones se interrumpe la secuencia cuando el Código nuestro elimina uno que otro artículo del Proyecto colombiano o añade uno que otro artículo totalmente nuevo.

La correspondencia de la parte especial es tan acusada que, incluso, el Código nuestro copia casi siempre las mismas penas que existían en el Proyecto colombiano de 1912.

Podríamos señalar que esta identidad entre ambos textos se altera cuando la pena en el Proyecto colombiano es de treinta años, toda vez que el máximo previsto en el Código panameño es de veinte años de reclusión.

En ocasiones encontraremos una ligera modificación en la estructura de la conducta típica, la cual, no obstante, no altera lo antes dicho. En efecto, en el Proyecto colombiano se encuentran referencias a "Colombia" y a los "colombianos" que en el Código nuestro se sustituyen por "Panamá" y "panameños". Esto, sin embargo, es una modificación que no afecta a la esencia de las distintas normas.

Por otra parte, cabe señalar que, el Proyecto colombiano impone la pena de multa en pesos, mientras que lógicamente el Cód

digo patrio utilizará "balboas". Además, en ocasiones el Código nuestro aumenta al doble la pena prevista en el Proyecto colombiano o la reduce a la mitad en algunos delitos de escasa gravedad.

Estimamos que estas modificaciones, de carácter formal no afectan nuestra anterior afirmación en el sentido de que en ambos textos el Libro II es prácticamente igual.

2. Principales diferencias

Pocas son las diferencias sustanciales entre el Código panameño y el Proyecto colombiano que le sirvió de modelo.

En numerosos artículos de nuestro Código, fundamentalmente en el Libro I, encontraremos unas ligeras modificaciones gramaticales respecto del Proyecto de José Vicente CONCHA, al que nuestro Código casi que copia literalmente.

La principal diferencia entre ambos radica en que el Código panameño señala que las faltas quedan reguladas en el Código Administrativo (221), mientras que el Proyecto colombiano las regula en el Libro III que trata de las "contravenciones".

Por lo que respecta al Libro I de ambos textos, es preciso señalar que en el Código panameño se señala la pena de interdicción como una de las penas principales (222), cosa que no sucede en el Proyecto colombiano.

En nuestro Código aparece el comiso como pena accesoria (223), pero el Proyecto colombiano alude a la confiscación de ciertos objetos.

El Proyecto colombiano contiene una detallada regulación de los diversos períodos de aislamiento a que están sometidos los privados de libertad (224), cosa que no regula el Código panameño.

Para el Proyecto colombiano el arresto sustitutorio en caso de impago de la pena de multa podía ser de hasta un año - (225), mientras que en nuestro Código podía ser de hasta 2 años.

Es usual que en el Proyecto colombiano se aluda a la autoridad judicial refiriéndose concretamente a la figura del "juez" (226), mientras que en el Código panameño encontramos siempre referencia al "tribunal".

Las diversas menciones que se hacen en el Proyecto colombiano al "Gobierno" (227) se sustituyen en nuestro Código por - "Poder Ejecutivo".

Nuestro Código consagra tanto la amnistía como el indulto para delitos políticos (228), lo que no sucede en el Proyecto colombiano.

En vista del diverso máximo previsto para la pena privativa de libertad que en ambos textos existe, los términos para la prescripción de la acción y de la pena difieren notablemente. (229).

Por lo que se refiere al Libro II, pocas son las diferencias de importancia existentes en ambos textos.

Así, por ejemplo, cabe señalar que los cinco primeros títulos de este Libro son prácticamente igual en ambos textos, con iguales números en los artículos respectivos, pero con diferencias en cuanto a la denominación del país respectivo y a sus correspondientes nacionales. En ocasiones, la única diferencia apreciable es la moneda que se utiliza o el hecho de que nuestro Código a veces duplica la pena del Proyecto colombiano o, incluso, la reduce a la mitad.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto debemos anotar que en casi todos los casos la figura típica descrita es - exactamente igual, si bien nuestro Código a veces modifica el -

término de duración de la pena privativa de libertad, pero nunca la cuantía de la multa que siempre permanece igual.

La única modificación sustancial en el Libro II de nuestro Código respecto al Proyecto de José Vicente CONCHA radica en el Título VI sobre "delitos contra la cosa pública" puesto que nuestro Código incluyó en el capítulo del peculado diversos artículos que no figuraban en el Proyecto colombiano. Así, entre otros, los delitos de peculado (malversación) culposo (230), peculado por uso indebido (231), peculado por aplicación pública diferente de la prevista (232) y los delitos de peculado por denegación de pagos y retención indebida (233).

Fuera de lo antes señalado es tan exacta la correspondencia entre ambos textos que incluso en nuestro Código se contienen las mismas referencias equivocadas que aparecen en el Proyecto colombiano cuando éste efectúa una remisión a un título - que no concuerda con la materia aludida (234).

D) JUICIOS SOBRE ESTE CODIGO

Muy poco, casi nada, es lo que se ha escrito en la República de Panamá sobre nuestra legislación penal, sea la derogada o la vigente.

Cuando en 1977 se publica la obra de los profesores MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ (1ª edición, 1977; 2ª edición, 1980), sólo se habían formulado algunas consideraciones de carácter general sobre el Código Penal de 1922, todavía hoy vigente.

Para esa fecha sólo habían los trabajos de AROSEMENA GUARDIA y ECHEVERS publicados en el Anuario de Derecho que editaba la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y un estudio de RICORD sobre nuestra legislación, aunque desde otra perspectiva (235).

Con toda razón afirmaba en 1962 AROSEMENA GUARDIA "sin -

temor a equívocos, podemos afirmar que no existe aún en el Istmo una tradición penal auténticamente panameña. Si examinamos los tres aspectos fundamentales en que se exterioriza nuestra ciencias, el doctrinal, legislativo y jurisprudencial, advertiremos sin mayor esfuerzo que -lamentablemente- la realidad panameña en el campo penal no ofrece al estudioso conquistas genuinamente nativas de verdadera trascendencia científica" (236).

"Atenúa, que no justifica la situación -continúa señalando AROSEMENA GUARDIA- antes apuntada, la circunstancia histórica de la relativamente corta vida independiente del Istmo: 58 años. La ausencia de fuentes fidedignas sobre el pasado legislativo del Istmo de Panamá, impide reconstruir en propiedad el panorama jurídico-penal que rigió antaño" (237).

Fuera de Panamá tanto JIMENEZ DE ASUA como QUINTANO RIPO LLES se han ocupado, siquiera brevemente, de nuestro Código vigente. Lamentablemente ambos autores han expresado juicios desfavorables contra el mismo, aunque, podríamos señalar, tanto uno - como otro han sido injustos con dicho Código.

JIMENEZ DE ASUA ha dicho sobre él que "Trátase de un Código de viejo espíritu en el que las penas se mantienen clasificadas como en los de la antigua fecha, sin que figuren otras medidas que el manicomio para los enfermos mentales y el "encerramiento" de los menores en una "casa de corrección o educación", que ya se hallaban en el Código español de 1870. Hasta el castigo atenuado de los semirresponsables, se conserva en Panamá. También es censurable el tremendo casuismo en la aplicación de las penas" (238).

"La redacción de la legítima defensa -continúa diciendo- no puede ser más expuesta a equívocos y la enclavadura en la Parte especial de la defensa de los bienes, como disposición común

a los delitos contra las personas (art. 323), revela un arcaísmo incompatible con la hora presente" (239).

Sin embargo, el propio JIMENEZ DE ASUA cuando estudió el Derecho penal colombiano comenta el Proyecto de 1912 elaborado por José Vicente CONCHA y sobre este Proyecto considera que: "La obra fuertemente inspirada en el entonces vigente Código italiano, era de técnica estimable, pero de orientación nada audaz" (240).

Parece ser, en consecuencia, que JIMENEZ DE ASUA no llegó a percatarse que todos los aspectos que el criticaba en nuestro Código procedían directamente del Proyecto colombiano de 1912, que tan "estimable" consideraba.

Además, debemos recordar que el Código italiano de 1889 fue el modelo utilizado por el propio José Vicente CONCHA para elaborar su Proyecto de Código Penal y todos los aspectos que JIMENEZ DE ASUA criticó en nuestro Código de 1922 provenían, a través del Proyecto de CONCHA, del Código italiano citado al que ya JIMENEZ DE ASUA había calificado de "obra casi perfecta" (241).

Por lo que respecta a QUINTANO RIPOLLES llama poderosamente la atención que señale que nuestro Código Penal de 1922 - responda a una influencia hispánica (242), cuando lo cierto es que procede de una orientación totalmente distinta, como ha quedado expresado.

Sobre nuestro Código QUINTANO RIPOLLES ha señalado lo siguiente: "El desorbitado casuismo en la aplicación de las penas, la trascendencia del discernimiento en la eximente de estado mental (art. 44) y su relativización a modo de circunstancia atenuante (art. 45), son otros tantos ejemplos, entre otros muchos que sería prolijo enumerar, de este carácter hispanizante in pe-
jus del Código penal panameño. La división bipartita de infraccio

nes en delitos y faltas, la distinción entre tentativa y frustración, casi por doquier superada en esa fecha, así como la regulación del concurso de delitos, son igualmente materias en que la enseñanza española fue (sic) seguida por el legislador centroamericano" (243).

Y más adelante señalaba el mismo autor que "lejos de limitarse a transcribir, ya que no a modernizar y poner las viejas - instituciones a tono con los nuevos tiempos, empeoró y complicó su doctrina hasta límites inconcebibles, que hacen del Código penal de Panamá, a pesar de su data, uno de los más anticuados e imperfectos del Continente, Demuestra hasta la saciedad lo malo que se puede hacer sobre la materia prima hispánica.." (244).

Si le concedieramos la razón a QUINTANO RIPOLES las críticas que hace a nuestro Código debemos remitírselas a CONCHA - quien es el que en realidad "lejos de limitarse a transcribir" en su Proyecto el Código italiano de 1889 "empeoró y complicó su - doctrina hasta límites inconcebibles" para utilizar las mismas palabras de QUINTANO.

Con toda razón ha dicho ECHEVERS que "Muchos y muy severos son los juicios críticos que se han vertido en relación con nuestro Código, no todos ellos serenos ni fundados. Las deficiencias que a esta altura de la evolución histórica en materia penal pueden señalarse no son, sin embargo, todas atribuibles a la iniciativa de nuestros legisladores" (245).

"Muy fácil -continúa diciendo ECHEVERS- es formular críticas a una distancia considerable de tiempo y de mutaciones doctrinales y legislativas, hasta el extremo de afirmar, como en el caso de las que nos ocupan, que el Código Penal Panameño es una - prueba elocuente de "todo lo malo que se puede hacer con la materia prima hispánica", según expresión de don Luis JIMENEZ DE ASUA.

Quizás los más sustanciales de los errores que ahora se advierten no hemos hecho sino tomarlos del modelo italiano" (246).

Incluso, con toda razón, llega ECHEVERRIS a señalar que "sería muy fácil probar que buen número de las imperfecciones de que se ha hablado, provienen del original, en relación con el cual esos mismos críticos improvisados de la versión panameña no escatiman elogios" (247).

3) CONSIDERACION FINAL

Luego de la anterior exposición, nos interesa únicamente destacar algunas cuestiones fundamentales a la luz de la dogmática y política-criminal actuales, pues estamos convencidos de que para lograr una mejora de nuestra legislación es preciso previamente conocer lo que se desea mejorar.

Respecto al delito, consideramos necesario que se mantenga la distinción entre "delitos" y "faltas", aunque el Código Penal sólo se ocupe de aquellos.

Es preciso efectuar, por otra parte, una revisión profunda de los delitos culposos que se describen en el Libro II para que, entre otros aspectos, no se sancionen con pena mayor que las mismas conductas realizadas dolosamente (248); además, deben ser objeto de atención aquellos supuestos de responsabilidad objetiva contenidos en el mismo Libro II (249) y que han sido repetidamente denunciados por la doctrina patria (250), toda vez que afectan directamente el principio de que la culpabilidad del sujeto es la medida correspondiente de la pena que se le debe imponer (251).

Por lo que respecta a la pena, es menester modificar la concepción que de la misma existe en nuestra legislación con un carácter marcadamente "infamante"

La distinción que se hace en nuestro Código entre las - distintas penas privativas de libertad carece de sentido, toda vez que en la práctica la ejecución de las mismas no presenta diferencia alguna (253).

Nuestro Código vigente utiliza casi exclusivamente la pena privativa de libertad como reacción contra el delito, recurriendo en muy pocos casos a la pena de multa (254). No cabe duda, por tanto, que en nuestra legislación el sancionado es un - ser perverso que ha infringido la ley, por lo que debe ser apartado de la sociedad hasta que cumpla su castigo.

No en vano ha señalado ROXIN que "Las reformas de los últimos diez años han conducido a cambios más radicales en el derecho penal de las de los cien años anteriores" (255).

NOTAS

- (1) Así, MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 97.
- (2) Decreto 25 de 7 de marzo de 1918. Publicado en la Gaceta Oficial número 2866, de 17 de marzo de 1918.
- (3) A pesar de nuestros esfuerzos no hemos encontrado la designación correspondiente. Cf: AROSEMENA GUARDIA, p. 260.
- (4) Ley 6 de 17 de noviembre de 1922. Publicada en la Gaceta - Oficial número 4049 de 8 de diciembre de 1922.
- (5) Así, entre otros, AROSEMENA GUARDIA, p. 260; ECHEVERS, p. 123; MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 97; Luis JIMÉNEZ DE ASUA ("Historia de la ciencia jurídico-penal en hispanoamérica", El Criminalista, 2ª. serie, tomo III, Víctor P. de Zavalia, editor, Buenos Aires, 1960, p. 57) señala que nuestro Código penal bajo "influjo italiano"; en contra de la doctrina penal patria Carlos Enrique MUÑOZ POPE y Campo Elías GONZALEZ FERRER han señalado que nuestro Código procede del proyecto de José Vicente CONCHA (V. "El peculado por error" en LEX, Enero-Abril de 1978, nº 9, p. 66).
- (6) En este sentido: AROSEMENA GUARDIA, p. 260 y ECHEVERS, p. 123.
- (7) Una simple comparación de la distribución de los títulos y libros de nuestro Código frente a los dos otros textos no deja duda al respecto.
- (8) Véase: Silvio RANIERI, Manuale di Diritto Penale, volume primo, parte generale, 4ª. edizione, Cedam, Padova, 1968, p. 16.
- (9) Vincenzo MANZINI, Tratado de Derecho Penal, Trad. de S. Sentís Melendo Tomo I, Ediar Editores, Buenos Aires, 1948, p. 88; Bernardino ALIMENA, Principios de Derecho Penal, Trad. de E. Cuello Calón, Volumen I, Librería General de Victorino Suárez, Madrid, 1915, ps. 87-88.
- (10) Ugo PIOLETTI, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, 2ª edizione, Jovene, Napoli, 1969, p. 17.

- (11) Arturo SANTORO, Manuale di Diritto Penale, Volume primo, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1958, p. 50.
- (12) MANZINI, Tratado, I, ps. 91-92.
- (13) Giuliano VASSALLI, "Codice Penale" en Enciclopedia del Diritto, volume VII, Giuffrè, 1960, p. 268.
- (14) Enrico PESSINA, "Il diritto penale in Italia da Cèsare Beccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente" en, Enciclopedia del Diritto Penale Italiano dirigida por E. Pessina, volume secondo, Società Editrice Libreria, Milano, 1906, ps. 736-737.
- (15) C.P. italiano 1889, arts. 3 y sgts.
- (16) C.P. italiano 1889, art. 1º.
- (17) C.P. italiano 1889, art. 9.
- (18) C.P. italiano 1889, art. 1º, inc. 2º.
- (19) C.P. italiano 1889, art. 11.
- (20) C.P. italiano 1889, art. 13 para la reclusión y art. 15 para la prisión.
- (21) C.P. italiano 1889, art. 18.
- (22) C.P. italiano 1889, art. 19.
- (23) C.P. italiano 1889, art. 20.
- (24) C.P. italiano 1889, art. 21.
- (25) C.P. italiano 1889, art. 24.
- (26) C.P. italiano 1889, art. 25.
- (27) C.P. italiano 1889, art. 26.
- (28) C.P. italiano 1889, arts. 31 y 32.
- (29) C.P. italiano 1889, art. 33.

- (30) C.P. italiano 1889, art. 35.
- (31) C.P. italiano 1889, art. 36.
- (32) C.P. italiano 1889, arts. 46, 47, 48, 53 y 54.
- (33) C.P. italiano 1889, art. 49.
- (34) C.P. italiano 1889, arts. 44, 45 y 52.
- (35) C.P. italiano 1889, arts. 51 y 59.
- (36) C.P. italiano 1889, arts. 46 y 47.
- (37) C.P. italiano 1889, art. 48.
- (38) C.P. italiano 1889, arts. 54, 55 y 56.
- (39) C.P. italiano 1889, arts. 57 y 58.
- (40) C.P. italiano 1889, art. 49, ordinal 2º.
- (41) C.P. italiano 1889, art. 49, ordinal 3º.
- (42) C.P. italiano 1889, art. 49, ordinal 1º.
- (43) C.P. italiano 1889, art. 50.
- (44) C.P. italiano 1889, art. 44.
- (45) C.P. italiano 1889, art. 45.
- (46) C.P. italiano 1889, arts. 109, 229, inc. 3º, 311, 314, 323, 371 y 375 a propósito de los delitos culposos y, arts. 382, inc. 2º y 383, inc. 2º sobre supuestos de delitos agravados por el resultado (aborto).
- (47) C.P. italiano 1889, arts. 61 y 62 respectivamente.
- (48) C.P. italiano 1889, art. 63.
- (49) C.P. italiano 1889, art. 64.
- (50) C.P. italiano 1889, arts. 67 y sgts.

- (51) C.P. italiano 1889, art. 78.
- (52) C.P. italiano 1889, art. 79.
- (53) C.P. Italiano 1889, arts. 80 y sgts.
- (54) C.P. italiano 1889, art. 80.
- (55) C.P. italiano 1889, art. 85, inc. 1º.
- (56) C.P. italiano 1889, art. 86.
- (57) C.P. italiano 1889, arts. 91 y sgts.
- (58) C.P. italiano 1889, art. 88, pero sólo en los delitos en que no se puede proceder sino a instancia del ofendido.
- (59) C.P. italiano 1889, art. 85, inc. 2º.
- (60) C.P. italiano 1889, art. 86.
- (61) C.P. italiano 1889, art. 87.
- (62) C.P. italiano 1889, art. 88, pero sólo en los casos establecidos en la ley.
- (63) C.P. italiano 1889, arts. 95 y sgts.
- (64) C.P. italiano 1889, art. 100.
- (65) C.P. italiano 1889, arts. 101 y 102.
- (66) C.P. italiano 1889, arts. 103, 117, 364, 365 y 366.
- (67) JIMENEZ DE ASUA, p. 425.
- (68) PIOLETTI, Manuale cit., p. 17. De la misma opinión es Filippo GRISPIGNI, Diritto Penale Italiano, volume primo, Giuffrè, Milano, 1952, p. 78, cuando afirma que "teniendo en cuenta el tiempo en que fue publicado, indudablemente el Código Zanardelli representaba un progreso notable".
- (69) Giuseppe BETTIOL, Instituciones de Derecho Penal y Procesal, Trad. de F. Gutiérrez Alvis y Armario, Bosch, Barcelona, 1977, p. 78.

- (70) Véase: Luigi GRANATA, Compendio de Diritto Penale Italiano, parte generale, Edizione Dell'Ateneo, Roma, 1953, p. 9.
- (71) Giuseppe BETTIOL, Diritto Penale. Parte generale, Nona edizione, Cedam, Padova, 1976, p. 21.
- (72) Cf: Luis JIMENEZ DE ASUA, Lombroso, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1960, p. 26; en este mismo sentido: Luis RODRIGUEZ MANZANERA, Criminología, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979, p. 216.
- (73) SANTORO, Manuale cit., p. 50; GRISPIGNI, Diritto cit., p. 78.
- (74) CONCHA, p. 5. El profesor Alfonso REYES ECHANDIA en el Derecho colombiano señala que "El Código penal de 1890 no satisfizo completamente, dado que no obedecía a ninguna orientación doctrinal definida; fruto de esa inconformidad fue el proyecto presentado al Congreso en 1912 por el doctor JOSÉ VICENTE CONCHA, ferviente admirador de los postulados clásicos del derecho penal" (p. 42).
- (75) CONCHA, p. 6.
- (76) CONCHA, p. 8.
- (77) CONCHA, p. 8.
- (78) Proyecto, art. 1º.
- (79) Cf: MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 113.
- (80) Proyecto, art. 4.
- (81) Proyecto, arts. 6 y sgts.
- (82) Proyecto, art. 9.
- (83) Proyecto, art. 10.
- (84) CONCHA, p. 10.
- (85) CONCHA, p. 10.
- (86) CONCHA, p. 12.



- (87) CONCHA, ps. 12-13.
- (88) Proyecto, arts. 11 y 13 (reclusión), 14 (prisión) y 18 (arres
to.
- (89) Proyecto, art. 24.
- (90) Proyecto, art. 29.
- (91) CONCHA, ps. 16 y 17.
- (92) Proyecto, art. 38.
- (93) Proyecto, art. 39.
- (94) A este respecto, cabe señalar que, el Proyecto se aparta -
del Código italiano introduciendo algunas modificaciones -
que tornan complicada la interpretación de esta norma, que
en los mismos términos se recoge en el C.P. panameño de 1922.
- (95) Proyecto, art. 43
- (96) Proyecto, art. 44.
- (97) Proyecto, art. 46.
- (98) Proyecto, art. 47.
- (99) CONCHA, p. 18.
- (100) Proyecto, art. 45.
- (101) Proyecto, art. 40, aunque no se le dé dicha denominación ex-
presamente.
- (102) Proyecto, art. 42.
- (103) Proyecto, art. 50.
- (104) Proyecto, arts. 54 y 55.
- (105) Proyecto, arts. 40 y 41.
- (106) Proyecto, art. 42.

- (107) Proyecto, art. 51.
- (108) Proyecto, arts. 54 y 55.
- (109) Proyecto, arts. 48 y 56 respectivamente.
- (110) Proyecto, arts. 57 y 58.
- (111) CONCHA, p. 20.
- (112) Proyecto, art. 59, inc. 1º.
- (113) Proyecto, art. 59, inc. 2º.
- (114) Proyecto, art. 60, inc. 1º.
- (115) Proyecto, art. 60, inc. 2º.
- (116) Proyecto, arts. 62 y sgts.
- (117) Proyecto, art. 72.
- (118) Proyecto, art. 73.
- (119) Proyecto, arts. 74 y sgts.
- (120) Proyecto, art. 77.
- (121) Proyecto, art. 79.
- (122) Proyecto, art. 80.
- (123) Proyecto, art. 81.
- (124) Proyecto, arts. 85 y 89.
- (125) Proyecto, art. 82.
- (126) Proyecto, art. 94.
- (127) Proyecto, art. 96, salvo que el ofendido haya desistido de su acusación sin hacer reservas a este respecto.
- (128) Proyecto, art. 97, salvo que esa extinción sea resultado de una amnistía, en cuyo caso el Fisco no puede exigir el pago de costas.

- (129) C.P. italiano 1889, art. 11; Proyecto, art. 10.
- (130) C.P. italiano 1889, arts. 11 y 12.
- (131) C.P. italiano 1889, art. 26; Proyecto, art. 24.
- (132) C.P. italiano 1889, art. 33; En este sentido CONCHA justifica tal actitud en las siguientes palabras: "Señala en seguida el proyecto las consecuencias de las diferentes condenaciones penales; pero apartándose en este punto del modelo que sigue, en materia de suma importancia, suprime la privación del derecho de testar y la anulación del testamento anterior del delito, lo cual constituye un resto de la antigua pena de muerte civil, que reprueba la ciencia moderna y que en muchos casos podía implicar una especie de confiscación, abolida en las legislaciones nuevas, y prohibida en la Ley fundamental colombiana" (p. 16) (El subrayado es nuestro).
- (133) C.P. italiano 1889, art. 46; Proyecto, art. 40.
- (134) C.P. italiano 1889, art. 53; Proyecto, art. 50.
- (135) C.P. italiano 1889, art. 63; Proyecto, art. 59.
- (136) C.P. italiano 1889, art. 63, inc. 2ª; Proyecto, art. 59, inc. 2ª.
- (137) C.P. italiano 1889, Libro Segundo, Título I; Proyecto, Libro Segundo, Título I, II, III y IV.
- (138) En el Código italiano se alude a la figura del Rey, del Príncipe heredero y del Regente (arts. 117 y 118); en el Proyecto colombiano se menciona al Presidente de la República (arts. 109 y 110).
- (139) En el Código italiano todos los títulos del Libro Segundo se denominan "De los delitos...", mientras que en el Proyecto colombiano, quizás sea por olvido, se suprimieron las palabras "De los" en los títulos IX (Delitos contra la fe pública) y X (Delitos contra la seguridad pública).
- (140) Recordemos que el Proyecto colombiano no incluyó entre las penas la privación perpetua de libertad, que si aparece en el Código italiano.

- (141) Es inconcebible, en consecuencia que el Código Penal para meño mencione en alguna ocasión las "faltas", si no las re gula. En el art. 43. señala "contravenciones".
- (142) C.P. 1922, art. 1º.
- (143) C.P. 1922, arts. 4 y sgts.
- (144) C.P. 1922, art. 5. inc. 2º.
- (145) La extradición se regula en la actualidad en la Ley 44 de 1930. Véase, al respecto, infra, Capítulo IV (La Legislación Complementaria).
- (146) C.P. 1922, arts. 9 y sgts.
- (147) C.P. 1922, art. 17.
- (148) Señala RICORD (RICORD, p. 134) que la Ley 71 de 1938 eliminó el confinamiento como pena del C. Penal. Ello, no es - exacto, toda vez que dicha Ley solo elimina el confinamien to en el Código Administrativo.
- (149) Mediante la Ley 25 de 1927 se introdujo un nuevo artículo al Código Penal, el art. 24a, que estableció como mínimo para todas las penas privativas de libertad el término de 30 días.
- (150) C.P. 1922, arts. 18 (reclusión), 19 (prisión) y 22 (arresto).
- (151) C.P. 1922, art. 20.
- (152) C.P. 1922, arts. 18 y 19 y ss. Confróntese al respecto la Ley 87 de 1941 sobre instituciones penales y correccionales infra, Capítulo IV, La Legislación Complementaria).
- (153) C.P. 1922, art. 24. La Ley 25 de 1927 aumentó el mínimo de la pena de multa a 20 balboas. Posteriormente, la Ley 43 de 1958 aumentó el máximo previsto a 10.000 balboas, pero en el Código Penal no encontramos ningún delito sancionado con más de 1.000 balboas.
- (154) C.P. 1922, art. 25.
- (155) C.P. 1922, art. 29
- (156) C.P. 1922, art. 34.

- (157) C.P. 1922, art. 47.
- (158) C.P. 1922, art. 48.
- (159) C.P. 1922, art. 50.
- (160) C.P. 1922, art. 51.
- (161) C.P. 1922, art. 49.
- (162) C.P. 1922, arts. 44 y 45.
- (163) C.P. 1922, art. 46.
- (164) C.P. 1922, arts. 54 y 55. Esta regulación fue derogada tácitamente por la Ley 24 de 1951, por medio de la cual se creó el Tribunal Tutelar de Menores y la jurisdicción de menores en Panamá (Véase, infra, Capítulo IV, La Legislación Complementaria).
- (165) C.P. 1922, arts. 58 y 59.
- (166) C.P. 1922, art. 42.
- (167) C.P. 1922, art. 43. Resulta extraño que en este artículo se mencionen las "contravenciones", pues en nuestra legislación penal se usa el término "falta". Nuestra doctrina fundamenta en este artículo el dolo y la culpa (Véase: MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, ps. 286 y 288).
- (168) C.P. 1922, arts. 52 y 60.
- (169) C.P. 1922, art. 61.
- (170) C.P. 1922, art. 62.
- (171) C.P. 1922, art. 63, inc. 1º.
- (172) C.P. 1922, art. 64, inc. 2º.
- (173) C.P. 1922, art. 63, inc. 2º.
- (174) C.P. 1922, art. 64, inc. 1º.
- (175) C.P. 1922, art. 66 y sgts.
- (176) C.P. 1922, art. 73.

- (177) C.P. 1922, art. 74.
- (178) C.P. 1922, art. 75 y sgts.
- (179) C.P. 1922, art. 81.
- (180) C.P. 1922, art. 82.
- (181) C.P. 1922, art. 83.
- (182) C.P. 1922, arts. 86 y 90.
- (183) C.P. 1922, art. 84. En el ordenamiento jurídico panameño los delitos de adulterio y amancebamiento, entre otros, requieren "acusación particular, sin la cual no puede iniciarse procedimiento criminal alguno" (Cf. art. 304 del C. P. de 1922).
- (184) C.P. 1922, art. 95.
- (185) C.P. 1922, art. 96.
- (186) C.P. 1922, art. 97.
- (187) Ley 56 de 1930. Véase, infra, capítulo V, La Legislación Especial.
- (188) Estos delitos están regulados en las leyes 59 de 1941, 67 de 1946 y 23 de 1954. Véase, infra, Capítulo V.
- (189) Ley 5 de 1958. Véase, infra, Capítulo V.
- (190) Ley 5 de 1964. Véase, infra, Capítulo V.
- (191) En la actualidad están regulados en la Ley 8 de 1978. Véase, infra, Capítulo V.
- (192) C.P. 1922, arts. 311 (homicidio, figura básica), 312 y 313 (homicidios agravados), 314 (concausal), 315 (preterintencional) y 318 (culposos).
- (193) C.P. 1922, arts. 319 (lesiones dolosas), 321 (lesiones preterintencionales) y 322 (lesiones culposas).

- (194) C.P. 1922, arts. 350 (hurto, figura básica), 351 y 352 (agravados).
- (195) C.P. 1922, art. 353.
- (196) C.P. 1922, art. 360.
- (197) C.P. 1922, art. 367.
- (198) C.P. 1922, art. 281.
- (199) C.P. 1922, art. 283.
- (200) C.P. 1922, arts. 232 y sgts.
- (201) C.P. 1922, art. 153.
- (202) C.P. 1922, arts. 326 y sgts.
- (203) Se calcula en medios médicos que cada año se efectúan más de 5.000 abortos en Panamá. La cifra exacta no se conoce, pero en los tribunales panameños no encontramos más de 15 abortos cada año. Como en estos delitos intervienen jurados de conciencia, nunca se condena a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause. A los que causan el aborto se les condena penalmente, sobre todo cuando se ha producido la muerte de la mujer.
- (204) C.P. 1922, art. 47; Proyecto, art. 43.
- (205) C.P. 1922, art. 48; Proyecto, art. 44.
- (206) C.P. 1922, art. 50; Proyecto, art. 46.
- (207) C.P. 1922, art. 51; Proyecto, art. 47.
- (208) C.P. 1922, art. 44; Proyecto, art. 40.
- (209) C.P. 1922, art. 54; Proyecto, art. 50.
- (210) C.P. 1922, art. 58; Proyecto, art. 54.
- (211) C.P. C.P. 1922, arts. 52 y 60; Proyecto, arts. 48 y 56.

- (212) C.P. 1922, art. 61; Proyecto, art. 57.
- (213) C.P. 1922, art. 62; proyecto, art. 58.
- (214) C.P. 1922, art. 63, inc. 1º; Proyecto, art. 59, inc. 1º.
- (215) C.P. 1922, art. 63; inc. 2º; Proyecto, art. 59, inc. 2º.
- (216) C.P. 1922, art. 64, inc. 1º; Proyecto, art. 60, inc. 1º.
- (217) C.P. 1922, art. 64, inc. 2º; Proyecto, art. 60, inc. 2º.
- (218) C.P. 1922, art. 73; Proyecto, art. 72.
- (219) C.P. 1922, art. 74; Proyecto, art. 73.
- (220) C.P. 1922, art. 43; Proyecto, art. 39.
- (221) C.P. 1922, art. 1º, inc. 2º.
- (222) C.P. 1922, art. 17, literal a), ordinal 6º.
- (223) C.P. 1922, art. 17, literal b), ordinal, 3º; Proyecto, art. 10, literal b), ordinal 3º.
- (224) C.P. Proyecto, arts. 11 y 18.
- (225) C.P. 1922, art. 24; Proyecto, art. 19.
- (226) C.P. 1922, arts. 40, 41 y 44, entre otros; Proyecto, arts. 36, 37 y 40.
- (227) C.P. 1922, arts. 32 y 33; proyecto, arts. 27 y 28.
- (228) C.P. 1922, art. 83; Proyecto, arts. 80 y 81.
- (229) C.P. 1922, arts. 86 y 90; Proyecto, arts. 85 y 89.
- (230) C.P. 1922, art. 154.
- (231) C.P. 1922, art. 155.
- (232) C.P. 1922, art. 156.
- (233) C.P. 1922, art. 157.

- (234) En efecto, en el art. 307, literal d) se remite a los delitos de peligro común previstos en el Título Séptimo del Libro Segundo equivocadamente, puesto que dichos delitos están en el Título Décimo sobre "delitos contra la seguridad pública"; en el art. 313 del C.P. panameño se incurre en el mismo error al remitirse al título séptimo cuando en realidad debió ser el título décimo.
- (235) Humberto E. RICORD, "Los derechos humanos penales en el Derecho panameño y en el Código de la zona del canal" en - Anuario de Derecho, Año IX (1970-71), No 9, ps. 129 y sgts.
- (236) AROSEMENA GUARDIA, p. 259.
- (237) AROSEMENA GUARDIA, p. 259.
- (238) JIMENEZ DE ASUA, p. 1120.
- (239) JIMENEZ DE ASUA, p. 1120.
- (240) JIMENEZ DE ASUA, p. 1228.
- (241) JIMENEZ DE ASUA, p. 425.
- (242) QUINTANO RIPOLLES, p. 148.
- (243) QUINTANO RIPOLLES, ps. 148-149.
- (244) QUINTANO RIPOLLES, p. 149.
- (245) ECHEVERS, p. 124.
- (246) ECHEVERS, p. 124, La frase, sin embargo, no es de Jiménez de Asúa, sino de Quintano Ripollés.
- (247) ECHEVERS, p. 124. Aunque este autor señale al Código italiano como modelo del Código panameño, su observación continúa teniendo validez.
- (248) C.P. 1922, arts. 154 y 155.
- (249) C.P. 1922, arts. 327 y 328.
- (250) Véase: Campo Elías MUÑOZ RUBIO y Campo Elías GONZALEZ FERRER, Derecho Penal Panameño, Parte Especial, Tomo I, Publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, Panamá, 1980, ps. 247 y 257-258.

- (251) ROXIN ha señalado en este sentido que "el fin de resocialización no autoriza que la medida de la pena supere a la correspondiente de la culpabilidad por el hecho; sin embargo, permite que la pena permanezca por debajo de la correspondiente culpabilidad" (Claus ROXIN, "Las nuevas corrientes de política criminal en la República Federal Alemana" en Nuevo Pensamiento Penal, Año 1, Nº 3. p. 391).
- (252) Véase: Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "En torno al Código Penal vigente y su posible reforma" en LEX, Mayo-Agosto de 1979, Nº. 13, ps. 83 y sgts. (especialmente p. 85).
- (253) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "Regulación de las penas en el proyecto Royo" en ACTAS, p. 34.
- (254) La multa se aplica en la mayoría de los casos como pena copulativa con la de privación de libertad, ya sea arresto, prisión o reclusión.
Como pena única figura solamente en 20 casos (arts. 130, 137, 146, 156, 162, 166, 167, 168, 171, 182, inc. 5ª, 194, 206, 207, 249, 283, 292, 334, 337 y 339). De estos casos, el art. 283 sancionaba el "estupro" y el art. 292 el "rapto consensual" que imponían multa de cien a mil balboas, pero fueron reformados posteriormente como tendremos oportunidad de ver más adelante (V Capítulo VI sobre "Reformas al Código Penal").
Como pena copulativa con la de interdicción la multa sólo se utiliza en dos casos (arts. 155 y 169).
Como pena alternativa con la de privación de libertad (arresto) la multa sólo se utiliza en un supuesto (art. 322, sobre "lesiones culposas").
- (255) Claus ROXIN, "Modificaciones actuales del derecho penal" en Universitas, Volumen XVII, Diciembre de 1979, p. 109.

Capítulo Cuarto

LA LEGISLACION COMPLEMENTARIA

- I. INTRODUCCION
- II. LEGISLACION SOBRE EXTRADICION
- III. LEGISLACION PENITENCIARIA
- IV. LEGISLACION SOBRE MENORES
- V. LEGISLACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD

I. INTRODUCCION

Nuestra intención en este capítulo es la de exponer en forma panorámica cual es el estado actual de la legislación que complementa al Código Penal de 1922.

Se trata de leyes formales, expedidas por la autoridad legislativa, que abordan cuestiones fundamentales del Derecho Penal común, que aunque se hallan fuera del Código "contienen -como señala el profesor RODRIGUEZ DEVESA- preceptos de tipo estrictamente penal" (1).

La exposición que sigue a continuación trata de señalar los rasgos fundamentales de dicha legislación, sin pretender -constituir un estudio acabado de la misma, lo cual excedería con creces el objetivo principal de esta relación sobre la codificación penal panameña, puesto que cada uno de los temas que adelante trataremos podría ser objeto de consideración monográfica.

A continuación abordamos los siguientes temas: a) legislación sobre extradición; b) legislación penitenciaria; c) legislación sobre menores; d) legislación sobre medidas de seguridad.

La casi ausencia de estudios sobre estos temas no nos permite utilizar la interpretación doctrinal respecto a esta legislación, puesto que a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no llegan estas cuestiones.

II. LEGISLACION SOBRE EXTRADICION

A) INTRODUCCION

Por extradición se entiende "un acto de asistencia judicial interestatal en materia penal, en virtud del cual un Estado transfiere a un individuo, acusado o condenado por un delito cometido fuera de su territorio, a otro Estado que lo reclama y es

competente para juzgarlo y hacer cumplir lo juzgado (ejecución - de penas y medidas de seguridad)" (2).

La finalidad esencial de la extradición radica en la necesidad de evitar que quienes realicen hechos delictivos se libren de las consecuencias de los mismos al cruzar las fronteras del Estado respectivo.

"Su fundamento -señala el profesor RODRIGUEZ DEVESA- está en la solidaridad de los Estados y en la necesidad de superar las limitaciones que impone a la persecución y castigo de los delitos el principio de territorialidad que, como sabemos, impide aplicar la ley penal a hechos ocurridos fuera del país en que ha buscado refugio el delincuente. En definitiva, es un acto de auxilio jurisdiccional" (3).

B) ANTECEDENTES

Las primeras disposiciones que en nuestra legislación encontramos referentes a la extradición, aparecen incluidas en la Ley 32 de 1913 sobre extradición de criminales (4).

Esta ley estuvo vigente poco tiempo ya que en 1916 se aprobaron los Códigos Penal y Judicial mediante la Ley 2 de 1916, en los que aparece una nueva regulación legal de la extradición y se derogaban las disposiciones de la Ley 32 de 1913.

Las disposiciones fundamentales estaban contenidas en el Capítulo II del Título I, sobre Disposiciones generales, del Libro Primero del nuevo Código Penal.

En principio se disponía que la extradición debía regirse por lo dispuesto en los tratados internacionales existentes y, en defecto de éstos, por lo que se señalaba en los Códigos Penal y Judicial.

El Código Penal exigía que, para proceder a la extradi-

ción, el delito cometido tuviere señalada pena privativa de libertad por dos o más años; además, contenía un amplio catálogo de casos en que no procedía la extradición (5).

La facultad de conceder la extradición correspondía al Poder Ejecutivo y se establecía la prohibición de celebrar nuevos tratados internacionales, o modificar los existentes, en oposición a lo preceptuado en las normas que contenía, a propósito de la extradición, el Código Penal de 1916 (6).

Con la aprobación de un nuevo Código Penal en el año - 1922 y vigente a partir del 17 de enero de 1923, se mantuvo el criterio de regular la extradición en el articulado del Código.

La regulación de la extradición en el Código Penal de 1922 mantenía, a grandes rasgos, la misma normativa del Código anterior, si bien dejó de estar contenida en un capítulo propio (7).

Tales disposiciones contenidas en los artículos 9 al 16 del Código Penal de 1922 fueron derogadas por el art. 21 de la Ley 44 de 1930, que fue dedicada a regular en su totalidad la - cuestión de la extradición en nuestro país.

A partir de la vigencia de dicha ley, la situación no ha variado para nada.

C) REGIMEN ACTUAL

Mediante la Ley 44 de 1930 (8) se adoptó una nueva regulación de la extradición en la legislación panameña, la que perdura hasta nuestros días sin haber sufrido modificación alguna.

En Panamá la extradición se rige por los tratados internacionales y, en defecto de éstos, por las disposiciones de la Ley 44 de 1930, siendo competencia del Organó Ejecutivo la facultad de concederla o no (9).

Nuestro país ha celebrado bilateralmente tratados de ex-

tradición con los siguientes Estados: Estados Unidos de América (10), Gran Bretaña (11), Ecuador (12), Colombia (13), México (14) e Italia (15).

Por otra parte, en el plano internacional es importante señalar que la República de Panamá ha suscrito la "Convención sobre extradición" acordada en la Séptima Conferencia Internacional Americana celebrada en Montevideo (Uruguay) en la sesión del día 26 de diciembre de 1933 (16).

La entrega de un sujeto requerido por otro Estado puede efectuarse, a título de reciprocidad, si se cumplen los requisitos exigidos en la propia Ley 44 de 1930. Es decir:

a) que el hecho punible constituya según nuestra legislación delito;

b) que el delito en cuestión esté sancionado con una pena privativa de libertad no inferior a un año según nuestras leyes;

c) que el delito haya sido cometido en el territorio de la nación requirente o en sus aguas territoriales, en sus buques mercantes en alta mar o en sus buques de guerra donde quiera que éstos se encuentren, o que, por la naturaleza del delito tenga el Estado requirente conforme a sus leyes, jurisdicción sobre él (17).

Según la ley en cuestión, no procederá la extradición en los siguientes casos:

a) Cuando el reclamado sea ciudadano panameño (18);

b) si, a juicio del Ejecutivo, se persigue al sujeto reclamado por un delito político (19);

c) en el caso de que el sujeto reclamado haya sido juzgado y sentenciado en Panamá por el mismo delito;

d) cuando el sujeto requerido haya sido condenado o esté

sindicado de la comisión de algún delito cometido en Panamá (pero en este caso, la extradición se concederá después de cumplida la pena impuesta o después de terminado el proceso si el fallo fuere absolutorio);

e) si conforme a las leyes del Estado requirente, hayan prescrito la acción penal o la pena respectiva.

f) cuando la pena señalada sea la de muerte en el Estado requirente, salvo que el Estado respectivo se comprometa a aplicar al reo una pena distinta menos severa (20).

Si dos o más Estados reclamaren a un mismo individuo por razón de distintas infracciones, se dará preferencia a la falta más grave conforme a la ley panameña. En caso de que ambas infracciones sean de igual gravedad, se atenderá a la prioridad de la demanda; pero en todo caso tienen preferencia, según nuestra legislación, los Estados con los cuales existen tratados de extradición, si las distintas solicitudes de extradición se hicieron por el mismo hecho delictivo, se dará preferencia a la demanda del país del cual fuere súbdito o ciudadano el sujeto, sin perjuicio de la regla mencionada en relación con la existencia de tratado de extradición (21).

La ley establece que la vía para solicitar la extradición sea el conducto diplomático y que el sujeto requerido tiene derecho a oponerse a la solicitud de extradición.

Vale la pena señalar que en la Ley 4 de 1938, que aprueba la Convención sobre Extradición antes señalada, se establecen otras causas, además de las ya señaladas, en virtud de las cuales el Estado requerido puede negar la extradición: a) que el sujeto solicitado haya cumplido la condena que se le desea imponer; b) que se traten de delitos militares o conexos.

De acuerdo con esta Convención Americana sobre Extradición

el Estado requiriente se obliga:

a) a no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en él, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad;

b) a no procesar ni castigar al individuo por un delito político, cometido con anterioridad al pedido de extradición;

c) a aplicar al individuo la pena inmediata inferior a la pena de muerte, si según la legislación del país de refugio, no correspondiere aplicarle la pena de muerte;

d) a proporcionar al Estado requerido una copia auténtica de la sentencia que se dicte (22).

III. LEGISLACION PENITENCIARIA

A) INTRODUCCION

Mediante la Ley 87 de 1941 (23) se regula en Panamá todo lo relacionado con los establecimientos penales y correccionales.

Siguiendo las directrices plasmadas en la Constitución de 1941, que dedicaba su art. 35 al tema penitenciario (24), esta ley señala que "los establecimientos penales tienen por objeto la reclusión de los condenados a sufrir penas privativas de libertad, teniendo en cuenta que las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, queda prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos"; además, señala que "los establecimientos correccionales tienen por fin esencial al mejoramiento moral y psíquico de los menores y de las mujeres que en ellos se recluyen, su perfeccionamiento profesional y que le cobren amor al trabajo".

La ley consta de 64 artículos y está dividida en capítu-

los, de la siguiente forma: Capítulo I, "Disposiciones Generales" (arts. 1-12); Capítulo II, "Colonia Penal de Coiba" (arts. 13-34); Capítulo III, "Cárcel Provincial de Panamá" (arts. 35-41); Capítulo IV, "Cárceles Provinciales y Distritoriales" (arts. 42-46); Capítulo V, "Reformatorio de Menores" (arts. 47-60); y Capítulo VI, "Reformatorio de Mujeres" (arts. 61-64) (25).

Cabe señalar, no obstante, que las disposiciones contenidas en el capítulo sobre "reformatorio de menores" ya no están vigentes, toda vez que en 1951 se creó el Tribunal Tutelar de Menores, que establece un régimen especial para todos los menores de 18 años, como tendremos ocasión de comentar posteriormente.

Además, con respecto al "reformatorio de mujeres" debemos señalar que dicha regulación fue derogada cuando se estableció el Centro Femenino de Rehabilitación, que más adelante mencionaremos.

B) ANTECEDENTES

Las primeras disposiciones legales que se ocuparon del problema penitenciario las encontramos en la Ley 41 de 1912 (26), por medio de la cual se concedió autorización al Poder Ejecutivo para la construcción de los edificios necesarios para los establecimientos penitenciarios y se destinó la Isla de Coiba para establecer una colonia penal en la misma.

Posteriormente en 1916, en el Código Administrativo, encontramos algunas disposiciones sobre gobierno de las cárceles. Se establecía que dichos centros quedaban bajo la dependencia directa del Jefe de Policía del Distrito Municipal respectivo y - que "los establecimientos de castigo serán vigilados con especial cuidado por los Gobernadores para que se haga cumplir debidamente a los reos las penas a que hayan sido condenados, para impedir que se les trate con más rigor que el prescrito por las le-

yes, para que se les haga los suministros debidos, y para que observen las leyes, decretos y reglamentos que determinen la organización y régimen de los establecimientos expresados" (27).

Estas disposiciones citadas, y otras adicionales, estaban contenidas en el Capítulo III sobre "Custodia y seguridad de los reos y encarcelados" incluido en el Título IV del Libro III sobre "Policía" del Código Administrativo (28).

En la Ley 44 de 1919 (29) se dispone lo concerniente al establecimiento de la colonia penal en la isla de Coiba, creada por el art. 3 de la Ley 41 de 1912, que quedaba a cargo del Poder Ejecutivo.

Mediante la Ley 2 de 1921 (30) se dispuso la construcción de cárceles modelos en las ciudades de Panamá y Colón, terminales del Canal de Panamá en los océanos Pacífico y Atlántico respectivamente, en las que debían ingresar los detenidos procesados cuya prisión decretaren los tribunales y los condenados a penas de arresto y prisión por los tribunales de justicia o las autoridades de policía.

En dichas cárceles debía haber secciones separadas para adultos, mujeres y menores de edad; además, se disponía que la Cárcel Modelo de Panamá debía servir al mismo tiempo como cárcel modelo, reformatorio de mujeres delinquentes y como escuela correccional de menores.

Con el tiempo se dictó la Ley 52 de 1930 (31) en virtud de la cual se ordenó que se estableciera un reformatorio de menores, con dos secciones bien diferenciadas: una para menores de lincentes y otra para menores abandonados o moralmente descarriados.

Posteriormente con la adopción de la Ley 87 de 1941, que copió parte del articulado de la Ley anteriormente señalada en

el capítulo quinto de aquella se derogó la Ley 52 de 1930.

Respecto a las mujeres delincuentes, podemos señalar que el "Centro Femenino de Rehabilitación", regulado según la Ley 4 de 1966 (32), tiene por finalidad servir de lugar para el cumplimiento de penas y medidas de seguridad a que se vean sometidas las mujeres mayores de 18 años, así como el lugar donde se cumple la detención o prisión preventiva en su contra decretada, sea en virtud de orden de los tribunales de justicia, de autoridades de policía o administrativas (33).

C) REGIMEN ACTUAL

Dos son las leyes que en la actualidad regulan la ejecución penal en la legislación panameña:

a) para varones mayores de 18 años, el régimen está previsto en la Ley 87 de 1941;

b) para mujeres mayores de 18 años, la legislación aplicable está contenida en la Ley de 1966.

Para los menores de 18 años, la jurisdicción de menores creada mediante la Ley 24 de 1951, ha establecido un régimen especial a cargo del Tribunal Tutelar de Menores.

Según la Ley 87 de 1941 el internamiento de los sujetos condenados en uno u otro centro penitenciario depende de la duración de las condenas impuestas a los mismos.

A la isla penal de Coiba deben ir los que son condenados a penas de prisión por más de tres años y los que sean condenados a pena de reclusión por cualquier tiempo. Antes se destinaban a ella los condenados a más de tres años de confinamiento, pero esta pena fue derogada del Código Administrativo mediante la Ley 71 de 1938 (34).

Las cárceles provinciales están concebidas para recibir a los condenados a penas de prisión menores de tres años y a los

sancionados a pena de arresto por más de treinta días.

En las cárceles distritoriales deben ingresar los sancionados con pena de arresto menor de treinta días.

Al margen de este marco legal "teórico", la realidad penitenciaria panameña es desesperante. En la práctica el régimen penitenciario existente en el país responde a los dictados de la Guardia Nacional, único instituto armado de la República de Panamá, sin que el Departamento de Corrección tenga conocimiento de lo que ocurre en nuestras cárceles.

Esto explica que a la isla penal de Coiba lleguen sujetos sancionados por autoridades jurisdiccionales o administrativas, con absoluta independencia de la pena impuesta.

Incluso hay en Coiba una gran cantidad de personas sometidas a "detención preventiva", que de esta forma están incomunicadas con sus respectivos abogados defensores que poco pueden hacer al respecto.

Por lo que respecta a la cárcel modelo de la ciudad de Panamá, ésta forma parte integrante de un cuartel de la fuerza pública, siendo frecuente que el Director de la misma ordene el traslado a Coiba de algún detenido o sancionado sin que ello sea del conocimiento de las autoridades pertinentes del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En cuanto a las cárceles provinciales, la situación no difiere sustancialmente de lo antes expuesto, ya que las mismas no existen en forma autónoma sino como parte del complejo militar que aloja a las tropas de la fuerza pública en cada cabecera de provincia. Y si nos referimos a las cárceles distritoriales, la situación no varía radicalmente.

Por lo que respecta al tratamiento penitenciario de los varones mayores de 18 años, la Ley 87 de 1941 no dispone "prác-

ticamente nada". Todo está por hacer en Panamá en lo que a ello respecta.

El trabajo de los sancionados es una mano de obra gratis para el Estado en la Isla Penal de Coiba, en donde se les explota descaradamente, ya que casi todo lo que allí se produce va directamente a los "comisariatos" que la Guardia Nacional mantiene para sus miembros.

Ello ha ocurrido siempre a pesar de que en la Ley 87 de 1941 se establece que los condenados tienen derecho a percibir un salario mínimo que debe estipular el Ejecutivo, del que corresponderá 90% al Estado como retribución por los gastos de alojamiento, alimentación, curación y otros que causen los penados y el 10% restante se depositará a favor de los individuos para cuando recobren su libertad (35). Todo esto es letra muerta.

Por lo que respecta a las mujeres mayores de 18 años, la Ley 4 de 1966 establece que cumplirán su condena o detención en el Centro Femenino de Rehabilitación, si residen en la provincia de Panamá; las sometidas a un mes o más que residen en provincias cercanas a la capital y las superiores a dos meses si se trata de mujeres residentes en provincias alejadas de la capital.

Quizás no sea aventurado señalar que es en este instituto penitenciario donde se utiliza algún método científico en el tratamiento, ya que una población no mayor de unas cien reclusas permite una mejor atención individual:

Lamentablemente esta Ley no hace distinción en cuanto al tratamiento de las reclusas, que se ven sometidas al mismo, siendo que en el Centro Femenino de Rehabilitación hay condenadas por delitos o faltas, detenidas en espera de juicio y algunas sometidas a "medidas de seguridad" (36).

Existe una remuneración económica para las mujeres que

trabajan, pero en términos muy parecidos a las existentes para los varones (37).

La explotación del trabajo penitenciario, en nuestro medio, abarca incluso a las mujeres.

IV. LEGISLACION DE MENORES

A) INTRODUCCION

El propósito de la Ley 24 de 1951 (38), por medio de la cual se crea el Tribunal Tutelar de Menores, es el de asegurar para todo menor de 18 años los cuidados, guía y control que fueren necesarios para su bienestar. Dicha ley es interpretada y aplicada tan liberalmente como sea necesario para asegurar los propósitos señalados.

En ella se establece que los menores bajo la jurisdicción del Tribunal Tutelar de Menores son pupilos del Estado sujetos a la disciplina y protección de éste, el cual deberá intervenir siempre que fuere necesario para ampararlos contra el abandono y cualesquiera otros daños que pueda hacérseles, como también para lograr hacer cumplir las obligaciones que con ellos se relacionen.

La ley se caracteriza por un procedimiento sencillo, carente de mayores formalidades.

Panamá ha sido uno de los primeros países americanos en establecer la jurisdicción de menores. No en vano señalaba JIMENEZ DE ASUA que "La República de Panamá, a pesar de ser joven y, en comparación con otros países de América, de reducida extensión, dispone ya de tribunales tutelares de menores, que no existen en casi ninguna nación hispanoamericana" (39).

La creación de la jurisdicción de menores se debió al esfuerzo personal de la Dra. Clara González de Beringuer, destaca

da abogada, que luchó en favor de los menores panameños y, creado ya el Tribunal, fue designada como primer juez del mismo.

B) ANTECEDENTES

Las primeras disposiciones jurídicas con rango de ley, que nosotros conocemos, que se ocupen de los menores de edad son las contenidas en la Ley 52 de 1930, ya citada, por medio de la cual se mandaba fundar un "reformatorio de menores".

En dicha Ley se facultaba al Ejecutivo para fundar y reglamentar un reformatorio de menores delincuentes y menores abandonados o moralmente descarriados, con el objeto de enmendarlos fortaleciendo su inteligencia y voluntad, y de procurarles conocimientos de utilidad práctica.

El aludido reformatorio constaba de dos secciones: una, para menores delincuentes, a la que eran destinados los sancionados, judicial o policivamente, a penas privativas de libertad (40); la otra, para menores abandonados o moralmente descarriados.

A propósito de los menores sancionados en virtud de resolución judicial o policiva, se disponía que la duración de su internamiento no podía ser menor del término de la pena impuesta - al mismo, pero si podía ser mayor de dicho término.

Una vez que el menor cumplía la pena impuesta, se facultaba al Director del Reformatorio, si fuere necesario, el traslado del menor en cuestión a la otra sección de la institución (41).

Con posterioridad, mediante la Ley 87 de 1941 se derogó la Ley 52 de 1930 pero las disposiciones de la misma pasaron a formar el capítulo V sobre "reformatorio de menores" de la nueva Ley 87 de 1941, sin que se hicieran casi modificaciones al texto de aquella ley que se derogaba.

Luego se dictó en 1942 el Decreto número 467 de ese año (42), que reglamentaba la Ley 87 de 1941, en virtud del cual se creó bajo la dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Departamento de Corrección, el Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, una Clínica Psiquiátrica y se dictaban otras medidas.

El Instituto de Vigilancia y Protección del Niño tenía por objeto tomar bajo su cuidado a todo niño menor de 16 años -aprendido por la policía o cualquiera otra autoridad o por propia iniciativa del Instituto, cuya condición como infractor de la Ley o de algún decreto o reglamento oficial, o como abandonado, indigente o deficiente mental sea de tal naturaleza que ponga en peligro su propia salud física o moral o el bienestar público y haga necesaria la intervención del Estado.

A cargo del Instituto de Vigilancia y Protección del Niño el Decreto 462 creó un "Provisorio de Menores", destinado a recibir y mantener en custodia a los menores que hayan sido confiados al Instituto por autoridad competente y que deban permanecer allí hasta que el estudio de sus respectivos casos fuere realizado y dicha autoridad decidiera el destino de tales menores (43).

C) REGIMEN ACTUAL

Mediante la Ley 24 de 1951 se ha establecido en Panamá una jurisdicción especial para menores, ejercida por el Tribunal Tutelar de Menores, que está encargado de todo lo relacionado con los menores de 18 años cuando se trate de casos sobre desajustes de conducta, de transgresión a las leyes, decretos o reglamentos que aparezcan responsabilidad penal o den lugar a sanción correccional, de los de abandono, indigencia, maltrato, explotación y deficiencia física o mental.

También tiene jurisdicción el Tribunal Tutelar de Menores

"sobre los casos contra adultos acusados de contribuir en alguna forma a la delincuencia juvenil, de faltar al cumplimiento de las obligaciones civiles que las leyes establecen en favor de los menores o de ejecutar actos en perjuicio de los derechos con sagrados en favor de éstos" (44).

De esta forma, los casos de abandono, explotación, maltrato, corrupción o de cualquier naturaleza, en que por la actuación de un adulto la salud física o moral de un menor sea amenazada o atacada, son también de competencia del Tribunal Tutelar de Menores, que les aplicará las sanciones penales o correccionales que correspondan según las respectivas leyes vigentes.

En cuanto a las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores (45), según la ley, éstas pueden ser las siguientes:

a) si se trata de un menor con desórdenes de conducta o transgresor de la Ley, que no mostrare caracteres de peligrosidad, y su familia estuviere en condiciones morales y económicas de responder de él, será devuelto a sus padres bajo las condiciones que estipule el Juez y bajo la vigilancia de la Sección de Investigación y Servicio Social del propio Tribunal;

b) Cuando el menor careciere de padre responsables que puedan cuidar de él, el Juez lo confiará a otro miembro de la familia que esté dispuesto a recibirlo y dé garantías de poderlo atender, y a falta de parientes, será confiado por el tiempo que estime necesario, a una familia honorable de las que figuran en el Registro de Hogares Sustitutos que para tal efecto de be llevar el Tribunal, previa evaluación de tales hogares;

c) si las condiciones físicas, mentales o morales fuesen tales que hicieren necesario someterlo a tratamiento institucional, el Juez de Menores decretará su internamiento en una insti tución de educación o rehabilitación o en un hospital, o en cual

quier otro establecimiento adecuado, que dependa o no del Tribunal, para la recuperación física, mental o moral del menor según las circunstancias (46).

Nada dice la ley aludida, sin embargo, sobre la duración del internamiento del menor, que puede decretarse en forma indefinida con los subsiguientes perjuicios para el menor, "aunque la certeza de su mayoría de edad pueda estimarse como su límite máximo" (47).

Esto, no obstante, es sumamente recusable, pues si bien la ley concede amplias facultades al Juez de Menores, en aras del beneficio y bienestar del menor, esto no significa que puedan desconocerse los derechos del menor bajo el pretexto de su posible protección y tutela (48).

Finalmente, cabe señalar que mediante la Ley 24 de 1951 se creó un "Centro de Observación de Menores", bajo las órdenes directas del Tribunal Tutelar de Menores, en donde éstos puedan cumplir la detención provisional en su contra decretada.

V. LEGISLACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD

A) INTRODUCCION

En los Códigos Penales panameños la única reacción contra el delito lo ha sido siempre la pena. Dichos textos han cargado de un auténtico sistema de medidas de seguridad.

En el Código Penal de 1922 no hay una sola medida de seguridad, entendiendo por tal, las medidas predelictuales; tampoco, ciertamente, las postdelictuales.

Cierto es que el Código vigente consagra en su art. 44 el internamiento del enajenado mental en un "manicomio" (49), pero tal medida no constituye una medida de seguridad, en estricto sentido, como ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el

profesor RODRIGUEZ DEVESA (50), pues se trata de una medida administrativa que debe tomar, en última instancia el Estado, para beneficio de la seguridad tanto del sujeto enajenado como de los ciudadanos en general.

A partir de la vigencia de la Ley 4 de 1966 (51), la situación ha variado en vista de que dicha ley establece que ciertas mujeres mayores de 18 años pueden ser sometidas a un régimen de medidas de seguridad, al ser declaradas "Sujeto de Rehabilitación", estado que se crea con dicha ley.

Fuera de esta ley no ha habido en nuestra legislación un auténtico sistema de medidas de seguridad, a pesar de que mediante la Ley 57 de 1941 (52) se aprobó la legislación "sobre vagancia".

Y es que debemos tener en cuenta que si bien la Ley 57 de 1941 estableció una regulación de la "vagancia", no es menos - cierto que dicha legislación fue configurada como una "falta administrativa" o "contravención", de competencia de las autoridades de policía (53) y juzgadas con el procedimiento establecido en el Código Administrativo bajo la denominación de "procedimiento correccional" de policía que tiene señalado un procedimiento verbal de carácter sumario (54).

Por otra parte, la Ley 15 de 1961 (55) que sustituyó a la Ley 57 de 1941 (56) no ha variado la calificación de "falta" o "contravención" de tal situación.

B) REGIMEN ACTUAL

En virtud de lo dispuesto en la Ley 4 de 1966 se ha creado un estado denominado "Sujeto de Rehabilitación", mediante el cual se puede ordenar el internamiento de algunas mujeres mayores de 18 años, por un tiempo indeterminado que no será menor de seis meses ni mayor de dos años.

Se trata en consecuencia, de un régimen de medidas aplicables única y exclusivamente a las mujeres mayores de 18 años. No hay en esta ley, ni en otra, ninguna disposición similar para los varones.

Para poder ser una mujer mayor de 18 años declarada "sujeto de rehabilitación" es menester que la misma se encuentre comprendida en alguno de los siguientes supuestos (57):

a) las dipsómanas y toxicómanas, que se embriaguen o intoxicquen en lugares públicos, y aún en lugares privados, cuando en ese estado alteren el orden y constituyan un peligro para los demás;

b) las mujeres públicas o de reconocida mala vida que se dediquen a prácticas de desenfreno o libertinaje;

c) las proxenetas, las que promuevan, favorezcan, faciliten la prostitución o la corrupción;

d) las que explotan, directa o indirectamente, la prostitución, participando de los beneficios de este tráfico o haciendo de él su modo de vivir;

e) las que siendo aptas para trabajar, vivan habitualmente de la mendicidad ajena, explotando a menores, enfermos o lisiados e instigándoles a mendigar;

f) las que de cualquier manera y en forma habitual promuevan o favorezcan la embriaguez de menores de edad.

El encontrarse en alguno de estos supuestos no es suficiente, sin embargo, para que una mujer sea declarada "sujeto de rehabilitación". Se requiere además, que haya sido condenada anteriormente en tres ocasiones por la misma causa y que en la cuarta, la autoridad que la juzga aprecie su situación y prefiera no imponer la pena correspondiente por el hecho de que se acusa y proceda a declararla como "sujeto de rehabilitación" acree-

dora a la medida de internamiento en el Centro Femenino de Rehabilitación (58).

Aunque esta exigencia de tres condenas previas hace difícil la aplicación de esta Ley, el hecho de que también se exija que entre las cuatro condenas no haya transcurrido más de dos años hace prácticamente imposible la aplicación de la misma ley.

Por otra parte, resulta extraño que la mayoría de los sujetos que pueden fundamentar la declaratoria de "sujeto de rehabilitación" no supongan la comisión de algún hecho delictivo, salvo la referencia al proxenetismo que si constituye delito según el Código Penal Vigente, sino a lo sumo podrían constituir una "falta" o "contravención".

En cuanto al tratamiento a que están sometidas las internas del Centro Femenino de Rehabilitación, en la ley no se distingue el correspondiente para las mujeres penadas, del señalado para las detenidas preventivamente o del previsto para las mujeres declaradas "sujeto de rehabilitación". A este respecto sólo se señala que "se organizará el trabajo de las internas, armonizando los programas educativos y correccionales con el mayor rendimiento económico en las labores que se realicen" (59).

Como remuneración económica se establece una compensación que oscila entre diez y veinticinco centésimos de balboas (equivalente a unas 7 y 19 pesetas) por cada día de trabajo en alguno de los talleres del Centro, sin perjuicio de establecer un porcentaje adicional si el rendimiento económico de la institución, por razón del trabajo efectuado, así lo permite (60).

Existe en el Centro un "Comité de Clasificación y Estudio" de casos que se encarga de la revisión de los casos de las internas declaradas "sujeto de rehabilitación" para los efectos de la suspensión o extinción de la medida de seguridad impuesta,

al que las internas pueden recurrir para la revisión de su respectivo caso una vez transcurrido por lo menos seis meses desde que se las declaró "sujeto de rehabilitación".

Aunque el Centro persigue la "rehabilitación" de las mujeres sometidas a tal tratamiento, los resultados apetecidos no han sido obtenidos. En gran medida ello se debe a las deficiencias intrínsecas de la ley que hemos señalado y a la falta de re cursos para el desarrollo de la labor deseada.

NOTAS

- (1) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 154
- (2) RODRIGUEZ MOURULLO, p. 167.
- (3) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 229
- (4) Ley 32 de 26 de febrero de 1913. Publicada en la Gaceta Oficial número 1892, de 17 de marzo de 1913.
El Código Judicial es el cuerpo de leyes que contiene las disposiciones relativas a "Procedimiento civil" (Libro II) y "Procedimiento penal" (Libro III).
- (5) C.P. 1916, art. 8.
- (6) C.P. 1916, arts. 11 y 12.
- (7) Recordemos que en el Código Penal de 1922 todos los títulos del Libro Primero carecían de subdivisiones.
- (8) Ley 44 de 22 de noviembre de 1930. Publicada en la Gaceta Oficial número 5396, de 29 de diciembre de 1930.
- (9) Ley 44 de 1930, arts. 1 y 2.
- (10) Ley 75 de 14 de junio de 1904. Publicada en la Gaceta Oficial número 32, de 30 de junio de 1904.
- (11) Ley 5 de 26 de enero de 1907. Publicada en la Gaceta Oficial número 407, de 27 de enero de 1907.
- (12) Ley 46 de 28 de enero de 1911. Publicada en la Gaceta Oficial número 1352, de 16 de febrero de 1911.
- (13) Ley 16 de 27 de septiembre de 1928. Publicada en la Gaceta Oficial número 5380, de 6 de octubre de 1928.
- (14) Ley 40 de 20 de noviembre de 1930. Publicada en la Gaceta Oficial número 5876, de 2 de diciembre de 1930.
- (15) Ley 41 de 20 de noviembre de 1930. Publicada en la Gaceta Oficial número 5876, de 2 de diciembre de 1930.

- (16) Aprobada mediante la Ley 4 de 27 de septiembre de 1938. Publicada en la Gaceta Oficial número 7881, de 5 de octubre de 1938.
- (17) Ley 44 de 1930, art. 3.
- (18) La Ley 44 de 1930 hace la distinción de panameños por nacimiento y panameños por adopción, que resulta incompatible con nuestro actual Derecho Constitucional, que otorga la misma consideración a ambos, salvo las restricciones que en la propia Constitución se señalan.
- (19) En la propia ley se señala que no se reputará como delito político ni como hecho conexo, el homicidio o asesinato del Jefe del Estado reclamante o cualquiera persona que en él hubiera ejercido autoridad pública al tiempo de ser víctima-do.
- (20) Ley 44 de 1930, art. 5.
- (21) Ley 44 de 1930, art. 14.
- (22) Ley 44 de 1930, art. 7.
- (23) Ley 87 de 1 de julio de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8559, de 19 de julio de 1941.
- (24) El art. 35 de la Constitución de 1941, que se desarrolla con la presente ley disponía: "Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por tanto, es prohibido toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos".
- (25) El art. 64, sin embargo, disponía que la ley regiría a partir de su promulgación y deroga, además, numerosas disposiciones legales anteriores.
- (26) Ley 41 de 13 de diciembre de 1912. Publicada en la Gaceta Oficial número 1838, de 13 de diciembre de 1912.
- (27) Código Administrativo, arts. 1680 y 1685.
- (28) Código Administrativo, arts. 1680 a 1685.
- (29) Ley 44 de 20 de mayo de 1919.

- (30) Ley 2 de 28 de enero de 1921. Publicada en la Gaceta Oficial número 3543, de 9 de febrero de 1921.
- (31) Ley 52 de 9 de diciembre de 1930. Publicada en la Gaceta Oficial número 5899 de 5 de enero de 1930.
- (32) Ley 4 de 17 de enero de 1966. Publicada en la Gaceta Oficial número 15.541, de 21 de enero de 1966.
- (33) En los últimos años el número de sus internas se ha visto incrementado en vista de que allí se mantienen bajo custodia a mujeres detenidas por órdenes del "Departamento de Migración", para luego ser expulsadas o deportadas del país.
- (34) Ley 71 de 30 de diciembre de 1938. Publicada en la Gaceta Oficial número 7943, de 19 de enero de 1939.
- (35) Ley 87 de 1941, art. 8.
- (36) Ley 4 de 1966, art. 13.
- (37) Ley 4 de 1966, art. 14.
- (38) Ley 24 de 19 de febrero de 1951. Publicada en la Gaceta Oficial número 11.433 de 9 de marzo de 1951.
- (39) JIMÉNEZ DE ASUA, p. 1120.
- (40) La ley en cuestión aludía expresamente a penas "restrictivas" de la libertad, aunque en estricto sentido se trate de penas privativas de libertad.
- (41) Ley 52 de 1930, art. 8.
- (42) Decreto número 467 de 22 de julio de 1942. Publicado en la Gaceta Oficial número 8862, de 24 de julio de 1942.
- (43) Decreto 467 de 1942, art. 24.
- (44) Ley 24 de 1951, art. 24.
- (45) Ley 24 de 1951, art. 12.
- (46) Ley 24 de 1951, art. 12, literal 3).

- (47) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Las infracciones de menores en Panamá" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1979, N.º.14, p. 113
- (48) Cf. Esteban RIGHI, "Defensa social y menores infractores", Ponencia presentada a las Terceras Jornadas Latinoamericanas de Defensa Social, celebradas en la Ciudad de México 3-7 de diciembre de 1979.
- (49) C.P. 1922, art. 44: "No estará sujeto a pena el que ejecute el acto violatorio de la ley penal a tiempo que sus facultades mentales estaban debilitadas o trastornadas por causa de enfermedad, de tal suerte que carezca de discernimiento o de conciencia y libertad en sus actos.

"En este caso el tribunal suspenderá el procedimiento criminal y hará que se someta al sindicado a observación científica en un manicomio, con las seguridades debidas, hasta por un año, después de lo cual se resolverá sobre la responsabilidad; pero en ningún caso se dejará libre al que - haya sido declarado en estado de enajenación, cuando se reputa peligroso".
- (50) José María RODRIGUEZ DEVESA, "Las medidas de seguridad", en ACTAS, ps. 97 y sgts. (especialmente p. 104); el mismo, "Alegato contra las medidas de seguridad en sentido estricto" en Anuario, Tomo XXXI (1978), ps. 5 y sgts.
- (51) Ley 4 de 17 de enero de 1966, Publicada en la Gaceta Oficial número 15.541, de 21 de enero de 1966.
- (52) Ley 57 de 30 de mayo de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8530, de 9 de junio de 1941.
- (53) Cf: Capítulo I, Título V, Libro III del Código Administrativo.
- (54) Dicho procedimiento es utilizado por los "corregidores", "jueces nocturnos", "alcaldes" y "gobernadores" entre otros.
- (55) Ley 15 de 25 de enero de 1961. Publicada en la Gaceta Oficial número 14.333, de 20 de febrero de 1961.
- (56) La Ley 112 de 30 de diciembre de 1974 (publicada en la Gaceta Oficial número 17.769, de 28 de enero de 1975) derogó la ley 15 de 1961.

(57) Ley 4 de 1966, art. 1º.

(58) Ley 4 de 1966, art. 2º.

(59) Ley 4 de 1966, art. 13.

(60) Ley 4 de 1966, art. 14.

Capítulo Quinto

LA LEGISLACION ESPECIAL

- I. INTRODUCCION
- II. LEGISLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA
- III. LEGISLACION EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL HONOR
- IV. LEGISLACION SOBRE USURA
- V. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO
- VI. LEGISLACION SOBRE CHEQUES SIN FONDOS
- VII. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
- VIII. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

I. INTRODUCCION

Con el presente capítulo deseamos presentar una panorámica del estado de la legislación especial que coexiste con el Código Penal de 1922, actualmente vigente.

Nuestra intención es presentar a continuación el estado de dicha legislación y exponer cual fue la legislación que al respecto existió con anterioridad a la que hoy tenemos.

Para la realización de este estudio no ha sido posible hacer uso de casi ninguna fuente doctrinal, salvo varios artículos de la profesora GUERRA DE VILLALAZ, toda vez que casi todas las leyes mencionadas, derogadas o vigentes, no han sido objeto de estudio por parte de los autores patrios.

Claro está que esta situación se debe a que no ha habido en el país una verdadera doctrina nacional hasta la década de los años 70 encabezada por los profesores MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ.

En las ocasiones en que ha sido estrictamente necesario hemos recurrido a la doctrina española para exponer diversas cuestiones íntimamente relacionadas con la legislación bajo examen.

La falta de estudios doctrinales sobre la legislación mencionada ha hecho más difícil esta exposición, por lo que en distintas ocasiones nos limitamos a señalar el contenido y alcance de la legislación especial vigente, dejando de lado cualquier comentario adicional.

II. LEGISLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA

A) INTRODUCCION

En relación con los delitos contra la salud pública, -

existen dos aspectos de importancia que han sido objeto de especial atención por el legislador patrio: a) los delitos en materia de drogas y, b) el delito de contagio venéreo.

El Código Penal panameño, vigente a partir del 17 de enero de 1923, no regula las infracciones en cuestión, por lo que estas leyes especiales al crear nuevos delitos lo que hacen es llenar un vacío existente en aquella época, aunque en materia de drogas ya existía una regulación de algunos aspectos en el Código Administrativo y en la legislación relativa a la importación y comercio del opio, cocaína y sus derivados o similares.

B) LOS DELITOS EN MATERIA DE DROGAS

1. Antecedentes legislativos

Las primeras disposiciones penales en materia de "drogas" reguladas en forma integral las encontramos en la Ley 19 de 1923 (1), aunque ya desde 1916 se disponía algo al respecto en el Código Administrativo y en la Ley 19 de 1916 (2).

Decimos esto toda vez que es partir de la Ley de 1923 cuando aparece por primera vez en nuestra legislación la incriminación de una serie de conductas relacionadas con la cannabis y sus similares, que en Panamá es conocida bajo la extraña denominación de "XAN-JAC", aunque más recientemente ha variado la forma de escribirla por "CAN-YAC".

Con posterioridad, mediante la Ley 64 de 1928 (3) se aumentaron considerablemente las penas previstas en la Ley 19 de 1923 y se derogan las alusiones a la cannabis contenidas en la referida ley.

De esta forma, la Ley 64 de 1928 despenaliza las conductas relacionadas con la cannabis que es identificada concretamente como cannabis indica.

Esta situación no duró mucho, no obstante, toda vez que mediante la Ley 32 de 1934 (4) se estableció nuevamente la incriminación de las conductas relacionadas con la hierba cannabis indica, para aquella fecha todavía conocida en Panamá como "Kan-Jac". Como sanciones se establecieron las mismas previstas en la Ley 64 de 1928 para las conductas relativas a drogas.

Desde 1934 la situación se torna notablemente represiva en esta materia hasta que en 1937 se dicta la Ley 20 (5) de ese año que atenúa notablemente las penas previstas para las conductas relacionadas con la cannabis y remite su sanción -no ya a los jueces- a los Alcaldes Municipales.

En 1941 se dicta la Ley 57 (6) de ese año, por medio de la cual se regula la "vagancia" en la República de Panamá; esta Ley modifica la legislación hasta ese momento vigente a propósito de la cannabis indica, de modo que a partir de su vigencia se considera como vago a los que introduzcan, expendan, usen, posean o transporten la hierba "Kan-Jac".

Dicha Ley establece que los vagos serán sancionados de la siguiente forma:

- a) por la primera vez, con arresto de quince días a seis meses;
- b) por la segunda vez, con trabajo en obras públicas de un mes a un año;
- c) por la tercera vez, con confinamiento por tres años en la Isla Penal de Coiba.

A los pocos días de dictada la ley antes mencionada se dicta la Ley número 59 (7) de ese año por medio de la cual se establecen penas por la posesión, uso y tráfico ilícito de drogas heroicas.

Para esta fecha, las dos leyes antes señaladas eran las

que regulaban todo lo relativo a las drogas en nuestro país: en la Ley 57, sobre vagancia, todo lo relacionado con la cannabis, mientras que en la Ley 59 lo relativo a las drogas llamadas "heroicas" tales como la cocaína y sus similares, opio y sus derivados, la morfina y en general cualquier sustancia que haya adquirido la calidad de venenosa por su mezcla, alteración o corrupción. (8).

Con posterioridad la entrada en vigencia del Código Sanitario (9) en 1947 trae una modificación que afecta únicamente a la cannabis, al disponer que los que "introduzcan, expendan, usen, posean o transporten la hierba can-yac (cannabis indica)" serán sancionados con las penas establecidas en la Ley 59 de 1941 para los que introduzcan, expendan, usen, posean o transporten las drogas que allí se sancionan (10).

Expresamente dispone el Código Sanitario la derogación de la ley de vagancia en lo relativo a la hierba en cuestión, desde ahora en adelante denominada por las leyes sucesivas como "can-yac".

A partir de este momento, la legislación penal no hará distinción alguna a propósito de las drogas, imponiendo idéntica pena para las mismas conductas con absoluta independencia de la clase de droga utilizada, sea cocaína, opio, morfina, heroína o cannabis.

Para concluir este apartado debemos señalar que mediante la Ley 23 de 1954 (11), se estableció una nueva regulación de los delitos sobre drogas, abarcándose también la regulación del "can-yac" que se menciona siempre, al igual que en las leyes anteriores, como cannabis indica (12).

Esta ley incrimina numerosas conductas relacionadas con las drogas, pero al no mencionar nada respecto al delito de "po-

sesión" ha dejado vigente dicha regulación en la Ley 59 de 1941 que ha quedado derogada tácitamente en casi su totalidad.

2. Legislación vigente

En la actualidad tres son las leyes vigentes en materia de drogas en Panamá. Todas son de distintas fechas y regulan esta materia complementariamente entre sí, debido -fundamentalmente- a una defectuosa técnica legislativa.

La más importantes es la Ley 23 de 1954, por medio de la cual se reglamenta la importación, manejo y uso de las drogas enervantes, estupefacientes o narcóticos y productos de patente que las contengan y se disponen sanciones para los infractores de las mismas. Esta ley derogó tácitamente numerosos preceptos de la ley anterior, la Ley 59 de 1941, pero dejó vigente alguno.

El Código Sanitario establece una serie de conductas delictivas, pero remite a la Ley 59 de 1941 para establecer la sanción correspondiente.

Finalmente, en la Ley 59 de 1941, derogada en su mayor parte por la Ley 23 de 1954, se encuentra la regulación vigente del delito de "posesión" de drogas, que no aparece en la Ley 23 de 1954.

El estado actual de la legislación vigente en esta materia, en nuestra opinión, es el siguiente:

- a) siembra o cultivo de "can-yac" Art. 12, Ley 23 de 1954
- b) producción de drogas Art. 12, Ley 23 de 1954
- c) suministro (tráfico) de "can-yac" y de drogas Art. 32, Ley 23 de 1954
- d) convenir en recibir "can-yac" o drogas Art. 32, Ley 23 de 1954
- e) uso indebido de "Can-yac"

o de drogas	Art. 4º, Ley 23 de 1954
g) posesión de "can-yac"	Art. 195, Ley 66 de 1947 en relación con el art. 1º Ley 59 de 1941.
f) posesión de drogas	Art. 1º, Ley 59 de 1941.

3. Consideraciones críticas

Existen numerosas cuestiones relevantes que mencionar cuando se intenta formular alguna opinión crítica sobre nuestra legislación en materia de drogas.

Sin desconocer este hecho, no obstante, deseamos centrar nuestra atención en cuatro aspectos, para nosotros fundamentales, que exponemos a continuación:

a) Nuestra legislación da idéntico tratamiento jurídico-penal a todas las drogas, lo cual carece de fundamento, y es que no todas las sustancias consideradas como "drogas" tienen la misma capacidad de producir una alteración en el organismo humano o en algunos los efectos que se producen son menos graves. Es por ello que debiera distinguirse entre la cannabis y sus derivados, por un lado, del resto de las sustancias cuyo uso y comercio está prohibido por el legislador (13).

Además hay que tener en cuenta que, por el momento, no se ha demostrado que la cannabis sea perjudicial para el ser humano o pueda ser considerada necesariamente como la antesala a las llamadas "drogas duras" (14).

b) En cuanto a la elevación a la categoría de delito autónomo de la "mera tenencia" o "posesión" de drogas, la doctrina moderna aboga por la total impunidad de la tenencia para uso personal, ya que de otra forma se estaría sancionando con una pena el consumo de drogas (15).

Y es que son numerosas las legislaciones que al sancionar la "simple tenencia" no distinguen entre "tenencia para uso personal" y "tenencia para el tráfico", con lo que se producen en la práctica soluciones del todo injustas (16).

c) Por lo que respecta a la sanción que debe imponerse a los "usuarios" de drogas, la ley establece que les cabe una medida de seguridad, más nunca una pena.

Dicha medida, señala la norma, durará todo el tiempo que sea necesario para la recuperación del sujeto

A diferencia de las penas, en donde es el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia quien determina el lugar donde deben cumplirse dichas sanciones, en este caso corresponde al Departamento Nacional de Salud Pública señalar el establecimiento de salud correspondiente para el tratamiento del sujeto sometido a la medida de seguridad.

No existe en nuestro país, sin embargo, ningún establecimiento especializado para el tratamiento de la farmacodependencia, a pesar de que en la misma Ley 23 de 1954 se señalaba la necesidad de crear centros de dicha naturaleza. Esta situación ha producido notables problemas en el tratamiento de la farmacodependencia, toda vez que ha sido necesario recluir a los farmacodependientes que están necesitados de internamiento y vigilancia permanente, en los hospitales de salud mental, con los consiguientes perjuicios que ello supone.

En última instancia, nos atrevemos a señalar, la medida de seguridad prácticamente se convierte en una pena impuesta a un enfermo necesitado de tratamiento ya que se les condena por "posesión" y se les interna en prisión.

d) Por lo que respecta a la penalidad prevista para estos delitos, debemos señalar el carácter claramente represivo de es-

ta legislación que llega incluso a fijar para la mayoría de dichas conductas una pena que en su límite mínimo coincide con la establecida para el homicidio simple, aunque no haya igualdad en la jerarquía de los valores que se dicen proteger.

En cuanto a las penas el legislador panameño no solo ha aumentado considerablemente las mismas para estos delitos, sino que, además, en la misma Ley 23 de 1954 señala expresamente el lugar donde el condenado por estas conductas deberá cumplir su pena: la isla penal de Coiba. Se trata, sin dudas, de una ley muy excepcional, por cuanto que no es usual que el legislador al señalar la sanción correspondiente para los delitos, establezca el lugar donde el sujeto deberá cumplir la sanción que se le impone.

No creemos que el legislador haya pretendido asumir las funciones de competencia del Ejecutivo, Por el contrario, estimamos que el legislador persigue una finalidad distinta y concreta: con tal actitud el legislador panameño advierte al público en general acerca de la gravedad con que se sancionan las conductas antes señaladas como delictivas, pues de esta forma pretende "intimidarse" más eficazmente a los posibles transgresores del orden jurídico.

Hacemos esta afirmación toda vez que "Coiba" es una isla situada en el Océano Pacífico frente a las costas de la provincia de Veraguas y a la que sólo se puede llegar por barco o aeronave y de la que es imposible escapar "a nado", por la distancia que la separa de la tierra firme y, fundamentalmente, por la gran cantidad de "tiburones" que existen en los alrededores.

Así pues, aunque en realidad no hay "cerca ni reja", el mar funciona como una barrera natural. La existencia de Coiba nos recuerda los relatos de ALEJANDRO DUMAS en una muy conocida obra suya.

C) LOS DELITOS DE CONTAGIO VENEREO Y NUTRICIO

I. Introducción

Mediante la Ley 53 de 1930 (17) el legislador panameño

elevó a la categoría de delito el contagio venéreo y nutricio.

Las figuras relacionadas con el contagio venéreo sancionan el hecho de exponer a otro al peligro de contagio venéreo; el contagio nutricional, por el contrario, adopta dos modalidades diversas: ocasionar el contagio de una nodriza a quien se le encarga la crianza de un niño enfermo o transmitir una enfermedad contagiosa al niño que se le encarga para su cuidado.

Veamos, a continuación, cada uno de dichos delitos.

2. Contagio venéreo

Con anterioridad a la presente ley, las figuras relacionadas con el contagio venéreo no existían a nivel penal.

Para la configuración del delito en cuestión, el legislador panameño exige que el sujeto activo del delito exponga a otro al peligro de contagio venéreo.

El legislador sanciona la simple exposición al contagio venéreo, aunque no se produzca contagio alguno. Estamos, en consecuencia, ante un típico "delito de peligro".

La forma como se produce la exposición al peligro carece de importancia, ya que la norma no enumera taxativamente la forma como dicha exposición al contagio puede producirse, ya que señala que puede ser a consecuencia de una "relación sexual" o de cualquier otro modo.

En la ley encontramos tanto la incriminación de la modalidad dolosa como la culposa: la primera es sancionada con un año de prisión o quinientos balboas de multa; la segunda, con cuatro meses de prisión o doscientos balboas de multa.

3. Contagio nutricional

Cuando del contagio nutricional se trata, la ley exige que se produzca un contagio cierto.

En este delito se sanciona el hecho de producir un conta

gio a la nodriza como resultado de haber puesto al cuidado de ella un niño lactante que posea una enfermedad contagiosa, o por transmitir la nodriza el contagio al niño que cuida.

Ambas modalidades sancionan la producción de un resultado determinado, independientemente de que haya o no voluntad dirigida a ello.

Para ambas modalidades delictivas la ley en cuestión señala como sanción una multa de doscientos balboas o arresto equivalente (18).

III. LEGISLACION EN MATERIA DE DELITOS CONTRA EL HONOR

A) INTRODUCCION

En Panamá se han dictado numerosas leyes especiales para regular todo lo relacionado con los delitos contra el honor.

No se crea, sin embargo, que siempre estos delitos han estado regulados en leyes especiales, pues el Código Penal de 1922 los incluyó dentro de su Libro II.

En efecto, dicho Código incluyó los delitos contra el honor en el Título XII relativo a los delitos contra las personas, Capítulo VII denominado "de la calumnia y de la injuria" (19).

De esta forma el Código vigente adoptaba la regulación que traía el Proyecto colombiano de 1912, que a su vez la había tomado del Código italiano de 1889, aunque le añadió al Capítulo en cuestión otras disposiciones que excedían de la regulación contenida en el texto colombiano.

B) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

1. La Ley 80 de 1941

Luego de haber sido sustituida la Constitución de 1904

por la de 1941, se inicia una etapa legislativa a fin de desarrollar numerosos temas consagrados en la nueva Constitución, faltos de una adecuada regulación a tono con la citada Ley Fundamental del Estado Panameño (20).

La Ley 80 de 1941 (21) no sólo regula lo relativo a los delitos de "calumnia e injuria" sino que además, contiene una serie de disposiciones de carácter procesal de notables implicaciones.

La calumnia está concebida como la imputación de un hecho determinado, pero falso, que se hace a otra persona y del cual, si fuera verdad, resultaría el calumniado sancionado penalmente o por el contrario, sometido a deshonor, odiosidad o desprecio (22).

En cuanto a la injuria, se entiende que es toda expresión proferida en deshonor, descrédito o menosprecio de alguna persona (23).

Para la iniciación de la instrucción sumarial correspondiente la ley requiere la interposición de "acusación particular" por parte de la persona agraviada, salvo que la ofensa se cometa en contra de un funcionario público por razón de sus funciones.

Se establece que el conocimiento de los delitos en cuestión corresponde a las autoridades judiciales o, alternativamente, a los Alcaldes del Distrito Municipal, siendo el agraviado el que debe escoger la vía de su preferencia.

Por lo que respecta a las sanciones, se establecen dos sanciones distintas, según la vía que haya escogido el agraviado: si los delitos se llevan a los jueces ordinarios (Órgano Judicial) la sanción en caso de calumnia es de cincuenta a quinientos balboas de multa; por el contrario, cuando es el Alcalde del

Distrito quien conoce de la calumnia, la multa es de diez a cincuenta balboas de multa y en el caso de injuria, la multa es de cinco a veinticinco balboas.

2. Decreto de Gabinete 343 de 1969

La Junta Provisional de Gobierno que se instauró en el poder, como consecuencia del golpe de Estado que derrocó al Presidente de la República, el día 11 de octubre de 1968 hasta el 10 de octubre de 1972 dictó el Decreto de Gabinete número 343 de 1969 (24), mediante el cual se modificó la legislación hasta ese entonces vigente en materia de libertad de expresión.

Este Decreto de Gabinete reguló todo lo relativo a la expresión de opiniones y en general la transmisión pública del pensamiento, manifestado verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, de modo que afectó notablemente la regulación de los delitos de calumnia e injuria cuando se cometieran con publicidad y concedió a las autoridades administrativas la competencia para el juzgamiento de estas infracciones.

El Decreto de Gabinete en cuestión dedicó su capítulo IV al "Delito contra la Reputación o la honra de las personas" (sic).

Se reputa como calumnia en este Decreto de Gabinete la imputación de un delito determinado pero falso, que pueda perseguirse de oficio; la calumnia propagada con publicidad -solo sancionaba esta clase de calumnia- se penaba con reclusión de seis meses a un año y una indemnización no menor de quinientos ni mayor de mil balboas.

A propósito de la injuria, señalaba que debía entenderse por tal toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona; distinguía las injurias graves de las leves y señalaba que las injurias graves hechas -

con publicidad se sancionaban con pena de reclusión no menor de tres meses ni mayor de seis e imponía una indemnización no menor de doscientos cincuenta balboas ni mayor de dos mil quinientos; las injurias leves hechas con publicidad se sancionaban con pena de uno o dos meses de reclusión y una indemnización no menor de cincuenta balboas ni mayor de quinientos (25).

Teniendo en cuenta la distinción entre injurias graves e injurias leves, el Decreto de Gabinete en cuestión señalaba que se consideraban como injurias graves: a) la imputación de un hecho punible de los que no dan lugar a procedimiento de oficio; b) la imputación de un hecho punible ya penado o respecto del cual estuviere prescrita la acción penal; c) la imputación de un vicio o falta de moralidad que pudiera perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado; d) las que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas; y, e) las que racionalmente merezcan la calificación de graves atendiendo el estado, dignidad o circunstancias del ofendido y del ofensor (26). Por lo que respecta a las "injurias leves" nada decía el Decreto de Gabinete, aparte de lo antes señalado.

Como quiera que este Decreto de Gabinete dedica exclusiva atención a las calumnias e injurias hechas con publicidad, éstas o aquellas se reputaban propagadas o hechas con publicidad, cuando se hace por medio de periódicos o de otros papeles impresos, litografiados o grabados, por carteles, lienzos o pasquines exhibidos o fijados en lugares públicos, por cartas o escritos - comunicados a más de dos personas, por palabras proferidas en público delante de una reunión que no sea propiamente familiar, o por medio de radiodifusión, televisión o cualquier otro medio de comunicación en masa (27)

Se señala, además, que se reputaba como cometido en el territorio de la República de Panamá la calumnia o injuria publicada por medio de periódicos extranjeros o transmitida por medio de estaciones de radiodifusión o televisión desde el extranjero, siempre que hubiere circulado el periódico o se hubiere recibido la transmisión en Panamá (28).

Complementariamente a esto, podían ser procesados en Panamá por estos delitos los que desde el territorio nacional hubieren enviado material calumnioso o injurioso, o dado orden para su publicación o transmisión, o contribuido a que se reciban o expendan en Panamá los periódicos o transmisiones por medio de los cuales se cometió el hecho punible (29).

Al margen de lo antes señalado, nos interesa destacar que en este caso nos encontramos no ante un "delito" propiamente dicho, sino ante una "falta" administrativa cuyo juzgamiento corresponde a las autoridades administrativas.

Es sumamente criticable, en consecuencia, que dichas autoridades estén facultadas para imponer penas privativas de libertad, pues su actuación está sometida, muy frecuentemente, a las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos.

C) LEGISLACION VIGENTE

Mediante la Ley 8 de 1978 (30) el Consejo Nacional de Legislación (31) dictó una nueva regulación "sobre los delitos de calumnia e injuria", poniendo fin a una etapa de represión por parte del Gobierno Nacional contra los opositores políticos que desde el 11 de octubre de 1968 se manifestaban, por los medios a su alcance, contra los militares.

Esta nueva legislación se debió fundamentalmente a las exigencias del Presidente de los Estados Unidos de América, señor James E. Carter, en el sentido de que el Gobierno panameño

debía propiciar una mayor democratización del país antes de que el Senado norteamericano iniciara el estudio del nuevo Tratado del Canal suscrito entre el General Omar Torrijos Herrera, Comandante Jefe de la Guardia Nacional, y el propio Presidente Carter el día 7 de septiembre de 1977 y ratificado en 1978 por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos de Panamá y el Senado de Estados Unidos.

La ley vigente sigue muy de cerca los lineamientos contenidos en la Ley 80 de 1941 que reguló los delitos de calumnia e injuria.

Señala que la calumnia consiste en la imputación falsa a otro de un delito perseguible de oficio; la sanción prevista para tal delito es de uno a seis meses de prisión o multa de cincuenta a mil balboas. Dispone que es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona; la sanción prevista en este supuesto es de quince a noventa días de prisión o multa de diez a quinientos balboas (32).

Si la calumnia o la injuria se cometen utilizando algún medio de comunicación social, la ley en cuestión prevé un aumento de pena de una cuarta parte a la mitad de la que correspondería.

Corresponde a los Jueces de Circuito y a los Alcaldes de Distrito el conocimiento de los delitos de calumnia e injuria, correspondiéndole a la parte agraviada la facultad de escoger la vía que prefiera.

Excepcionalmente, sin embargo, la competencia será exclusiva de los jueces de circuito, si la calumnia o la injuria se hacen a través de un medio de comunicación social.

Cuando la ofensa se dirija contra un funcionario público

en razón de sus funciones, la investigación sólo requiere "denuncia" del agraviado; por el contrario, cuando se trata de un particular el ofendido, se requiere la interposición de "acusación particular".

Las sanciones señaladas anteriormente no impiden que el ofensor sea obligado a pagar una indemnización al ofendido, cuando éste así lo solicite, que será establecida previo dictamen de dos peritos designados por las partes.

Siempre que el procesado así lo consienta, el desistimiento del ofendido extingue el proceso iniciado.

IV. LEGISLACION SOBRE USURA.

Mediante la Ley 5 de 1933 (33), por medio de la cual se reforma el Código Penal de 1922, se creó en Panamá el "delito de usura".

La ley en cuestión, sin embargo, no es una ley especial en estricto sentido, pues de los 10 artículos que la integran, los ocho primeros modifican otros tantos del Código Penal.

Se trata, en consecuencia, de una ley que reforma el Código Penal, aunque en el art. 9 se crea una nueva figura delictiva que no tiene antecedentes en nuestra legislación.

El artículo en referencia señala lo siguiente: "Desde la vigencia de esta Ley serán penados con tres meses de reclusión los agiotistas o prestamistas a quienes se les compruebe que presten dinero con más de dos por ciento mensual".

Esta disposición no ha tenido casi aplicación en nuestro medio y no hemos encontrado ni tenemos conocimiento de que alguien haya sido condenado en base a este delito.

Por otra parte, en Panamá la "comisión Bancaria Nacional" es la entidad oficial que se encarga fijar el límite máximo de -

los intereses bancarios y en la actualidad dicho límite máximo no existe.

Esto se debe, en gran medida, a que Panamá se ha convertido en un Centro Financiero Internacional en donde los intereses son libres y se pactan siempre en una cantidad no menor a la existente en los mercados internacionales.

Es lógico, por tanto, que si el "prime rate" estipulado por los bancos más grandes del mundo sube, en Panamá a los bancos panameños el dinero extranjero les cuesta más caro y tengan que cobrar intereses que oscilen por encima del "prime rate" citado.

V. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO.

A) INTRODUCCION

Luego de concluida la 2ª Guerra Mundial en 1945 la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo panameño, mientras discutía el Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión designada para tal fin, dictó una serie de Decretos Legislativos, equivalentes a leyes formales, mediante los cuales reguló una amplia gama de aspectos de importancia para el momento que se vivía en el país.

La Asamblea Constituyente no se limitó únicamente a aprobar una nueva Constitución, la que empezó a regir el 1º de marzo de 1946, sino que además mediante los aludidos Decretos Legislativos legisló durante el breve período de su existencia.

Fruto de esa actividad legislativa es el Decreto Legislativo 11 de 1945 (34), por medio del cual se señalan penas especiales para los delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo y otros cometidos contra los poderes constituidos de la Nación y

su forma democrática de Gobierno.

La intención del constituyente-legislador fue la de declarar punibles una serie de conductas que no estaban contenidas en el Código Penal de 1922 y, por otra parte, endurecer aún más las sanciones establecidas para algunas figuras ya existentes.

El Decreto Legislativo entró a regir a partir de su sanción, hecho ocurrido el día 14 de noviembre de 1945 y debía regir hasta tanto se dictara el nuevo Código Penal en preparación, según disponía expresamente el art. 7 del mencionado Decreto.

Lo antes señalado es una excepción en nuestro ordenamiento, toda vez que las disposiciones jurídicas, generalmente, sólo rigen a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

No está demás señalar que el Código Penal de 1922 continúa aún vigente, por lo que debemos afirmar que la legislación examinada continúa rigiendo al menos en parte.

B) DISTINTAS HIPOTESIS DELICTIVAS

El Decreto Legislativo examinado crea la figura de "espionaje" cometido en perjuicio de la República de Panamá o de alguna de las Naciones Unidas (35).

Nada dice el Decreto aludido sobre lo que debemos entender de espionaje. Este extremo, en todo caso, queda a la interpretación de los juzgadores.

Respecto a la pena señalada, de uno a diez años de reclusión fija, es necesario señalar la errada terminología utilizada, ya que la "reclusión fija" se refiere a la pena que se establece sin señalar mínimos ni máximos donde el juez pueda escoger al momento de proceder a la individualización de la pena. Deja de ser fija desde el momento que se establece un mínimo y un máximo.

La especial mención al espionaje contra "cualquiera de

las Naciones Unidas" resulta extraña, ya que mal podría nuestro país velar por la seguridad de otros estados extranjeros.

La imposibilidad de consultar las discusiones parlamentarias panameñas -destruidas hace años- (36), nos impiden abundar en mayores consideraciones al respecto, aunque quizás sea el interés de las potencias triunfadoras en el último conflicto mundial determinante de esta situación.

Con la misma pena que se señala para el delito de espionaje se sancionan los daños a la propiedad o las lesiones personales que se causen por medio de actos de sabotaje o terrorismo (37).

Sobre lo que debemos entender por "sabotaje" y "terrorismo" nada dice el Decreto Legislativo en mención.

Resulta importante destacar el resultado que debe producirse a consecuencia del sabotaje o terrorismo, pues, en ambos casos, se requiere la existencia de algún daño a la propiedad o de alguna lesión personal, siendo indiferente la entidad del daño o de la lesión.

Esto en sí es criticable, pues equipara en importancia estos actos cuando producen daños o lesiones, cuando en realidad la mayor reprehensibilidad debe emanar de los actos en cuestión que impliquen lesiones gravísimas.

Se dispone expresamente que si los actos de sabotaje producen la muerte de alguna persona, la pena correspondiente será de veinte años de reclusión fija. Además, procederá esta última pena si los actos de sabotaje o terrorismo se cometen por medio de una pandilla de malhechores (38).

Respecto a lo que se debe entender por "pandilla de malhechores", el Decreto Legislativo analizado no aporta mayores explicaciones, aunque en el Código Penal se sanciona la "Asocia-

ción de malhechores" (39).

Por último, este Decreto dispone que serán sancionados con prisión "fija" por veinte años (40) los actos de subversión o que tengan por objeto atentar contra los Poderes constituidos de la Nación o cambiar en modo alguno la forma democrática de Gobierno, siempre que esto ocurra con pérdida de vidas o daños a la propiedad.

La expresión "con pérdida de vidas" pareciera señalar que en estos casos se requiere la muerte de dos o más personas; nosotros, sin embargo, estimamos que con la muerte de una sola basta para que se configure la figura delictiva señalada pues la muerte de una persona es lo que da vida a la especie delictiva comentada.

A propósito del delito antes señalado, expresamente se prevén penas para las formas imperfectas de ejecución: la tentativa con pena de uno a diez años de prisión y la frustración con pena de cinco a quince años de prisión (41).

VI. LEGISLACION SOBRE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS

A) INTRODUCCION

La proliferación de "cheques sin provisión de fondos" obligó al legislador patrio a expedir la Ley 5 de 1958 (42), con el objeto de "contener" el extraordinario aumento de estas conductas punibles hasta ese entonces como delito de estafa (42).

Una infinidad de problemas presentaba la incriminación de ese ilícito como estafa, con lo cual se dificultaba sobremedura la actividad de los agentes del Ministerio Público y de los juzgadores más concretamente.

Aunque el delito de estafa está concebido en términos muy amplios, se presentaban algunos obstáculos prácticos al mo-

mento de examinar los requisitos esenciales de la estafa, que requería la existencia de un engaño.

Otro problemas se planteaban a propósito de la "consumación" del delito, pues algunos entendían que ocurría al momento de expedir el cheque sin provisión de fondos, mientras otros estimaban que ocurría al "presentar" el cheque para el cobro y producirse la negativa de pago por la inexistencia de fondos.

B) DISTINTAS INFRACCIONES INCRIMINADAS

1. Delito y Falta (Dolo y culpa)

La Ley 5 de 1958 establece claramente dos tipos de infracciones: dolosas y culposas (44).

Sucede, sin embargo, que las infracciones previstas en el art. 1º constituyen delito, mientras que las previstas en el art. 2º constituyen falta.

El sistema utilizado por nuestro legislador, inexplicable por cierto, tiene una importancia trascendental, ya que las "faltas" están excluidas de la jurisdicción penal y su juzgamiento está atribuido a las llamadas "autoridades administrativas" que ejercen la denominada "justicia administrativa".

Por otra parte, es preciso señalar que no todas las conductas dolosas constituyen el "delito" en cuestión. Es preciso que el valor del cheque sea de "cincuenta balboas o más", pues de lo contrario la infracción se convierte también en "falta", tal como lo dispone la Ley 112 de 1974, que organiza la justicia administrativa en Panamá.

Si bien es cierto que la distinción entre delito y falta, en algunos casos, se establece en atención a la cuantía o valor de la cosa objeto material de la infracción, resulta extraño que el legislador panameño haya establecido que la comisión

culposa del delito de expedición de cheques sin provisión de fondos constituya en todo caso un supuesto de "falta administrativa" de exclusiva competencia de las autoridades administrativas que, en nuestro medio, ejercen su función a través de procesos "verbales" en los que se exige al "sujeto" probar su inocencia pues la regla es que se presume su culpabilidad mientras que no se demuestre lo contrario.

2. Conductas dolosas

Las modalidades "dolosas" del delito de expedición de cheques sin provisión de fondos están consignadas en el art. 1º de la Ley en cuestión, de la siguiente forma:

- a) librar y entregar un cheque, sin que exista en poder del librado, fondos suficientes para cubrirlo; pero no incurre en responsabilidad el librador si dentro de las 48 horas siguientes de la notificación de la falta de fondos, cancela el valor del cheque;
- b) retirar del poder del librado, a sabiendas, dentro de un plazo de un año contado a partir de la emisión del cheque, de todo o parte de los fondos necesarios para su cobertura; y,
- c) revocar, con mala fe y sin justa causa, la orden de pago consignada en un cheque ya entregado.

Como la Ley remite al delito de estafa, la pena de éste será la aplicable a cualquiera de estas conductas (reclusión de dos meses a dos años).

3. Conductas culposas

Expresamente dispone el art. 2º de la Ley 5 de 1953 que cuando los hechos previstos en el art. 1º, que describe las con-

ductas dolosas, se cometieren por imprudencia o negligencia también se incurre en responsabilidad.

No alude esta Ley a otras formas de comisión culposa que son frecuentes en nuestra legislación, tales como la "impericia" o la "inobservancia de los reglamentos".

C) NATURALEZA JURIDICA: DELITO DE ESTAFA O DELITO AUTONOMO

En nuestra opinión el legislador panameño pretendió, al momento de dictar la Ley 5 de 1958, crear una nueva "figura delictiva", con categoría propia y autónoma del delito de "estafa" previsto en el art. 360 del Código Penal.

Prueba de ello es que la Ley en cuestión señala que mediante ella "se erige en delito y sanciona el girar cheques sin fondos".

Lamentablemente la intención del legislador se ha visto afectada por la técnica utilizada al momento de elaborar dicha Ley.

Al adoptar el legislador la modalidad de remitir al delito de estafa, cuando dice "se considerará culpable del delito de estafa", para señalar la pena que debe imponerse al culpable del delito que se pretende tipificar, se reconoce que el delito en cuestión no es más que una simple modalidad del delito de estafa previsto en el art. 360 del Código Penal.

Resulta, sin embargo, muy criticable el criterio de recurrir al delito de estafa para establecer la pena de la comisión dolosa del delito de girar cheques sin fondo (art. 1º) y señalar luego, a continuación en la misma ley, en el art. 2º la pena prevista para la misma conducta anterior cuando es resultado de imprudencia o negligencia por parte del sujeto.

D) EL PROYECTO DE LA "ASOCIACION BANCARIA" PANAMEÑA

Según datos suministrados por la "Asociación Bancaria Nacional" en nuestro medio se cometen unos 200.000 delitos relacionados con la Ley 5 de 1958.

Este alarmante aumento de cheque sin provisión de fondos (45) ha llamado poderosamente la atención de los responsables de la Asociación, que luego de numerosas consultas entre los directores de bancos y sus asesores jurídicos, elaboraron un Proyecto de Ley en 1976, que pretendía sustituir a la Ley 5 de 1958.

Los aspectos más sobresalientes del proyecto en cuestión son los relativos a las penas privativas de libertad, concretamente reclusión, que en el mismo se consignan, de la siguiente forma:

- a) de seis meses a un año si el valor del cheque no excede de 500 balboas;
- b) de uno a dos años si el valor del cheque es mayor de 500 balboas y no excede de 1000;
- c) de dos a tres años si el valor del cheque es mayor de 1000 balboas y no excede de 3000;
- d) de tres a cuatro años si el valor del cheque es mayor de 3000 balboas y no excede de 6000; y,
- e) de cuatro a cinco años si el valor del cheque es mayor de 6000 balboas.

En los casos antes señalados se impondrá la pena de multa que no será menor del valor del cheque en cuestión ni mayor del quíntuplo del mismo. Para el caso de que el culpable no cancele la multa impuesta, el proyecto dispone que la multa se convertirá en arresto a razón de un día de éste por cada balboa de multa.

Demás está señalar el carácter altamente represivo del proyecto en referencia, que en varias ocasiones estuvo a punto de convertirse en Ley de la República.

Sin lugar a dudas, debemos reconocerlo, es el resultado de una labor realizada por personas que desconocen los más elementales principios del Derecho Penal.

Con toda razón ha dicho GUERRA DE VILLALAZ refiriéndose a este proyecto que "El nuevo proyecto escoge la vía de la represión como medio de prevención. Obsérvese que la norma es altamente represiva si se compara con las disposiciones vigentes sobre estafa" (46).

VII. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

A) INTRODUCCION

Mediante la Ley 5 de 1964 (47), por medio de la cual se dictaron medidas sobre "Seguridad Pública", el legislador patrio incriminó una serie de conductas que para aquella época no eran consideradas punibles, o bien algunas constituían simples actos preparatorios o de ejecución de diversos tipos delictivos; incluso, la ley bajo mención modificó tácitamente algunas disposiciones del Código Penal vigente.

La finalidad que perseguía el legislador era la de adelantar la esfera de protección al ciudadano, declarando punibles algunas conductas que aunque no constituían delito, suponían algunas la preparación o el principio de ejecución de alguno.

Dicha legislación, sin embargo, está cargada de una serie de referencias subjetivas con lo cual se atenta contra las más elementales garantías del ciudadano. Esta legislación, consideramos muy particularmente, vulnera en forma directa el conteni

do del principio de legalidad, por cuanto que la descripción de las conductas punibles es imprecisa y llena de elementos valorativos o subjetivos que se orientan a dejar en manos de los juzgadores un amplio margen de discrecionalidad (48).

B) DISTINTAS HIPOTESIS DELICTIVAS

Sólo hay en esta ley la tipificación de dos conductas que se consideran como delictivas: a) la posesión, venta, transporte, donación o transferencia a cualquier título de materiales inflamables o explosivos o de artefactos destinados a causar daños en la vida o en los bienes, o a sembrar el terror en la colectividad; y, b) dejar, colocar, arrojar o en cualquier forma hacer llegar a un lugar público o privado los materiales o artefactos antes aludidos (49).

Como sanciones se establecen las penas de reclusión por tres a cinco años y reclusión por cuatro a ocho años, respectivamente.

Para evitar las injusticias que se podrían derivar de una aplicación extrema o indiscriminada de la primera de las conductas descritas como punibles, toda vez que contiene diversas referencias de carácter subjetivo, la propia ley señala en qué casos el estar comprendido entre dichas posibilidades no implica la realización del tipo respectivo.

De esta forma se exceptúan a propósito de la primera conducta descrita la posesión, venta, transporte, donación, recibo, transferencia a cualquier título y el llevar consigo manipular sustancias incendiarias o de cualquier otra naturaleza de las ya mencionadas, cuando se trate de elementos como la gasolina, alcohol y otros análogos, en los casos en que, a juicio de la autoridad competente, quede demostrado que tales elementos son exclu

sivamente para uso casero o mecánico normales y rutinarios, y que las personas que intervienen en la posesión u operaciones con tales elementos tienen un historial policivo libre de toda actividad dirigida contra el orden o la seguridad pública.

Respecto a la segunda conducta que en la ley se describe como punible, es preciso señalar que el dejar, colocar, arrojar o en cualquier forma hacer llegar a un lugar público o privado los materiales inflamables o explosivos o los artefactos destinados a causar daños en la vida o en los bienes o a sembrar terror en la colectividad no requiere para su punibilidad la existencia de los eventos que se desean evitar.

La diferencia fundamental de esta disposición con la norma equivalente del Código vigente radica en que en la ley bajo exámen se amplía el ámbito de la protección que en el Código Penal se reduce únicamente a la propiedad.

De esta forma se protege no sólo la propiedad a que alude el Código Penal, sino que también la norma está dirigida a - evitar "daños" en la vida y que por los medios aludidos se produzcan el terror en la colectividad.

Como agravantes para ambas hipótesis delictivas figuran las siguientes: a) si son dos o más los infractores, la pena se aumentará en una cuarta parte; b) si se producen daños a la propiedad pública o privada, se aumentará la pena en la mitad; c) si se producen una o más personas lesionadas, la pena se aumentará en dos terceras partes; y, d) si se produce la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión fija por veinte años (50).

Finalmente se dispone que quien sin haberse concertado previamente con el autor del delito ni haya contribuido a producir las consecuencias ulteriores de éste, ayude al autor a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de ella o

a eludir la sentencia, y al que suprima, borre o altere los indicios o huellas del delito, se le sancionará con una pena que será igual a la tercera parte de la que haya recaído sobre el autor de aquéllos delitos (51) (52).

VIII. LEGISLACION SOBRE DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

A) INTRODUCCION

Mediante el Decreto de Gabinete 342 de 1969 (53) la Junta Provisional de Gobierno formada a raíz del golpe militar que tomó el poder el 11 de octubre de 1968, dictó una serie de medidas de orden público que, en lo fundamental, consistió en la -creación del "delito de subversión del orden público".

El Decreto de Gabinete en referencia amplía el catálogo de conductas consideradas delictivas y señala penas -induciblemente- mayores, para algunas conductas que ya estaban previstas anteriormente en nuestra legislación.

El endurecimiento de la represión penal antes señalado, sin embargo, no es el fin primordial que se perseguía con el Decreto de Gabinete en cuestión, puesto que no sólo se aumentan las penas para algunos delitos ya existentes, sino -y esto es lo fundamental- sustraer el juzgamiento de estos delitos de la esfera del Organó Judicial.

De esta forma, dichos delitos -salvo alguna excepción (54)- son juzgados por las autoridades administrativas mediante el "procedimiento correccional" de policía previsto en el Código Administrativo, que en Panamá se aplica para juzgar las faltas o contravenciones de policía, y que consiste en un procedimiento verbal y sumario pero en el cual no tienen prácticamente ninguna vigencia los principios básicos que inspiran el Derecho procesal

penal.

Más que de un auténtico delito contra el orden público nos encontramos ante una "falta" ya que su juzgamiento corresponde casi que exclusivamente a las autoridades "administrativas", en concreto casi todos del "Ministro de Gobierno y Justicia"(55).

Si bien nos encontramos ante una auténtica "falta", en vista de la denominación dada en el propio Decreto de Gabinete como "delito de subversión del orden público" y toda vez que en ocasiones se imponen penas de reclusión de hasta quince años, nos ocupamos del mismo en esta breve exposición relativa a la legislación especial (56).

B) CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO

El Decreto de Gabinete 342 de 1969 establecía una amplia gama de figuras que constituirían diversas modalidades del "delito" de subversión del orden público y, luego, en otras disposiciones señalaba las penas aplicables.

Para los efectos consiguientes el propio Decreto de Gabinete señalaba que debía entenderse por orden público "el conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que garantice la pacífica y armónica convivencia a todos los asociados y el respeto a la autoridad legalmente constituida; la preservación del sistema democrático de Gobierno y el respeto a la dignidad y personalidad moral de los habitantes en el territorio nacional" (57).

Llama poderosamente la atención el hecho de que el régimen militar instaurado en el poder desde el 11 de octubre de 1968 incluya dentro del concepto en cuestión la referencia a la "autoridad legalmente constituida", ya que los nuevos gobernantes, aun que devienen en autoridad ya que tienen la fuerza de las armas,

no habían accedido al poder en forma "legítima". En todo caso hubiera sido más correcto señalar el "respeto a la autoridad constituida", lo cual no implica una valoración sobre la legitimidad de tal autoridad (58).

No obstante lo anterior, la profesora GUERRA DE VILLALBA ha señalado que "no cabe olvidar que en todo acto de insurrección, de revolución o de atentado contra los poderes constituidos, el grupo triunfante está fuera del alcance de las normas punitivas, su acción es siempre calificada de restauradora, moralizadora, benefactora, etc. De allí que la frase "respeto a la autoridad legalmente constituida", tiene un alcance relativo, además de entenderse por tal aquella autoridad que se establece ajustándose a los preceptos legales vigentes también comprende a las autoridades que surgen de una insurrección civil o militar triunfante" (59).

Importante es la mención que la definición de "orden público" hace a propósito de "la preservación del sistema republicano y democrático de Gobierno", con lo cual no se hace otra cosa que reforzar los aspectos básicos que sobre "Estado" y "Gobierno" se mencionan en la Constitución Nacional, traducidos luego en el Código Penal en la protección de la forma de gobierno que aparece en el Título II del Libro II del Código Penal vigente (60).

C) DISTINTAS HIPÓTESIS DELICTIVAS

El Decreto de Gabinete en mención establece un amplio catálogo de figuras delictivas con sanciones que pueden llegar en los casos más graves a penas de quince años de reclusión.

Las distintas modalidades del delito de subversión del orden público que se establecen en este Decreto de Gabinete son

las siguientes:

a) Incitar a la violencia contra el Gobierno, sea en forma oral o escrita (reclusión por un mes a dos años);

b) Causar disturbios o daños a la propiedad cuando se asiste a una reunión pública (reclusión por un mes a dos años);

c) Producir alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de la seguridad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a las propiedades (reclusión de dos meses a dos años);

d) Alzamiento en armas, financiación, organización y contratación de grupos guerrilleros, incendio, fabricación y explosión de bombas (reclusión de cinco a quince años);

e) Ofensas a la dignidad de ciertos funcionarios públicos (reclusión de dos meses a dos años);

f) Propagar informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen de gobierno, perturbar el orden y la seguridad, el régimen económico y de precios, los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblaciones (reclusión de uno a cinco años);

g) Apología de doctrinas que propugnen el crimen o la violencia para lograr sus propósitos (reclusión de treinta meses a ocho años);

h) Extensión a los responsables de transmisiones o comunicaciones de responsabilidad penal por la incitación efectuada a través de dichos medios (reclusión de dos meses a dos años).

La competencia en estos casos es del Ministro de Gobierno y Justicia, salvo en los casos señalados en el literal e), puesto que para este caso el competente es una autoridad de una jerarquía superior a la autoridad agraviada.

NOTAS

- (1) Ley 19 de 3 de diciembre de 1923. Publicada en la Gaceta Oficial número 4165, de 7 de junio de 1923.
- (2) Ley 19 de 22 de noviembre de 1916. Publicada en la Gaceta Oficial número 2485, de 22 de noviembre de 1916.
- (3) Ley 64 de 17 de diciembre de 1928. Publicada en la Gaceta Oficial número 5421, de 22 de diciembre de 1928.
- (4) Ley 32 de 10 de diciembre de 1934. Publicada en la Gaceta Oficial número 6953, de 11 de diciembre de 1934.
- (5) Ley 20 de 27 de enero de 1937, Publicada en la Gaceta Oficial número 7473, de 3 de febrero de 1937.
- (6) Ley 57 de 30 de mayo de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8531, de 10 de junio de 1941.
- (7) Ley 59 de 4 de junio de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8531, de 10 de junio de 1941.
- (8) Resulta paradójico, sin embargo, que esta ley, que regula lo relativo a las llamadas "drogas heroicas" no mencione expresamente a la "heroína".
- (9) El Código Sanitario fue aprobado mediante la Ley 66 de 1947. Publicado en la Gaceta Oficial número 10467, de 6 de diciembre de 1947.
- (10) La Ley 59 de 1941, no obstante, no describía como punibles las conductas de "introducción" y "transporte" de drogas, por lo que tales conductas referidas a la cannabis quedaron sin la correspondiente sanción penal.
- (11) Ley 23 de 16 de febrero de 1954. Publicada en la Gaceta Oficial número 12.306 de 26 de febrero de 1954.
- (12) La antigua distinción entre cannabis indica y cannabis sativa carece de fundamento. Desde un punto de vista botánico la cannabis sativa, que es el nombre científico de la planta, tiene diversas variedades, entre las que se mencionan las variedades indica y am-

- ricana. En este sentido, entre otros: Víctor ROBINSON, "Acerca de la cannabis indica" en El libro de la hierba, Editorial Anagrama, traducción de Carlos Trias, Barcelona, 1977, p. 175; Robert S. DE ROPP, Las drogas y la mente, traducido por R. Carrasco Ruiz (de la 2ª edición inglesa de 1976), Compañía Editorial Continental, S.A., México, 1978, p. 63.
- (13) En este sentido: MUÑOZ CONDE, p. 413. Más radical, en nuestra opinión, es la postura del profesor Enrique GIMBERNAT ORDEIG, "La reforma del Código Penal de noviembre de 1971" en, Estudios de Derecho Penal, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1976, ps. 43 y sgts (particularmente ps. 48-51). Muy importante es la postura del profesor Marino BARBERO SANTOS, Marginación social y derecho represivo, Bosch, Barcelona, 1980, ps. 141 y sgts.
- (14) La distinción entre "drogas duras" y "drogas blandas" (también llamadas "suaves"), que ha formulado la Organización Mundial de la Salud, se encuentra "discutida y sometida a revisión" advierten Teresa BENAVIDES, Enrique GONZÁLEZ DURO y otros, Las drogas... a lo claro, Editorial Popular, S.A., Madrid, 1980, p. 16.
En general, sobre la distinción entre drogas duras y blandas, véase: Enrique GONZÁLEZ DURO, Consumo de drogas en España, Editorial Villalar, Madrid, 1979, ps. 131 y sgts.
- (15) En la legislación española el art. 344 del Código Penal sanciona, entre otras conductas, la "tenencia" de drogas tóxicas o estupefacientes.
Respecto de este problema el profesor RODRIGUEZ DEVESA sostiene que "La tenencia se ha de interpretar de modo que no se produzca la intolerable consecuencia de que una persona necesitada de tratamiento médico sea condenada a severas penas privativas de libertad.." (P. Especial, p. 1044). También en este mismo sentido: MUÑOZ CONDE, p. 412.
- (16) Como sucede en España y Panamá, por ejemplo. Cf. RODRIGUEZ DEVESA, P. Especial, ps. 1043-1044 en donde se señalan diversos países en donde ocurre algo semejante.
- (17) Ley 56 de 10 de diciembre de 1930. Publicada en la Gaceta Oficial número 5900, de 6 de enero de 1931.
- (18) La referencia expresa al "arresto equivalente" rompe con el sistema utilizado por nuestro legislador al momento de efec

tuar la individualización legislativa de las sanciones penales.

Y es que el legislador patrio nunca usa dicha terminología para precisar la pena aplicable, que en este caso sería de 200 balboas de multa o 200 días de arresto.

En todo caso, la sanción aplicable no tiene límite mínimo ni máximo para escoger una cantidad intermedia, por lo que deben imponerse 200 balboas de multa o 200 días de arresto al momento de individualizar judicialmente la pena.

- (19) C.P. 1922, arts. 337 a 349.
- (20) Todavía en la actualidad gran parte de la legislación fundamental hoy vigente, emana de la legislación elaborada para desarrollar la Constitución de 1941. En este aspecto, la legislación ordinaria ha sobrevivido a la Constitución de 1941 derogada en 1946.
- (21) Ley 80 de 1 de julio de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8557, de 17 de julio de 1941.
- (22) Ley 80 de 1941, art. 2.
- (23) Ley 80 de 1941, art. 3.
- (24) Decreto de Gabinete 343 de 31 de octubre de 1969. Publicado en la Gaceta Oficial número 16.480 de 5 de noviembre de 1969.
- (25) Decreto de Gabinete 343 de 1969, arts. 15 y 16; 18, 19 y 21.
- (26) Decreto de Gabinete 343 de 1969, arts. 19 y 21.
- (27) Decreto de Gabinete 343 de 1969, art. 23:
- (28) Decreto de Gabinete 343 de 1969, art. 25 inc. 1º
- (29) Decreto de Gabinete 343 de 1969, art. 25 inc. 2º
- (30) Ley 8 de 10 de febrero de 1978. Publicada en la Gaceta Oficial número 18.516, de 14 de febrero de 1978.
- (31) La Constitución Política de 1972, actualmente vigente, denominó Consejo Nacional de Legislación al organismo que,

como parte del Organo Legislativo, elabora las leyes formales en Panamá.

- (32) Ley 8 de 1978, arts. 1 a 4.
- (33) Ley 5 de 4 de enero de 1933. Publicada en la Gaceta Oficial número 6487, de 10 de enero de 1933.
- (34) Decreto legislativo 11 de 8 de noviembre de 1945. Publicado en la Gaceta Oficial número 9930, de 22 de enero de 1946.
- (35) Qué consideraciones han determinado la referencia a las "Naciones Unidas" en este Decreto Legislativo 11 de 1945 son hoy desconocidas, aunque podemos señalar que la "Carta de la Organización de las Naciones Unidas" se firmó antes de la aprobación del presente Decreto. Dicha carta es del 26 de junio de 1945, sólo unos meses antes del Decreto Legislativo en cuestión.
- (36) Durante el proceso de investigación de las fuentes legislativas mencionadas a lo largo de la presente tesis intentamos consultar los anales legislativos de la "Asamblea Nacional" durante 1904-1968, pero a raíz del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 el "encargado" de la administración del antiguo "Palacio Legislativo" ordenó la destrucción de todos los archivos y de la Biblioteca de la Asamblea cuando el nuevo gobierno necesitó hacer uso del edificio en cuestión.
La mentalidad de esos militares era la de que antes de la "revolución" de 1968 nada servía, por lo que había que comenzar de nuevo y partir de cero.
Del pequeño, pero rico, patrimonio legislativo patrio casi nada queda, salvo lo poco que pudo salvar D. Mario HERRERA ACOSTA, en aquella época Director del Archivo Nacional, - que hizo lo que pudo cuando se enteró de lo que estaba sucediendo.
Ni al Ministro de Gobierno y Justicia de turno le interesó el patrimonio legislativo nacional; ni por el hecho de ser abogado.
- (37) Decreto Legislativo 11 de 1945, arts. 1 y 2.
- (38) Decreto Legislativo 11 de 1945, art. 2.
- (39) C.P. 1922, art. 212.

- (40) Resulta, sin embargo, incorrecta la referencia a la pena de prisión "fija" por veinte años, ya que de acuerdo con el art. 19 del C.P. la pena de prisión no puede exceder de los dieciocho años.
En todo caso era más correcto señalar que la pena sería de "reclusión" fija por el término de veinte años, ya que esta es la sanción más grave que existe en nuestra legislación.
- (41) Decreto Legislativo 11 de 1945, art. 3.
- (42) Ley 5 de 20 de enero de 1958. Publicada en la Gaceta Oficial número 13.463, de 8 de febrero de 1958.
- (43) El art. 360 del Código Penal dispone lo siguiente: "El que por medio de artificios o de astucias encaminadas a engañar o sorprender la buena fe de alguno, o induciéndolo a error, se procure o procure a otro un provecho ilícito, con perjuicio de tercero, incurrirá en reclusión de dos meses a dos años, y multa de diez a doscientos balboas.
"La reclusión será de dos meses a tres años, si el delito lo cometen abogados, apoderados o administradores en el ejercicio de sus funciones, o si se comete en detrimento de la administración pública o de un establecimiento de beneficencia".
- (44) Las modalidades dolosas aparecen en el art. 19; las culposas en el 29.
- (45) A los tribunales de justicia casi no llegan casos de cheques en donde el librador haya retirado del poder del librado, todo o parte de la cobertura del cheque en cuestión o de cheques en donde el librador haya revocado la orden de pago consignado en un cheque.
La casi totalidad de asuntos penales relacionados con cheques son de falta de fondos en cheques girados contra una cuenta que al momento del cobro carece de fondos suficientes.
Por otra parte, el plazo de 48 horas que se le confiere al librador para abonar el cheque girado sin provisión de fondos casi siempre permite que el sujeto en cuestión cancele el valor del cheque, aunque en ocasiones hemos visto que para cubrir un cheque sin fondos el sujeto gira otro que luego también resulta sin fondos.

- (46) Aura GUERRA DE VILLALAZ, "Algo más sobre el delito de expedición de cheques sin fondo" en LEX. Septiembre-Diciembre de 1977, Año III, nº 8, p. 167.
- (47) Ley 5 de 29 de octubre de 1964. Publicada en la Gaceta Oficial número 15.251, de 20 de noviembre de 1964.
- (48) Cf. parágrafo del art. 1 de la Ley 5 de 1964.
- (49) Ley 5 de 1964, arts. 1º y 2º.
- (50) Ley 5 de 1964, arts. 3 y 4.
- (51) Ley 5 de 1964, art. 6.
- (52) La forma de establecer la penalidad del encubridor en este delito no es la más apropiada, puesto que la pena que "recae" sobre el autor del delito se puede ver afectada por una serie de circunstancias atenuantes o agravantes, sean personales o materiales, que pueden no ser del conocimiento del supuesto "encubridor".
Además, es necesario señalar que la figura en cuestión en esta Ley era innecesaria, toda vez que en el art. 197 del C.F. se incrimina la figura de "protección de malhechores".
- (53) Decreto de Gabinete 342 de 31 de octubre de 1969. Publicado en la Gaceta Oficial número 16.480 de 5 de noviembre de 1969.
- (54) Excepcionalmente correspondía a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de las ofensas contra la dignidad del Presidente de la República, un Ministro de Estado o del Contralor General de la República.
- (55) Decreto de Gabinete 342 de 1969, art. quinto y sexto.
- (56) Ha sido cosa frecuente en nuestra legislación, a partir del 11 de octubre de 1968, que se faculte a las autoridades administrativas a imponer penas privativas de libertad de enorme gravedad, ya que utilizan un procedimiento que hemos calificado de verbal y sumario que se tiene a la mano para cuando las necesidades políticas aconsejen hacer uso del mismo.
- (57) Decreto de Gabinete 342 de 1969, art. 1º.

- (58) Mediante Sentencia de 6 de octubre de 1969 la Corte Suprema de Justicia "convalidó" el régimen instaurado el 11 de octubre de 1968 al declarar la legitimidad del mismo en una serie de consideraciones que en el fondo no hacen otra cosa que reconocer que quien tiene las armas puede detentar el poder (Cf. Registro Judicial, Corte Suprema de Justicia, Panamá, octubre de 1969, ps. 3 y sgts). No está demás señalar que la Corte Suprema de Justicia fue reestructurada por el gobierno militar que se instauró el 11 de octubre de 1968.
- (59) Aura GUERRA DE VILLALAZ, "El delito de subversión del orden público" en Anuario de Derecho, Universidad de Panamá, Año X (1972), No 10, p. 165.
- (60) C.P. 1922, Libro II Título II relativo a los "delitos contra los Poderes de la Nación", arts. 109-114.

Capítulo SextoLAS REFORMAS AL CODIGO PENAL

- | | |
|-------------------------------|--|
| I. INTRODUCCION | X. LEY 43 DE 1958 |
| II. LEY 25 DE 1927 | XI. LEY 1 DE 1959 |
| III. LEY 3 DE 1931 | XII. LEY 68 DE 1961 |
| IV. LEY 5 DE 1933 | XIII. LEY 6 DE 1963 |
| V. LEY 34 DE 1941 | XIV. LEY 11 DE 1963 |
| VI. LEY 80 DE 1941 | XV. LEY 1 DE 1964 |
| VII. D-LEGISLATIVO 11 DE 1945 | XVI. LEY 9 DE 1964 |
| VIII. LEY 24 DE 1951 | XVII. LEY 9 DE 1967 |
| IX. LEY 22 DE 1954 | XVIII. DECRETO DE GABINETE 141 DE 1969 |

I. INTRODUCCION

El presente capítulo tiene por objeto presentar una relación completa de todas las leyes que han reformado, derogado o adicionado disposiciones del Código Penal de 1922.

Nuestro interés en este capítulo es el de exponer cual es el alcance de cada una de las reformas producidas, para lo cual es imprescindible señalar el estado de la legislación en el momento de verificarse la reforma respectiva.

Este estudio ha sido elaborado exclusivamente desde una óptima positiva, no siendo posible hacer uso de doctrina panameña ya que ningún autor patrio ha estudiado las reformas penales aquí destacadas.

Lograr una exposición completa de las reformas al Código Penal no ha sido tarea fácil. En primer lugar, por que el legislador patrio habitualmente reforma en una misma ley disposiciones de muy variada índole, con los consiguientes problemas de identificación de las normas penales vigentes.

En segundo lugar, porque la técnica legislativa utilizada no siempre es la más adecuada, como tendremos oportunidad de comprobar a continuación, pues en ocasiones al dictar una ley no señala que artículo es el que se desea reformar, siendo labor del intérprete encontrar el alcance de la nueva disposición y desechar la que tácitamente ha quedado derogada.

Hemos optado por señalar cual es el contenido de las leyes que incluimos a continuación y destacar, muy brevemente, las modificaciones que cada nueva ley supone respecto de la legislación anterior.

II. LEY 25 de 1927

Mediante la Ley 25 de 1927 (1) se reformaron y adicionaron varias disposiciones al Código Penal. Consagra, en total, 18 modificaciones al articulado del Código (2) y contiene 4 nuevas disposiciones que lo adicionan (3).

Esta ley sólo tiene un artículo y en el mismo se señala que los artículos del Código Penal que allí se transcriben quedarán en lo sucesivo con la redacción que allí tienen.

No pretendemos indicar en detalle todas las modificaciones, pero si deseamos destacar el contenido de la reforma. Por lo que respecta a las adiciones, señalaremos el contenido de las mismas.

La ley señala que el mínimo de las penas privativas de libertad (reclusión, prisión y arresto) no será, en ningún caso, inferior de 30 días y la multa no será menor de 20 balboas. En todo caso, cuando el máximo señalado por la ley penal sea igual o menor al mínimo antes indicado, la pena podrá extenderse hasta 60 días o hasta 40 balboas (4).

A propósito de la prescripción de las penas esta ley establece que las mismas prescriben en un término igual al doble del de la pena señalada en la sentencia. Las penas de diferentes clases impuestas en una misma sentencia prescribirán cuando se cumpla el plazo previsto para la más grave (5).

Pero los aspectos más importantes de esta ley son los que inciden en el Libro II del Código y que aparecen a continuación. En efecto, la ley transcribe en forma íntegra el Título XI, sobre delitos contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia, con el propósito de efectuar una completa reforma del mismo.

Esto, sin embargo, no ha sucedido, toda vez que hay numerosos artículos del Código que se transcriben en esta ley y a los que no se les ha hecho modificación alguna.

La violación carnal prevista en el art. 281 del Código Penal (6), sancionada con penas que oscilan entre dos y cuatro años de reclusión tiene ahora penas que van de dos a seis años de reclusión (7).

El delito de estupro previsto en el art. 283 del Código Penal (8) y que era sancionado con multa de cien a mil balboas, en adelante se incrimina con reclusión de 1 a 3 años (9).

Los actos libidinosos previstos en el art. 284 del Código Penal (10) y sancionados con reclusión de 2 meses a 1 año, de 4 meses a 2 años o de 1 a 4 años se incriminan con reclusión que es de 3 meses a 1 año, 5 meses a 2 años o de 2 a 5 años respectivamente (11).

El incesto previsto en el art. 287 del Código Penal (12) y sancionado con prisión de seis meses a dos años se modifica para señalar la pena de prisión entre uno y dos años (13).

Las ofensas al pudor previstas en los arts. 289 y 290 del Código Penal (14) pasan a ser sancionadas con penas que aumentan unos días el mínimo y 2 meses el máximo previsto originalmente (15).

En las distintas modalidades del delito de rapto, que está previsto en los arts. 291 y 292 del Código Penal (16), se aumentan las penas que ahora oscilan entre seis meses y tres años en vez de las penas anteriores que eran de corta duración e, incluso de multa (17).

Se aumenta también la pena prevista para el proxenetismo previsto en el art. 295 del Código Penal (18), que era de dos a veinte meses de reclusión y multa, por la de uno a dos años de reclusión (19).

El adulterio previsto en el art. 301 del Código Penal (20) que tenía pena de prisión de uno a diez meses, en adelante es sancionado con prisión por uno a dos años (21). La atenuante prevista en el art. 303 del Código Penal (22) se modifica a fin de endurecer la posible pena resultante (23).

Se modifica también la pena prevista para el delito de bigamia (24), de modo que el nuevo límite mínimo (25) sea mayor que el anterior.

La última modificación a los delitos contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia va dirigida a señalar una pena mayor para la atenuante prevista en el art. 310 del Código Penal (26), que trata de la suposición y supresión del estado civil (27).

Finalmente, esta ley introduce un nuevo delito al Código. Se trata del delito de disparo de arma de fuego, que se incorpora al Código a través de tres nuevas disposiciones: arts. 325 a), 325 b) y 325 c) (28).

III. LEY 3 de 1931

Mediante la Ley 3 de 1931 (29) se modificaron cuatro artículos del Código Penal. Dos de los artículos modificados se refieren a cuestiones sobre la prescripción; los otros, se refieren al homicidio y a las lesiones "culposas".

En esta Ley se modifica el régimen de prescripción que el Código contiene a propósito de la denuncia que se exige para proceder por los delitos de violación, seducción y actos libidinosos

Luego de la reforma en cuestión, el art. 286 del Código quedó así: "En los casos de los artículos que preceden, no se

instruirá sumario alguno sino por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; pero no se admitirá el denuncia si el agraviado lo presenta después de un mes de la ejecución del hecho; tampoco se acogerá tal denuncia cuando el representante legal de la parte agraviada lo presente después de dos meses de haber tenido conocimiento de la comisión del delito, si está en el país, y un año si está en el exterior. La instrucción se instruirá y seguirá de oficio en los siguientes casos:

- a) Cuando el hecho haya causado la muerte de la víctima, o haya sido acompañada de otro delito que tenga señalada una pena restrictiva de la libertad, de veinte meses por lo menos y que pueda castigarse de oficio;
- b) Cuando el hecho se cometa en lugar público;
- c) Cuando se cometa abusando la patria potestad o de la autoridad de tutor o curador".

Antes de la reforma señalada anteriormente, el plazo de prescripción previsto en el Código para poder presentar la denuncia era de un año (30).

También se modifica el art. 294 del Código que regula los plazos de prescripción que a propósito del delito de "rapto" contiene el Código. El nuevo art. 294 dispone lo siguiente: "No se puede iniciar procedimiento respecto de los delitos a que se refieren los artículos 291, 292 y 293, sino por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, pero no se admitirá el denuncia si el agraviado lo presenta después de un mes de la ejecución del hecho; tampoco se acogerá tal querella cuando el representante legal de la parte agraviada lo presenta dos meses después de haber tenido conocimiento de la comisión del

delito, si está en el país y de un año si está en el exterior".

Antes de esta reforma el art. 294 del Código, modificado por la Ley 25 de 1927, establecía un plazo de prescripción de un año para la interposición de la denuncia respectiva (31).

A propósito del delito de homicidio culposo previsto en el art. 318 del Código, la Ley 3 de 1931 trajo una nueva redacción del mismo en los siguientes términos: "El que por imprudencia, negligencia o impericia en su oficio o profesional, o por no observar los reglamentos, órdenes o prescripciones, causa la muerte de alguno, será castigado con arresto por seis meses a un año, e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por seis meses a un año, después de cumplida la totalidad de la pena.

Si del hecho resultare la muerte de varias personas, o la de una sola y la lesión de una o varias personas a quienes les cause un daño en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, la pena será de arresto por diez y ocho meses a cuatro años e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por diez y ocho meses a cuatro años".

La redacción de la norma en cuestión antes de la reforma apuntada establecía para este delito penas de arresto de diez días a un año (inc. 1º) y de arresto de tres meses a tres años (inc. 2º) (32).

Finalmente, la ley modifica la regulación del delito de lesiones culposas previsto en el art. 322 del Código. La nueva redacción es la siguiente: "El que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su oficio o profesión, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause a otro un perjuicio en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, será reprimido así:

a) Con arresto de tres a seis meses o multa de noventa a ciento ochenta balboas; pero no podrá iniciarse - procedimiento sino por denuncia del lesionado o de su representante legal, si fuere menor o incapaz, en los casos de los incisos primero y último del artículo 319.

b) Con arresto de cuatro a ocho meses o multa de ciento a doscientos cuarenta balboas en los demás casos".

Las penas previstas en el art. 322 antes de la reforma en cuestión señalaban una penalidad menor en ambos literales (33). Desde esa época, sin embargo, se sancionaba con menor pena las lesiones culposas del art. 322, literal c) que las previstas en el literal b) del art. 322, a pesar de que éstas lesiones eran de menor entidad o trascendencia que aquéllas.

IV. LEY 5 DE 1933

Mediante la Ley 5 de 1933 (34) se reformaron diversos - artículos del Código y se estableció por primera vez en nuestra legislación el delito de usura.

Salvo la reforma contenida en el art. 1 de la presente Ley, todas las disposiciones de la misma modifican disposiciones contenidas en el Libro II que contiene las "diferentes especies de delitos" en el Código.

Esta ley modifica el inciso segundo del art. 25 del Código que trata de la pena de interdicción temporal del ejercicio de derechos o de funciones públicas, a fin de reducir el límite temporal de aplicación de dicha pena.

Dicho inciso 2º quedó así: "La interdicción temporal se refiere a los mismos derechos de que trata el artículo anterior,

por un tiempo no menor de un mes ni mayor de un año".

Inexplicablemente el legislador de 1933 alude en este inciso transcrito al "artículo anterior" que, sin embargo, alude a las penas privativas de libertad y a la multa. En todo caso la referencia exacta era al "inciso anterior" como se decía en la versión original de este inciso antes de esta reforma (35).

En esta ley se reduce notablemente la sanción prevista para el delito de privación ilegal de libertad cometido por un funcionario público, que está previsto en el art. 133 del Código.

Antes de esta reforma, dicho artículo sancionaba el delito en cuestión con una pena de un mes a cuatro años de interdicción del ejercicio de funciones públicas (36).

La nueva redacción del art. 133 está concebida en los siguientes términos: "El funcionario público que abusando de sus funciones o infringiendo las formalidades prescritas por la Ley prive a una persona de la libertad, será castigado con interdicción de funciones públicas por un mes a un año; y si el delito se comete con alguna de las circunstancias previstas en los incisos segundo y tercero del artículo que precede, la interdicción será de dos a cuatro años. Los reos que al entrar en vigencia esta Ley se encuentren sufriendo pena impuesta de conformidad con el artículo 133 que se reforma, se les considerará cumplida la pena impuesta si han cumplido por lo menos un año a partir del día en que se puso en ejecución la sentencia".

Los artículos 3, 4 y 5 de esta ley suponen la modificación de los artículos 153, 154 y 155 del Código que tratan, respectivamente, de los delitos de "peculado por apropiación", "peculado culposo" y "peculado por uso indebido".

De estas tres modificaciones, las efectuadas a la penalidad de los artículos 153 y 154 son muy desafortunadas, ya que - adoptan el criterio de establecer la pena en relación directa - con la cuantía de los objetos o caudales apropiados, sustraídos o malversados (37):

Para el peculado por apropiación del art. 153 se establecen las penas de interdicción para el ejercicio de funciones públicas por un término de cuatro años y la de reclusión en la siguiente forma:

- a) De seis meses a un año si la sustracción excede de - cien balboas;
- b) De uno a tres años si la sustracción excede de cien balboas sin pasar de mil balboas;
- c) De tres a seis años, si excede de mil balboas y no pasare de cinco mil balboas;
- d) De seis a doce años si excede de cinco mil balboas.

La nueva sanción para el "peculado culposo" del art. 154 fue la de una tercera parte de la reclusión señalada en el artículo anterior e interdicción para ejercer funciones públicas por el término de tres años.

En el caso del "peculado por uso indebido" del art. 155, la reforma estableció una pena de multa que no excedía de mil balboas, en vez de la establecida que en ese entonces era de - seis meses a dos años de reclusión (38).

El artículo en cuestión quedó, en los sucesivos: "El funcionario público que usare en beneficio propio o ajeno, los caudales o efectos públicos o privados que estén a su cargo por razón de sus funciones, sufrirá pena de multa de cien a mil balboas e interdicción para ejercer funciones públicas por el término de dos años, siempre que reintegre los caudales o efectos públicos o privados usados, antes de dictarse auto de enjuicia-

miento; y si no lo reintegrare o el reintegro se hiciera después, sufrirá las penas señaladas en el artículo 153 de este Código".

Esta ley establece una causa de extinción de pena para los responsables del delito de seducción o estupro, en el sentido de eximirlos de la pena a imponer si al pretender contraer matrimonio con la seducida, los padres o representantes de aquella manifestaren su oposición al pretendido matrimonio.

Dicho artículo está concebido en los siguientes términos: "En el caso del artículo 283 del Código Penal, cuando la víctima y el culpable desearan contraer matrimonio y a ello se oponen los padres o representantes de la víctima, el delincuente quedará exento de pena" (39).

Los artículos 7 y 8 de la ley comentada aumentan las penas previstas para los delitos de quiebra fraudulenta y culposa previstos en los artículos 363 y 364 del Código Penal que remiten directamente a los artículos 1557 y 1558 del Código de Comercio (40).

Para los casos de quiebra que el Código de Comercio cataloga como una "fraudulenta" en el art. 1557, esta ley establece como sanción penal la de uno a seis años de prisión; para la quiebra que el Código de Comercio denomina como "culpable", pero en realidad debió decir "culposa", la pena es de uno a cinco años de prisión.

Por último, omitimos toda referencia al "delito de usura" creado en esta ley, toda vez que no supone la reforma de ninguna disposición penal ya existente sino, la creación de un nuevo tipo delictivo.

Además, la usura ya fue objeto de particular atención a

propósito de la "legislación especial" estudiada en el capítulo anterior.

V. LEY 34 DE 1941

Mediante la Ley 34 de 1941 (41), que regula el servicio de correos y telecomunicaciones, se modificaron diversas disposiciones referentes a la inviolabilidad del secreto postal, falsificación de sellos y sobre la seguridad de los medios de comunicación respectivos.

En cuanto a la inviolabilidad del secreto, esta ley modifica la figura delictiva contemplada en el art. 144 del Código Penal (42), a fin de crear una figura simple y otra agravada - con penas superiores a las antes establecidas (43). Se aumentan considerablemente las penas del art. 145 del Código Penal (44) cuando se evita que la correspondencia llegue a su destino (45).

Especial atención brinda esta ley a los delitos de falsificación de sellos postales. En efecto, esta ley modifica todo el régimen previsto en los arts. 225, 227, 228 y 229 del Código Penal, ya que aumenta las distintas penas previstas para dichos supuestos (46).

Por lo que respecta a la seguridad de los medios de comunicación, la ley 34 de 1941 modifica el art. 268 del Código Penal (47) que establecía una pena de 20 días a 3 años de reclusión por la de 3 a 6 años de reclusión. Esta modificación no está expresamente dirigida al art. 268 del Código Penal pero regula las mismas cuestiones que dicho artículo y sólo aumenta la pena correspondiente (48).

VI. LEY 80 DE 1941

Mediante la Ley 80 de 1941 (49) se derogaron las disposiciones contenidas en el Capítulo VII del Título XII del Libro Segundo del Código Penal que incluían los "delitos de calumnia e injuria" dentro de los "delitos contra las personas" previstos en el Libro relativo a "las diferentes especies de delitos".

Los delitos en cuestión fueron derogados concretamente por el art. 32 de la Ley 80 de 1941, toda vez que derogó los artículos comprendidos entre el artículo 337 y 349 inclusive.

Dicha derogación expresa se debió a que la citada ley reguló de una manera total los "delitos de calumnia e injuria" que a partir de entonces fueron previstos en leyes especiales (50).

La Ley 80 de 1941 aunque regulaba los "delitos de calumnia e injuria" fue denominada como la ley "Sobre Delitos contra la Honra".

Esta Ley es una de las pocas disposiciones legales que han sido precedidas de "considerandos" en nuestro medio, cuyo tenor es el siguiente:

Considerando:

"Que el artículo 39 de la Constitución Nacional dispone que "toda persona podrá emitir libremente su pensamiento, de palabra o por escrito, sin sujeción a censura previa, pero existirán las responsabilidades legales cuando por algunos de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o la tranquilidad pública".

VII. DECRETO-LEGISLATIVO 11 DE 1945

Mediante el Decreto-Legislativo 11 de 1945 (51) se señalaron penas especiales para los delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo y otros cometidos contra los poderes constituidos de la Nación y su forma democrática de Gobierno.

Sobre el referido Decreto-Legislativo ya nos hemos pronunciado anteriormente, cuando nos ocupamos de las "leyes especiales".

Sólo nos interesa señalar que el mismo se consagra una modificación tácita al texto del art. 112 del Código Penal, - siempre que los atentados contra los poderes constituidos o la forma democrática de Gobierno se realicen con pérdida de vidas o daño a la propiedad (52).

La pena, que antes era de prisión de cuatro a diez años, se cambia por la reclusión por el término de veinte años.

VIII. LEY 24 DE 1951

Mediante la Ley 24 de 1951 (53) por "la cual se crea el Tribunal Tutelar de Menores" se sustrae del ámbito de la ley penal los hechos delictivos que sean cometidos por todos los menores de 18 años de edad.

En forma particular conoce el Tribunal en relación con menores que no hayan cumplido 18 años de edad en relación con los casos sobre desajustes primarios de conducta; de los de - transgresión a las leyes, decretos o reglamentos que aparejen responsabilidad penal o den lugar a sanción correccional; de los de abandono, de indigencia, maltrato, explotación, corrupción, deficiencia física o mental, siendo a este respecto la única autoridad competente para tratar estos asuntos.

De esta forma, en virtud de esta Ley no podrá seguirse procedimiento alguno contra quien no haya cumplido dieciocho años de edad en el momento violatorio de la Ley penal. Todo menor inculcado de delito será puesto a órdenes del Tribunal Tutelar de Menores para ser sometido, previo los trámites establecidos en dicha ley, a un régimen tutelar de educación y disciplina de acuerdo con las circunstancias del caso (54).

Quedan derogados, en consecuencia, lo que se dispone en el Código Penal a propósito de dichos menores en los arts. 54, 55 y 56 (55).

IX. LEY 22 DE 1954

Mediante la Ley 22 de 1954 (56) se reglamentan las vacaciones del Órgano Judicial y las jurisdicciones Contenciosa y Laboral; se derogan varias disposiciones del Código Judicial; se reforman otras del Código Penal y asimismo se reforman y adicionan varias disposiciones de la Ley 61 de 1946 sobre "Organización Judicial".

Aunque esta Ley contiene 20 artículos, sólo dos se refieren a cuestiones de naturaleza penal.

En efecto, los artículos 17 y 18 de esta Ley modifican la regulación hasta ese momento existente para el delito de "encubrimiento" previsto en los artículos 370 y 371 del Código Penal (57).

Esta ley modifica por completo la regulación del encubrimiento al consagrar una nueva redacción al precepto penal, que ahora resulta mucho más amplio y señala la cuantía de la multa, que figura en forma copulativa con la privación de libertad, en una tercera parte del valor de la cosa objeto material del

delito (58).

Finalmente, desaparece el art. 371 del Código Penal de 1922 y en su lugar se introduce como tal el inciso 2º del art. 370 del propio código, al que se le añade un párrafo adicional que consagra como agravante en este delito la calidad de "habitual" del encubridor (59).

X LEY 43 DE 1958

Mediante la Ley 43 de 1958 (60) se modificaron diversos artículos del Código Penal de 1922, de variada índole y significación.

Expresamente dispone esta ley su vigencia a partir de su "sanción", situación que resulta extraña en nuestra legislación en donde, ordinariamente, las leyes rigen a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Esta ley reforma sustancialmente los delitos de seducción (estupro) (61), actos libidinosos (62) y lesiones personales dolosas (63), al modificar en algunos aspectos importantes tanto la estructura típica como la penalidad de los mismos.

La nueva redacción de la seducción (64) prescinde de la promesa de matrimonio como elemento de la figura típica y reduce la pena impuesta mediante la Ley 25 de 1927.

En el delito de actos libidinosos el legislador prescinde de la referencia a los medios utilizados para la comisión del delito sin introducir modificación alguna en la pena respectiva (65).

Respecto de las lesiones dolosas, la reforma elimina el párrafo final del art. 319 del Código en su versión original, introduce algunas modificaciones en el inciso 2º y aumenta conside

rablemente el mínimo de la pena del que viene a ser nuevo inciso final (66).

También es objeto de modificación por esta ley el literal 1) del art. 352 del Código Penal (67) que alude a la agravante de ser la cosa material del hurto "ganado", al que se le impone la pena de reclusión por 20 a 54 meses (68).

La ley en cuestión también modifica el art. 24 del Código Penal (69) al señalar el máximo de la multa en diez mil balboas y fija el arresto sustitutorio, en caso de impago de la multa, en un máximo de 5 años (70). Antes el máximo de la multa era de mil balboas y el máximo del arresto sustitutorio de dos años.

Finalmente, se modifica el régimen de la prescripción de la acción penal previsto en el art. 86 del Código (71). La nueva regulación establece la prescripción de la acción en plazos más breves que el sistema anterior (72), lo que en lo sucesivo dará motivos a diversas reformas de dicha regulación.

XI. LEY 1 DE 1959

Mediante la Ley 1 de 1959 (73) se reformaron y adicionaron numerosas disposiciones del Código Judicial y de otras distintas leyes.

Aunque esta ley contiene 50 artículos, sólo el art. 46 de la misma se refiere a la materia penal.

Por otra parte, esta ley dispone que su vigencia empiece a partir de su sanción, hecho ocurrido el 20 de enero de 1959.

Esta ley reforma el inciso final del art. 336 del Código (74), que se refiere a los abusos en la corrección de subordinados y de los malos tratamientos en la familia, ya que elimina del citado artículo la exigencia de "acusación particular"

cuando se trata de denunciar los malos tratos que se infieren por parte del cónyuge (75).

De esta forma, el delito se investiga con la simple denuncia del cónyuge afectado por dichos maltratos.

XII. LEY 68 DE 1961

Mediante la Ley 68 de 1961 (76) se modificaron algunas disposiciones de carácter general del Código (77) y algunas normas referentes a los delitos contra las buenas costumbres y contra la propiedad (78).

Esta ley modifica el régimen de la retroactividad penal a fin de poner la legislación penal (79) en concordancia con la Constitución Nacional y establece nuevos plazos para la prescripción de la acción penal que vuelven al sistema que originalmente tenía el Código (80) y modifica también la regulación de la interrupción de la prescripción de la acción penal (81).

Se reforman nuevamente las penas de los delitos de violación (82), rapto (83) y la exención de pena prevista para la seducción y el rapto (84).

El hurto propio (85) y sus agravaciones (86) son objeto de modificación para aumentar las penas de los mismos (87). A este respecto, cabe señalar, que resulta paradójico que la nueva penalidad del hurto agravado del art. 352 del Código Penal tenga una distinta y mayor en todos los literales del mismo salvo el literal final (el literal 1) del art. 352) que desde la Ley 43 de 1958 era sancionado con pena de veinte a cincuenta y cuatro meses.

La situación se debe a que, mientras el art. 352 tenía una penalidad de ocho a cuarenta meses en 1958 se aumentó de -

veinte a cincuenta y cuatro meses la pena para el literal 1) - del citado artículo 352.

Lamentablemente al modificarse el art. 352 con esta ley, el legislador no advirtió las contradicciones que se producían en la misma disposición.

La protección que una vez se le quiso conceder a la "ganadería" ha perdido la especial relevancia que antes tenía, aunque todavía dicho delito es sancionado con severas penas.

También son objeto de modificación los delitos de apropiación indebida (88), encubrimiento (89) y perjuicios (daños) (90), en el sentido de aumentar la pena prevista para la apropiación indebida (91) y el encubrimiento (92) y darle una nueva redacción al precepto de los perjuicios (93).

Finalmente, esta ley adiciona al Código Penal con un artículo nuevo. Se trata del art. 372a que trae una nueva modalidad punible para el delito de usurpación (94) a la que se sanciona con la misma pena prevista para la conducta básica de usurpación prevista en el art. 372 del Código.

XIII. LEY 6 DE 1963

Mediante la Ley 6 de 1963 (95) se adiciona un nuevo literal al art. 351 del Código Penal (96) y se reforma el art. 353 que trata del delito de robo (97).

Al art. 351 se le añade un nuevo literal para incluir como agravante específica en el hurto el que el objeto material del delito sea "bicicleta, motocicleta, automóvil, o parte o accesorio de automóvil" (98).

Por lo que respecta al robo, la nueva redacción de la figura aumenta la pena prevista para la conducta básica y añade como agravantes específicas el que la víctima sea un impúber, sea mayor de sesenta años, sea mujer embarazada o una persona incapaz de resistir a consecuencia de enfermedad mental o física. Además, se agrava a un más la pena si el robo se comete empleando arma idónea para lesionar o matar (99).

XIV. LEY 11 DE 1963

Mediante la Ley 11 de 1963 (100) se introdujeron algunas reformas a la organización y procedimiento judiciales y se adicionó un artículo del Código Penal.

En efecto, esta ley adicionó el art. 88 del Código, que trata de la interrupción de la prescripción de la acción penal y que anteriormente hemos transcrito al señalar su última reforma.

Según este nuevo inciso del art. 88 (101) la prescripción de la acción penal se interrumpe desde el momento en que se anuncia el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia hasta el momento en que sea decidido el recurso.

La adición en cuestión fue justificada en su momento por las autoridades en vista de que numerosos delitos prescribían en el despacho de los Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, puesto que estos tardaban varios años en resolver el asunto.

Esta ley empezó a regir, por expresa disposición de su art. 55, a partir del 1 de marzo de 1963.

XV. LEY 1 DE 1964

Mediante la Ley 1 de 1964 (102) se modificaron diversas disposiciones del Capítulo II (delitos contra la seguridad de los medios de comunicación) y del Capítulo III (delitos contra la salubridad pública) del Título X (delitos contra la seguridad pública) del Libro II del Código Penal y una disposición de la Ley 34 de 1941.

Por lo que respecta a las disposiciones sobre seguridad de los medios de comunicación, la presente ley modificó los arts. 265, 266 y 270 del Código que erigen en delito el crear peligro de desastre en una vía férrea (103), causar daños en ella (104) o causar daños en caminos, obras o artefactos destinados a las comunicaciones, etc. (105), en el sentido de aumentar las penas previstas para dichos delitos.

En cuanto a la salubridad pública, esta ley reforma los arts. 271, 272, 273 y 275 del Código que sanciona envenenar, contaminar o corromper las aguas potables destinadas a uso público (106), la falsificación o alteración de sustancias medicinales (107), poner en ventas sustancias alimenticias o medicinales nocivas para la salud (108) y la comisión culposa de las conductas anteriores (109) y les señala unas penas considerablemente mayores.

Por último, la reforma a la Ley 34 de 1941 se reduce a modificar el art. 26 de la citada Ley, que a su vez había modificado el art. 268 del Código Penal, en el sentido de aumentar la pena para imponer reclusión por tres a seis años en vez de reclusión por diez meses a cuatro años (110).

XVI. LEY 9 DE 1964

Mediante la Ley 9 de 1964 (111) se reformaron una gran cantidad de artículos del Código Fiscal y de otras diversas leyes, entre ellas el Código Penal.

En virtud de esta ley se reformó el art. 231 del Código Penal, que imponía leves penas a quien hiciere desaparecer de los billetes de ferrocarril u otras empresas públicas de transporte las señales que indiquen que han sido usados y a quien haga uso de los mismos y les aumentó la pena respectiva (112).

Por otra parte, esta misma ley erigió en "falta fiscal" la falsificación del "papel sellado", por lo que expresamente derogó las disposiciones pertinentes del Código Penal que estaban previstas en los arts. 225, 226, 227, 228 y 229 (113).

Aunque publicada en la Gaceta Oficial del 29 de diciembre de 1964, esta ley empezó a regir a partir del 1 de enero de 1965 según disponía su art. 40.

XVII. LEY 9 DE 1967

Mediante la Ley 9 de 1967 (114) se reformaron algunos artículos de los Códigos Judicial, Penal y Civil y se establecieron otras disposiciones.

Por lo que respecta a la reforma del Código Penal esta ley modificó sustancialmente las penas establecidas para los delitos de hurto, robo, extorsión y usurpación y modificó el régimen de la prescripción de la acción penal y de la interrupción de ésta.

En cuanto al hurto propio, esta ley introduce en nuestra legislación la determinación de la pena en base al valor de

la cosa objeto material del hurto, que ya antes habían existido durante la breve vigencia del Código Penal de 1916 (115).

Los hurtos agravados de los arts. 351 y 352, ya antes re-
formados por la Ley 68 de 1961, se modificaron nuevamente para
aumentar la pena para ellos prevista (116).

El robo previsto en el art. 353 del Código Penal, ya re-
formado por la Ley 6 de 1963, es modificado nuevamente al elimi-
narse el inciso final y aumentarse la pena de la conducta bási-
ca (117).

También se aumenta la pena de extorsión prevista en el
art. 354 del Código Penal (118), a fin de imponer la de reclu-
sión de cinco a ocho años y la agravante prevista en el art. 355
del Código (119) se endurece notablemente (120).

La intención del legislador al aumentar estas últimas pe-
nas a un mínimo de cinco años de privación de libertad ha sido la
de evitar el beneficio de fianza de excarcelación para estos de-
litos, ya que según nuestro ordenamiento procesal penal los deli-
tos sancionados con pena mínima de 5 o más años de privación de
libertad no tienen tal derecho.

La reforma del art. 372a del Código Penal tiene por ob-
jeto prescindir en la estructura de la conducta del término "te-
rreno", a fin de evitar que pueda constituir delito lo que en
aquella época se podía convertir en un problema social de enorme
significación, el intrusismo(121), para remitir su solución a la
legislación agraria, en particular el Código Agrario.

Finalmente, esta ley trae una regulación de la prescrip-
ción de la acción penal (122) y de su interrupción (123) que a
no dudarlo son los aspectos más reformados en nuestro país des-
de que el Código Penal de 1922 está vigente.

XVIII. DECRETO DE GABINETE 141 DE 1969

Mediante el Decreto de Gabinete 141 de 1969 (124) se modificó la regulación del homicidio y las lesiones culposas, que ya antes habían sido reformados por la Ley 3 de 1931.

Este Decreto de Gabinete aumentó la pena prevista para el homicidio culposo, tanto en su figura básica como en su agravación e introdujo una nueva circunstancia agravante para el caso de que el hecho se cometiera con vehículos de motor y el responsable se encontrare en estado de embriaguez, no tuviere permiso de conducir o se diere a la fuga (125).

Lamentablemente esta nueva agravante no ha podido tener aplicación real, ya que si bien establece cuales son los supuestos en que se produce la agravación de pena, no señala la pena que debe imponerse por la concurrencia de la agravante.

Por otra parte, las lesiones culposas han sufrido también un aumento en la pena prevista, que todavía continúa siendo un arresto. Afortunadamente todavía las lesiones culposas pueden ser sancionadas con arresto o, alternativamente, con multa (126).

NOTAS

- (1) Ley 25 de 14 de febrero de 1927. Publicada en la Gaceta Oficial número 5063, de 9 de marzo de 1927.
- (2) Solo 2 se refieren al libro primero y el resto al título sobre buenas costumbres y orden de la familia.
- (3) Son nuevos los arts. 24a, 325a), 325b) y 325c).
- (4) El texto del art. 24a es el siguiente:
"El mínimo de las penas de reclusión, prisión, arresto o multa no podrá ser, en ningún caso, menor de treinta días ni de veinte balboas (Bs. 20.00) respectivamente.
Cuando el máximo señalado por la ley penal sea igual o menor al mínimo indicado en el inciso anterior, la pena podrá extenderse hasta sesenta días o hasta cuarenta balboas (Bs. 40.00) si fuere el caso".
- (5) C.P. 1922, arts. 90, reformado por la Ley 25 de 1927.
- (6) El texto del art. 281 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que con violencia o amenaza obligue a una persona, de uno u otro sexo, a comercio carnal, será castigado con reclusión de dos a cuatro años.
Incorre en la misma pena el que, aun sin violencia o amenaza, tenga relaciones carnales con una persona de uno u otro sexo que en el momento del hecho no ha cumplido doce años; o si la víctima se halla detenida o presa y confiada al culpable para vigilarla o conducirla de un lugar a otro, o no está en situación de resistir por razón de enfermedad mental o física, o por otra causa independiente del acto del culpable, o por efecto de medios fraudulentos empleados por éste.
La pena será de tres meses a un año de prisión, cuando las relaciones carnales se efectúen sin amenaza, violencia ni fraude y la víctima haya cumplido doce años, sin pasar de quince, siempre que el autor del atentado sea ascendiente, curador, tutor o maestro de la persona, o ministro del culto que ella profesa".

- (7) La Ley 25 de 1927 aumentó las penas para el art. 281 del Código Penal así: a) para el inciso 1º, de dos a seis años de reclusión, b) para el inciso 2º, la pena anterior; c) para el inciso final, la pena de uno a cuatro años de reclusión.
- (8) El texto del art. 283 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El concubito habido con mujer doncella mayor de doce años y menor de veintiuno, con su consentimiento, será punible cuando hubiere habido seducción con promesa de matrimonio, y en tal caso la pena será de multa de cien a mil balboas, además de la indemnización de que trata el art. 36.
Si no mediare promesa de matrimonio, la pena se reducirá a la mitad".
- (9) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena para el delito previsto en el art. 283 y la fijó, para el inciso 1º, en reclusión de uno a tres años, además de la indemnización.
- (10) El texto del art. 284 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que por los medios que menciona el artículo 281 comete con persona de uno u otro sexo actos libidinosos que no tiene por objeto el delito previsto en ese artículo, será castigado con reclusión por dos meses a un año.
Si el hecho se comete con abuso de autoridad, la reclusión, en caso de violencia o amenazas, será de cuatro meses a dos años, y en los casos citados en los incisos segundo y tercero del artículo 282, de uno a cuatro años".
- (11) La Ley 25 de 1927 aumentó las penas previstas en el art. 284 y la fijó, para el inciso 1º, en reclusión de tres meses a un año y para el inciso 2º, primera parte en reclusión de cinco meses a dos años y para el inciso 2º, segunda parte, en reclusión de dos a cinco años.
- (12) El texto del art. 287 del Código Penal de 1922, era el siguiente:
"Se castigará con prisión de seis meses a dos años al que, conociendo las relaciones que lo ligan y con escándalo público mantenga relaciones incestuosas con un ascendiente, descendiente, o hermano.

Para los efectos de la ley penal se entiende que ha escándalo público cuando el hecho es conocido por personas de buen crédito del vecindario en número de diez, por lo menos".

- (13) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena prevista para el art.287 y la fijó en prisión de uno a dos años.

- (14) El texto del art. 289 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que fuera de los casos previstos en los artículos que preceden, ofenda el pudor o las buenas costumbres con actos efectuados en un lugar público o accesible al público, será castigado con prisión de uno a diez meses".

El texto del art. 290 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que ofenda el pudor con escritos, dibujos u otros objetos obscenos, distribuidos o presentados al público, en cualquier forma que sea, o puestos en venta, será castigado con prisión por cuatro días a cuatro meses, y multa de cinco a cien balboas, y si el hecho se ejecuta con un fin de lucro, la prisión será de ocho días a cuatro meses, y la multa de diez a doscientos balboas".

- (15) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena prevista para el art.289 y la fijó en prisión de uno a doce meses; dicha ley, para el art. 290 aumentó la pena de la figura básica y la fijó en prisión de cinco días a cuatro meses, sin variar la - cuantía de la multa, y para la figura agravada, la fijó en prisión de ocho días a cinco meses y no modificó la cuantía de la multa.

- (16) El texto del art. 291 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que por medio de violencias, amenazas o engaño, arrebatte o secuestre, con fines inmorales, o para casarse con ella, a una mujer mayor de edad, será castigado con reclusión por cuatro meses a dos años".

El texto del art. 292 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que por medio de violencias, amenazas o engaños arrebatte o secuestre, con fines inmorales, o para casarse con -

ella, a una persona menor de edad o arrebatada o secuestre, con propósitos inmorales, a una mujer casada, será castigado con reclusión de uno a tres meses.

Si la persona hubiere sido arrebatada o secuestrada mediando su consentimiento, la pena será de multa de cien a mil balboas, además de la indemnización a que se refiere el artículo 36.

Si la persona arrebatada no hubiere cumplido doce años, el culpable será castigado, aunque no haya usado de violencia, amenazas o engaños, con reclusión por uno a tres años".

- (17) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena prevista para el art. 291 y la fijó en reclusión de seis meses a dos años.

También aumentó la pena del art. 292 y la fijó de la siguiente forma: a) inciso 1º, reclusión de uno a tres años; b) inciso 2º, reclusión de uno a dos años; c) inciso 3º, de uno a dos años.

- (18) El texto del art. 295 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que, para servir a la lascivia de otro, induzca a la prostitución a una persona menor, o la incite a la corrupción, será castigado con reclusión por dos a veinte meses, y multa de diez a ciento cincuenta balboas.

La reclusión será de ocho meses a cuatro años, y la multa no será menor de cincuenta balboas, en los siguientes casos:

- a) cuando el delito se cometa con una mujer menor de doce años o varón menor de catorce, o por medio de engaño;
- b) Cuando lo cometan ascendientes de la víctima, o afines en línea directa de ascendientes, el padre o la madre adoptivos, el marido, el tutor, curador, o cualquier otra persona a quien se haya confiado la víctima, por razón de vigilancia, educación o instrucción;
- c) cuando el responsable cometa este delito habitualmente por fines de lucro.

En caso de concurso de dos o más de las circunstancias que se enuncian en los incisos que preceden, la reclusión será de diez y seis meses a cuatro años, y la multa no será inferior a cien balboas".

- (19) La Ley 25 de 1927 aumentó las penas para el art. 295 así:
a) inciso 1º, reclusión de uno a dos años; b) inciso 2º,

- reclusión de uno a cuatro años; c) inciso final, reclusión de dos a seis años.
- (20) El texto del art. 301 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"La mujer adúltera y su cómplice incurrirán en la pena de prisión por uno a diez meses".
- (21) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena del art. 301 y la fijó en prisión de uno a dos años.
- (22) El texto del art. 303 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"La pena de que tratan los artículos anteriores se reducirá a la de cuatro días a un mes de arresto, si el cónyuge culpable estuviere separado legalmente o hubiere sido abandonado por el otro".
- (23) El texto del art. 303, reformado por la Ley 25 de 1927, quedó así:
"La pena de que tratan los artículos anteriores, se reducirá a la mitad si el cónyuge culpable estuviere separado legalmente o estuviere abandonado por el otro por un período de más de cuatro años".
- (24) El texto del art. 307 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que estando ligado por un matrimonio válido contraiga otro, y el que siendo libre contraiga, a sabiendas, matrimonio con una persona válidamente casada, sufrirá la pena de ocho meses a dos años de reclusión.
Incurrirá en la cuarta parte de la pena señalada en el inciso anterior, el que contrajere matrimonio antes de esperar un año de haber obtenido sentencia de divorcio; y en la octava parte el otro cónyuge, si lo hiciere a sabiendas".
- (25) La Ley de 1927 aumentó la pena prevista para el inciso 1º del art. 307 y la fijó en reclusión de uno a dos años.
- (26) El texto del art. 310 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El culpable de uno de los delitos previstos en los artículos anteriores que lo cometa para salvar su propio honor o el de su mujer, de su descendiente, de su hija adoptiva o

de su hermana, o para evitar sevicias inminentes, incurrirá en prisión por veinte días a dos años".

- (27) La Ley 25 de 1927 aumentó la pena para el art. 310 y la fijó en prisión de seis meses a dos años.
- (28) Incorporados al Título XII, sobre delitos contra las personas, en el Capítulo III sobre disposiciones comunes al homicidio y lesiones.
- (29) Ley 3 de 8 de enero de 1931. Publicada en la Gaceta Oficial número 3951, de 8 de julio de 1931.
- (30) C.P. 1922, art. 286.
- (31) El texto del art. 294 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"No se puede iniciar procedimiento respecto de los delitos de que trata este Capítulo, sino por denuncia del agraviado o de su representante legal; pero tal denuncia no será admisible sino cuando se presente dentro del plazo de un año a contar desde la ejecución del hecho punible".
- (32) El texto del art. 318 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que por imprudencia, negligencia o impericia en su oficio o profesión, o por no observar los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause la muerte de alguno, será castigado con arresto por diez días a un año, e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por diez días a un año.
Si del hecho resultare la muerte de varias personas, o la de una sola y la lesión de una o varias o personas, a quienes les cause un daño en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, la pena de arresto por tres meses a tres años, e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por tres meses a dos años".
- (33) El texto del art. 322 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su oficio o profesión, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause a otro un perjuicio

en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, será reprimido así:

- a) Con arresto de cinco días a dos meses o multa de cinco a sesenta balboas; pero no podrá iniciarse procedimiento sino por acusación del lesionado o de su representante legal, si fuere menor o incapaz, en los casos de los incisos primero y último del artículo 319;
- b) Con arresto de veinte días a seis meses o multa de veinte a ciento ochenta balboas en los demás casos".

(34) Ley 5 de 4 de enero de 1933. Publicada en la Gaceta Oficial número 6487, de 10 de enero de 1933.

(35) Así, art. 25, inc. 2º antes de la reforma.

(36) El texto del art. 133 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El funcionario público que, abusando de sus funciones, o infringiendo las formalidades prescritas por la ley prive a una persona de su libertad, será castigado con interdicción de funciones públicas por un mes a cuatro años, y si el delito se comete con alguna de las circunstancias previstas en los incisos segundo y tercero del artículo que precede, la interdicción será de cuatro a diez años.

La pena se reducirá de la sexta parte a la mitad en el caso previsto por el último inciso del artículo anterior".

(37) La penalidad anterior era la siguiente: a) para el art. 153, reclusión de siete meses a siete años, multa de setenta a setecientos balboas e interdicción perpetua del ejercicio de funciones públicas; b) para el art. 154, multa de cien a mil balboas e interdicción por seis meses a dos años del ejercicio de funciones públicas; c) para el art. 155, reclusión de seis meses a dos años.

(38) El texto del art. 155, reformado por la Ley 25 de 1927 quedó así:

"El funcionario público que usare en beneficio propio o ajeno, los caudales o efectos públicos o privados que estén a su cargo por razón de sus funciones, sufrirá pena de multa de cien a mil balboas, e interdicción para ejercer funciones públicas por el término de dos años, siempre que reintegre los caudales o efectos públicos o privados usados, antes de dictarse auto de enjuiciamiento; y si no lo

reintegrare o el reintegro se hiciere después, sufrirá las penas señaladas en el artículo 153 de este Código".

- (39) Esta disposición es nueva y no tiene antecedentes exactos en nuestra legislación.
- (40) Para la quiebra "fraudulenta" el art. 363 establecía una pena de uno a seis meses de prisión; para la quiebra "culpable" el art. 364 establecía una pena de prisión de dos meses a cuatro años.
Como podemos apreciar, se sancionaba con extremada dureza la figura culposa, mientras que la conducta dolosa era sancionada con una pena leve.
- (41) Ley 34 de 16 de abril de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8500, de 28 de abril de 1941.
- (42) El texto del art. 144 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que habiendo abierto indebidamente una carta, telegrama o pliego cerrado dirigido a otro, divulgue su contenido, con perjuicio ajeno, incurrirá en prisión por diez días a seis meses".
- (43) El texto del art. 14 de la Ley 34 de 1941 dispone lo siguiente:
"El que abra indebidamente una carta, telegrama o pliego cerrado dirigido a otro, incurrirá en prisión por diez meses a dos años si es empleado del Servicio de Correos y Telecomunicaciones, y de seis a dieciocho meses de arresto si es particular.
Si la persona que ha cometido el delito divulga el contenido de la carta, o telegrama, o pliego cerrado, con perjuicio ajeno, la pena será de dieciocho meses a cuatro años, si es empleado del Servicio de Correso y Telecomunicaciones, y de diez meses a dos años, si es particular".
Lamentablemente este inciso final no señala la clase de penas privativas de libertad que se impone, que no podrá ser la de arresto puesto que no puede exceder de los dieciocho meses.
- (44) El texto del art. 145 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que sustraiga o intercepte, indebidamente, una corres-

pondencia dirigida a otro, y cause con ello un perjuicio, incurrirá en reclusión por un mes a un año".

- (45) El art. 15 de la Ley 25 de 1927 señala que si el responsable es empleado del Servicio de Correos y Telecomunicaciones la pena será de reclusión por uno o cuatro años, pero si es un particular, la pena será de ocho meses a dos años. Y si se causa algún perjuicio, la pena será de dieciocho meses a cuatro años y de uno a tres años respectivamente.
- (46) Ley 34 de 1941, arts. 19, 20, 21 y 22.
- (47) El texto del art. 268 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que deteriore las máquinas, aparatos o hilos telegráficos, telefónicos, o cause la dispersión de las corrientes, o de cualquier modo interrumpa el servicio telegráfico o telefónico públicos, será castigado con reclusión por veinte días a tres años".
- (48) El art. 26 de la Ley 34 de 1941, que modificó el art. 268 del Código Penal decía así:

"El que deteriore las máquinas, aparatos o hilos del telégrafo o teléfonos, o cause la dispersión de las corrientes, o de cualquier modo interrumpa el servicio de telégrafos o teléfonos públicos, será castigado con reclusión de diez meses a cuatro años".
- (49) Ley 80 de 1 de julio de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8557, de 17 de julio de 1941.
- (50) "Artículo 32. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga los Capítulos I y III de la Ley 59 de 1926, el Capítulo VII, Libro II, Título XII del Código Penal y demás disposiciones que le sean contrarias".
- (51) Decreto-Legislativo 11 de 8 de noviembre de 1945. Publicado en la Gaceta Oficial número 9930, de 22 de enero de 1946.
- (52) El texto del art. 112 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"Se castigará con prisión de cuatro a diez años, al que ejecute un acto que tenga por objeto hacer tomar armas a habi-

tantes de la República contra los Poderes constituidos legalmente.

Pero si la insurrección estallare, su autor o quien la dirija serán castigados con prisión de doce a dieciocho años".

El texto del art. 3 del Decreto-Legislativo 11 de 1945 dispone:

"Los actos subversivos o que tengan por objeto atentar contra los poderes constituidos de la Nación o cambiar en modo alguna la forma democrática de su Gobierno con pérdida de vidas o daño a la propiedad, se castigarán con veinte años de prisión fija. La tentativa, con pena de uno a diez años, y el delito frustrado, con pena de cinco a quince años".

(53) Ley 24 de 19 de febrero de 1951. Publicada en la Gaceta Oficial número 11433, de 9 de marzo de 1951.

(54) Ley 24 de 1951, art. 6.

(55) Que contiene la regulación penal de la responsabilidad de los menores de 18 años.

(56) Ley 22 de 16 de febrero de 1954. Publicada en la Gaceta Oficial número 12306, de 26 de febrero de 1954.

(57) El texto del art. 370 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que, fuera de los casos previstos en el artículo 197, adquiere, recibiere u ocultare cualquier cosa que provenga de un delito, a sabiendas de su procedencia, o interviniere de cualquier modo para hacerlos adquirir, recibir u ocultar, sin haber cooperado en la comisión del delito, incurrirá - en reclusión de uno a veinte meses, y multa de diez a cien balboas.

En ningún caso la pena por uno de estos hechos puede exceder de la mitad de la señalada al delito del cual proceden las cosas que se adquieren, reciben u ocultan indebidamente.

Pero si el culpable es encubridor habitual, la reclusión será de uno a tres años y la multa de cincuenta a trescientos balboas".

El texto del art. 371 del Código Penal de 1922, era el si-

guiente:

"Se presume legalmente que el que adquiere la cosa procede a sabiendas de que es fruto de un delito, cuando el precio de adquisición es notoriamente inferior al valor real de la cosa, cuando el adquirente es persona de mala conducta comprobada en relación con los bienes ajenos".

- (58) El texto del art. 370 del Código Penal, reformado por la Ley 22 de 1954, quedó así:
"El que sin haber tenido participación alguna en el delito, ni encontrándose en los casos del artículo 197, oculte en interés propio, reciba en prenda o en depósito gratuito, o adquiere de cualquier modo, objetos o dineros que por la persona que los presente, ocasión y circunstancias del empeño o enajenación, evidencien o hagan suponer racionalmente, que proceden de un delito; y el que concurra a la enajenación o empeño de dichos objetos auxiliando a los delincuentes que se aprovechen de sus productos, incurrirán en reclusión de uno a veinte meses, y multa de tres veces el valor comercial del objeto motivo del delito".
- (59) El texto del art. 371 del Código Penal, reformado por la Ley 22 de 1954, quedó así:
"En ningún caso la pena por uno de estos hechos podrá exceder de la mitad de la señalada al delito del cual proceden las cosas que se adquieran, empeñen, reciban u oculten indebidamente.
Pero si el culpable es encubridor habitual, la reclusión será de uno a tres años y la multa de cuatro veces el valor comercial del objeto motivo del delito".
- (60) Ley 43 de 20 de noviembre de 1958. Publicada en la Gaceta Oficial número 13701, de 1 de diciembre de 1958.
- (61) Modificado por la Ley 25 de 1927.
- (62) Modificado por la Ley 25 de 1927.
- (63) El texto del art. 319 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que, sin intención de matar, cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud, o una perturbación mental, será castigado con reclusión por tres meses a un año, si excede de diez días y no llega a treinta la enfermedad o incapacidad.

La reclusión será de ocho meses a tres años, si la lesión produce el debilitamiento perpetuo de un sentido o un órgano, o una dificultad permanente para hablar, o una señal permanente en el rostro, o entorpecimiento de la visión, o si pone la vida en peligro, o si trae consigo una enfermedad mental o física de treinta días o más, o incapacidad para entregarse a las ocupaciones ordinarias por el mismo tiempo, o si, inferida a una mujer en cinta (sic), apresura el alumbramiento.

La reclusión será de tres a seis años, si el hecho produce una enfermedad mental o física, de seguro o probablemente incurable, o la pérdida de un sentido, de mano o pie, de la facultad de hablar, de la capacidad de engendrar, del uso de un órgano, una alteración permanente de la visión o si desfigura de por vida al individuo, o si habiéndose cometido contra una mujer en cinta (sic) produce el aborto.

Fuera de los casos previstos en el inciso que precede y en el artículo siguiente, si el hecho no produce enfermedad o incapacidad de desempeñar las ocupaciones ordinarias que excede de cinco y no pase de diez días, la pena será de ocho días a dos meses de arresto o de multa de ocho a sesenta balboas".

- (64) El texto del art. 283, reformado por la Ley 43 de 1958, quedó así:

"El concubito habido con mujer doncella mayor de doce años y menor de diez y siete, con su consentimiento, se castigará con reclusión de seis meses a un año, además de la indemnización de que trata el artículo 36.

Si mediase promesa de matrimonio, la pena será de uno a dos años".

- (65) El texto del art. 284, modificado por la Ley 43 de 1958, quedó así:

"La ejecución de actos libidinosos con una persona de una u otro sexo, que no tiene por objeto el ayuntamiento carnal, será castigado con reclusión de tres meses a un año.

Si el hecho se comete con abuso de autoridad y mediaren violencia o intimidaciones, la pena será de cinco meses a dos años, y si concurriere cualquiera de las circunstancias expresadas en los incisos segundo y tercero del artículo 281, la pena será de dos a cinco años".

- (66) El texto del art. 319, modificado por la Ley 43 de 1958,

quedó así:

"El que sin intención de matar, cause a otro un daño en el cuerpo o la salud, o una perturbación mental, será castigado con reclusión por tres meses a un año, si pasa de diez días y no excede de treinta la enfermedad o incapacidad.

La reclusión será de ocho a treinta meses, si la lesión produce el debilitamiento perpetuo de un sentido o un órgano, o una dificultad permanente para hablar, o una señal visible a simple vista y permanente en el rostro, o entorpecimiento de la visión, o si, por haber interesado un órgano vital, pone en peligro la vida, o si trae consigo, una enfermedad mental o física de más de treinta días, o incapacidad para entregarse a las ocupaciones ordinarias por el mismo tiempo, o si, inferida a una mujer encinta, apresure el alumbramiento.

La reclusión será de treinta meses a cinco años si el hecho produce una enfermedad mental o física, de seguro o probablemente incurable, o la pérdida de un sentido, de mano o pie, de la facultad de hablar, de la capacidad de engendrar, del uso de un órgano, o una alteración permanente de la visión, o si desfigura de por vida a la víctima, o si, habiéndose cometido en la persona de una mujer encinta, produce el aborto".

- (67) El art. 352 del Código Penal establecía 12 agravantes específicas para el hurto, sancionadas con privación de libertad de ocho a cincuenta y cuatro meses. El literal 1) de este artículo disponía lo siguiente: "Si el hecho se comete en una cabeza de ganado mayor, o que forme parte de un rebaño, o de animales que estén sueltos en dehesa o caballeriza que nos constituyan dependencias inmediatas a las habitaciones.

La pena de que trata este artículo se aplicará por cada cabeza de ganado mayor, siempre que el hurto comprenda más de una".

- (68) El literal 1) del art. 352 del Código Penal, reformado por la Ley 43 de 1958, quedó así:
"El hurto de una o más cabezas de ganado mayor, o que formen parte de un rebaño, o de animales que estén sueltos en dehesa o caballerizas que no constituyan dependencia inmediata de las habitaciones se castigará con reclusión de veinte a cincuenta y cuatro meses".

- (69) El texto del art. 24 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"La pena de multa consiste en la obligación de pagar al Tesoro Nacional una suma no menor de un balboa ni mayor de - mil.

Quando no se pague la multa en un plazo de dos meses después de notificada la condenación definitiva, como también en caso de insolvencia del condenado a ella, la multa se - convertirá en arresto, a razón de un día por cada balboa o fracción de balboa; pero en ningún caso el arresto así sustituido puede exceder de dos años.

Puede también pagar la multa el condenado a ella, con trabajo en obras públicas que se le computará a razón de un día de trabajo por cada balboa o fracción de balboa de la multa.

El condenado a multa puede hacer, durante el cumplimiento del arresto en que se convirtió la multa, que cese, satisfaciendo la parte proporcional de multa que no haya pagado con arresto".

- (70) Los incisos 1º y 2º del art. 24 fueron reformados por la Ley 43 de 1958 y quedaron así:

"La pena de multa consiste en la obligación de pagar al Tesoro una suma no menor de veinte balboas ni mayor de diez mil.

Quando no se pague la multa en un plazo de dos meses se convertirá en arresto a razón de un día por cada balboa o fracción de balboa, pero en ningún caso el arresto sustituido puede exceder de cinco años".

- (71) El texto del art. 86 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"La acción penal prescribe:

a) Cumplidos veinte años después de la ejecución del hecho, si el delito que se imputa al inculcado tiene pena de reclusión fija por veinte años;

b) Cumplidos diez años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por un mínimun de quince años;

c) Cumplidos ocho años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por más de cuatro y menos de quince años, o de prisión por más de tres años, o de interdicción perpetua de las funciones pú-

blicas;

d) Cumplidos cuatro años, si el delito tiene pena de reclusión o de prisión que no exceda de cuatro años, o de confinamiento, o de interdicción temporal de las funciones públicas, o de multa impuesta por delito;

e) Cumplidos dos años, si el delito tiene pena de arresto por más de veinte días o de multa de más de cuarenta - balboas;

f) Cumplidos seis meses, si el delito tiene pena de arresto o de multa por delitos inferiores a las señaladas en el ordinal que precede, o suspensión de la facultad de ejercer una profesión u oficio".

- (72) El texto del art. 86, reformado por la Ley 43 de 1958, que dó así:

"La acción penal prescribe:

a) En un término igual al de la pena señalada para el - delito cuando ella es de reclusión fija por veinte años;

b) En un término equivalente a los dos tercios de la pena máxima señalada para el delito en los demás casos;

c) No obstante lo dispuesto en el acápite anterior, la acción penal prescribirá en dos años con respecto a los delitos que se castigan con pena restrictiva de la libertad que no excede de diez y ocho meses;

d) Con respecto a los delitos que se castigan con pena de multa, la acción penal prescribirá en tres años si aquella excede de mil balboas, y en un año cuando es de mil - balboas o menos".

- (73) Ley 1 de 20 de enero de 1959. Publicada en la Gaceta Oficial número 13747, de 28 de enero de 1959.

- (74) El texto del art. 336 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que, fuera de los casos indicados en el artículo precedente, maltrate de obra a los miembros de su familia, o a un niño menor de doce años será castigado con prisión por uno a diez meses.

Si los malos tratamientos se infieren a un descendiente, ascendiente o afín en línea directa, la pena será de prisión por dos a veinte meses.

Si los malos tratamientos de obra se infieren al cónyuge, él no se castiga sino por acusación de la víctima".

- (75) El texto del inciso final del art. 336, reformado por la Ley 1 de 1959, quedó así:
"Si los malos tratamientos de obra se infieren al cónyuge, el delito no se castigará sino por denuncia de la víctima".
- (76) Ley 68 de 20 de diciembre de 1961. Publicada en la Gaceta Oficial número 14540, de 28 de diciembre de 1961.
- (77) Tales como los arts. 4 (retroactividad), 86 y 88 (prescripción de la acción penal).
- (78) Sobre violación, rapto, hurto, apropiación indebida, usurpación y perjuicios.
- (79) La Constitución Nacional de 1946 traía una regulación de la extradición distinta a la prevista originalmente por el Código Penal de 1922.
- (80) El texto del art. 86, modificado por la Ley 68 de 1961, quedó así:
"La acción penal prescribe:
a) Cumplidos veinte años después de la ejecución del hecho, si el delito que se imputa al inculcado tiene pena de reclusión fija por veinte años;
b) Cumplidos quince años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por un mínimum de quince años;
c) Cumplidos diez años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por más de cuatro y menos de quince años, o prisión, o de interdicción perpetua de las funciones públicas;
d) Cumplidos cuatro años, si el delito tiene pena de reclusión o de prisión que no exceda de cuatro años, o de confinamiento, o de interdicción temporal de las funciones públicas, o de multa; y,
e) Cumplidos dos años, en los demás casos".
- (81) El texto del art. 88, modificado por la Ley 68 de 1961, quedó así:
"La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de enjuiciamiento, aunque no esté ejecutoriado, pero si con anterioridad se hubiere decretado la detención provisional del sindicado, esa resolución esté o no cumplida, interrump-

pe la prescripción.

La interrupción, producida como se deja expresado, no puede prolongar el término de la acción penal por un tiempo que exceda de la mitad de los plazos señalados en el artículo 86.

La prescripción interrumpida empieza a correr de nuevo desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción afectará a cuantos participaron en el delito, aunque los actos interruptivos no afecten sino a uno sólo".

- (82) El texto del art. 281, reformado por la Ley 68 de 1961, - quedó así:

"El que con violencia o amenaza obligue a una persona, de uno u otro sexo, a comercio carnal, será castigado con reclusión de dos a ocho años.

Incorre en la misma pena el que, aún sin violencia o amenaza, tenga relaciones carnales con una persona de uno u otro sexo si la víctima se halla detenida o presa y confiada al culpable para vigilarla o conducirla de un lugar a otro, o no está en situación de resistir por razón de enfermedad mental o física, o por una causa independiente del acto del culpable, o por efecto de medios fraudulentos empleados por éste. Cuando la víctima sea menor de doce años, la reclusión será de cinco a doce años.

La pena será de uno a cuatro años de reclusión, cuando las relaciones carnales se efectúen sin amenazas, violencia ni fraude y la víctima haya cumplido doce años sin pasar de dieciocho, siempre que el autor del atentado sea ascendiente, curador, tutor o maestro de la persona o ministro del culto que ella profese".

Además de los aumentos de pena efectuados, la ley en cuestión añade un párrafo adicional al inc. 2º de este artículo, a fin de agravar la pena cuando la víctima del delito es un menor de doce años.

- (83) El texto del art. 292, reformado por la Ley 68 de 1961, - quedó así:

"El que por medio de violencia, amenazas o engaño, arrebate o secuestre con fines inmorales, o para casarse con ella a una mujer menor de edad o arrebate o secuestre con propósitos inmorales a una mujer casada, o soltera será castigado con reclusión de uno a tres años.

Si la menor de diez y siete años fuere doncella y hubiere

sido arrebatada o secuestrada mediante su consentimiento la pena será de uno a dos años, además de la indemnización a que se refiere el artículo 36.

Si la persona que hubiere sido arrebatada o secuestrada no hubiere cumplido doce años, el culpable será castigado aunque no haya usado la violencia, amenazas, o engaños, con reclusión de tres a ocho años".

- (84) El texto del art. 299, reformado por la Ley 68 de 1961, quedó así:

"El culpable de uno de los delitos previstos en el artículo 283, y en el segundo inciso del artículo 292, quedará exento de pena, si antes o después de dictarse condenación, contra matrimonio con la víctima y entonces cesa también el procedimiento respecto contra todos los que hayan cooperado en la ejecución del delito.

Si el matrimonio no se pudiera efectuar porque la agraviada o sus padres o sus representantes se opusieran a él, no otorgando su consentimiento, y el responsable comprobare debidamente, a juicio del tribunal, su buena conducta anterior, quedará exento de pena".

- (85) El texto del art. 350 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que se apodere de una cosa que pertenezca a otro para aprovecharse de ella, quitándola del lugar en que se encuentra, sin consentimiento de su dueño, será castigado con reclusión por un mes a dos años, si la cosa vale más de cinco balboas.

Habrán igualmente delito en lo referente a cosas pertenecientes a una herencia no aceptada todavía, y de parte del copropietario, del asociado o del coheredero, sobre las cosas comunes o pertenecientes a la herencia indivisa que no se hallan en su tenencia.

La cantidad de lo hurtado se aprecia entonces deducción hecha de lo que pertenezca al culpable".

- (86) El art. 351 del Código Penal de 1922 establecía para el hurto agravado una pena de reclusión de dos a treinta y dos meses; para las agravantes del art. 352 se establecía una pena de reclusión de ocho a cincuenta y cuatro meses.

- (87) La Ley 68 de 1961 modificó las penas de los artículos en cuestión, que en adelante quedaron así: art. 350, con reclusión

sión de tres a treinta meses; art. 351, con reclusión de seis meses a cuatro años; art. 352, con reclusión de uno a seis años.

- (88) El texto del art. 367 del Código Penal de 1922, era el siguiente:
- "El que se apropie, en provecho suyo o de un tercero, una cosa que pertenece a otro, y que se le confió o entregó con la obligación de restituirla o de darle una aplicación determinada, incurrirá si el agraviado le acusa o denuncia, en reclusión por quince días a diez y seis meses, y multa de diez a cien balboas".
- (89) Ya modificado por la Ley 22 de 1954.
- (90) El texto del art. 373 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
- "El que perturbe con violencia para con las personas, la pacífica posesión de alguna en una propiedad inmueble, incurrirá en prisión de uno a seis meses, y multa de diez a doscientos balboas.
- Si el hecho lo cometieren varias personas con armas, o más de diez personas sin armas, la pena será de prisión - por cuatro a veinte meses, y multa de doscientos a quinientos balboas".
- (91) El art. 367, reformado por la Ley 68 de 1961, quedó con - una pena de reclusión por tres a treinta meses y una multa de cien a quinientos balboas.
- (92) El texto del art. 371, modificado por la Ley 68 de 1961, quedó así:
- "En ningún caso la pena por uno de estos hechos podrá exceder de la mitad señalada al delito del cual proceden las cosas que se adquirieran, reciban u oculten indebidamente.
- Pero si el culpable ha sufrido por encubridor una o más condenaciones impuestas por sentencia judicial, la reclusión será de uno a tres años, la multa de cuatro veces el valor comercial del objeto motivo del delito y en la sentencia se ordenará la cancelación definitiva de su patente comercial si la tuviere".
- (93) El texto del art. 373, reformado por la Ley 68 de 1961, quedó así:

"El que perturbe con violencia o amenaza para las personas, la pacífica posesión de alguno en una propiedad inmueble, incurrirá en prisión de uno a seis meses y multa de diez a doscientos balboas".

- (94) El texto del art. 372a, que introdujo esta ley en el Código Penal es el siguiente:

"El que invada arbitrariamente terrenos o edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho, incurrirá en las mismas sanciones de que trata el artículo anterior".

- (95) Ley 6 de 17 de enero de 1963, Publicada en la Gaceta Oficial número 14805, de 29 de enero de 1963.

- (96) Que trata del hurto agravado.

- (97) El texto del art. 353, del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que por medio de violencias o con amenaza de graves peligros inminentes para la persona o bienes, obligue al tenedor de una cosa mueble, o a un tercero presente en el lugar del delito, a entregar dicha cosa, o a tolerar que se apodere de ella, incurrirá en la pena de dos a siete años de reclusión.

En la misma pena incurre el que, al apoderarse de una cosa mueble que pertenece a otro, o inmediatamente después de este acto, use contra la persona que es víctima, o de la que haya acudido al lugar del delito, de violencias o amenazas, con el fin de cometer el hecho, para transportar la cosa sustraída, o para procurar la impunidad a cualquiera que haya cooperado en la comisión del delito.

Si la violencia tiene por objeto únicamente arrebatarse la cosa a la víctima, la pena será de ocho a cuarenta meses de reclusión".

- (98) Literal i) del art. 351 del Código Penal.

- (99) El texto del art. 353, reformado por la Ley 6 de 1963, quedó así:

"El que por medio de violencias o de actos que ocasionen graves peligros para la persona, obligue al poseedor de una cosa o a un tercero, presente en el lugar del delito a entregar dicha cosa o a tolerar que se aproveche de ella, in

currirá en la pena de cinco a siete años de reclusión.

En la misma pena incurre el que al apoderarse de una cosa que pertenece a otro o inmediatamente después de este acto use contra la persona que es víctima o de la que haya acudido al lugar del delito, violencia con el fin de cometer el hecho, para transportar la cosa sustraída, o para procurar la impunidad a cualquiera que haya cooperado en la comisión del delito.

La pena será de seis a diez años si el hecho se comete en perjuicio de un impúber, o de una persona mayor de sesenta años, o de una mujer en estado de gravidez, o de una persona mayor de sesenta años, o de una mujer en estado de gravidez, o de una persona incapaz de resistir a consecuencia de enfermedad mental o física.

Si en alguno de los casos mencionados en el presente artículo el hecho se comete empleando un arma idónea para lesionar o para matar, la pena se aumentará en la mitad".

(100) Ley 11 de 23 de enero de 1963. Publicada en la Gaceta Oficial número 14805, de 29 de enero de 1963.

(101) El texto del inciso final del art. 88, que adiciona la Ley 11 de 1963 es el siguiente:
"Desde el momento en que se anuncia recurso de casación se suspenderá el término para la prescripción, hasta el instante en que sea decidido el recurso".

(102) Ley 1 de 21 de octubre de 1964. Publicada en la Gaceta Oficial número 15239, de 29 de octubre de 1964.

(103) El texto del art. 265 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
"El que coloque obstáculos en una vía férrea para crear el peligro de un desastre, o haga otro tanto por medio de señales falsas u otro medio cualquiera, sufrirá reclusión por ese sólo hecho, de ocho a cuarenta meses, y si resultare el desastre, la pena será de tres a diez años de reclusión".

La Ley 1 de 1964 que reforma el artículo anterior señala para la conducta básica la pena de tres a seis años, y para la agravación la pena de diez a quince años, en ambos casos de reclusión.

(104) El texto del art. 265 del Código Penal de 1922 era el si

guiente:

"El que cause daños en una vía férrea, en el material rodante de ella, o en el que sirve para su explotación, será castigado con ocho a cuarenta meses de reclusión.

Incurrirá en la misma pena el que arroje cuerpos duros o proyectiles contra los trenes en marcha".

La Ley 1 de 1964 estableció para el inciso primero de este artículo la pena de tres a seis años de reclusión; para el inciso final, la pena de ocho a cuarenta meses de reclusión;

- (105) El texto del art. 270 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"Fuera de los casos previstos en los artículos que preceden, el que de cualquier manera obstruya total o parcialmente o inutilice caminos, obras o artefactos destinados a las comunicaciones por aire, agua, o tierra, o suprima de ellos, para perturbar las comunicaciones, objetos destinados a su seguridad, será castigado con reclusión por dos a cuarenta meses, y por dos a ocho años si el hecho pone en peligro la vida de las personas".

La Ley 1 de 1964 que reformó este artículo señaló para la primera figura la pena de tres a seis años de reclusión; para la segunda, la de cuatro a doce años de reclusión.

- (106) El texto del art. 271 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que envenene, contamine o de cualquier manera corrompa las aguas potables destinadas a uso público, u otras sustancias destinadas al mismo uso, de tal suerte que ponga en peligro la salud de las personas, será castigado con reclusión por dos a seis años".

La Ley 1 de 1964, que reformó este artículo, fijó la pena en reclusión por seis a diez años.

- (107) El texto del art. 272 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"El que falsifique o altere, de modo que pueda perjudicar la salud de las personas, sustancias alimenticias o medicinales, o ponga en venta o en el comercio tales sustancias falsificadas o alteradas, será castigado con reclusión por veinte días a tres años, y multa de diez a qui-

nientos balboas.

- (108) El texto del art. 273 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
- "El que ponga en venta sustancias alimenticias o medicinales que, sin ser falsificadas o alteradas, sean nocivas para la salud, sin que esto sea sabido por el comprador, será castigado con reclusión por cinco días a cuatro meses, y multa de diez a cien balboas".

La Ley 1 de 1964, que reformó este artículo, fijó la pena en reclusión por seis a diez y ocho meses y multa de veinte a cien balboas.

- (109) El texto del art. 275 del Código Penal de 1922 era el siguiente:
- "La ejecución de uno de los hechos previstos en los artículos precedentes, por imprudencia, descuido o impericia en el ejercicio de una profesión u oficio, o por no observar los reglamentos o prescripciones legales, se castigará - así:
- a) Con prisión de diez días a cuatro meses, y multa de diez a cien balboas, en el caso del artículo 271;
 - b) Con prisión de tres días a un mes, y multa de cinco a cincuenta balboas, en el caso del artículo 272;
 - c) Con prisión de dos a diez días, y multa de cinco a cincuenta balboas, en los casos de los artículos 273 y - 274".

La Ley 1 de 1964, que reformó el art. 275, estableció las siguientes penas: para el literal a), la pena de seis a diez y ocho meses y multa de veinte a cien balboas; para el literal b), la pena de prisión de tres a nueve meses y multa de veinte a cincuenta balboas; para el literal c), la pena de prisión de uno a tres meses y multa de veinte a cincuenta balboas.

- (110) El texto del art. 26 de la Ley 34 de 1941, reformado por la Ley 1 de 1964 quedó así:
- "El que deteriore las máquinas, aparatos, o hilos telegráficos o telefónicos, o cause la dispersión de las corrientes, o de cualquier modo interrumpa el servicio telegráfico o telefónico públicos, será castigado con reclusión por tres a seis años".

- (111) Ley 9 de 23 de diciembre de 1964. Publicada en la Gaceta Oficial número 15275, de 28 de diciembre de 1964.
- (112) El texto del art. 231, reformado por la Ley 9 de 1964, quedó así:
"El que de cualquier manera haga desaparecer los billetes de ferrocarriles u otras empresas públicas de transporte, las señales que sirven para indicar que ya han sido usados, y el que se sirva de esos billetes así alterados, será castigado con reclusión por ocho días a tres meses y multa de cinco a cincuenta balboas".
Resulta sumamente extraño que el legislador de 1964 haya olvidado que ya desde 1927, con la Ley 25 de ese año, el mínimo de la pena de multa era de veinte balboas.
- (113) Dicha "falta" es de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
- (114) Ley 9 de 25 de enero de 1967. Publicada en la Gaceta Oficial número 15791, de 25 de enero de 1967.
- (115) El texto del art. 350, modificado por la Ley 9 de 1967, quedó así:
"El que se apodere de una cosa que pertenezca a otro para aprovecharse de ella, quitándola del lugar en que se encuentra sin consentimiento de su dueño, será castigado con reclusión de tres a treinta meses si la cosa vale más de diez balboas sin pasar de ciento cincuenta balboas; de doce a treinta y seis meses si la cosa vale más de ciento cincuenta balboas sin pasar de mil balboas; cuando la cosa vale más de mil balboas de dieciocho a cuarenta y ocho meses.
Habrá igualmente delito en lo referente a cosa perteneciente a una herencia no aceptada todavía, y de parte del copropietario, del asociado o del coheredero, sobre las cosas comunes o pertenecientes a la herencia indivisa que no se hallan en su tenencia.
La cantidad de lo hurtado se aprecia entonces deducción hecha de lo que pertenece al culpable".
- (116) La Ley 9 de 1967 fijó la pena para el art. 351. en reclusión de doce a cincuenta meses; para el art. 352 la fijó en reclusión de treinta meses a seis años.

- (117) El texto del art. 353, reformado por la Ley 9 de 1967, quedó así:

"El que por medio de violencias o actos que ocasionen graves peligros para la persona, obligue al poseedor de una cosa o a un tercero, presente en el lugar del delito a entregar dicha cosa o a tolerar que se apodere de ella, incurrirá en la pena de cinco a ocho años de reclusión.

En la misma pena incurre el que al apoderarse de una cosa que pertenece a otro o inmediatamente después de este acto use contra la persona que es víctima o de la que haya acudido al lugar del delito, violencia con el fin de cometer el hecho, para transportar la cosa sustraída, o para procurar la impunidad a cualquiera que haya cooperado en la comisión del delito.

La pena será de seis a diez años si el hecho se comete en perjuicio de un impúber, o de una persona mayor de sesenta años, o de una mujer en estado de gravidez o de una persona incapaz de resistir a consecuencia de enfermedad mental o física".

- (118) El texto del art. 354, reformado por la Ley 9 de 1967, quedó así:

"El que por medio de violencias o con amenazas de graves peligros para la persona o los bienes, obligue a otro a entregar, suscribir o destruir, con perjuicio propio o de un tercero, un documento cualquiera que tiene efectos jurídicos, incurrirá en la pena de cinco a ocho años de reclusión".

- (119) El texto del art. 355 del Código Penal de 1922 era el siguiente:

"Cuando uno de los hechos de que tratan los artículos anteriores, se cometa con amenaza contra la vida, a mano armada, o por varias personas de las cuales una sola esté ostensiblemente armada, o por varios enmascarados, o si el hecho se comete por medio de actos que afecten la libertad personal, la reclusión será de tres a diez años".

- (120) El texto del art. 355, modificado por la Ley 9 de 1967, quedó así:

"Cuando algunos de los hechos de que tratan los artículos anteriores, se cometa con amenazas o por enmascarados, o si el hecho se comete por medio de actos que afecten la libertad personal, la pena será de ocho a doce años de re-

clusión".

Aquí la reforma no sólo aumenta la pena, sino que además modifica sustancialmente el contenido y alcance de la agravante.

- (121) El texto del art. 372a del Código Penal, introducido por medio de la Ley 68 de 1961, señalaba lo siguiente:
"El que invada arbitrariamente terrenos o edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho, incurrirá en las mismas sanciones de que trate el artículo anterior".

La Ley 9 de 1967 reformó este artículo, que en adelante quedó así:

"El que invada arbitrariamente edificios ajenos, públicos o privados, con el fin de obtener cualquier provecho, incurrirá en las mismas sanciones de que trata el artículo anterior".

- (122) El texto del art. 86, reformado por la Ley 9 de 1967, quedó así:

"La acción penal prescribe:

a). Cumplidos veinte años después de la ejecución del hecho, si el delito que se imputa al inculpado tiene pena de reclusión fija por veinte años;

b) Cumplidos quince años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por un mínimo de quince años;

c) Cumplidos seis años, después de la ejecución del hecho criminoso, si el delito tiene pena de reclusión por un mínimo de cinco años o prisión, o de interdicción perpetua de las funciones públicas;

d) Cumplidos cuatro años, si el delito tiene una pena de reclusión o de prisión cuyo mínimo no exceda de cuatro años, o de confinamiento, o de interdicción temporal de las funciones públicas o de multa; y

e) Cumplidos dos años, en los demás casos".

- (123) El texto del art. 88, reformado por la Ley 9 de 1967, quedó así:

"La prescripción de la acción penal se interrumpe por la sentencia condenatoria; por la providencia de prisión, - aunque no se ejecute por fuga del inculpado, y, finalmente, por cualquier medida que dicte el tribunal contra el

mismo inculpado, con motivo del hecho que se imputa; pero la interrupción que así se produzca, no se puede prolongar por el término de la acción penal por un tiempo que exceda de la mitad de los plazos señalados por el Artículo 86, contado a partir de la interrupción.

Cuando la Ley señale un plazo para la prescripción, que no exceda de un año, ésta se interrumpirá con cualquier clase de procedimiento criminal; pero la acción penal que dará prescrita, si en el término de un año, contado desde el día que la prescripción empezó a correr, conforme el Artículo 86, no se dicta sentencia condenatoria.

La prescripción interrumpida empieza a correr de nuevo desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción afectará a cuantos participaron en el delito, aunque los actos interrumpidos no afecten sino a uno solo".

- (124) Decreto de Gabinete 141 de 30 de mayo de 1969. Publicado en la Gaceta Oficial número 16381, de 12 de junio de 1969. En vista de un error de imprenta, de enorme significación, este Decreto de Gabinete está reproducido en la Gaceta - Oficial número 16391, de 26 de junio de 1969. Hemos utilizado esta última.

- (125) El texto del art. 318, modificado por el Decreto de Gabinete 141 de 1969, quedó así:

"El que por imprudencia, negligencia o impericia en su - oficio o profesión, o por no observar los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause la muerte de alguno, será castigado con arresto por uno a dos años, e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por uno a dos años, después de cumplida la totalidad de la pena.

Si del hecho resultare la muerte de varias personas, o la de una sola y la lesión de una o varias personas a quienes se les cause un daño, en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, la pena será de arresto por dos a cinco años e interdicción del ejercicio de su profesión u oficio por dos a cinco años, después de cumplida la totalidad de la pena.

Parágrafo: Se considerarán como agravantes: La embriaguez comprobada al momento de cometerse el hecho, la falta de licencia para conducir y la fuga".

(126) El texto del art. 322, modificado por el Decreto de Gabinete 141 de 1969, quedó así:

El que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su oficio o profesión, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause a otro un perjuicio en su cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, será reprimido así.

a) Con arresto de tres a seis meses o multa de noventa a ciento ochenta balboas; pero no podrá iniciarse procedimiento sino por denuncia del lesionado o de su representante legal, si fuere menor o incapaz, en el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 319;

b) Con arresto de seis meses a un año o multa no menor de ciento ochenta balboas ni mayor de quinientos balboas en los demás casos.

Capítulo Séptimo

LAS INFRACCIONES PENALES ADMINISTRATIVAS

- I. INTRODUCCION
- II. EL CODIGO ADMINISTRATIVO
- III. LEGISLACION SOBRE VAGANCIA
- IV. LEGISLACION SOBRE PELIGROSIDAD SOCIAL
- V. LEGISLACION SOBRE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

I. INTRODUCCION

Pretender elaborar un estudio sobre "las infracciones penales administrativas" en la legislación panameña tropieza con - dificultades casi insalvables.

Por un lado nos encontramos con la distinción delito-falta que hasta el presente no ha sido objeto de ningún estudio en nuestra doctrina, sea penal o administrativa.

Además, como si fuera poco, la Administración está dotada legalmente de facultad para imponer penas que en nada se diferencian de las penas del Derecho penal común, toda vez que numerosas disposiciones, con rango de Ley, le han atribuido, o atribuyen, tal facultad.

Por otra parte, nada clara es en nuestro medio la distinción entre "delito" y "falta" consagrada en el art. 1º, inciso 2º del Código Penal vigente, que declara que las infracciones a la ley penal se dividen en delitos y faltas, siendo éstas reguladas por el Código Administrativo.

La distinción parece, de plano, equivocada, ya que mal podrían ser las faltas "infracciones a la ley penal" si están reguladas en el Código Administrativo (1).

No hay en nuestro ordenamiento jurídico pauta que determine cuáles son las verdaderas contravenciones y cuáles son las infracciones administrativas en estricto sentido.

Cierto es que en los delitos contra la propiedad la cuantía mínima del valor del objeto material debe exceder los 50 balboas o de lo contrario el hecho deja de ser delito para convertirse en falta, pero fuera de este caso excepcional no hay ningún criterio al respecto.

Se podría argüir que sólo las faltas o contravenciones

son incriminadas con penas de naturaleza correccional, mientras que las infracciones administrativas conllevan unas sanciones de naturaleza "administrativa" distinta de aquellas, pero tal aseveración carece de fundamento toda vez que ambas son penadas con las mismas clases de sanciones, que incluso son exactamente iguales a las sanciones del Derecho penal común.

Estas infracciones penales que llamamos faltas o contravenciones son algo más que simples infracciones del orden, entendiéndose por tales -según MATTES- aquella que "no va más allá de la relación del ciudadano con las autoridades administrativas basada en aquella pretensión a la obediencia; representa una falta de atención o una desidia frente a las disposiciones administrativas, sin dirigirse contra valores esenciales comunitarios o individuales" (2). Esto es así puesto que en numerosas de ellas hay un verdadero "injusto" al que se aplica una verdadera pena y no constituye una simple "llamada al orden o advertencia recordando los deberes administrativos incumplidos" (3) inherentes a una auténtica infracción al orden.

II. EL CODIGO ADMINISTRATIVO

El Código Administrativo (4) contiene una amplia regulación de las faltas o contravenciones en nuestra legislación.

Dichas faltas están recogidas en el Libro III, sobre policia, que comprende de los artículos 855 a 1745.

En el libro aludido encontramos una serie de disposiciones sobre orden y seguridad pública, moralidad pública, seguridad personal y sus principales intereses, sean de carácter individual o colectivo, orden y seguridad domésticos o familiares, disposiciones sobre construcciones y demoliciones, etc.

No pretendemos hacer una exposición del contenido del Libro III del Código Administrativo, ya que resultaría extensa y no es el objetivo que pretendemos en esta ocasión. En su caso, estimamos, unos cuantos ejemplos serán suficientes.

Así, por ejemplo, figuran como faltas el golpear o maltratar a otro sin causarle lesión o se se la produce, que no exceda de diez días (5); el hurto, abuso de confianza, estafa y otros engaños no constitutivos de delito; los que practicaren la hechicería o superchería o explotaren la credulidad pública de cualquier otra manera semejante (6), entre muchos otros casos.

Para los supuestos de faltas o contravenciones el propio Código Administrativo dispone como penas aplicables: trabajo en obras públicas, confinamiento, arresto, fianza de paz y buena conducta y, finalmente multa. Para la multa el máximo es de seiscientos balboas y para el resto se había señalado un año (7).

Se permite la conversión de las penas de multa y arresto. La conmutación de la pena de multa en arresto es en la proporción de un día de arresto por cada balboa o fracción no pagado; además, salvo que la resolución condenatoria disponga lo contrario, la pena de arresto es conmutable por multa a razón de un balboa por cada día de arresto (8).

Diversas leyes han ido modificando o derogando numerosos aspectos del Código Administrativo sin que hoy, a ciencia cierta, se sepa que está vigente del mismo.

En gran parte esto se debe a que desde el mismo año de su vigencia, año 1917, no se ha vuelto a realizar una edición oficial del citado Código, aunque han circulado posteriormente ediciones privadas de algunas partes del mismo.

III. LEGISLACION SOBRE VAGANCIA

A) INTRODUCCION

La legislación sobre vagancia hoy derogada, ha presentado unas características muy propias, que nos obligan a expresar algunas consideraciones al respecto.

Esta legislación aunque versa sobre vagancia no somete a los sujetos considerados como vagos a medidas de seguridad, sino a penas administrativas.

La característica de estas leyes ha sido la de imponer a los sujetos penas a través de procesos administrativos, en donde no existen los principios y garantías que ordinariamente informan el proceso penal panameño, ya que la apreciación de estos supuestos está atribuida, no a jueces, sino a funcionarios administrativos (alcaldes de distrito, jueces de policía nocturnos y corregidores de barrio).

Por una parte, en algunos casos se trata de supuestos de estado peligroso en donde los individuos no han cometido delito alguno; en otros casos, nos encontramos ante supuestos de verdadera delincuencia, a los que se les aplica el calificativo de "vagos" y se les sanciona como tales.

B) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Los antecedentes directos de la legislación sobre vagancia en nuestro país los encontramos en el Código Administrativo de 1916, que contenía penas para diversos supuestos calificados genéricamente como de "vagos".

En efecto, en el Libro Tercero, Título Segundo de dicho Código se dedicaba al Parágrafo Duodécimo del Capítulo Noveio a la regulación de los supuestos de vagancia, que luego fueron modificados por medio de la Ley 76 de 1924 (9).

La Ley en cuestión señalaba que eran vagos: a) los que sin tener profesión u oficio, hacienda o renta, vivían sin saberse los medios lícitos y honestos de donde les provenía la subsistencia; b) los individuos de notoria malas costumbres; c) los rufianes, alcahuetes, corruptores, sodomitas o pederastas y tahures, mientras no estén bajo la jurisdicción judicial por razón de los delitos que hayan cometido; d) los autores, cómplices, auxiliadores y encubridores de hurto de ganado mayor, cuando no están bajo la jurisdicción del Poder Judicial (10).

Las penas que se imponían a los vagos eran, por la primera vez de arresto por quince días a seis meses y, por la segunda vez y nuevas condenas se les imponía confinamiento hasta por dos años (11).

Nada disponía esta legislación a favor de los menores de edad ni respecto de las mujeres, salvo la suspensión de su condena, bajo ciertas condiciones, y su entrega a una persona de "reconocida moralidad (12).

C) LEY 57 DE 1941

Mediante la Ley 57 de 1941 (13), sobre vagancia, se crearon una serie de supuestos a los que se concedió la calificación de "vagos" siéndoles impuestos, en consecuencia, una pena que oscilaba entre arresto y confinamiento.

La ley en mención señalaba que son vagos los que se encontraban en algunos de los siguientes casos: a) los que sin tener profesión u oficio, hacienda o renta, viven sin saberse los medios lícitos y honestos de donde les provenga la subsistencia; b) los que introduzcan, expendan, usen, posean o transporten la hierba cannabis indica; c) los rufianes, alcahuetes, corruptores, sodomitas o pederastas y tahures, mientras no estén bajo la

jurisdicción judicial por delitos que hayan cometido; d) los autores, cómplices, auxiliadores y encubridores de hurto de ganado mayor, cuando no estén bajo la jurisdicción del Poder Judicial; y, e) los individuos de notoria mala conducta (14).

En cierta medida, como podemos apreciar, estos supuestos considerados como de "vagos" proceden de la Ley 76 de 1924, a la que se le añadieron otras disposiciones nuevas.

El procedimiento para la actuación de los funcionarios encargados de juzgar estos supuestos es el mismo previsto para las autoridades de policía, que está previsto en el Código Administrativo denominado "procedimiento correccional de policía".

Como sanciones se podían imponer a los vagos las siguientes: a) arresto de quince días a seis meses; b) trabajo en obras públicas de un mes a dos años; y, c) confinamiento por tres años en la Isla penal de Coiba (15). Expresamente se disponía que tales penas se aplicaban así: a los condenados por primera vez, el arresto; a los condenados por segunda vez, trabajo en obras públicas; a los condenados por tercera vez o más veces, el confinamiento (16).

Permite esta ley la concesión de rebaja de la pena de confinamiento en ciertos casos muy concretos (17), reconoce una remuneración económica a favor de ciertos sujetos (18), faculta la deportación de los vagos que sean extranjeros después de cumplida la condena (19) y permite la suspensión de la pena que se impone a un sujeto por primera vez si se cumplen ciertos requisitos (20).

Aunque esta ley se aplica también a mujeres (21) y menores de 18 años (22) declarados como vagos, se establecen algunas disposiciones particulares sobre ellos, fundamentalmente en cuanto al régimen disciplinario y trabajo de las mujeres, que

les permite obtener su libertad condicional pronto (23) y el internamiento en centros especiales para los menores (24) distintos de los aplicables a los otros "vagos" adultos.

IV. LEGISLACION SOBRE PELIGROSIDAD SOCIAL

Mediante la Ley 15 de 1961 (25) se dictaron algunas medidas contra los "ladrones, asaltantes, proxenetas y otras personas de un alto índice de peligrosidad social" y se derogó la ley número 57 de 1941.

Esta ley creó una serie de supuestos a los que consideraba como de "alto índice de peligrosidad social", en los que se aprecian supuestos que constituyen verdaderas conductas delictivas y otros supuestos de peligrosidad predelictual y postdelictual.

Los supuestos en cuestión son los siguientes (26):

a) los que, con el propósito de atentar contra la propiedad, ejecuten actos de violencia sobre las personas o las amenazan con peligro inminente para su seguridad;

b) los que hubieren sido condenados por delito o falta contra la propiedad o sindicados más de una vez por la misma causa y en cuyo poder se encuentren llaves deformadas o falsas, ganzúas o instrumentos propios para abrir o forzar cerraduras, candados o cualquiera clase de objetos destinados a proteger o asegurar la propiedad, o que tengan en su poder objetos o instrumentos aptos o suficientes para cometer cualquiera delito - contra la propiedad, siempre que no se justifique su procedencia y destino legítimos;

c) los que hubieren sido sindicados o condenados más de una vez por delitos o faltas contra la propiedad y sean sor-

prendidos en el acto de sustraer o de tratar de sustraer a las personas dineros o efectos de cualquier clase;

d) los que hayan sido sindicado o condenados más de una vez por delitos o faltas contra las personas y se les encuentren en su poder objetos cortantes o punzocortantes o manoplas cualesquiera clases de instrumentos con los cuales se puedan producir lesiones, siempre que no expliquen satisfactoriamente el uso legítimo que pensaban darle a dichos objetos;

e) a quienes se les encuentre en su poder objetos de dudosa procedencia y hayan sido sindicados o condenados más de una vez por delitos o faltas contra la propiedad, siempre que no puedan justificar el origen legítimo de la adquisición, posesión o tenencia de dichos objetos;

f) los proxenetas, los que promuevan, favorezcan, faciliten la prostitución o la corrupción y hayan sido sindicados o condenados más de una vez por la comisión de tales actos; y,

g) los que exploten, directa o indirectamente, la prostitución, dentro o fuera del país, participando de los beneficios de tal tráfico o haciendo de él su modo de vivir.

Algunos de los supuestos antes mencionados constituyen verdaderos delitos a los que el legislador ha sustraído de la esfera de la autoridad judicial y atribuido a las autoridades administrativas. Así, p. ej., los casos mencionados en los literales a) y c). Otros, p. ej., los previstos en los literales b) y d), podrían constituir meros actos preparatorios.

Las sanciones previstas para los sujetos que se encuentran comprendidos en dichos supuestos eran todas de privación de libertad. En efecto, por la primera vez la pena es de arresto por tres a seis meses; por la segunda, arresto por seis a doce meses; por la tercera vez, y veces subsiguiente, arresto por dos

años en la isla penal de Coiba (27).

Al igual que ocurría durante la vigencia de la Ley 57 de 1941, esta ley atribuía la competencia a las autoridades administrativas que utilizaban el procedimiento previsto en el Código Administrativo. Ello unido a la inversión de la carga de la prueba, que recae en el sujeto "presuntamente" calificado como peligroso, hacían de esta ley objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad panameña.

Esta ley, al igual que la anterior, reconocía una mínima remuneración económica a favor de los penados (28) y permitía la concesión, por parte del Ejecutivo, de rebaja de penas (29).

Por medio de la Ley 112 de 1974 (30) se derogó esta ley en su totalidad y desde esa fecha no han vuelto a establecerse supuestos semejantes en nuestra legislación.

En cierta medida esta ley tiene alguna semejanza con la ley española de vagos y maleantes de 1933 (31) hoy derogada y sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 (32). Lamentablemente hoy día es imposible determinar con precisión si la legislación española de 1933 tuvo alguna influencia en nuestros legisladores de 1941 y 1961.

V. LEGISLACION SOBRE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Mediante la Ley 112 de 1974 se regula la justicia administrativa en los distritos de Panamá, Colón y San Miguelito y se establecen algunas otras pautas de general aplicación para todo el territorio nacional respecto de la justicia administrativa.

Esta ley atribuye competencia a las autoridades administrativas señaladas en el Código Administrativo para que ejerzan

dicha jurisdicción, pero en especial a los jueces de policía nocturnos y a los corregidores de barrio (33).

A las autoridades administrativas les corresponde conocer y decidir los asuntos siguientes (34):

- a) el acto o intento de sustraer dinero o efectos de cualquier clase cuando el sindicado haya sido condenado previamente por delitos o faltas contra la propiedad;
- b) los delitos de hurto simple, apropiación indebida y estafa cuya cuantía no exceda de cincuenta balboas;
- c) de las lesiones, cuando la incapacidad no pase de veintidías o no dejen señal visible a simple vista y permanente en el rostro;
- d) los actos de promoción y facilitamiento de la prostitución y corrupción siempre que el sindicado haya sido condenado previamente por la comisión de tales actos;
- e) las controversias civiles cuya cuantía no exceda de cincuenta balboas, con exclusión de las demandas de carácter mercantil.

La sanción prevista para las faltas que aparecen en los primeros cuatro literales antes señalados oscila entre diez días y un año de arresto (35).

En la misma ley se dispone que los cargos contra una persona deben ser explicados ante la respectiva autoridad administrativa por los agentes u oficiales de la Guardia Nacional o por los miembros del Departamento Nacional de Investigaciones (36) que hayan conducido a dicha persona ante esa autoridad. Cuando es un particular el agraviado, éste debe formular los cargos personalmente (37).

Resulta extraño que entre los supuestos que son de competencia de las autoridades administrativas se incluyan "los deli-

tos" de hurto simple, apropiación indebida y estafa que no excedan de cincuenta balboas, ya que tales conductas hechos en sentido estricto, no constituyen delito.

Esto es así, toda vez que la frontera entre delito y falta, a propósito de los delitos contra la propiedad, está fijada en esa cuantía y mal, por tanto, se podría hablar en dichos supuestos de un auténtico "delito".

Por lo que respecta a las lesiones que no suponen una incapacidad de más de veinte días, esta competencia que se le atribuye a las autoridades administrativas no es nueva, ya que desde la vigencia de la Ley 11 de 1963 (38) tal facultad les corresponde.

- (1) RICORD, p. 133.
- (2) Heinz y Herta MATTES, Problemas de Derecho Penal Administrativo, Editorial Revista de Derecho Privado, Trad. de J. M^a. Rodríguez Devesa, Madrid, 1979, p. 1.
- (3) MATTES, p. 2.
- (4) Código Administrativo de Panamá, aprobado mediante la Ley 1 de 22 de agosto de 1916. Publicada en la Gaceta Oficial número 2404, de 22 de agosto de 1922. Reproducida en la Gaceta de 7 de septiembre de 1966, número 2418.
- (5) Código Administrativo, art. 953.
- (6) Código Administrativo, art. 971.
- (7) Código Administrativo, art. 878. La Ley 71 de 30 de diciembre de 1938, publicada en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 1938, derogó la pena de "confinamiento" (art. 7).
- (8) Código Administrativo, art. 885 según fue reformado por la Ley 71 de 1938 (artículo 6).
- (9) Código Administrativo, arts. 1283 a 1287, modificados por la Ley 76 de 1924.
- (10) Código Administrativo, art. 1284, reformado por el art. 1º de la Ley 76 de 1924.
A pesar de los múltiples esfuerzos realizados, no hemos podido encontrar los antecedentes de esta legislación en nuestro país. Guarda ella, no obstante, cierta similitud con algunos aspectos de la Ley española de 9 de mayo de 1845, llamada Ley de vagos, en la que establecían unos supuestos calificados como de "vagos".
El texto del art. 1º de esa ley de 1845 disponía lo siguiente: "Artículo 1º. Serán considerados simplemente vagos para el objeto de esta ley: 1º los que no tienen oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con que vivir; 2º los que teniendo oficio ó ejercicio, profesión ó industria, no trabajan habitualmente en ellos, y no se les conocen otros medios lícitos de adquirir su subsistencia; 3º los que con renta, pero insuficiente para subsistir,

no se dedican a alguna ocupación lícita, y concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas ó parajes sospechosos; 4º los que pudiendo no se dedican a ningún oficio ni industria, y se ocupan habitualmente en mendigar!"

- (11) Código Administrativo, art. 1284, reformado por el art. 1º de la Ley 76 de 1924.
- (12) Código Administrativo, art. 1287.
- (13) Ley 57 de 30 de mayo de 1941. Publicada en la Gaceta Oficial número 8530, de 9 de junio de 1941. Esta Ley deroga la parte del Código Administrativo antes señalada y también deroga la Ley 76 de 1924.
- (14) Ley 57 de 1941, art. 1º.
- (15) Ley 57 de 1941, art. 3.
- (16) Ley 57 de 1941, art. 3.
- (17) Ley 57 de 1941, art. 7.
- (18) Ley 57 de 1941, art. 8.
- (19) Ley 57 de 1941, art. 9.
- (20) Ley 57 de 1941, art. 11.
- (21) Ley 57 de 1941, arts. 12 a 14.
- (22) Ley 57 de 1941, art. 17.
- (23) Ley 57 de 1941, art. 14.
- (24) Ley 57 de 1941, art. 17.
- (25) Ley 15 de 25 de enero de 1961. Publicada en la Gaceta Oficial número 14333, de 20 de febrero de 1961.
- (26) Ley 15 de 1961, art. 1º.
- (27) Ley 15 de 1961, art. 2.

- (28) Ley 15 de 1961, art. 5.
- (29) Ley 15 de 1961, art. 6, aunque se declara improcedente en casos de reincidencia cuando se trata de los supuestos f) y g).
- (30) Ley 112 de 30 de diciembre de 1974. Publicada en la Gaceta Oficial número 17769, de 28 de enero de 1975.
- (31) Ley de vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933. Además de las diversas obras de carácter general, se han ocupado de ella: Luis JIMENEZ DE ASUA, "Ley de vagos y maleantes. Un ensayo legislativo sobre peligrosidad sin delito", en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1933, tomo 163, ps. 577 y sgts; Federico CASTEJON, "El proyecto Piniés de profilaxis social de 1922 y la Ley relativa a vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933" en RGLvJ, 1933, tomo 163, ps. 214-254 y 435-454; Francisco Felipe OLESA MUÑOZ, Las Medidas de Seguridad, Bosch, Barcelona, 1951; y Marino BARBERO SANTOS, Estudios de Criminología y Derecho Penal, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1972, ps. 11-61, entre otros muchos autores.
- (32) Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4 de agosto de 1970. Además de las diversas obras de carácter general, se han ocupado de ella: Agustín JORGE BARREIRO, Las medidas de seguridad en el derecho español, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1976; Antonio BERISTAIN, Medidas penales en derecho contemporáneo, Reus, S.A., Madrid, 1974; Juan M^a. TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social y estado de derecho, Akal editor, Madrid, 1981; Marino BARBERO SANTOS, Marginalización social y derecho represivo, Bosch, Barcelona, 1980, ps. 129-173. También, muy especialmente, los trabajos incluidos en el volumen Peligrosidad social y medidas de seguridad. Universidad de Valencia, Valencia, 1974. Algunos de estos trabajos también aluden a la ley de 1933.
- (33) Ley 112 de 1974, art. 1º.
- (34) Ley 112 de 1974, art. 2º.
- (35) Ley 112 de 1974, art. 3º.

(36) La "Guardia Nacional" es el único cuerpo militar del país y ejerce, primordialmente, una función de tipo "policial". El "Departamento Nacional de Investigaciones" es un cuerpo especializado que colabora con el Ministerio Público (o - Fiscal) en la averiguación de los delitos en la fase preliminar.

(37) Ley 112 de 1974, art. 4.

(38) Ley 11 de 1963, art. 28.

Capítulo Octavo

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS
NORMAS PENALES EN LA CONSTITUCION DE 1972

- | | |
|---|--|
| I. INTRODUCCION | VIII. RETROACTIVIDAD PENAL |
| II. PRISION POR OBLIGACIONES
CIVILES | IX. AMNISTIA |
| III. EXTRADICION | X. INDULTOS Y REBAJA DE PENAS |
| IV. SISTEMA PENITENCIARIO | XI. IRRESPONSABILIDAD
PARLAMENTARIA |
| V. PENAS PROHIBIDAS | XII. INVIOLEABILIDAD PRESIDEN-
CIAL |
| VI. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD | XIII. OTRAS CUESTIONES |
| VII. OBEDIENCIA JERARQUICA | XIV. CONSIDERACIONES FINALES |

I. INTRODUCCION

La relación del Derecho Penal y la Constitución es fundamental (1). Y es que, debemos tener presente, la pena, como medio de coerción jurídica, sólo puede ser impuesta por el Estado como consecuencia de la realización de un hecho considerado delictivo, que previamente haya sido definido como tal y al que se le señala sanción por parte del legislador (2).

Consecuencia de lo anterior, es que sobre "el principio de legalidad" contenido en el art. 30 de la Constitución Política panameña vigente descansa el Derecho Penal patrio, al que otras disposiciones constitucionales señalan pautas fundamentales que no puede desconocer.

La Constitución marca el límite a la autoridad pública de forma tal que su actuar en ningún caso puede desconocer las pautas señaladas en aquella. La prohibición de la pena de muerte, de expatriación y de confiscación de bienes que se consagra en el art. 29 de nuestra Constitución es, en este sentido, una muestra de ello.

La forma democrática del régimen de que se trate repercute, en consecuencia, de forma directa en la legislación punitiva respectiva. Es usual encontrar en los Códigos penales la protección de la libertad de culto, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y muchos otros derechos y garantías reconocidos en la propia Constitución.

Por otra parte, resulta necesaria la protección penal concedida al Estado, la forma de gobierno, la vida, libertad y seguridad del Presidente de la República en el Código Penal, como medio de preservar el orden jurídico fundamental.

Dependerá, en gran medida, de la protección penal que de los principios y garantías fundamentales, y de la represión de las conductas que atenten contra ellos, el carácter democrático o autoritario del régimen de que se trate.

La exposición que sigue a continuación tiene por objeto destacar aquellas normas penales consagradas en la Constitución Política panameña vigente y resaltar las cuestiones más importantes de la normativa penal en el texto fundamental patrio.

El estudio que se realiza en este capítulo toma base la Constitución de 1972, aprobada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos el día 11 de octubre de 1972 y vigente a partir de esa misma fecha. Hemos considerado conveniente presentar los antecedentes de las materias aquí tratadas en las constituciones anteriores de 1904, (vigente desde el 15 de febrero de 1904), de 1941 (vigente desde el 2 de enero de 1941 hasta el 29 de diciembre de 1944) y la de 1946 (vigente el 1 de marzo de 1946 hasta 1972).

Para llevar a buen fin tal propósito haremos fundamentalmente uso de la doctrina constitucional y penal panameña, recurriendo a la teoría foránea cuando así lo estimemos necesario.

Los siguientes aspectos serán objeto de nuestra consideración en este capítulo: 1) prisión por obligaciones civiles; 2) extradición; 3) sistema penitenciario; 4) prohibición de determinadas penas; 5) principio de legalidad; 6) obediencia jerárquica; 7) retroactividad penal; 8) amnistía; 9) indulto y rebaja de penas; 10) irresponsabilidad parlamentaria; 11) inviolabilidad presidencial; y, 12) algunas otras cuestiones de menor importancia y trascendencia.

II. PRISION POR OBLIGACIONES CIVILES

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

En el art. 21, inciso final de la Constitución de 1972 se recoge la prohibición de imponer prisión por deudas.

El texto completo del artículo en cuestión es el siguiente:

"Nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandato están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere.

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser -aprendido por cualquiera persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley.

No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles".

En nuestro Derecho constitucional el profesor QUINTERO ha señalado que "El precepto de que no hay prisión por deudas es otro de los clásicos postulados del derecho penal individualista-humanitario consolidado por la Revolución francesa" (4).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

Todas las Constituciones panameñas de la vida republicana se han ocupado de la prisión o arresto por obligaciones o deudas exclusivamente de carácter civil.

La Constitución de 1904 se refería a este aspecto en su art. 23, inciso 2. Dicho artículo estaba redactado como se señala a continuación:

"Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni - arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.

El delincuente cogido infraganti podrá ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquier persona" (El subrayado es del texto).

Por su parte, la Constitución de 1941 dedicaba el art.

27 a varias cuestiones, en semejantes términos a la de 1904.

La redacción del art. 27 en cuestión era la siguiente:

"Nadie podrá ser arrestado o preso sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. El delincuente cogido infraganti podrá ser aprehendido por cualquiera persona y deberá ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Nadie podrá ser detenido por más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo.

En ningún caso podrá haber detención, prisión o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial".

En términos muy parecidos la Constitución de 1946 consagró el principio bajo examen, si bien lo incluyó al final del art. 22 que, como en las anteriores Constituciones, contenía cuestiones que incidían directamente en el Derecho penal.

El referido art. 22 estaba redactado de la siguiente forma:

"Nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento judicial escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejesores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, siempre que la pidiere.

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser -

aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los miembros de la Policía que violen este precepto tienen como sanción la pérdida inmediata del empleo sin -perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley" (El subrayado es del texto).

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

El inciso final del art. 21 de la Constitución de 1972 consagra el principio de que no hay prisión por deudas. La redacción del inciso en cuestión, sin embargo, no es clara. ¿Qué debemos entender por prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles?

En la doctrina nacional nada se ha señalado al respecto, salvo las seis líneas que en su obra le dedica a este respecto el profesor QUINTERO (5).

A propósito de esta cuestión, estimamos que el contenido de la norma constitucional bajo examen debe plantearse en dos aspectos: a) ¿cuál es el sentido de la expresión "prisión, detención o arresto"? y, b) ¿qué debemos entender con la referencia a "deudas u obligaciones puramente civiles"?

Respecto a la primera interrogante hay que señalar de inmediato el deficiente uso idiomático por parte del constituyente panameño, ya que los términos "prisión", "detención" y "arresto" tienen un contenido propio fuera del Derecho Constitucional, que no puede desconocerse en otros sectores del ordenamiento jurídico.

En nuestro ordenamiento tanto la "prisión" como el "arresto" son penas privativas de libertad que se imponen como consecuencia de la realización de una infracción penal, ya sea delito o falta.

La "detención" por su parte, alude a la facultad que tiene la policía de privar de su libertad a una persona sin que exista orden escrita de la autoridad competente; no debe confundirse, por tanto, con la "detención" o "prisión preventiva", que es una institución de Derecho procesal penal en virtud de la cual se priva a un sujeto de su libertad mientras se adelanta la instrucción sumarial para la averiguación de la existencia de un "delito" y sus posibles responsables o se juzga el caso respectivo.

Más concretamente podemos señalar que la detención preventiva "es una medida cautelar que en el proceso penal tiene por finalidad privar de libertad a una persona mientras se realizan las diligencias de instrucción del proceso seguido en su contra y se recaban los elementos para la determinación de la existencia del delito y el grado de imputación que se le atribuye" (6).

Ya sea que el constituyente se refiera a la "prisión" y al "arresto" como auténticas sanciones, ya sea penales o policivas (7), y a la "detención" como facultad de la policía, en todo caso hay que entender que se refiere a "privaciones de libertad" a consecuencia de deudas u obligaciones civiles.

La intención del constituyente de 1972 ha sido la de advertir a las autoridades o a sus agentes que nadie puede ser penado ("prisión" o "arresto") ni su libertad vulnerada, transitoria o provisionalmente ("detención") por causa de deudas u obligaciones civiles.

Por lo que se refiere a la segunda interrogante, la norma constitucional alude expresamente a deudas u obligaciones de exclusiva naturaleza civil.

Si por deudas u obligaciones de carácter civil entende-

mos aquellas que emanan exclusivamente del Código Civil, las leyes que lo reforman o complementan, nos encontraremos ante una cruel realidad: quedarían fuera de tal calidad aquellas deudas u obligaciones que emanan del Código de Comercio y demás leyes mercantiles.

Y si tenemos en cuenta que en Panamá la inmensa mayoría de los actos jurídicos se regulan por la ley mercantil, ya sea por la naturaleza del acto mismo o la calidad de una o ambas partes, podríamos concluir que tales deudas u obligaciones pueden suponer privación de libertad, ya que no son de aquellas que puedan catalogarse como "puramente civiles".

A nuestro modo de ver las cosas, por deudas u obligaciones puramente civiles debemos entender aquellas que emanan de una relación de carácter privado entre las partes. La referencia al Derecho Civil debemos entenderla formulada respecto al Derecho "privado".

A esta conclusión nos llevan consideraciones de tipo histórico, ya que en la época de la Revolución Francesa cuando esta garantía se consolida -como advierte QUINTERO (8)- la legislación civil abarcaba numerosas ramas del Derecho, hoy separadas de su tronco común y que hoy constituyen ramas independientes. Entre otras, el Derecho Mercantil y del Trabajo de nuestros días.

Como quiera que desde la Revolución Francesa se viene señalando que no hay prisión por deudas civiles, este principio ha llegado a nuestros días con la misma formulación que se le dió hace siglos.

A diferencia de lo que ocurría durante la Revolución

Francesa, la legislación civil de hoy no absorbe a la mercantil, ni mucho menos a la laboral, por lo que la referencia en cuestión, formulada hace tanto tiempo no tiene hoy el contenido que tuvo hace siglos.

Como obligaciones o deudas puramente civiles debemos entender, en consecuencia, aquellas que nacen de una fuente de derecho de naturaleza privada.

Finalmente nos resta señalar que a este respecto nada se dispone en el Código Penal acerca de este principio.

III. EXTRADICION

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

Las referencias que la Constitución de 1972 hace a propósito de la extradición están contenidas en el art. 23, bajo una breve fórmula que textualmente dice lo siguiente:

"El Estado no podrá extraditar a sus nacionales; ni a los extranjeros por delitos políticos".

El precepto transcrito es muy preciso y categórico, a pesar de la brevedad de la declaración contenida en el mismo.

En nuestro Derecho Constitucional el profesor QUINTERO ha señalado que esta garantía se ha impuesto con "el advenimiento de los regímenes demoliberales" de forma tal "que la extradición debe circunscribirse a los reos de delitos comunes. Es decir, se excluyen de esa medida las personas sindicadas de delitos políticos independientemente de su nacionalidad" (9).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

El principio constitucional de que el Estado puede ex-

traditar a sus nacionales, ni a los extranjeros requeridos por delitos políticos, no aparece consagrado en las Constituciones de 1904 ni 1941.

En la Constitución de 1946, en cambio, si aparece dicho principio en el art. 23, a pesar de que el Anteproyecto de dicha Constitución nada señalaba al respecto.

El texto del artículo en cuestión era el siguiente:

"En ningún tratado internacional de extradición podrá el Estado obligarse a entregar a sus propios nacionales.

Tampoco se concederá la extradición de los extranjeros a quienes se persiga por delitos políticos".

Durante la vigencia de la Constitución de 1946 se discutió si podía el Estado panameño conceder la extradición de sus nacionales, toda vez que el texto constitucional transcrito únicamente prohibía el que nuestro país se obligara mediante tratado a entregar a sus nacionales y, en opinión de algunos, si no había tratado nuestro país era libre de entregar a sus nacionales a título de reciprocidad.

Contrario a esta opinión fue el profesor QUINTERO quien ha sostenido que "el Gobierno Nacional no puede en ningún caso entregar a sus nacionales al Gobierno de otro Estado que los reclame para juzgarlos" (10).

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

Antes de señalar el alcance del texto constitucional vigente, es necesario desentrañar el significado del término "extradición", no sin antes destacar como hace el profesor RODRIGUEZ DEVESA (11) las diversas áreas del Derecho donde este tema incide: Derecho Internacional Público, Derecho Procesal Penal, y, ciertamente, el Derecho Penal.

"La extradición -señalan MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ- es un acto de colaboración punitiva internacional, que consiste en la entrega de un individuo, inculcado o condenado, que se encuentra en el territorio del Estado, a otro Estado diverso, para ser juzgado en éste o sometido a la ejecución de una pena" (12).

En lo que respecta a los nacionales, no se presentan problemas de interpretación a propósito del art. 23 de la Constitución vigente, pues en ningún caso pueden ser extraditados.

La Constitución no distingue entre panameños por nacimiento frente a los panameños por adopción o naturalización, por lo que carece de relevancia tal distinción en esta oportunidad.

De solicitarse la extradición de un ciudadano panameño, la Constitución vigente prohíbe tal extradición, con lo que de inmediato surge el problema respecto a las consecuencias que na cen para nuestro país por no entregar al requerido.

En nuestro Derecho Constitucional ya QUINTERO se ha planteado los distintos problemas que ello plantea (13): 1) ¿es posible juzgar al panameño en Panamá, por un delito cometido fuera de la jurisdicción de la ley penal panameña? 2) ¿es facultad discrecional de las autoridades panameñas el someterle a juicio o no? 3) ¿están las autoridades panameñas obligadas a juzgar a su propio nacional?

La Ley 44 de 1930, que regula la extradición en nuestro Derecho interno, nada dispone al respecto. Ello, no obstante, no significa que no haya una solución para estos problemas en nuestra legislación.

En efecto, en vista de lo preceptuado por la Ley 4 de 1938, por medio de la cual la República de Panamá aprobó el Convenio sobre Extradición, suscrito en Montevideo en 1933, se en-

cuentran las respuestas a las interrogantes formuladas.

Para el caso de que suceda el hecho que motiva estas consideraciones, Panamá al no entregar a su propio nacional se obliga por ello a juzgarlo si el hecho también constituye delito al tenor de las leyes penales panameñas, siempre y cuando - que en ambas leyes tal delito sea sancionado con una pena privativa de libertad de un año por lo menos.

En aquellos supuestos en que el hecho constituya delito al tenor de la ley extranjera, pero no lo sea según la ley panameña, ya que no esté tipificado como tal o constituya "falta" según nuestra legislación, el Estado panameño no puede juzgar al nacional cuya entrega le ha sido requerida.

Por lo que respecta a los extranjeros, la Constitución prohíbe la extradición de aquellos que sean tenidos como "delincuentes políticos".

Sobre lo que debemos entender por delito político, nada dispone la Constitución. QUINTERO (14) en el Derecho panameño y BUENO ARUS (15) en el Derecho español consideran que corresponde al Estado requerido calificar la naturaleza del delito que motiva el requerimiento respectivo, de acuerdo con la legislación del propio lugar.

En este sentido, habrá de recurrirse a la legislación patria de extradición que contiene algunas referencias a los delitos políticos.

IV. SISTEMA PENITENCIARIO

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

Un repaso a todas las Constituciones que Panamá ha teni

do desde que se convirtió en Estado independiente, mostrará el enorme interés de nuestros constituyentes por el problema penitenciario.

Esto, sin embargo, no significa que el constituyente de 1972 haya valorado en toda su dimensión la cuestión penitenciaria.

Nuestra Constitución vigente, en su art. 27, dispone lo siguiente:

"El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación".

La dimensión de esta declaración constitucional no ha tenido casi ninguna repercusión en nuestro medio.

Esto, en gran parte, se debe a que los establecimientos penitenciarios forman parte de los cuarteles de la Guardia Nacional, en lo que parte de las instalaciones son dedicadas a cumplir la labor aludida.

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1904 es un reflejo de la opinión que los constituyentes de la época tenían de los establecimientos penitenciarios.

En el texto constitucional de 1904, las cárceles eran concebidas en el art. 45 como lugares en donde se cumplían castigos. Dicho artículo decía así:

"Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por tanto se prohíbe toda severidad

que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos".

Si las cárceles se concebían en 1904 como lugares de seguridad y expiación, pero no de castigos que se consideraban como "cruelles", entonces hay que colegir que, efectivamente, se entiende que la pena es un castigo que hay que "expiar" y que el condenado está internado en una prisión para enmienda y corrección.

La siguiente Constitución, la de 1941, no registra ninguna variación al respecto, ya que en el art. 35 se reproduce casi exactamente el texto respectivo de la Constitución de 1904. Solamente se sustituye en la de 1904 "se prohíbe" por "es prohibido".

La normativa hasta ahora señalada se mantiene en el Anteproyecto de Constitución de 1946, aunque se sustituyó ya en - aquel la expresión de 1941 "expiación" por "regeneración".

El texto definitivo de la Constitución de 1946, que se sigue manteniendo al respecto dentro de los mismos parámetros de las Constituciones anteriores, varía la fórmula gramatical hasta ese entonces utilizada, aunque el contenido no haya variado sustancialmente.

La Constitución de 1946 señaló en su art. 28 lo siguiente:

"Las cárceles son lugares de seguridad y de regeneración se prohíbe en ellas toda severidad que no sea necesaria para los fines expresados".

Al interpretar esta disposición constitucional QUINTERO señalaba que "el derecho penal individualista y, más aún el llamado positivista, consideran que las cárceles sólo son lugares de seguridad y rehabilitación social. Por tanto, la severidad

que en ellas haya, debe ser exclusivamente encaminada a mantener la seguridad de los detenidos y a lograr su regeneración" (16).

Desde 1946 hasta 1972 en que deja de regir la Constitución últimamente señalada, la situación penitenciaria patria continuó siendo antagónica con los principios constitucionales contenidos en el artículo transcrito.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

La norma constitucional vigente estructura el sistema penitenciario panameño en tres aspectos esenciales a) seguridad; b) rehabilitación; y, c) defensa social.

Respecto de cada uno de los aludidos principios, la doctrina patria poco es lo que ha expresado sobre ellos.

A propósito del principio de seguridad "ínsito en la prevención especial" en opinión de MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, éstos autores han afirmado que "es una garantía para la sociedad y para el delincuente, no en su acepción de represión sino en la legalidad" (17). En lo que respecta al principio de rehabilitación los aludidos autores señalan que la Constitución "al señalarlo como fundamento del sistema penitenciario se le está utilizando como sinónimo de readaptación social o resocialización" (18). Sobre la defensa social señalan que este principio "considera la pena como una reacción social encaminada a contrarrestar la perturbación que la comisión del delito produce en el medio social y el ordenamiento jurídico" (19).

En lo que respecta al Derecho penitenciario panameño, la declaración constitucional contenida en el art. 27 de la Constitución no ha significado ningún provecho hasta el momento.

No existe en nuestro medio ningún sistema penitenciario

propiamente dicho. Con toda razón han señalado MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ que "en esta materia es poco lo que se ha hecho, es un campo virgen en el que todo está por hacer ". (20).

Por otra parte el uso del término "rehabilitación" en el art. 27 de la Constitución es poco afortunado, ya que puede induvir a equívocos con la extinción de las condenas accesorias que se obtiene a través del instituto de la "rehabilitación", forma de extinción de algunas penas.

Ademas, teniendo en cuenta que la mención del término "rehabilitación" alude a la "readaptación social" o "resocialización" del sujeto, es menester advertir que éstas son objeto hoy día de numerosas críticas, como ha puesto de manifiesto en los últimos años la doctrina penal española (21).

En lo que respecta a la prohibición de aplicar a los penados cualquier clase de medidas que lesionen su integridad física, moral o mental, es necesario señalar que éste principio complementa la noción básica que persigue el cumplimiento de las penas privativas de libertad en nuestro ordenamiento jurídico.

Por medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos debemos entender cualquiera utilización de medios o actitudes que puedan producir aquellas lesiones, además de la aplicación de sanciones crueles o inhumanas por iniciativa propia de los encargados de la custodia de los establecimientos penitenciarios.

De esta forma se podría argüir que, incluso, se prohíbe implícitamente la pena de muerte. Esto carece, por el momento de mayor trascendencia, toda vez que dicha prohibición figura en otra disposición constitucional.

La prohibición de estas medidas que impliquen las lesio

nes comentadas abarca cualquier medida que se tome en perjuicio de los privados de libertad, fuera de las estrictamente necesarias y que sean compatible con la dignidad del ser humano.

Por otra parte, si tomamos en cuenta que el inciso 2º del artículo constitucional bajo análisis ordena "la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad" podríamos colegir, interpretándolo con las prohibiciones del inciso 1º que nuestro constituyente ha prohibido de manera implícita las penas y medidas crueles e inhumanas.

Y como tales, quedan por tanto prohibidas en nuestro ordenamiento tanto la tortura como las mutilaciones que suponen una lesión a la integridad física, mental o moral de los condenados.

Otro aspecto que surge como consecuencia de la previsión contenida en el inciso 2º del art. 27 de la Constitución, es el referente a la posibilidad de establecer en el catálogo de penas del Código Penal la privación de libertad por el resto de la vida del sujeto.

A nuestro juicio, la prisión perpetua sería incompatible con el sistema penitenciario panameño, toda vez que en el mismo la capacitación del penado es obligatoria para que se "reincorpore útilmente a la sociedad" una vez cumplida su condena. Mal podría darse la reincorporación del sujeto a la sociedad si está sometido perpetuamente a verse privado de su libertad. En este sentido, la capacitación de los penados sería inútil, ya que algunos no podrían volver a recuperar su libertad.

Por lo que respecta a la referencia contenida en los dos incisos anteriores respecto a los "detenidos", entendemos que tal término no se refiere únicamente a quienes están privados mo

mentáneamente de su libertad por orden de la policía, o provisio-
nalmente mientras se verifica el juicio penal respectivo. En to-
do caso, por tales entendemos a todos aquellos que están priva-
dos de su libertad, ya sea por condena penal, como consecuencia
de su "detención" preventiva o "detención" policial o administra-
tiva.

Finalmente este artículo de la Constitución dispone cier-
tas medidas concretas respecto de los menores de 18 años.

Los principios en que se funda hoy la Constitución de
1972 respecto a los menores son los mismos que en 1951 inspira-
ron al legislador panameño para la creación de la jurisdicción
de menores como una jurisdicción especial (22).

V. PENAS PROHIBIDAS

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

Desde la Constitución de 1904 ha sido constante en nues-
tro Derecho Constitucional la prohibición de determinadas penas
extremas.

En la Constitución vigente se repite también esta tradi-
ción, cuando en el artículo 29 se señala que "No hay pena de muer-
te, de expatriación, ni de confiscación de bienes".

La pena de muerte, ya hemos señalado anteriormente, fue
abolida de nuestra legislación ordinaria en 1914 y a nivel cons-
titucional desde 1918 (23).

Por lo que respecta a la confiscación de bienes, como ve-
remos a continuación, en todas nuestras Constituciones ha existi-
do igual prohibición.

La prohibición de la "expatriación" aparece en nuestro

Derecho Constitucional con la Constitución de 1941.

Por confiscación de bienes debemos entender la adjudicación al Estado de los bienes del sujeto a quien se priva de su goce real y efectivo en virtud de pena impuesta en tal sentido.

A propósito de la "expatriación" o "destierro" QUINTERO señala que "es una pena que en algunos países se aplicaba y aún se aplica a los nacionales. Por determinados delitos, generalmente políticos, el nacional de un Estado es expulsado de su propia patria" (24).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

Por lo que se refiere a la pena de muerte en la Constitución de 1904 la pena capital estaba admitida a propósito del homicidio considerado como atroz; esta normativa constitucional implica la reforma del Código Penal colombiano de 1890, vigente aún en aquella época en Panamá, que señalaba la pena de muerte para diversos delitos además del homicidio.

Las reformas constitucionales aprobadas mediante los "Actos Legislativos" de 1917 y 1918 declararon terminantemente que "No habrá en Panamá pena de muerte" (25).

En 1941 la Constitución repite la misma declaración en el art. 31, en donde además de prohibir la pena de muerte, encontramos la proscripción del "destierro" como pena.

El art. 31 de dicha Constitución disponía lo siguiente:

"No habrá en Panamá pena de muerte. Tampoco podrá imponerse pena de destierro a los panameños".

A partir de 1946 será la Constitución de aquél año que recogerá las tres prohibiciones en una sola disposición constitucional, en el art. 30, bajo la siguiente redacción:

"No hay pena de muerte, de expatriación ni de confiscación de bienes".

Respecto de la pena de confiscación de bienes, todas las Constituciones panameñas la han declarado prohibida. Dicha prohibición se ha mantenido en los textos constitucionales con la misma fórmula.

A este respecto, la Constitución de 1904 disponía en el art. 44 lo siguiente:

"En ningún caso podrá establecerse por el Legislador pena de confiscación de bienes".

La Constitución de 1941 en su art. 32, siguiendo la terminología de la Constitución de 1904, establecía en forma similar lo siguiente:

"En ningún caso podrá imponerse pena de confiscación de bienes".

Nuestra Constitución de 1946, hemos señalado en este apartado, reunió en una sola norma constitucional las tres prohibiciones que comentamos en el art. 30, que ya hemos transcrito con anterioridad.

A propósito de la pena de expatriación, nada señalaba la Constitución de 1904 en su articulado.

La expatriación fue prohibida por la Constitución de 1941 en su art. 31, ya antes transcrito, si bien alude a ella como "pena de destierro".

En la Constitución de 1946 se prohibía la expatriación en el art. 30, ya transcrito, en los mismos términos que la Constitución vigente que se inspiró al respecto en aquella.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

El art. 29 de la Constitución vigente supone la autolimitación del poder punitivo estatal que renuncia a prever como penas aplicables por la comisión de hechos delictivos la de muerte

te, expatriación y confiscación de bienes.

Solo la confiscación de bienes ha estado prohibida en nuestro sistema constitucional desde la primera Constitución que rigió los destinos del Estado panameño en 1904.

"Lo inhumano e injusto de esta pena -señala QUINTERO- es triba fundamentalmente en que hace víctimas de la misma a personas ajenas al delito como son los herederos del condenado" (26) y, añadimos nosotros, a sus eventuales acreedores.

Como sanción penal, la confiscación de bienes a favor del Estado constituye, ciertamente, un "despojo legal" que los Estados contemporáneos, en su mayoría, han erradicado de sus sistemas punitivos.

A propósito de la expatriación cabe señalar que el Código Penal de 1916 incluía esta pena en su art. 60. Dicho Código señalaba que por tal entendía "la expulsión del reo del territorio de la República", ya que como no estaba prohibida en la Constitución de 1904 se la estableció como una de las penas legales en el Código Penal.

La prohibición de aplicar esta pena ha pasado sin mayores consecuencias desde 1941 hasta 1972. Dicha situación fue alterada, sin embargo, cuando en enero de 1977 "de hecho" fue aplicada a un grupo de ciudadanos por el gobierno autoritario que encabezaba el General Omar Torrijos Herrera, por el simple hecho de adversar, pública y periódicamente, la gestión gubernamental.

A partir de enero de 1977 los altos dirigentes del gobierno negaban que se hubiera producido una "expatriación", arguyendo que esta pena requería la existencia de un proceso y una condena en tal sentido y en el caso en cuestión los sujetos a los que se había "expulsado" del país no se les había condenado penalmente.

En todo caso la "expulsión" de numerosos ciudadanos se mantuvo durante más de dos años y si bien es cierto que la Constitución prohíbe la pena de "expatriación" impuesta como consecuencia de haber cometido algún delito y después de un procedimiento legal para imponerla, con mayor razón estimamos implícita la prohibición de no "expulsar" a un ciudadano panameño sin que exista una disposición que permita tal medida y establezca el procedimiento correspondiente.

Y es que si se prohíbe la "expatriación" como pena impuesta luego de un juicio donde el sujeto tiene la oportunidad de oponerse, al menos teóricamente, con mayor razón está prohibida tal medida si es arbitraria y no está fundada en ninguna disposición legal o constitucional.

A este respecto es conveniente recordar el principio de Derecho público según el cual la Autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le está ordenado o facultado. En este caso no hay disposición jurídica alguna que faculte a la autoridad para efectuar dicha expulsión (27).

Por lo que respecta a la pena de muerte, desde 1918 la misma está abolida en nuestro Derecho Constitucional.

A pesar de que en las Constituciones de Panamá siempre ha existido alguna referencia a ella, no es usual que las Constituciones contengan alguna declaración al respecto. En América Latina las Constituciones de Colombia, Costa Rica y Honduras, además de la de Panamá, han abolido terminantemente la pena de muerte.

En España recientemente HIGUERA GUIMERA ha publicado un estudio sobre la pena de muerte en la Constitución de 1978, con algunas referencias a los países europeos (28).

VI. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

Al principio de legalidad de los delitos y las penas está consagrado en el art. 30 de la Constitución vigente, con la siguiente fórmula:

"Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputados".

Este principio constitucional tiene repercusión directa en el Código Penal que mantiene igual postura en su art. 1º.

Las garantías penales consagradas en el art. 30 de la Constitución han adquirido notoria importancia en épocas modernas, a partir de las cuales no se concibe ningún ordenamiento jurídico en donde no sea la Ley, en sentido formal, la fuente exclusiva del Derecho penal.

Refiriéndose a estas garantías el Profesor QUINTERO ha señalado que "es preciso que la ley diga previamente qué actos constituyen delitos y que, también previamente, establezca en forma exacta, qué penas han de ser respectivamente aplicables a la comisión de tales actos. La correspondencia, pues, entre la pena y el delito debe ser exacta" (29).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

En el constitucionalismo panameño el principio de legalidad de los delitos y de las penas siempre ha estado reconocido.

A través de las distintas Constituciones, su formulación ha ido modificándose paulatinamente hasta que en 1946 adquirió una mayor claridad, por lo que el constituyente prefirió adoptar la fórmula de 1946 sin modificación alguna.

La Constitución de 1904 recoge el principio aludido en forma bastante ambigua, referida principalmente a la garantía del debido proceso legal.

El art. 22 de dicha Constitución lo incluyó en su inciso primero con la fórmula que aparece a continuación:

"Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado sino por - Jueces o Tribunales competentes, en virtud de las leyes anteriores al delito cometido y en la forma que éstas establezcan.

Podrán sin embargo castigar sin juicio previo los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción a cualquiera que injurie o irrespete en el acto en que estén desempeñando su cargo, y los Jefes Militares y Capitanes de buques, los cuales podrán imponer penas incontinenti para contener una insubordinación, mantener el orden y para reprimir los delitos cometidos a bordo y fuera de puerto" (El subrayado es del propio texto).

Mediante una fórmula radicalmente distintas a la anterior, la Constitución de 1941 consagró el principio que nos ocupa en su art. 29.

Dicho artículo se encontraba redactado así:

"Sólo podrán ser castigados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto que se impute. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho".

En la Constitución de 1946 la idea fundamental se mantiene como en la Constitución de 1941, pero se introducen algunas modificaciones gramaticales y se sustituye "castigado" por "penado".

La redacción del art. 31 de la Constitución de 1946 era la siguiente:

"Sólo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado".

El principio de legalidad contenido en la Constitución de 1972, hoy vigente, es idéntico al incluido en la Constitución de 1946.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

Del contenido del art. 30 de la Constitución vigente se desprenden una serie de consecuencias de capital importancia para el Derecho penal: a) un hecho sólo puede ser tenido como delito si una ley anterior a su realización lo define como tal; b) una pena sólo puede imponerse si previamente ha sido establecida en la ley; c) a los hechos considerados como delito sólo pueden aplicársele las penas que la ley prevea exactamente para el caso en que aquellos sean cometidos; d) la ley no puede convertir en delito hechos ocurridos antes de su vigencia (30); y, e) no pueden establecerse delitos ni penas en forma analógica (31).

De lo anteriormente expuesto se deduce que sólo la ley puede crear delitos y señalarles la pena correspondiente, con lo que se puede señalar que al elevar a rango constitucional el principio de legalidad, el Estado brinda al ciudadano las garantías necesarias para que este se conduzca bajo la seguridad de que en determinado momento tal o cual actuar es o no delictivo.

La garantía de la seguridad jurídica de los asociados constituye una consecuencia importantísima del principio de legalidad.

En Panamá se ha discutido si mediante los llamados Decretos-Leyes se podían o no establecer hechos delictivos. La Corte Suprema de Justicia ha señalado al respecto -anota QUINTERO- que la referencia a "ley anterior" implica la expedición de una ley formal, es decir, de aquellas que debe expedir el Or

gano Legislativo (32).

Además, a propósito de las repercusiones del principio de legalidad en lo que respecta a las "faltas", la propia Corte Suprema de Justicia ha declarado la "inconstitucionalidad" de varias resoluciones de un Gobernador, por medio de las cuales se aplicaba analógicamente un Decreto Ejecutivo para establecer sanciones a título de "falta administrativa" (33).

Desafortunadamente en este último caso la Corte Suprema de Justicia no entró a estudiar todos los aspectos sustanciales planteados, especialmente a propósito de la vigencia del principio de legalidad de las propias "faltas administrativas".

La repercusión directa de la declaración constitucional contenida en el art. 30 de la Constitución vigente en la legislación común se encuentra reflejada en el art. 1º del Código Penal, en donde se recoge con una fórmula muy amplia el principio de legalidad (34).

En el Código Penal la declaración del art. 1º trae consecuencia, además de los principios ya destacados a propósito de la declaración constitucional, la consecuencia de que nadie puede ser sometido a juicio sino de conformidad con una ley promulgada con anterioridad. Se trata, claro está, de una garantía de carácter procesal en virtud de la cual se requiere la existencia de un juicio legal para poder someter a alguien al cumplimiento de alguna pena.

Respecto del principio de legalidad y las medidas de seguridad, nada dicen ni la Constitución ni el Código Penal que no las regula (35).

VII. OBEDIENCIA JERARQUICA

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

En nuestro Derecho Constitucional es usual encontrar que el constituyente panameño en cada época ha considerado oportuno incluir en todas las Constituciones algún precepto sobre la "obediencia jerárquica".

El profesor QUINTERO en el Derecho panameño ha señalado que tal influencia nos viene desde la época en que Panamá formó parte de Colombia. Este autor cita la Constitución colombiana de 1886 que se refiere al "mandato superior" como denomina él al instituto en cuestión (36).

La Constitución vigente le dedica atención a la "obediencia jerárquica" en su art. 33 en los términos que se señalan a continuación:

"En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparta el orden".

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1904 consagró la excepción del mandato superior en su art. 36, que según QUINTERO, era una copia literal del art. 21 de la Constitución colombiana de 1886 (37).

El art. 36 en cuestión señalaba lo siguiente:

"En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los individuos de tropa del Ejército, que se hallen

en servicio, quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior jerárquico que da la orden".

Luego en la Constitución de 1941 se mantuvo en términos generales la misma redacción de la obediencia jerárquica que la contenida en 1904, si bien se le añadió las palabras "o legal" después de "precepto constitucional".

El art. 58 de la referida Constitución decía textualmente así:

"En caso de infracción manifiesta de un precepto - constitucional o legal en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los individuos de tropa del Ejército, que se hallen en servicio, quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos la responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior jerárquico que da la orden".

Posteriormente en 1946, la Constitución de aquél año, concibió la obediencia jerárquica en términos muy parecidos a los anteriores, no habiendo modificaciones que puedan considerarse sustanciales.

La redacción del art. 34 de la citada Constitución era como exponemos a continuación:

"El caso de infracción manifiesta de un precepto - constitucional o legal, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Se exceptúan los individuos de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden".

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

En el art. 33 de la Constitución vigente encontramos varias cuestiones, que exceden del marco estrictamente penal.

QUINTERO señala -a propósito de la Constitución de 1946- que hay "cuestiones de naturaleza penal y administrativa" (38).

Para que la orden a que se refiere la Constitución exima de responsabilidad al que la ejecuta, se requiere que la misma emane de una autoridad pública; por otra parte, que la misma sea legítima y que se dé un elemento negativo: que la orden no suponga la infracción "manifiesta" de un precepto constitucional o legal.

En todo caso debemos tener presente que "la obediencia con significación penal es la jerárquica, es decir, la que consiste en el cumplimiento del mandato o de la orden emanada del superior jerárquico" (39). Carece, por tanto, de significación la obediencia jerárquica fuera del ámbito público, como puede ser la debida al padre, maestro, empleador, etc. (40).

El verdadero alcance de la eximente radica entonces en lo que debe ser considerado como "infracción manifiesta" de un precepto jurídico.

Corresponderá al inferior jerárquico analizar la orden recibida y si a juicio suyo la orden es legal, el cumplimiento de la misma no debe acarrearle consecuencias de carácter penal.

Siempre será en última instancia el juzgador el encargado de examinar la validez o no de la actuación del inferior jerárquico que haya cumplido con la orden que consideraba no vulneraba ningún mandato constitucional o legal.

En ningún caso -señala la norma constitucional- los miembros de la Fuerza Pública que estén en servicio están facultados para examinar la conformidad a Derecho de la orden recibida, por lo que deberán cumplir con ella en todo caso, recayendo la responsabilidad correspondiente, en el superior que impartió la orden respectiva.

VIII. RETROACTIVIDAD PENAL

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

"Es criterio general -señala SERRANO GOMEZ- que las leyes penales sólo se aplican a hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor" (41).

Se trata, sin duda, de una consecuencia del principio de legalidad de los delitos y las penas, que tiene una excepción; cuando se trate de una ley favorable al reo.

En nuestra Constitución encontramos el principio general de que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que sean de orden público, interés social o que siendo leyes penales sean favorables al reo.

Lo antes expresado se encuentra consagrado en el art.42 de la Constitución vigente en los siguientes terminos:

"Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiere sentencia ejecutoriada".

Refiriéndose a este principio QUINTERO ha señalado que "en materia penal se aplica toda ley favorable al reo. Y, a la inversa, ninguna ley que sancione o defina un delito de manera más rigurosa, puede tener retroactividad" (42).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

En la Constitución de 1904 el principio de la irretroactividad de las leyes estaba consagrado claramente en el art. 32. En esa misma norma se daba preferencia, en materia criminal, a la ley favorable sobre la desfavorable.

La retroactividad de la ley penal favorable no estaba

consagrada en forma tan categórica como sucede en la Constitución actual, pero se colige del texto del artículo respectivo, el 32, que era del siguiente tenor:

"Las leyes no tendrán efecto retroactivo. En materia criminal la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

Con posterioridad en 1941 la Constitución de aquél año consagró una fórmula más precisa que se ha mantenido hasta el momento actual a pesar de algunas ligeras modificaciones gramaticales.

La retroactividad apareció en esta Constitución en el art. 34 en los siguientes términos:

"En materia criminal, la Ley favorable al reo tendrá siempre preferencia y retroactividad aún cuando ya hubiese sentencia ejecutoriada".

En la Constitución de 1946 encontramos una nueva normativa, en virtud de la cual se encuentran en una misma norma tanto la retroactividad de las leyes en general, como la retroactividad en material penal, en particular.

El art. 44 de la citada Constitución señalaba:

"Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social. En materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada".

Huelga señalar que la retroactividad penal consagrada en esta Constitución pasó sin modificaciones a la Constitución actual, aunque la referencia a la retroactividad en general haya sufrido alguna adición de enorme importancia.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

En materia penal solo la ley favorable al reo puede tener efecto retroactivo.

Aunque esta garantía es una consecuencia del principio de legalidad, es usual que sea formulada expresamente y con total independencia del referido principio de legalidad.

La "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables" (43) está consagrada en nuestra Constitución actual en el citado art. 44.

El problema de la retroactividad de la ley penal no debe, sin embargo, ser analizado en forma aislada. Muy por el contrario, debe tomarse en cuenta la regulación que en el ordenamiento se ha hecho de la "retroactividad" de la ley en general, para luego ver el contenido de las respectivas disposiciones penales.

En términos generales nuestra Constitución señala que las leyes no tienen efecto retroactivo; como excepciones a esta regla encontramos las leyes de orden público o de interés social cuando en ellas se exprese dicha retroactividad y en materia criminal cuando la nueva ley es más favorable al reo que la anterior.

Resulta imprescindible, en consecuencia, determinar el alcance de la expresión "ley favorable", que deberá determinarse de acuerdo con las distintas consecuencias que de ellas emanan en su totalidad, sin que sea factible efectuar tal determinación haciendo uso de elementos de una y otra ley.

Será una ley más favorable para el reo aquella que borrar el carácter de ilícito del hecho punible frente a otra que lo defina como delito; la que disminuya las sanciones previstas

para el hecho; la que elimine alguna de las diversas penas que copulativamente se imponen por la comisión de un hecho, entre otras.

En nuestro medio sería, sin lugar a dudas, ley favorable, aquella que le imponga a un delito una pena de seis a dieciocho meses de arresto, frente a otro que por el mismo tiempo le imponga "prisión" o "reclusión", ya que tanto la prisión como la reclusión suponen una mayor severidad que el arresto en la ejecución penal.

Además, en todo caso deben tomarse en cuenta para los efectos deseados las posibles penas accesorias, períodos para obtener la libertad condicional que varía según la pena de que se trate.

Todos los innumerables problemas que pueden presentarse en un caso determinado deben ser objeto de valoración por parte del juez, quien es en definitiva el que deberá determinar cual es la ley más favorable para el reo.

No está demás advertir que la Constitución al consagrar la retroactividad de la ley más favorable, lo hace aunque se trate de una sentencia ejecutoriada que está siendo cumplida.

La libertad del individuo constituye un bien de tanto valor que conceder retroactividad a la ley más favorable aunque haya sentencia ejecutoriada constituye un reconocimiento del constituyente hacia el valor en cuestión.

IX. AMNISTIA

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

La Constitución de 1972, al igual que las que le prece-

dieron, concede a la Asamblea Nacional la facultad de conceder amnistía por delitos políticos.

Esta facultad está concedida por la Constitución a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento como una de las pocas facultades legislativas que dicho organismo posee (44).

La facultad en cuestión está prevista en el numeral 4 del art. 141 que a la letra dispone:

"

4. Conceder amnistía por delitos políticos;

.....".

El profesor RODRIGUEZ DEVESA señala que "La amnistía es un perdón u olvido total del delito. Se tiene por no cometido" (45).

"La doctrina reconoce que la amnistía -anotan MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ- puede ser dictada en cualquier momento posterior a la comisión del delito, sea antes, durante o después del proceso que tenga por objeto declarar la responsabilidad y aplicar la pena" (46).

En la reciente literatura penal española, el tema ha sido tratado monográficamente por SOBREMONTÉ MARTINEZ (47).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1904 se ocupó del tema a propósito de las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, lo que se ha mantenido en las Constituciones sucesivas, dedicándole el numeral 17 del art. 65, en los siguientes términos:

".....

17. Conceder amnistías, pero si hubiese responsabilidad civil respecto de particulares, la República estará obligada al pago de las indemnizaciones.

.....

En 1941 la Constitución de ese año fue más breve y prescindió de toda referencia a la "responsabilidad civil". Además, concretó la amnistía sólo procedía por "delitos políticos", lo que no ocurrió en 1904.

Dicha facultad estaba consagrada en el art. 88 que trataba sobre las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, en los siguientes términos:

".....

19. Decretar amnistía por delitos políticos;

.....".

La Constitución de 1946 mantuvo el mismo criterio de la Constitución anterior, al dedicarle a este tema el numeral 18 del art. 118 que regulaba las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, en los siguientes términos:

".....

18. Conceder amnistía por delitos políticos;

.....".

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

Corresponde por expreso mandato constitucional a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento la facultad de conceder amnistía. La propia Constitución solo impone una restricción: sólo procede a propósito de los "delitos políticos"

El carácter de delito político queda a la apreciación de la propia Asamblea Nacional de Representantes. Para el ejercicio de este "derecho de gracia" la misma Constitución señala que deberá ser concedida mediante una ley, ya que esta facultad es de aquellas que están comprendidas entre las funciones legislativas de la Asamblea.

En ningún caso podrá la Asamblea Nacional de Represen-

tantes conceder la amnistía mediante una "resolución" emanada del Pleno o de una de sus Comisiones.

Por lo que respecta a las personas que pueden ser favorecidas con la amnistía, la Constitución nada dispone; puede ser concedida a cualquier persona, incluso a algún miembro del Gobierno o de las Cámaras Legislativas.

Atendiendo la forma como se concede la amnistía, podemos señalar que se trata de una medida de carácter general, a consecuencia de un hecho determinado, e impersonal, ya que no se debe especificar individualmente a los beneficiados con ella.

En este sentido se manifiestan MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ cuando advierten que "la amnistía es una medida de carácter impersonal, objetiva y general" (48).

X. INDULTOS Y REBAJA DE PENAS

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

La facultad constitucional de conceder indultos por delitos políticos y rebajar penas está concedida al Presidente de la República en la Constitución de 1972.

Se trata de una de las pocas atribuciones que de acuerdo con el art. 163 de la Constitución, "ejerce el Presidente de la República por sí solo", y está recogida en el numeral 6 del citado artículo, que a la letra dispone:

".....
6. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes;
.....".

"El indulto presupone, a diferencia de la amnistía, que haya recaído una pena impuesta por sentencia firme, Consiste en

la remisión total o parcial de dicha pena" en opinión del profesor RODRIGUEZ DEVESA (49).

En la doctrina panameña MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ definen el indulto como "la remisión total o parcial de la pena impuesta por una sentencia judicial ejecutoriada o su conmutación por otra menos severa" (50).

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

En la Constitución de 1904 se concedía al Presidente, con el refrendo del respectivo Secretario (hoy Ministro) de Estado, la facultad de conceder indultos, de cualquier naturaleza, ya sea políticos o no, y de rebajar penas.

Tal facultad estaba consagrada en el art. 73, numeral 18 que textualmente disponía:

".....
18. Conceder indultos, conmutar y rebajar penas con arreglo a la ley que regule el ejercicio de esta facultad.
.....".

Con posterioridad la Constitución de 1941 consagró una fórmula semejante, si bien restringió los indultos a los delitos considerados como "políticos".

Dicha facultad la ejercía el Presidente, de la República con el respectivo Ministro y estaba consagrada en el art. 109, numeral 16 en los siguientes términos:

".....
16. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes de acuerdo con la Ley.
.....".

La Constitución de 1946 atribuyó la facultad en cuestión al Presidente de la República, pero siempre con la colaboración

ración del respectivo Ministro. Tal facultad fue consagrada en el numeral 14 del art. 144 que decía así:

".....
14. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes;
.....".

Salvo la disposición prevista en la Constitución de 1904, las otras Constituciones han redactado en términos muy parecidos la facultad en cuestión.

Dichas disposiciones constitucionales, sin embargo, mezclan dos aspectos claramente diferenciados entre sí: por un lado, la cuestión del indulto; por otro, la facultad de rebajar penas y conceder libertad condicional.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

La facultad constitucional de conceder indultos que posee el Presidente de la República está restringida por la naturaleza del delito que se ve favorecido con el indulto. Nuestra Constitución restringe los indultos presidenciales a los que denomina "indultos por delitos políticos".

De allí que no son procedentes los indultos que, desde el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, concede el ciudadano que ejerce la Presidencia de la República en forma indiscriminada por delitos casi en su totalidad "comunes".

En este sentido, es usual que el Presidente conceda "indultos" todos los años para el mes de diciembre, pero los favorecidos con dicho indulto son todos responsables de "delitos comunes".

Por otra parte, la naturaleza propia del indulto exige que se trate de una persona sometida a pena, es decir, que esté

condenada y que dicha condena esté ejecutoriada.

Resulta extraño, por tanto, que haya sido beneficiado con un indulto en diciembre de 1979 un ciudadano norteamericano responsable de la muerte de una persona, cuando aún no se había celebrado el juicio correspondiente.

En este caso, el indulto fue concebido antes de que hubiera una condena cierta y verdadera; pero, además, fue un indulto concedido por un delito de carácter común, puesto que se trataba de un homicidio intencional, ajeno a toda motivación de índole política.

Si bien es cierto que nuestra Constitución circunscribe tanto la amnistía como el indulto a los "delitos políticos", en la práctica el Presidente de la República concede "indultos" en forma indiscriminada e, incluso, en abierta violación del precepto constitucional respectivo.

Por lo que respecta a la facultad que en el mismo art. 163, numeral 6 de la Constitución se le concede al Presidente para "rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes" la situación no es del todo clara.

Una interpretación literal del numeral 6 del art. 163 de la Constitución nos llevaría a señalar que el Presidente de la República está facultado, constitucionalmente, para: a) conceder indultos por delitos políticos; b) rebajar penas; y, c) conceder libertad condicional, en estos dos últimos casos por delitos comunes.

Otra interpretación, sin embargo, diría que el Presidente está facultado para: a) conceder indultos por delitos políticos y, b) otorgar la libertad condicional como consecuencia de conceder rebajas de penas por delitos comunes.

La diferencia entre ambas interpretaciones no es puramente académica, ya que de aceptarse la primera interpretación tendríamos que reconocer que el Presidente está facultado para rebajar penas indiscriminadamente, por delitos comunes, en cualquier momento posterior a la condena definitiva, sin tener que ceñirse a las disposiciones sobre libertad condicional.

El punto ha sido objeto de atención por nuestra Corte Suprema de Justicia, que en Sentencia de 24 de junio de 1955 se haló que: "Si el Organó Ejecutivo pudiera rebajar penas AD-LIBI TUM no se podría evitar que en determinadas circunstancias la República se viese abocada a una anulación de las disposiciones de nuestro C. Penal, porque la rebaja podría llegar a los límites en donde la reducción de la sanción, para los delitos comunes, derogaría prácticamente las sentencias de los Tribunales de Justicia, y ni el Organó Ejecutivo en concepto de esta Superioridad ni los ciudadanos de esta Nación estimarían esa situación posible, por los graves inconvenientes que tendría para el Mandatario, y por los negatorios efectos en que se colocaría a la Justicia Penal. De ahí hay que concluir con lo razonable que es en este caso jurisprudencia de la Corte, y es que las rebajas de penas a los reos de delitos comunes se entiende que sólo puede hacerlas el Ejecutivo de conformidad con las leyes que establecen esta rebaja y así, la expresión "rebajar penas" es claramente de acuerdo con nuestro derecho constitucional, la acción previa del Organó Ejecutivo, cuando se trata de delitos comunes, para conceder la libertad condicional" (51).

XI. IRRESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

La Constitución vigente concede a los miembros de la

Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento dos privilegios fundamentales: a) irresponsabilidad por las opiniones que emitan sus miembros en el ejercicio de su cargo y, b) inmunidad de sus componentes frente a las autoridades.

Solamente la primera será objeto de muestra consideración, ya que la otra es una prerrogativa eminentemente procesal, que excede los límites de este trabajo.

Ambos privilegios están consagrados en el art. 137 de la Constitución en los siguientes términos:

"Los miembros de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y merecen consideración y respeto por parte de las autoridades. Durante el término de los seis años para el cual fueron elegidos, los Representantes no podrán ser perseguidos ni arrestados por causas penales o policivas sin la autorización previa del Consejo Provincial de Coordinación al que pertenezcan, salvo los casos de flagrante delito".

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1904 contenía ya una disposición sobre irresponsabilidad parlamentaria, que en términos generales era muy precisa, aunque su redacción era ciertamente amplia y detallada.

Dicha regulación aparecía en el art. 57 de la Constitución de 1904, bajo la siguiente fórmula:

"Los miembros de la Asamblea Nacional son irresponsables por las opiniones y votos que emitan, ya de palabra, ya por escrito, en el ejercicio de su cargo, y en ningún tiempo ni por autoridad alguna podrán ser perseguidos con este motivo".

En la Constitución de 1941 se varía notablemente la re-

dacción de este principio, aunque el contenido, ahora mucho más reducido, seguía consagrando la irresponsabilidad parlamentaria.

La norma constitucional en cuestión era el art. 87, que estaba concebido así:

"Los miembros de la Asamblea Nacional no son responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo".

Pocas modificaciones sufrió el texto anterior al redactarse la Constitución de 1946, que en su art. 133 consagró el principio mencionado.

El referido art. 113 de la Constitución de 1946 decía lo siguiente:

"Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo".

Como se podrá apreciar entre el art. 113 de la Constitución de 1946 y el art. 137 de la Constitución vigente hay una diferencia trascendental, puesto que en la actual se ha eliminado la referencia a los "votos" emitidos en el ejercicio del cargo.

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

En esta disposición constitucional hay claramente distinguidos dos aspectos: uno, de carácter eminentemente penal y, otro, de naturaleza procesal. Para los efectos de este estudio, sólo interesa el aspecto penal, ya que el procesal, hemos advertido antes excede de los propósitos que nos animan.

El alcance de la garantía concedida a los Representantes de Corregimientos depende del sentido de la expresión "en ejercicio de su cargo" contenida en el referido artículo de la

Constitución.

A nuestro juicio por tal debemos entender ejercer el cargo de Representante, es decir, emitir una opinión precisamente por tener la calidad de Representante de Corregimiento y relacionada con dicha condición.

La disposición constitucional en cuestión no distingue en ninguna forma si se ejerce el cargo solamente en las sesiones plenarias de la Cámara, en sus comisiones o en cualquier otro momento en que el Representante actúe como tal.

Sin duda la protección constitucional así concebida es muy amplia, pero estimamos que ese es el sentido de la garantía tal como se encuentra redactada en la actualidad.

Ello, no obstante, no tiene mayor trascendencia, toda vez que los Representantes de Corregimiento en el ordenamiento constitucional panameño no ejercen casi ninguna función propiamente legislativa, ya que tal función está concedida en la Constitución de 1972 a los miembros del Consejo Nacional de Legislación, quienes son los que dictan las verdaderas leyes en Panamá.

Resulta paradójico, por tanto, que la irresponsabilidad parlamentaria esté concedida a favor de los Representantes de Corregimiento y no a quienes verdaderamente ejercen la función legislativa.

En nuestro actual sistema constitucional los miembros del Consejo Nacional de Legislación, los legisladores en estricto sentido, carecen del privilegio de irresponsabilidad parlamentaria.

XII. INVOLABILIDAD PRESIDENCIAL

A) DECLARACION CONSTITUCIONAL

A lo largo de nuestra vida republicana las cuatro cons-

tituciones que han regido en el país han señalado la irresponsabilidad jurídica del Presidente de la República, aunque desplazando dicha responsabilidad a los Ministro de Estado.

La Constitución vigente exime también de responsabilidad al Vicepresidente de la República, que a partir de 1972 adquiere una relativa significación en la vida política del país.

En el art. 171 de la Constitución de 1972 encontramos la regulación de esta situación, bajo los siguientes términos

"El Presidente y Vicepresidente de la República só lo son responsables en los casos siguientes:

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales;
2. Por impedir la reunión de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, por obstaculizar a ésta o a los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución en el ejercicio de sus funciones; y,
3. Por delitos contra la patria o contra la cosa pública.

En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley.

En el tercer caso, se aplicará el derecho común".

B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

La Constitución de 1904 contenía una disposición que en términos generales coincidía sustancialmente con la declaración contenida en la Constitución vigente, aunque a propósito de los delitos solo mencionaba la "alta traición".

El texto del art. 78 de la Constitución de 1904 disponía lo siguiente:

"El Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones sólo es responsable en los casos siguientes:

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.
2. Por actos de violencia o coacción en las elecciones, o que impidan la reunión constitucional de la Asamblea Nacional, o estorben a ésta o a las demás Corporaciones o autoridades públicas que establece la Constitución, el ejercicio de sus funciones.
3. Por delitos de alta traición

En los dos primeros casos, la pena no podrá ser - otra que la destitución, y si hubiere cesado en el ejercicio de sus funciones el Presidente, la de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público".

En la Constitución de 1941 la norma correspondiente era el art. 113 que se mantenía en la misma orientación del art. 78 antes transcrito. Algunas modificaciones sin trascendencia se hicieron al texto anterior, pero que en nada cambiaban el espíritu de aquella.

Esta Constitución se apartó de la anterior al señalar la pena que le correspondería al Presidente en caso de que fuera hallado responsable del delito de alta traición.

El art. 113 de la Constitución de 1941 a este respecto señalaba que:

"El Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones sólo es responsable en los casos siguientes:

1. Por extralimitación en sus funciones constitucionales;
2. Por actos de violencia o coacción en las elecciones o que impidan la reunión constitucional de la Asamblea Nacional o estorben a ésta o a las demás corporaciones o autoridades públicas que establece la Constitución, el ejercicio de sus funciones;
3. Por delito de alta traición.

En los dos primeros casos la pena no podrá ser otra que la destitución, y, si hubiese cesado en el ejercicio de sus funciones, la de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. En el último caso se aplicará el derecho común".

La Constitución de 1946 difiere en este aspecto tanto de la Constitución de 1904 como de la Constitución de 1941, si bien la materia regulada en las tres Constituciones permanezca en todos los textos con una terminología muy semejante.

Podemos afirmar, en consecuencia, que a lo largo de nuestras Constituciones las modificaciones que se han sucedido no han afectado sustancialmente el contenido de la cuestión analizada, que nos haga señalar cambios fundamentales al respecto.

En la Constitución de 1946 esta materia estaba consagrada en el art. 148, que a la letra disponía lo siguiente:

"El Presidente de la República sólo es responsable en los siguientes casos:

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales;
2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral o que impidan la reunión de la Asamblea Nacional o estorben a ésta o a las demás corporaciones o autoridades públicas que establece la Constitución en el ejercicio de sus funciones, y
3. Por delitos de alta traición.

En los dos primeros casos la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley.

En el tercer caso se aplicará el derecho común".

C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL

La responsabilidad jurídica del Presidente y Vicepresidente de la República se reduce a los supuestos contenidos en el

art. 171 de la Constitución vigente. Fuera de dichos supuestos, sus actos no pueden acarrearles responsabilidad.

Para los dos supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo en cuestión, la sanción sólo puede ser la que - allí se indica. Dichos supuestos, sin embargo, pueden coincidir de hecho con figuras delictivas previstas en el propio Código Penal y demás leyes especiales.

Estas leyes, no obstante, no le son aplicables ya que la Constitución señala taxativamente los casos en que puede exigírseles responsabilidad y las sanciones aplicables serían en todo caso la destitución del cargo que desempeñan y la inhabilitación para ejercer cargo público.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente pueden ser sancionados por "extralimitación de sus funciones constitucionales", pero en cambio, no lo pueden ser por alguna "omisión" en el ejercicio de sus funciones (52).

Por lo que respecta a los delitos contra la patria y la cosa pública, la Constitución dispone que se aplicará el derecho común. Tanto aquellos como éstos están configurados en el Libro II del Código Penal.

Los delitos contra la patria aparecen en el Título I del Libro II, mientras que los delitos contra la cosa pública en el Título VI del mismo libro (53).

Fuera de los supuestos antes analizados ni el Presidente ni Vicepresidente de la República pueden ser responsabilizados por ningún delito. Con toda razón ha dicho QUINTERO (54) refiriéndose a la Constitución de 1946, que "el Presidente sólo será acusable, juzgable y condenable en los casos en que la propia Constitución o la ley penal configuran y definen exactamente como delitos específicos los actos que el art. 148 menciona" (55).

Tal afirmación respecto de la Constitución de 1946, tiene, a nuestro juicio, perfecta validez frente a la Constitución Política de 1972.

XIII. OTRAS CUESTIONES

Fuera de las disposiciones constitucionales antes comentadas, nuestra Constitución contiene algunas referencias concretas a diversos aspectos relacionados con la ciencia de los delitos y de las penas.

En efecto, en el numeral 2 del art. 120 se señala que el ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende "por pena conforme a la Ley".

Sucede, sin embargo, que no conocemos ninguna disposición que consagre como pena la suspensión de los derechos ciudadanos. Estos, no obstante, quedan afectados transitoriamente mientras la persona queda sometida a pena privativa de libertad.

A propósito de la regulación del Tribunal Electoral, organismo con carácter jurisdiccional al que la Constitución en el art. 126 le señala la atribución de interpretar y aplicar -privativamente la Ley Electoral, se contienen algunas referencias en materia penal.

De acuerdo con el art. 127 de la Constitución el Tribunal Electoral tiene entre sus facultades privativas el "sancionar las faltas y delitos contra la naturaleza y pureza del sufragio de conformidad con la Ley".

El tribunal en cuestión es la autoridad que tiene competencia exclusiva para juzgar y sancionar los delitos y faltas que se relacionen con la libertad y pureza del sufragio.

Aunque interpreta y aplica la ley electoral, no tiene

facultad para crear delitos o faltas electorales, ya que dicha facultad la atribuye la Constitución a la Ley.

Respecto de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, la Constitución señala algunas inhabilitaciones para ser elegido como Representante de Corregimiento y las causas en virtud de las cuales se podrá perder dicha calidad.

En efecto, de acuerdo con el numeral 3 del art. 133 no puede ser elegido Representante de Corregimiento quien haya "sido condenado por delito contra la cosa pública, la libertad y pureza del sufragio".

Por otra parte, el carácter de Representante de Corregimiento se pierde, según el numeral 2 del art. 134, por "la condena judicial fundada en delito".

Entre el Órgano Judicial y el Ministerio Público (Ministerio Fiscal en España) la Constitución, en sus arts. 187 y 202, señala que aquellos que hayan sido condenados por "delitos contra la cosa pública" no podrán ejercer o desempeñar cargo alguno tanto en éste como en aquél.

Esto último constituye una forma de "inhabilitación" de tipo constitucional con el fin de mantener un nivel de honradez y honestidad en la administración de justicia.

Dicha honradez y honestidad, sin embargo, no se protege simplemente con inhabilitaciones para los condenados por delitos contra la cosa pública, pues hay otras infracciones que atentan en forma directa contra la buena marcha de la actuación jurisdiccional, como lo son por ejemplo, entre otros, los delitos contra la administración de justicia, que no se mencionan en el texto constitucional.

Finalmente, para concluir este apartado nos resta señalar que existe una inhabilitación similar a la anteriormente se-

halada para poder ser nombrado Contralor o Subcontralor General de la República.

XIV. CONSIDERACIONES FINALES

Si bien es cierto, como señala QUINTERO, que "una de las más importantes manifestaciones jurídicas de las revoluciones de moliberales, que se iniciaron en las postrimerías del siglo 18, consistió en la formulación sistemática y la promulgación solemne de ciertos derechos fundamentales de los individuos o miembros del Estado, frente a las autoridades constituidas del mismo" (56), esto no significa que nuestra Constitución Política de 1972 pueda ser calificada como una Constitución de corte netamente liberal, aunque la mayoría de las garantías penales que hemos estudiado se han consolidado a partir de la Revolución Francesa que consagró un modelo liberal de sociedad.

Ya desde la Constitución de 1941 nuestro país ha consagrado al lado de las garantías liberales una serie de "derechos sociales" que facultan una mayor injerencia del Estado en la esfera del ciudadano.

"El calificativo de sociales que se les ha dado, advierte el profesor QUINTERO, obedece a que tienen por objeto proteger y asistir a grupos o sectores concretos de la sociedad. En cambio, los derechos estrictamente individuales tienen como titular, en principio, al individuo abstracta y aisladamente considerado" (57).

Fuera de los "derechos sociales" que complementan con las garantías liberales unos principios básicos y fundamentales del Estado de Derecho, nuestra Constitución consagra el papel rector del Estado en la dirección de la economía nacional que,

tradicionalmente, había estado reservada a los particulares.

Esta dirección "social" de nuestra Constitución, lamentablemente no ha tenido mayor incidencia en el Derecho Penal que ella consagra, que continúa estableciendo las garantías penales clásicas de las Constituciones liberales, aunque algunos preceptos de los analizados "la acercan más al modelo liberal progresista que al modelo liberal conservador" para usar los mismos términos que BUENO ARUS (58).

NOTAS

- (1) En la literatura penal española pueden consultarse, entre otros; RODRIGUES DEVESEA. P. General, ps. 16-17; SAINZ CANTERO, ps 43 y sgts; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON, ps. 47-48; Fco. BUENO ARUS, "Las normas penales de la Constitución española de 1978" en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, julio de 1979, ps. 25 y sgts; J.M. ESCRIBA GREGORI, "Algunas consideraciones sobre Derecho penal y Constitución" en Papers, 1980, nº 13, ps. 141 y sgts. (especialmente 147). En la literatura penal panameña, MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, ps. 27 y sgts.
- (2) Sobre las relaciones entre "pena" y "Estado" han escrito recientemente: Juan CORDOBA RODA, "La pena y sus fines en la Constitución" en La reforma del Derecho Penal, Universidad de Barcelona, Bellaterra, 1980, ps. 151 y sgts; Juan BUSTOS RAMIREZ y E. HORMAZABAL MALAREE, "Pena y Estado" en Papers citada; Santiago MIR PUIG, Función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y Democrático de Derecho, Bosch Barcelona, 1979.
- (3) En el Código Penal panameño vigente se dedica particular atención en el Libro II a los delitos contra la libertad en el título V.
- (4) QUINTERO, p. 150.
- (5) QUINTERO, p. 150.
- (6) Cf. Carlos Enrique MUÑOZ POPE y Campo Elías GONZALEZ FERRER, La detención preventiva en el Tratado Torrijos-Carter, publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Panamá, Panamá, 1979, p. 15.
- (7) A pesar de que en el Código Administrativo no se menciona como pena susceptible de ser impuesta por las "autoridades de policía" la pena de "prisión", existen numerosas disposiciones legales que crean "faltas" administrativas cuya única sanción prevista es la pena privativa de libertad de "prisión", que en algunos supuestos oscila entre dos y cinco años.

Además, vale la pena señalar, que el art. 878 del Código Administrativo señala que las sanciones administrativas pueden ser el trabajo en obras públicas, fianza de paz y buena conducta, multa y arresto.

También, en la Ley 112 de 1974, sobre justicia administrativa, establece que la sanción correccional que puede imponerse se reduce a "arresto" por no menos de diez días ni más de un año (Ley 112 de 30 de diciembre de 1974. Publicada en la Gaceta Oficial número 17.769 de 28 de enero de 1975).

- (8) QUINTERO, p. 150
- (9) QUINTERO, p. 155
- (10) QUINTERO, p. 155
- (11) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, ps, 228-229
- (12) MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 158
- (13) QUINTERO, p. 156
- (14) QUINTERO, p. 155
- (15) BUENO ARUS, artículo citado, p. 34
- (16) QUINTERO, p. 154
- (17) MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 465
- (18) MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 466
- (19) MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 466
- (20) MUÑOZ RUBIO Y GUERRA DE VILLALAZ, p. 466
- (21) Véase, entre otros, los siguientes autores: Francisco MUÑOZ CONDE, "La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito" en C.P.C., Nº 7 (1979) ps. 91 y sgts; Alfonso SERRANO GOMEZ, "Temas de Derecho Penal en la nueva Constitución" en Lecturas sobre la Constitución Española, Tomo II, UNED, Madrid, 1978, ps. 71 y sgts. (especialmente ps. 80-81); Juan CORDOBA RODA, "La pena y sus fines en la

Constitución" en La reforma del Derecho penal citada, ps. 151 y sgts. (especialmente ps. 153-156); Antonio GARCIA-PABLOS DE MOLINA, "La supuesta función resocializadora del Derecho penal; utopía, mito y eufemismo" en Anuario, Tomo XXXII (1979), ps. 645 y sgts; Miguel BAJO FERNANDEZ, "Prólogo" a la edición española de H. ZIPF, Introducción a la política criminal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, ps. XII a XV.

- (22) Cf. al respecto, Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Las infracciones de menores en Panamá" en LEX, nº 14, 1979, ps. 107 y sgts.
- (23) Cf. Carlos Enrique MUÑOZ POPE, La pena capital en centroamérica, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1978, ps. 72-73.
- (24) QUINTERO, p. 157
- (25) La denominación de "Actos Legislativos" resulta equívoca, toda vez que una Ley no puede reformar válidamente a la Constitución.
- (26) QUINTERO, p. 159
- (27) No quiere esto decir que en algunos casos no esté permitida la "expulsión" de algún extranjero del territorio nacional, por considerársele indeseable, pero en tal caso es necesario una resolución en tal sentido, fundada en una disposición legal.
- (28) José HIGUERA GUIMERA, La previsión constitucional de la pena de muerte, Bosch, Barcelona, 1980; también se han ocupado del tema en la nueva Constitución española: Alfonso SERRANO GOMEZ, "Temas del Derecho Penal en la nueva Constitución" en Lecturas sobre la Constitución Española, Tomo II, UNED, Madrid, 1978, ps. 93 y sgts; Francisco BUENO - ARUS, "Las normas penales de la Constitución Española de 1978" en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, julio de 1979, p. 41.
- (29) QUINTERO, p. 144
- (30) Respecto de la "retroactividad" en materia penal nos ocuparemos con mayor detenimiento más adelante.

- (31) QUINTERO, ps. 144-145; MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, ps. 27 y sgts. y ps. 111 y sgts.
- (32) QUINTERO, p. 146.
- (33) QUINTERO, p. 146
- (34) La redacción del artículo 1º del Código Penal vigente es la siguiente: "En ningún tiempo se podrá juzgar ni castigar a nadie, sino de conformidad con una ley promulgada y vigente a tiempo de ejecutarse el hecho que motiva el juicio, que defina tal hecho como punible y que le señale pena.
Las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y faltas: las últimas las define y castiga el Código Administrativo".
- (35) Recordemos que el Código Penal vigente, aprobado en 1922, sigue el sistema "monista" y solo establece "penas" más no "medidas de seguridad".
- (36) QUINTERO, p. 160
- (37) QUINTERO, p. 161
- (38) QUINTERO, p. 160
- (39) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 262.
- (40) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 263.
- (41) Alfonso SERRANO GOMEZ, "Temas de Derecho Penal en la nueva Constitución" en Lecturas sobre la Constitución Española, Tomo II, UNED, Madrid, 1978, p. 63.
- (42) QUINTERO, p. 146.
- (43) Así denomina Alfonso SERRANO GOMEZ uno de los temas que analiza bajo el epígrafe "Temas de Derecho Penal en la nueva Constitución" en Lecturas sobre la Constitución Española, Tomo II, UNED, Madrid, 1978, ps. 63 y sgts.
- (44) Según el art. 144 de la Constitución vigente, las funciones legislativas de la Asamblea Nacional de Representantes de

Corregimientos son las siguientes:

1. Aprobar o improbar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo;
2. Declarar la guerra y facultad al Ejecutivo para negociar la paz;
3. Aprobar o improbar las reformas a la división política del territorio nacional que le proponga el Consejo Nacional de Legislación;
4. Conceder amnistía por delitos políticos; y,
5. Dictar su Reglamento interno.

- (45) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 634
- (46) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 483.
- (47) José Enrique SOBREMONTTE MARTINEZ, Indultos y amnistía, Universidad de Valencia, Valencia, 1980.
- (48) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 484.
- (49) RODRIGUEZ DEVESA, P. General, p. 634.
- (50) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 488.
- (51) Cf. Código Penal, Código de Recursos Minerales y Código Agrario, Edición preparada por Ramón E. FABREGA, F., Lehmann, San José, 1967, p. 8.
- (52) Así, QUINTERO, p. 547.
- (53) C.P. 1922, Libro II, Título I denominado "De los delitos - contra la patria"; Libro II, Título VI denominado "De los delitos contra la cosa pública".
- (54) QUINTERO, p. 548
- (55) Tengamos presente que la Constitución de 1972 también consagra la inviolabilidad del Vicepresidente de la República.
- (56) QUINTERO, p. 107.
- (57) QUINTERO, p. 258.
- (58) F. BUENO ARUS, p. 62.

Capítulo noveno

LA PROBLEMÁTICA DE LA "ZONA DEL CANAL" Y EL TRATADO
DE 1977 (TRATADO TORRIJOS-CARTER)

- I. INTRODUCCION
- II. LA "ZONA DEL CANAL": SU LEGISLACION
- III. EL TRATADO DE 1977 (TRATADO TORRIJOS-CARTER)
- IV. LA "PUBLIC LAW 96-70" (SEPT. 27, 1979)

I. INTRODUCCION

El día 18 de noviembre de 1904, a escasos quince días del nacimiento de la República de Panamá como Estado independiente, las autoridades norteamericanas y el Embajador panameño en la ciudad de Washington celebraron el tratado del Canal de Panamá que se denominó "Tratado Hay-Bunau Varilla", también conocido como "Convención del Canal Istmico", que era -en esencia- el anterior convenio Herrán-Hay suscrito entre Colombia y Estados Unidos al que se le habían incluido algunas nuevas concesiones a favor de la potencia norteamericana (1).

En virtud de dicho tratado la República de Panamá concedió a los Estados Unidos ciertos derechos sobre determinada extensión del territorio nacional, a fin de concluir la construcción del Canal que a finales del siglo diecinueve habían comenzado a construir los franceses (2).

Mediante una interpretación muy particular del contenido del tratado en cuestión, las autoridades norteamericanas ejercieron absoluto control del área puesta a su disposición, denominada "Zona del Canal", hasta que el 1º de octubre de 1979 entró a regir el nuevo tratado firmado el 7 de septiembre de 1977, llamado "Tratado del Canal de Panamá" o "Tratado Torrijos-Carter" (3).

A partir de la ratificación y entrada en vigencia del tratado Hay-Bunau Varilla, hecho ocurrido el 26 de febrero de 1904, una legislación especial rigió en la Zona del Canal hasta que -nuestro país recuperó, casi en su totalidad (4), la jurisdicción sobre dicha parte de nuestro territorio (5).

Desde 1904 la legislación aplicable fue la emanada de la "Comisión del Canal Istmico", integrada exclusivamente por miembros norteamericanos, y luego, posteriormente, por la legislación

que especialmente para la Zona del Canal emanó del Congreso de los Estados Unidos de América (6).

En virtud de esta legislación particular la Zona del Canal quedó sometida directamente al control del Presidente de los Estados Unidos, quien nombraba en forma discrecional al Gobernador de la Zona del Canal, máxima autoridad administrativa en dicha área.

Como complemento de lo anterior, cabe señalar, que, correspondió a las autoridades de la Zona del Canal, en particular a la "Comisión del Canal de Panamá", la facultad de desarrollar las disposiciones emanadas de la autoridad legislativa de los Estados Unidos.

En el plano jurisdiccional el ejercicio de tal función estaba atribuida a dos categorías de autoridades bien diferenciadas entre sí: a) una Corte o Tribunal de menor jerarquía, a cargo de un juez unipersonal, denominada Magistrate's Court, que en materia criminal tenía competencia sobre asuntos de escasa gravedad o faltas y a quien también correspondía la vista o juicio preliminar sobre las infracciones de mayor gravedad o delitos; y, b) una Corte o Tribunal colegiado de mayor jerarquía que el anterior, aunque por la escasa cantidad de asuntos que se ventilan a cargo de un juez unipersonal, denominado United States District Court for the District of the Canal Zone, que en asuntos penales tenía competencia sobre infracciones de gravedad o delitos y que a la vez funcionaba como tribunal de apelación con respecto de la Corte antes señalada como de menor jerarquía (8).

Para los efectos jurisdiccionales pertinentes la Zona del Canal está dividida en dos secciones territoriales: la una, con sede en la ciudad de Balboa, terminal del Canal que está en el

Océano Pacífico y, la otra en la ciudad de Cristóbal, terminal del Canal en el Océano Atlántico (9).

II. LA "ZONA DEL CANAL": SU LEGISLACION.

A) ANTECEDENTES

Las primeras disposiciones penales vigentes en la Zona del Canal fueron las emanadas de la denominada Isthmian Canal Commission, organismo colegiado creado por el gobierno norteamericano e integrada sólo por ciudadanos de los Estados Unidos, que estaba encargada de dictar las directrices generales sobre la administración y funcionamiento del Canal.

En materia criminal deben señalarse las ordenanzas adoptadas por la "Comisión del Canal Istmico" mediante las Acts números 3 y 4 de 22 de agosto de 1904, en la que se dictan algunas disposiciones de carácter penal (10).

Posteriormente la misma comisión dicta la Act número 14, de 2 de septiembre del mismo año, por medio de la cual se aprueba el Penal Code for the Canal Zone, primer cuerpo orgánico de disposiciones penales que rigió en la Zona del Canal (11).

El Penal Code aludido fue tomado del Penal Code of California (12) por lo que durante su vigencia, y reformas posteriores, la jurisprudencia de los tribunales de California ha servido para la interpretación de aquél.

Este Penal Code de 1904 fue modificado y complementado posteriormente en diversas ocasiones. Toda vez que la disposición que lo aprobó no tenía rango de Ley del Congreso de los Estados Unidos, hay una diversidad de disposiciones, de variada jerarquía y denominaciones, que lo modificaron. Entre otras muchas figuran algunas otras Acts of the Isthmian Canal Commission, diversas -

Executives Orders y una gran cantidad de Acts of Congress (13).

A partir de 1933, mediante Act of Congress de 21 de febrero se cambió la denominación del Código que en lo sucesivo dejó de denominarse Penal Code of the Canal Zone y de ahí en adelante se llamó Criminal Code of the Canal Zone (14).

El Criminal Code of the Canal Zone tuvo, sin embargo, poca vida. En efecto, dicho código tuvo poca vigencia ya que en 1934 se aprobó una legislación completa para la Zona del Canal, el Canal Zone Code de 1934, en la que se comprendía en un solo cuerpo legal toda la legislación básica y fundamental que regía en la Zona del Canal.

Si bien es cierto que el Criminal Code of the Canal Zone desaparecía como texto independiente, sus disposiciones pasaron a formar parte integrante del nuevo compendio legislativo de la Zona del Canal que fue el Canal Zone Code de 1934 (15).

De esta forma el Canal Zone Code de 1934, aprobado mediante Act de 19 de junio de 1934, absorbió el Criminal Code anterior en su Título 5 que sólo contenía disposiciones referentes a crimes, más no sobre procedimiento criminal (16).

Este Canal Zone Code fue el texto legal que recogía en un solo cuerpo legislativo la mayoría de las disposiciones más importantes vigentes en la Zona del Canal en aquella época. La materia penal sustantiva estaba recogida en el Título 5 y las disposiciones sobre criminal procedure estaban contenidas en el Título 6.

El Código de 1934 rigió hasta la entrada en vigencia del nuevo Canal Zone Code de 1963, aprobado en octubre de 1962 y vigente desde el día 2 de enero de 1963 (17).

B) EL "CANAL ZONE CODE" DE 1963

1. Introducción

Constituye este nuevo Código la revisión del Canal Zone Code de 1934, al que se le hicieron las modificaciones que se estimaron necesarias. Dicha revisión fue autorizada mediante Act of Congress de 6 de agosto de 1958 (18).

Correspondió a la sociedad Equity Publishing Corporation la labor de revisión del Código de 1934, bajo la supervisión directa del Gobernador de la Zona del Canal y un Advisory Committee designado por el propio Gobernador, tal como disponía la autorización concedida por el Congreso de los Estados Unidos para la revisión del Código de 1934 (19).

El citado Advisory Committee estuvo integrado por las siguientes personas: Guthrie F. Crowe, Rowland K. Hazard, Charles J. Zinn, Merrill Whitman, William J. Sheridan, L.S. Carrington, Paul A. Bentz, David J. Markun, Thomas J. Henderson, Frank O. Hamilton y los abogados panameños Carlos A. Icaza y Woodrow de Castro. Actuó como secretario W. Allen Sanders.

La revisión del Canal Zone Code de 1934 se efectuó con el propósito de cumplir siete objetivos fundamentales:

- 1) abrogar y reemplazar leyes obsoletas;
- 2) solucionar los problemas de conflicto de leyes;
- 3) actualización de las disposiciones, lenguaje, estilo y terminología, efectuar las modificaciones adecuadas en la designación de oficinas, agencias y funcionarios con antiguas denominaciones;
- 4) aclarar y mejorar las disposiciones que regulan el ejercicio profesional, la defensa y el procedimiento ante los tribunales de la Zona del Canal;

5) incluir aquellas modificaciones efectuadas en los Códigos de California que a juicio de los responsables de la revisión, del Comité Consultivo (Advisory Committee) y del Gobernador, representen mejoras compatibles con las peculiaridades de la Zona del Canal;

6) incluir las disposiciones contenidas en las "Actas" que modificaron el Código de 1934, de las que regulan materias exclusivamente referentes a la Zona del Canal, y, las disposiciones en aquellas materias que la experiencia ha demostrado deberían ser tratadas en el Código de la Zona del Canal;

7) Cambiar, respecto a unas pocas materias, disposiciones similares a aquellas en otras jurisdicciones y que en su contenido sean más modernas que las vigentes en el Código de 1934 (20).

Los responsables de la revisión del Código de 1934, en lo que respecta a la materia penal, han señalado que en dicho aspecto la mejora, complementación y modificación del lenguaje era necesaria, toda vez que la regulación de la legislación penal contenida en el Código de 1934 había devenido en obsoleta e inadecuada en numerosas cuestiones (21).

Para remediar esta situación fueron incorporadas las modificaciones necesarias, tomadas en su mayor parte de las modificaciones efectuadas al Código de California, y, en algunos casos, del Título 18 del Código de los Estados Unidos (22).

Una modificación de cierta trascendencia que se puede apreciar en el nuevo Código de la Zona del Canal es la distribución de las materias efectuadas en el Título 6, Parte 1, sobre "crímenes" o "infracciones penales".

En efecto, la nueva versión del Canal Zone Code prescinde de denominar los capítulos que contienen las diversas figuras delictivas haciendo uso del epígrafe "Crímenes por y contra" el Po-

der Ejecutivo, el Servicio Postal, la Justicia Pública, la Persona, etc., que se utilizaba en la legislación anterior.

Ahora en este Código de 1963 los capítulos que contienen los "crímenes" o "infracciones penales" están distribuidos en un riguroso orden alfabético, con una numeración corrida o sucesiva que ha prescindido de los números pares.

De esta forma, luego del capítulo 1, que trata sobre General Provisions (Disposiciones Generales), el siguiente es el capítulo 3 que versa sobre Abortion and contraconception (Aborto y anticonceptivos), luego viene el capítulo 5 que trata sobre Adultery (Adulterio) y así sucesivamente hasta que la Parte 1 del Título 6 termina con el capítulo 131 que regula lo concerniente a Weights and Measures (Pesas y medidas).

El 18 de octubre de 1962 el Congreso de los Estados Unidos aprueba el nuevo Código de la Zona del Canal que, en esencia, es una versión del Código de 1934 más actualizada.

La denominación exacta de la Act of Congress en cuestión es la siguiente: An Act To revise and codify the general and permanent laws relating to and in force in the Canal Zone and to enact the Canal Zone Code, and for other purposes (23).

Al igual que en el Código de 1934 en este Código de 1963 se recogen una amplia gama de disposiciones fundamentales, divididas en Títulos, Partes, Capítulos y Secciones. En algunas ocasiones, muy pocas por cierto, los capítulos se subdividen en sub-chapters.

Como quiera que en la Zona del Canal no rige la Constitución de los Estados Unidos de América, como bien han reconocido los tribunales norteamericanos allí radicados, algunas disposiciones constitucionales de aquel país están recogidas en el Título I, Capítulo 3 que versa sobre Personal and Civil Rights (Dere

chos Personales y Civiles) (24).

La intención del legislador norteamericano al momento de aprobar el Canal Zone Code de 1963 fue la de dictar un verdadero código comprensivo de las disposiciones legales vigentes, de modo que los jueces radicados en la Zona del Canal no tuvieran que recurrir al common law como fuente supletoria del Código (25).

A diferencia del Canal Zone Code de 1934, que dedicaba el Título 5 a la materia penal material y el Título 6 al procedimiento penal, el texto de 1963 abarca en un solo Título, el 6, todas las disposiciones relacionadas con la materia penal.

En el Código de 1963 las disposiciones penales sustantivas, adjetivas y de ejecución penal están contenidas en el Título 6 sobre crimes and criminal procedure. Las disposiciones penales referentes a crimes están contenidas en el Título 6, Parte 1; las normas procesales están ubicadas en el mismo Título 6, pero en su Parte 2 que se denomina criminal procedure, mientras que la regulación de los aspectos de ejecución penal o penitenciarios aparecen en el propio Título 6, Parte 3 bajo el epígrafe prisons and prisoners.

2. Garantías Penales Fundamentales

Tomando en consideración que en la Zona del Canal no rige la Constitución de los Estados Unidos, el Canal Zone Code contiene una serie de garantías personales y civiles que se aplican para la Zona del Canal (26).

Entre esas garantías hay unas de clara significación penal, contenidas en el Título 1, Capítulo 3, Sección 31 única del capítulo.

De esta forma el Canal Zone Code prohíbe la muerte civil y la aplicación con efectos retroactivos de las leyes; se prohi-

ben también las multas excesivas y las penas crueles y desusadas entre otras diversas garantías que se reconocen (27).

Lamentablemente este Código no prohíbe la pena de muerte, que se incluye en el catálogo de las penas (28) y acepta la imposición de trabajos forzados como resultado de la imposición de penas privativas de libertad como consecuencia de "delitos" (crimes) (29).

3. Ámbito de aplicación del Código

Por lo que respecta al ámbito espacial de validez del Canal Zone Code el mismo Código señala que tiene vigencia dentro - del territorio que se denomina la "Zona del Canal" (30).

El Código no define que es lo que entiende por "Zona del Canal" puesto que para ello remite al Tratado vigente en esa fecha entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América.

De esta forma, el Código evita entrar a detallar estos aspectos, de claros contenidos políticos, toda vez que ya la cuestión había sido acordada entre Panamá y los Estados Unidos mediante el "Tratado de Amistad y Cooperación" firmado entre ambos Estados el 2 de marzo de 1936.

Por otra parte, en el propio Título 6 del Canal Zone Code, a propósito de las infracciones penales, como principio general se establece que toda persona que cometa una infracción de la ley penal, ya sea de las establecidas en las leyes de la Zona del Canal o de las leyes de los Estados Unidos aplicables en la Zona, está sujeta a responsabilidad penal en la misma Zona del Canal.

También están sujetos a responsabilidad penal y, por tanto, pueden ser juzgadas y condenadas las personas que cometan, en todo o en parte, una infracción penal dentro de la jurisdicción de los tribunales de la Zona; quienes cometan una infracción pe-

nal fuera de la Zona del Canal, si cometida dentro de la Zona - constituyera hurto, robo o malversación de caudales según las leyes de la Zona del Canal y trae los bienes objeto del delito, o parte de ellos, a la Zona del Canal o fuera encontrados con ellos, o parte de los mismos, en la Zona; finalmente, quienes no estando bajo la jurisdicción de los tribunales de la Zona causen, contribuyan o aconsejen a otro a cometer una infracción penal en la Zona del Canal (31).

4. Consideraciones generales sobre las "infracciones penales" en el Código de 1963.

El Código establece dos categorías bien diferenciadas de hechos delictivos, cada uno de diversa gravedad. Se trata de los crímenes considerados como graves, denominados felonies, frente a los crímenes considerados como leves, llamados misdemeanors - (32).

Felonies son las infracciones penales que se consideran de mucha gravedad. En nuestro idioma no hay una traducción exacta de este término, ya que es usual que se le traduzca como sinónimo de "crimen", "delito", "felonía", "delito mayor" o "delito grave".

Misdemeanors son las infracciones penales que se consideran de escasa gravedad. Es usual que se le traduzca como sinónimo de "pequeño delito", "delito menor", "contravención" o "falta".

Para los efectos de este estudio, traducimos felony como "delito", mientras que misdemeanors como "falta".

Es evidente, por tanto, que ambos términos son las "especies particulares" de un género mayor: los "Crimes" que para efectos de este trabajo traducimos como "crímenes" o "infracciones penales".

Por lo que respecta a la infracción penal, la existencia

de la misma se fundamenta en la conexión entre "la acción", en términos generales considerada, y la intención o negligencia criminal (33).

Aunque este Código no contiene una regulación de los aspectos esenciales de la infracción criminal ni de las causas que la excluyen, señala alguna de éstas últimas, aunque la fórmula utilizada sea radicalmente opuesta a la contenida en los sistemas de derecho escrito.

De manera general el Código señala que todas las personas son capaces de cometer infracciones penales, salvo los supuestos que se enumeran en la Sección 45 que se encuentra incluida dentro del Capítulo 1 sobre "Disposiciones generales".

En dicha enumeración encontraremos diversas causas de exclusión de la responsabilidad penal que hoy denominamos como "causas de exclusión de la acción" (34), "causas de inimputabilidad" (35) y de "inculpabilidad" (36).

La "legítima defensa", llamada "defensa propia" cuando se refiere a la defensa personal, está permitida, incluso a propósito de la defensa de terceras personas (37).

El hecho de colocarse en estado de "intoxicación voluntaria" no priva al sujeto de responsabilidad criminal (38).

Como personas responsables criminalmente aparecen tanto los autores (39), los cómplices (40) y los encubridores (41).

Por autores se entiende quien comete una infracción, ayuda, incite, aconseje, ordene, induzca o procure su comisión. Se comete una infracción no solo haciendo voluntariamente que se produzca un acto que constituye una ofensa criminal, sea que lo ejecute el propio sujeto u otra persona por él.

Cómplice es quien no es considerado autor de la infracción penal en la que interviene. Se le sanciona por la misma in-

fracción en que participa.

El "encubridor" quien conociendo que una infracción criminal ha sido cometida reciba, ayude, auxilie o asista al autor con el objeto de esconderlo o evitar su captura, juicio o sanción (42).

Aunque figuran fuera del capítulo referente a "disposiciones generales" el Código sanciona algunas formas imperfectas de cometer un crimen entre las distintas figuras delictivas consagradas a partir del Capítulo 3 de la Parte 1 del Título 6.

En efecto, sanciona la "tentativa" de cometer una infracción penal, entendiendo por tal lo que nosotros conocemos como tentativa "propriadamente dicha" sino también la "frustración" (43).

Para estos casos, la pena prevista en el Código se determina de acuerdo con la pena prevista para el delito que se intentó cometer; en ningún caso, sin embargo, la tentativa será sancionada con una pena superior a 20 años de privación de libertad.

La "conspiración" está concebida como el acuerdo de dos o más personas para cometer crímenes (44).

Como sanción para la conspiración está prevista una multa de 5.000 dólares o privación de libertad de hasta un año en una cárcel o de hasta tres años en un presidio, o multa y privación de libertad al mismo tiempo; si se conspira para cometer un "delito" sancionado con una pena superior a tres años, la pena para los conspiradores será la misma que en el Código se prevé para el delito que acuerdan cometer.

5. Consideraciones generales sobre las sanciones

La distinción antes expuesta entre felony y misdemeanor no es arbitraria ni muchos menos superficial, ya que en torno a

ella se estructura todo el sistema de reacción penal en el Código de la Zona del Canal.

Son aplicables como penas en este Código las siguientes: muerte, privación de libertad, multa, destitución del cargo e - inhabilitación para tener y disfrutar cargos honoríficos, fideicomiso o beneficios (45).

Para sancionar hechos que constituyen felony el Código prevé la imposición de penas graves: muerte, privación de libertad por el resto de la vida o por más de un año, multas o éstas últimas en forma alternativa.(46).

Los misdemeanor son penados con multas que generalmente no exceden de 100 dólares, privación de libertad de hasta treinta días o ambas (47).

Además, según la gravedad de la infracción cometida, sea felony o misdemeanor, el Código establece el lugar donde deben cumplirse las penas privativas de libertad.

Ya hemos señalado que el Canal Zone Code establece también en el Título 6 lo relativo a la ejecución penal bajo el epígrafe de prisons and prisoners. Los establecimientos penitenciarios en donde se cumplen las penas privativas de libertad son de dos categorías, según la sanción a que son sometidos.

Así, los condenados a privación de libertad por haber cometido un delito (felony) cumplen su sanción en un establecimiento denominado penitentiary, que difiere del establecimiento en donde se cumplen las penas privativas de libertad de los condenados por una falta (misdemeanor) que se denomina jail (48).

Los términos penitentiary y jail aluden ambos a establecimientos en donde se cumplen las penas privativas de libertad, de diversa gravedad, aunque en el uso diario y común dichos términos sean tenidos como equivalentes.

Esta distinción entre internamiento en una penitenciaría o presidio (penitentiary) o en una cárcel (jail) se fundamenta en que para los reclusos en aquella institución se dispone la obligación de trabajar a que están sometidos todos los penados, entendiéndose por esto "trabajos forzados" (hard work); para los últimos, por el contrario, supone el hecho de trabajar en las necesidades del establecimiento respectivo o en el mantenimiento de sus equipos (49).

Respecto a la pena de muerte, nada se dispone en la Parte 1, Título 6 sobre crímenes, salvo su imposición a determinados delitos tales como asesinato en primer grado y homicidio resultante de la obstrucción del Canal o sus compuertas.

Toda la reglamentación sobre la pena capital está contenida en la Parte 2 del Título 6, sobre "procedimiento penal". En efecto, en esta parte encontramos la regulación de la ejecución de la pena máxima a propósito de "Sentencia y Ejecución; Apelaciones" (50), en donde se dedica un apartado especial (Subchapter III) a la ejecución de las sentencias de muerte.

El ahorcamiento del condenado es la forma que señala el Código para ejecutar la sentencia impuesta, que en ningún caso - debe cumplirse si se trata de una mujer embarazada o de un enfermo mental que se encuentre en ese estado luego del juicio (51).

Se ejecuta la pena de muerte dentro de un plazo no menor de 90 días ni mayor de 120 días después de pronunciada la respectiva sentencia.

Luego de pronunciada la sentencia en que se condena al sujeto a la pena de muerte, el Tribunal correspondiente deberá remitir al Gobernador una copia autenticada del fallo de culpabilidad correspondiente y los testimonios rendidos en el juicio - respectivo, así como de la sentencia pronunciada (52)

En los dos delitos antes señalados como sancionados con pena de muerte, ésta figura como pena única a imponer, no pudiendo el juzgador escoger otra sanción (53).

Por lo que se refiere a la pena de privación de libertad (imprisonment), es usual que el Código al establecerla a propósito de cada uno de los delitos, sólo señale el límite máximo de la pena que se puede aplicar sin establecer el límite mínimo a que puede un sujeto ser sometido.

Esta técnica legislativa no significa, sin embargo, que el juzgador puede escoger cualquier cantidad entre un día y el límite máximo, toda vez que una disposición concreta incluida en las "disposiciones generales" señala que los hechos punibles considerados como felony se sancionan en todo caso con privación de libertad no inferior a un año en un "presidio" o "penitenciaría" (53).

De esta forma corresponde al juzgador determinar la pena que se le impone al sujeto, de acuerdo con las peculiaridades del caso, que en ningún caso puede exceder del límite máximo previsto ni ser menor a un año.

En lo que respecta a los "crímenes" señalados como "faltas" el Código siempre señala una pena de multa, privación de libertad de hasta 30 días o ambas. En estos casos, la multa es de cien dólares (54).

Sobre este tema de la pena privativa de libertad, es necesario señalar algunas peculiaridades de la misma que hemos observado en el catálogo de figuras delictivas, ya que en ocasiones luego de describir los hechos punibles el Código no señala sanción alguna.

Para estos supuestos entre las "disposiciones generales" contenidas en el capítulo 1, se señala que cuando se deja sin -

sanción un hecho delictivo, el mismo debe ser considerado como misdemeanor, en cuyo caso la sanción respectiva es la que corresponde a esta clase de infracción.

Por otro lado, en algunas ocasiones hemos observado que algunos hechos son sancionados con pena privativa de libertad de diversa duración quedando a discreción del juzgador ordenar el internamiento en un "presidio" o en una "carcel". De esta forma, un mismo hecho puede ser sancionado con 1 año de privación de libertad en una "cárcel" (jail) o con catorce años de privación de libertad en un "presidio" (penitentiary) a discreción del juzgador (55).

Por último, a propósito de la pena privativa de libertad queremos señalar que su duración generalmente se establece, como término medio, para las felonies en cinco años. Sin embargo, en el catálogo de hechos delictivos contenidos en el Código hemos observado que se sanciona numerosos casos con penas superiores a diez años de "presidio" en más de 50 supuestos distintos y en algunos casos, muy contados por cierto, con privación de libertad por cualquier término a discreción del juez o, simultáneamente, por el resto de la vida del sujeto. Así, por ejemplo, entre otros "delitos", en algunos casos de "violación" (56).

En lo que respecta a la pena de multa, es necesario señalar que en las "disposiciones generales" nada se señala respecto de ella, salvo su mención como una de las penas que se señalan en el Código.

El Código al describir conductas punibles generalmente establece como pena aplicable la de multa o privación de libertad, o ambas. La cuantía que generalmente usa para los "delitos" es de multa de hasta 5.000 dólares, pero en algunos supuestos, no más de diez, señala multas de hasta 10.000 dólares. En casos

de "faltas" la multa usual es de 100 dólares.

Muy ocasionalmente, no hemos contado más de cinco casos, sanciona algunos hechos delictivos con multa exclusivamente, prescindiendo de la privación de libertad (57).

Respecto a las otras penas señaladas como tales, destitución e inhabilitación, casi nada al respecto se señala en el Código.

Sobre la pena de "destitución del cargo" podemos señalar que figura en un solo supuesto que hayamos observado; respecto de la pena de "inhabilitación" hemos apreciado que tampoco la utiliza con frecuencia, aunque podemos señalar que la hemos encontrado en cuatro supuestos distintos (58).

6. Los crímenes en particular

En la Parte 1, sobre crimes, del Título 6, sobre crimes and criminal procedure, encontramos toda la regulación que el Código de 1963 trae sobre las diferentes especies de infracciones penales, sean estas delitos o faltas (felony o misdemeanor).

La Parte 1 del Título 6 está dividida en 66 capítulos, aunque la numeración de los mismos vaya del capítulo 1 al 131, ya que no aparecen capítulos con números pares en ninguna parte del Código de 1963.

Los 66 capítulos aludidos constan de "secciones" que equivalen a nuestros artículos, que terminan en el número 2602; esto, sin embargo, no significa que haya 2602 secciones o artículos en materia penal, ya que con dichas secciones sucede lo mismo que con los capítulos: las secciones no son sucesivas o no figuran algunas.

De esta forma, aunque la Parte 1 de este título empieza con la sección 1 y termina con la número 2602, no hay en reali-

dad tal número de secciones en la regulación de los aspectos penales sustantivos.

A propósito de los crímenes o infracciones penales, no hay en el Canal Zone Code una división formal que agrupe por separado los delitos (felonies) de las faltas (misdemeanors), que figuran ordenadas por orden alfabético independientemente de ser éstas o aquellos.

Por otra parte, resulta importante destacar la gran cantidad de definiciones que trae el Canal Zone Code a efectos de la interpretación de sus propias secciones.

Dichas definiciones tienen notable importancia, ya que de ellas depende que un hecho delictivo sea calificado en uno u otro sentido.

Así, por ejemplo, sucede con el término "malicia" que se emplea fundamentalmente en el capítulo 63 que trata del "homicidio" (59).

El privar a una persona de la vida existiendo "malicia" en el agresor convierte el homicidio (tipo genérico) en "asesinato" (tipo específico), que a su vez puede tener diversos grados.

Se comete asesinato "en primer grado" si el homicidio es cometido con veneno, alevosía, tortura o por medio de cualquier acto premeditado o deliberado; es en "segundo grado" cuando, a pesar de existir malicia, el hecho se comete fuera de los supuestos que constituyen el asesinato en primer grado (60).

Cuando se causa la muerte de alguien, pero sin "malicia" el hecho no deviene en "asesinato" sino en lo que el Código denomina manslaughter (homicidio), el cual puede ser, a su vez, "voluntario" o "involuntario" (61).

En lo que respecta particularmente al "homicidio", consi

derado en términos amplios y generales como causar la muerte de otro, el Código contiene dos secciones muy específicas sobre "ex cusa" (62) y "justificación" (63).

Si las distinciones que hemos señalado pueden considerarse algo complicadas, y, quizás, extremas, la situación se torna mucho más complicada aún cuando se trata de los delitos contra la propiedad.

Así sucede, por ejemplo, con los términos burglary y larceny, que en nuestro idioma significan diversas modalidades del delito de "hurto", pero que en el Canal Zone Code tienen una significación muy distinta entre sí.

Burglary supone un hurto mediante escalamiento o fractura que se comete de noche o, independientemente de la hora del día, provisto de un arma peligrosa o al momento de cometer el hecho se agrede a una persona con un arma peligrosa que el sujeto posee (64).

Larceny, por el contrario, supone un hurto en donde el sujeto se apodera de una cosa cuyo valor excede los cien dólares o la toma e sustrae a una persona (65).

En ambos casos, diversas modalidades de la conducta delictiva o distintas circunstancias que concurren dan nacimiento a tal o cual infracción penal en el Canal Zone Code de 1963.

El último ejemplo, a propósito del incendio, puede ilustrar más esta complicada forma de describir hechos delictivos. Veamos la distinción entre arson y lo que se denomina incendiarism (66).

Ambos suponen causar un "incendio", si bien el segundo consiste en causar un incendio que no sea de aquellos que consti-
tuyen arson. Aquí lo que diferencia ambas formas de incendio es

la "cosa" a la que se prende fuego.

Esta complicada construcción de las figuras delictivas nos impide brindar un panorama general de las mismas, ya que nos obligaría a tener que hacer o formular una enorme cantidad de distinciones o matizaciones que harían esta exposición muy extensa, pues de lo contrario podríamos incurrir en algunas imprecisiones o vaguedades al querer ser breves (67).

III. EL TRATADO DE 1977 (TRATADO TORRIJOS-CARTER)

A) INTRODUCCION

El "Tratado del Canal de Panamá" firmado en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América el 7 de septiembre de 1977, por Omar Torrijos Herrera, Comandante Jefe de la Guardia Nacional de Panamá y por James E. Carter, Presidente de los Estados Unidos casi ha puesto punto final a la lucha del pueblo panameño por la recuperación de su territorio, parte del cual en 1904 fue cedido a esta última nación para los fines exclusivos de la construcción, mantenimiento y defensa del Canal de Panamá.

Es un hecho cierto que para los panameños el Tratado de 1904 no representó prácticamente ningún beneficio, por lo que se acordaron nuevas estipulaciones posteriores en los tratados firmados en los años 1936 y 1955.

Los acontecimientos del 9 de enero de 1964, con un trágico balance de 22 ciudadanos panameños muertos por las tropas del Ejército norteamericano estacionado en el territorio panameño de la Zona del Canal, hicieron impostergable una nueva negociación que superara los conflictos planteados, tal como se reconoce en la "Declaración Conjunta" emanada el 3 de abril de 1964 por los Representantes de los Gobiernos de los Estados Unidos y

la República de Panamá.

Las relaciones diplomáticas restablecidas en 1964, luego de la ruptura de relaciones a consecuencia de los hechos ocurridos en enero de ese mismo año, dan inicio a la que llegaría a constituir el Tratado de 1977.

Desde 1964 hasta 1977 mucho se ha discutido, ofrecido y exigido por ambas partes, aunque ya se producía el 7 de febrero de 1974 un primer acuerdo que, bajo la denominación de "Declaración de Principios", suscribieron en la fecha anotada Juan Antonio Tack, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y Henry Kissinger, Secretario de Estado de los Estados Unidos.

La labor negociadora estuvo coordinada por la parte panameña por el Dr. Rómulo Escobar Betancourt, Rector de la Universidad de Panamá, Adolfo Ahumada y Aristides Royo, ambos Ministros de Estado, además de una gran cantidad de técnicos y especialistas en una diversidad de materias; por la parte norteamericana, la negociación fue dirigida por el Embajador Plenipotenciario - Elsworth Bunker y un equipo del Departamento de Estado. Al final de la negociación, hacia 1976, se incorporó como co-negociador el Embajador Sol N. Linowitz.

El Tratado firmado el 7 de septiembre de 1977 consta de XIV artículos, varios "Anexos, "Actas Convenidas" y "Acuerdos" para la ejecución de diversos artículos del tratado (58). En la misma fecha antes citada se suscribió también, entre Panamá y Estados Unidos, el "Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá".

A partir del 1 de octubre de 1979 empezó a regir el Tratado del Canal de Panamá y estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 1999 a las 12 horas del mediodía (69).

B) EL NUEVO REGIMEN JURISDICCIONAL

1. La jurisdicción panameña

En virtud de lo dispuesto en el Artículo III del Tratado de 1977, relativo al "funcionamiento y dirección del canal", a la República de Panamá le corresponderá ejercer la función jurisdiccional en todo el territorio comprendido en lo que antes se denominó "Zona del Canal".

Tal atribución está consagrada en el número 6 del Artículo III del Tratado, en los siguientes términos:

"La República de Panamá será responsable por el suministro a todas las áreas comprendidas en lo que constituyó la Zona del Canal, de servicios de naturaleza jurisdiccional general como aduanas e inmigración, servicios postales, administración de justicia y expedición de licencias, de conformidad con este tratado y sus acuerdos anexos".

Este principio está reconocido posteriormente de manera más específica y concreta a propósito de las áreas que Panamá a puesto a disposición de los Estados Unidos.

En efecto, en el número 1 del Artículo IX del Tratado, sobre "leyes aplicables y ejecución de leyes" se dispone:

"De conformidad con las estipulaciones de este tratado y sus acuerdos conexos, las leyes de la República de Panamá se aplicarán en las áreas puestas a disposición de los Estados Unidos de América para su uso de acuerdo con este tratado. Las leyes de la República de Panamá se aplicarán a asuntos o hechos ocurridos en lo que constituyó la Zona del Canal antes de la entrada en vigencia de este tratado, sólo en la medida que estuviere expresamente dispuesto en tratados o convenios anteriores".

La última parte del número 1 del artículo IX antes transcrito señala que este tratado no concede la facultad de aplicar retroactivamente la legislación panameña en la antigua "Zona del

Canal", a menos que tal medida haya sido facultada mediante algún tratado o acuerdo anterior al presente de 7 de septiembre de 1977. No está demás señalar que no hay tratado o acuerdo anterior al 7 de septiembre de 1977 que faculte tal medida.

Por otra parte, en el Tratado Panamá se compromete a no dictar ninguna norma jurídica que de algún modo obstaculice el ejercicio de los derechos que se han concedido a los Estados Unidos.

El número 8 del Artículo IX del Tratado, a este respecto dispone lo siguiente:

"La República de Panamá no expedirá ni adoptará o ejecutará ninguna ley, decreto, reglamento o acuerdo internacional o acción que pretenda reglamentar o que de algún modo interfiera con el ejercicio, por parte de los Estados Unidos de América, de los derechos conferidos en este tratado o acuerdos conexos".

Las normas antes señaladas suponen, por lo tanto, una limitación a la territorialidad de la ley panameña en las áreas concedidas a los Estados Unidos en virtud del Tratado.

2. El llamado "período de transición".

En virtud de lo dispuesto en el Artículo XI del Tratado se entiende por período de transición el tiempo comprendido durante los 30 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del Tratado de 1977 y sus acuerdos conexos.

Este período de transición de acuerdo con el número 1 del citado Artículo XI del Tratado tiene por objeto "lograr una transición ordenada en la aplicación plena de los arreglos jurisdiccionales establecidos mediante este tratado y los acuerdos afines".

Las facultades conferidas en el citado Artículo XI del Tratado a los Estados Unidos para el aludido período de transi-

ción complementarían y no tienen la finalidad de limitar la total aplicación y efecto de los derechos y atribuciones conferidos a los Estados Unidos en el Tratado y sus acuerdos afines.

Durante el período de transición, comprendido entre el 1 de octubre de 1979 y el 30 de abril de 1982, las leyes penales (aunque también las civiles) norteamericanas se aplicarán en forma concurrente con las leyes panameñas en determinadas áreas e instalaciones puestas a disposición de los Estados Unidos para su uso de conformidad con el Tratado.

De acuerdo con el número 5 del "Acta Convenida sobre el Tratado del Canal de Panamá", suscrita entre Panamá y los Estados Unidos el mismo 7 de septiembre de 1977, las áreas e instalaciones que aludíamos son las siguientes:

- a) las áreas de funcionamiento del Canal y las áreas de viviendas descritas en el Anexo A del Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá (70);
- b) los Sitios de Defensa y las Areas de Coordinación Militar descritas en el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá;
- c) los puertos de Balboas y Cristóbal descritos en el - Anexo B del Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá.

A pesar de la cláusula general contenida en el número 2 del Artículo XI del Tratado, en el mismo número señalado se permite, a continuación, el derecho exclusivo de los Estados Unidos de ejercer la jurisdicción penal sobre los ciudadanos norteamericanos que estén trabajando bajo las órdenes de "La Comisión del Canal de Panamá" (71), los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y su componente civil, y de todos los dependientes de éstos (72) en los siguientes supuestos: a) que se trate de un

delito cometido durante el período de transición dentro de las áreas e instalaciones puestas por Panamá a disposición de los Estados Unidos; b) que se trata de un delito cometido con anterioridad al período de transición en lo que fue la antigua Zona del Canal.

Fuera de estos supuestos, los delitos cometidos por los ciudadanos norteamericanos empleados de "La Comisión del Canal de Panamá", los miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el componente civil de éstas y todos los dependientes de las personas antes mencionadas que cometan algún delito quedan sometidas a la jurisdicción de la República de Panamá, salvo que se disponga lo contrario en el Tratado y en sus acuerdos anexos o según se convenga de otro modo.

Aunque la parte final del número 2 del Artículo XI señala que "cualquiera de las Partes puede declinar el ejercicio del derecho primario de jurisdicción en un caso o categoría de casos específicos", con lo que la República de Panamá podría adquirir jurisdicción por algún delito cometido durante el período de transición o cometido antes de la vigencia del Tratado, en el número 3 del Artículo XI del Tratado se señala terminantemente que los Estados Unidos mantendrán la facultad de juzgar los casos penales ocurridos a consecuencia de delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del tratado, según lo dispuesto en las leyes aplicables en lo que constituyó la antigua Zona del Canal.

El referido número 3 estipula lo siguiente: "Los Estados Unidos de América retendrán el derecho de ejercer jurisdicción en casos penales que surjan de delitos cometidos antes de la entrada en vigor de este tratado en violación de las leyes aplicables en lo que fue la Zona del Canal".

A partir de la vigencia del Tratado, y mientras transcu-

rre el período de transición, corresponde a "La Comisión del Canal" el ejercicio, entre otras funciones, de la actividad jurisdiccional y la administración del sistema carcelario existentes en lo que fue la Zona del Canal.

Como consecuencia de lo anterior los tribunales de justicia de la antigua Zona del Canal sólo pueden continuar tramitando los asuntos que ventilaban al momento de la entrada en vigor del Tratado de 1977 o sobre hechos que hayan ocurrido antes de dicha vigencia. De esta forma, los tribunales de la Zona del Canal carecen de facultad para ejercer la función jurisdiccional fuera de los casos antes señalados.

Para concluir esta referencia al "período de transición" nos interesa destacar que las disposiciones citadas o transcritas aluden exclusivamente a delitos y omiten toda referencia a las faltas o contravenciones.

Ello nos obliga a plantearnos la interrogante siguiente: ¿qué país es competente durante este período para conocer de las "faltas" cometidas?

A nuestro juicio tal facultad corresponde a las autoridades de la República de Panamá. Arribamos a tal conclusión en virtud de las siguientes consideraciones:

a) El párrafo inicial del Artículo XI del propio Tratado dispone que "La República de Panamá reasumirá plena jurisdicción sobre el territorio que constituyó la Zona del Canal, en la fecha de entrada en vigor de este tratado y de conformidad con sus estipulaciones".

Rigen, por tanto, los delitos y faltas contenidos en las leyes panameñas que no contraríen las disposiciones del Tratado y sus textos anexos.

b) Como excepción a lo dispuesto anteriormente el Trata-

do concede a los Estados Unidos la facultad de ejercer la función jurisdiccional sobre determinados sujetos cuando estos cometan - exclusivamente "delitos" durante el período de transición, quedando excluidas de tal facultad las "faltas" ya que no se mencionan dentro de los casos que pueden quedar bajo jurisdicción norteamericana.

c) Por otra parte, cuando los negociadores del Tratado han querido referirse a las faltas, lo han hecho expresamente en una gran cantidad de ocasiones. En efecto, en no pocos casos el tratado alude tanto a los delitos como a las faltas toda vez que se trata de supuestos en donde la función jurisdiccional norteamericana es amplia (73).

3. Régimen jurídico de los empleados ciudadanos norteamericanos y sus dependientes.

En virtud de las disposiciones contenidas en el Tratado y textos que lo complementan, la República de Panamá ejercerá su jurisdicción en todo el territorio de la que antes constituyó la "Zona del Canal", salvo algunos aspectos en que se confiere tal facultad a los Estados Unidos.

Por tal razón, en algunos casos muy concretos la jurisdicción de los Estados Unidos deberá aplicarse cuando se trate de aspectos penales en donde estén involucrados ciudadanos norteamericanos empleados de "La Comisión del Canal" y sus dependientes.

El régimen jurídico-penal de estas personas está contemplado en el artículo XIX del "Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal" que es la legislación aplicable a las personas que son empleadas de la agencia civil denominada "La Comisión del Canal".

De acuerdo con el número 1 del Artículo XIX, relativo a jurisdicción penal, del Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado, corresponde a la República de Panamá el ejercicio de la jurisdicción sobre los ciudadanos norteamericanos empleados de "La Comisión del Canal" y sus dependientes, por todos los delitos y faltas cometidos dentro del territorio de la República de Panamá que sean punibles según las leyes panameñas.

La disposición aludida es aplicable exclusivamente en el supuesto de que la infracción penal cometida sea punible según las leyes panameña, más no cuando son punibles según la legislación de los Estados Unidos, ya que en caso de que la infracción sea punible de acuerdo con las leyes de ambos países, el régimen previsto en el Tratado establece una regulación sustancialmente distinta.

En efecto, de acuerdo con el número 2 del Artículo XIX del "Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá", si el delito o falta cometido por el ciudadano norteamericano empleado de "La Comisión del Canal", o el dependiente de éste, es punible tanto por la ley panameña como por la ley norteamericana, las autoridades de los Estados Unidos pueden solicitar a las autoridades panameñas que éstas declinen su jurisdicción en favor de aquellas, expresando en todo caso las razones que justifiquen dicha petición.

Esta regulación no tendría mayores consecuencias si en el mismo Artículo no se estableciera que tal declinatoria de jurisdicción por parte de las autoridades panameñas hacia las autoridades de los Estados Unidos es obligatoria si el hecho punible se encuentra en alguno de estos supuestos: a) si el delito o falta emanan de un acto u omisión ejecutado en el desempeño de una función oficial; y, b) si el delito o falta se comete exclusiva-

mente contra la propiedad o la seguridad de los Estados Unidos en un área de funcionamiento del Canal o en un área de viviendas.

Para la determinación de si el delito o la falta se ha cometido en el ejercicio de una función oficial, el propio Tratado establece que si es necesario las autoridades de los Estados Unidos emitirán un certificado en el que hagan constar que la infracción penal fue cometida durante el desempeño de una función oficial con lo cual Panamá deberá entregar a los Estados Unidos al sujeto para que sea juzgado por los tribunales de este país; por lo que respecta al segundo supuesto, el Tratado dispone que los delitos contra la seguridad de los Estados Unidos incluyen la traición o sabotaje contra los Estados Unidos, el espionaje o la violación de cualquier ley referente a secretos oficiales de los Estados Unidos o a secretos relativos a la defensa nacional de ese país.

Aunque es una cuestión que es propia del Derecho procesal penal, no deja de tener importancia el problema de la detención o prisión preventiva de un empleado de "La Comisión del Canal" que sea ciudadano de los Estados Unidos o dependiente de éste, toda vez que la legislación bajo la cual dicha medida se cumple dependerá en definitiva del delito que le atribuyan al sujeto, por lo que la determinación del hecho punible respectivo - guarda relativa importancia.

La República de Panamá, a este respecto, tiene derecho a mantener en prisión preventiva a los empleados ciudadanos norteamericanos y a sus dependientes únicamente si han cometido homicidio, violación carnal, robo, tráfico de narcóticos o delitos contra la seguridad del Estado panameño. Fuera de estos casos, la detención preventiva de un empleado ciudadano norteamericano o de sus dependientes se cumplirá con arreglo a la legislación nor

teamericana y dicha persona estará a cargo de dichas autoridades.

Con respecto a los delitos antes mencionados el número 6 del "Acta Convenida sobre el Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá" señala que queda entendido que los cinco delitos, conforme a la ley panameña, indicados allí son:

- a) el homicidio, que es la muerte intencionalmente causada a una persona por otra;
- b) la violación, que es la realización del acto sexual con violencia o amenaza con una persona distinta al cónyuge y sin su consentimiento, o con una persona que no estuviere en capacidad de resistir debido a enfermedad mental o física, o cuando la víctima fuere menor de 12 años (74);
- c) el robo, o sea el acto de apoderarse de una cosa ajena de valor con el fin de privar de su posesión a su dueño y aprovecharse de ella, utilizando violencia - contra dicha persona o contra un tercero presente en el lugar del acto;
- d) el tráfico de drogas o sea la venta, el intercambio, la transferencia ilegal con fines de lucro de marihuana, hashish, heroína, cocaína, anfetaminas, barbitúricos o LSD; y,
- e) los delitos contra la seguridad del Estado panameño como el espionaje, el sabotaje o el terrorismo dirigido contra las autoridades o poderes constituidos de Panamá, tendientes a derrocarlos.

Por último, cabe anotar a este respecto que el Tratado dispone que si Panamá cede a los Estados Unidos su derecho a - ejercer la jurisdicción penal por cualquier delito cometido por los empleados norteamericanos o sus dependientes, los Estados Unidos se obligan a juzgar al sujeto fuera del territorio de la República de Panamá. Igual cosa sucede si la acción u omisión

que constituye delito no es punible según las leyes panameñas, pero sí según la legislación norteamericana, tal como queda señalado en el número 3 del Artículo XIX del "Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá".

4. Régimen jurídico de los miembros de las fuerzas armadas norteamericanas, miembros del componente civil y sus dependientes.

El régimen penal a que están sometidos los miembros de las fuerzas armadas norteamericanas, los miembros del componente civil y sus dependientes está recogido en el Artículo VI del - "Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá", que se refiere a la jurisdicción criminal.

De acuerdo con el número 1 del citado Artículo VI cualquier delito o falta cometida por las personas antes señaladas serán juzgados por los tribunales panameños si constituyen infracción de la ley panameña:

La República de Panamá, sin embargo, concede a las autoridades de los Estados Unidos la facultad de ejercer jurisdicción penal dentro de los sitios de defensa por los delitos o faltas cometidos al tenor de las leyes de los Estados Unidos dentro de tales sitios de defensa por las categorías antes indicadas.

Las autoridades de los Estados Unidos están facultadas para ejercer la jurisdicción penal por delitos cometidos por los miembros de las fuerzas, del componente civil y sus dependientes fuera de los sitios de defensa en algunos supuestos muy concretos.

Sólo cuando el delito es contra la propiedad o la seguridad de los Estados Unidos, contra la persona o propiedad de un miembro de las fuerzas, del componente civil o sus dependientes, o si el delito surge de un acto u omisión en el desempeño de un

deber oficial las autoridades norteamericanas tienen la jurisdicción penal a su cargo.

No obstante lo anteriormente expuesto, la República de Panamá ejercerá siempre su jurisdicción cuando se trate de miembros del componente civil y sus dependientes que sean nacionales panameños o residentes habituales en Panamá.

Respecto a los delitos o faltas cometidos por los miembros de las fuerzas armadas norteamericanas que sean ciudadanos panameños, la situación aunque clara en el Tratado, presenta sus complejidades.

En estos supuestos la jurisdicción competente para juzgar tales delitos es la jurisdicción norteamericana. Sucede, sin embargo, que en ocasiones ha ocurrido que nacionales panameños miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos han cometido - algún delito de los que corresponde exclusivamente juzgar a este país, pero no han sido detenidos por las autoridades norteamericanas puesto que han "desertado" o abandonado las áreas sometidas al control norteamericano y han sido requeridos por los Estados Unidos a Panamá para su juzgamiento.

Aunque para estos casos el Tratado da facultad a los Estados Unidos para el juzgamiento de los miembros de sus fuerzas armadas, las autoridades de Panamá se han negado a la entrega de dicho ciudadano en vista del principio constitucional de que Panamá no puede extraditar a sus nacionales.

Al negar la entrega de un ciudadano panameño las autoridades panameñas quedan obligadas a someterlo a juicio; sin embargo, en ocasiones esto no se puede ya que en nuestro medio no hay infracciones militares ni jurisdicción militar por lo que el hecho, en algunos casos, queda sin sanción por no ser delictivo.

Finalmente, cabe destacar que existen numerosas disposi-

ciones de naturaleza procesal que se aplican a estas personas y que tienen una notable incidencia en el ámbito estrictamente penal. Así, por ejemplo, lo relativo a la detención o prisión preventiva, que se regula en iguales términos que para los empleados civiles norteamericanos de "La Comisión del Canal" y sus dependiente. A lo dispuesto en aquella oportunidad nos remitimos a fin de no efectuar una repetición de las mismas cuestiones.

5. Régimen de garantías penales

El Tratado de 1977 contiene una serie de garantías de naturaleza penal y procesal penal a favor de las personas que en él tienen una especial consideración: los ciudadanos norteamericanos empleados de "La Comisión del Canal", los miembros de las fuerzas armadas, los miembros del componente civil de éstas y todos sus dependientes.

Para todos ellos se establece que no podrán ser sometidos a la pena capital por parte de las autoridades panameñas ni sometidos a ninguna otra forma de trato cruel o poco usual (75).

Si bien es cierto que constitucionalmente Panamá ha abolido la pena de muerte con carácter general, es censurable que el Tratado permita a los Estados Unidos establecer hechos delictivos en nuestro medio a los que se le pueda aplicar la pena de muerte.

Es criticable, que, no teniéndola nosotros en nuestra legislación, hayamos permitido a los Estados Unidos establecer disposiciones penales sancionadas con pena de muerte.

Por otra parte, en otra ocasión hemos planteado la duda acerca de la legitimidad de algunos preceptos penales contenidos en el Tratado del Canal de Panamá (76). Y es que debemos tener presente que el territorio concedido a los Estados Unidos, sea -

para sitios de defensa o para vivienda de los empleados del canal o miembros de las fuerzas, del componente civil o sus dependientes es parte integrante del territorio panameño por lo que estimamos "no puede más que censurarse que un tratado bilateral tenga mayor efectividad jurídica que la Constitución panameña e, incluso, estar en abierta contradicción con ésta" (77).

En virtud de lo dispuesto en el Artículo XIX del "Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá", nuestro país no puede imponer la máxima sanción a ningún empleado ciudadano norteamericano ni a sus dependientes.

Por lo que se refiere a los militares, personal civil de las fuerzas armadas o sus dependientes existe igual restricción en su favor en el número 8 del Artículo VI del "Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá".

Fuera de las garantías anotadas hay una serie de garantías de naturaleza procesal de enorme significación.

Entre ellas, la que dispone que ningún empleado de "La Comisión del Canal" que haya sido juzgado de acuerdo con las estipulaciones del Tratado por las autoridades de la República de Panamá o por las autoridades de los Estados Unidos y que haya sido absuelto o haya sido condenado y esté cumpliendo o haya cumplido su pena o haya sido perdonado, será juzgado de nuevo por el mismo delito dentro del territorio de la República de Panamá.

Respecto a los militares, miembros del componente civil de las fuerzas armadas o sus dependientes existe un texto idéntico en el Tratado. Lo aquí dispuesto se aplicará sin perjuicio de que las autoridades militares de los Estados Unidos juzguen a un miembro de las fuerzas por las infracciones disciplinarias que surjan de acciones u omisiones que constituyan delito por el que ya hubiera sido juzgado por las autoridades de la República de

Panamá.

Además de las garantías ya señaladas, el Tratado prevé otras de diversa significación tales como la "visita y auxilio a detenidos" y el deber de las autoridades panameñas de notificar a las autoridades de los Estados Unidos que han realizado el - arresto o detención de cualquiera de las personas sometidas a es- pecial régimen en el Tratado.

6. La ejecución de sentencias penales.

En el número 8 del Artículo XI del Tratado del Canal de Panamá se dispone que los Estados Unidos podrán durante el perio- do de transición, "seguir encarcelando personas en las áreas e instalaciones puestas a disposición de los Estados Unidos de Amé- rica por la República de Panamá para su uso de conformidad con - este tratado y acuerdos conexos o transferirlos a instituciones penales en los Estados Unidos de América para que cumplan sus sen- tencias".

Por otra parte, en el "Anexo" al Tratado de 1977 se esta- blece que "La Comisión del Canal" puede, durante los primeros 30 meses de vigencia del Tratado, continuar ejerciendo las funcio- nes relativas al sistema penitenciario que a la fecha mantiene.

Cabe señalar que en virtud de lo estipulado en el número 11 del Artículo IX del Tratado del Canal de Panamá, la República de Panamá y los Estados Unidos se han obligado a concluir un tra- tado mediante el cual los nacionales de uno de los dos Estados que fueren condenados por los tribunales del otro y que no estu- vieses domiciliados en él pueden escoger cumplir su condena en el Estado de su nacionalidad.

Finalmente, debemos anotar que el día 11 de enero de 1979 los Estados Unidos y la República de Panamá firmaron el tratado

antes aludido, denominado "Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales" (78).

IV. LA "PUBLIC LAW 96-70" (SEPT. 27, 1979).

Por medio de esta Ley el Congreso de los Estados Unidos de América dictó las disposiciones legales necesarias para el - normal funcionamiento de la administración del Canal a partir de la vigencia del Tratado de 1977.

En lo que concierne a la materia estrictamente penal la ley en cuestión señala que continuarán rigiendo durante el período de transición todas las leyes o reglamentaciones existentes en la Zona del Canal al momento de entrar a regir el Tratado de 1977, lo mismo que seguirán administrando justicia las autoridades jurisdiccionales que hasta ese momento lo hacían, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el Tratado del Canal de Panamá (79).

Esta ley contiene algunas disposiciones en cuanto al cumplimiento de las condenas penales impuestas por los tribunales de la Zona del Canal, de modo que queden bajo control directo - del Procurador General de los Estados Unidos o de "La Comisión del Canal de Panamá" los sujetos sometidos a penas privativas de libertad, según el mayor o menor término de duración de la respectiva condena (80).

NOTAS

- (1) Así, SOSA y ARCE, p. 319.
- (2) Aunque los trabajos del Canal se comenzaron en 1880, según SOSA y ARCE "los ingenieros franceses venidos al Istmo en 1881 y 1882, se limitaron a estudios, exploraciones y otros preliminares de la obra del Canal, de modo que hasta 1888 no se principió formalmente la excavación" (p. 288).
- (3) Véase: Carlos Enrique MUÑOZ POPE y Campo Elías GONZALEZ FERRER, La detención preventiva en el Tratado Torrijos-Carter, Publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad de Panamá, Panamá, 1979; Campo Elías GONZALEZ FERRER y Carlos Enrique MUÑOZ POPE, La jurisdicción penal en el Tratado Torrijos-Carter, Autoridad del Canal, Panamá, 1979.
- (4) A partir, claro está de la vigencia del Tratado de 7 de septiembre de 1977. Dicho Tratado está vigente a partir del 1 de octubre de 1979.
- (5) Aunque en el tratado de 7 de septiembre de 1977 todavía se conceden a los Estados Unidos ciertas áreas bajo su exclusiva jurisdicción.
- (6) C.Z.C., volumen 2, p. 349:
- (7) Véase la distinción más adelante formulada sobre los Crimes.
- (8) C.Z.C., Título 6, Parte 2, Capítulo 201, Sección 3504. Dichos funcionarios ejercen su función en nombre del gobierno de la Zona del Canal.
- (9) RICORD, p. 143.
- (10) C.Z.C., Volumen, 2, p. 349.
- (11) C.Z.C., volumen 2, p. 349.
- (12) C.Z.C., volumen 2, p. 349. Ricardo LEVENS (h) y Eugenio Raúl ZAFFARONI, Códigos penales latinoamericanos, La Ley, Tomo I, Buenos Aires, 1978 sostienen que "El Código de California,

uno de los pocos que existen en Estados Unidos, en realidad no era tal, sino una recopilación de leyes penales y penitenciarias con agregados y algunas enmiendas. Rige en él el principio de la expiación, sobre el casuismo y falta la sistematización" (p. 17).

- (13) C.Z.C., Volumen 2, p. 349.
- (14) C.Z.C., volumen 2, p. 349.
- (15) C.Z.C., volumen 2, ps. 349 y 353; volumen 1, p. xx.
- (16) El primer Código de procedimiento penal, para la Zona del Canal, fue aprobado mediante Act número 15 de la Isthmian Canal Commission el 3 de septiembre de 1904.
En 1934 el Canal Zone Code absorbió este Código, que pasó a constituir parte de él como Título 6.
En el Canal Zone Code de 1963 la regulación del procedimiento penal figura como Parte 2 del Título 6.
- (17) C.Z.C., Volumen, 1, p. 1.
- (18) C.Z.C., volumen 1, ps. xiii y sgts.
- (19) Ver: C. Z.C., 3 volúmenes, Oxford (New Hampshire), 1963.
- (20) C.Z.C., volumen 1, p. xv.
- (21) C.Z.C., volumen 1, p. xx.
- (22) C.Z.C., volumen 1, p. xx.
- (23) C.Z.C., volumen 1, p. 1.
- (24) C.Z.C., Título I, Capítulo 3, Sección 31.
- (25) C.Z.C., volumen 1, annotations 1 y 2
- (26) C.Z.C., volumen 1, annotations 1 y 2; en este mismo sentido, RECORD, ps. 142-143.
- (27) C.Z.C., Título 1, Capítulo 3, Sección 31, números 1 y 8.
- (28) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 21.

- (29) C.Z.C., Título 1, Parte 1, Capítulo 3, Sección 31, número 9.
- (30) C.Z.C., Título 1, Parte 1, Capítulo 1, Sección 2.
- (31) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 91.
- (32) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 23.
- (33) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 22.
- (34) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 45, numeral 6 ("Los que cometan el hecho en estado de inconsciencia").
- (35) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 45, numerales 1, 2, 3 y 4 ("Los menores de siete años"; "Los mayores de siete años y menores de 14 años, que en el momento de cometer el hecho no tengan conocimiento de que se trata de un acto contrario a la ley"; "Los idiotas"; "Los enfermos mentales").
- (36) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 45.
- (37) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 45, numerales 7, 9 y 10 que regulan supuestos de "caso fortuito" y "formas de coacción moral".
- (38) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 47.
- (39) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 41.
- (40) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 42.
- (41) Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 43.
- (42) El "encubrimiento" se sanciona con una pena no mayor de la mitad del máximo de la privación de libertad o de la multa previstos para el delito cometido por la persona a la cual ayudan; en caso de que dicho delito tenga señalada la pena de muerte o privación de la libertad por el resto de la vida del sujeto, la pena del encubridor no será mayor a 10 años de privación de libertad. Así se dispone en la Sección 43 ya señalada anteriormente.
- (43) Título 6, Parte 1, Capítulo 15, Secciones 371-373.

- (44) Título 6, Parte 1, Capítulo 31, Secciones 631-632.
- (45) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 21.
- (46) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Secciones 21 y 92.
- (47) C.Z.C., Título 6, Capítulo 1, Sección 92.
- (48) La distinción, aunque se enuncia de modo general, tiene sus excepciones al momento de describir las figuras típicas y señalar las penas para cada caso en particular.
- (49) C.Z.C., Título 6, Parte 3, Capítulo 3, Sección 6502.
- (50) C.Z.C., Título 6, Parte 2, Capítulo 219, Secciones 4451-4463.
- (51) C.Z.C., Título 6, Parte 2, Capítulo 219, Sección 4461.
- (52) C.Z.C., Título 6, Parte 2, Capítulo 219, Secciones 4454 y sgts.
- (53) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Secciones 1185 y 1184.
- (54) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 1, Sección 92.
- (55) Así, por ejemplo, a propósito de ciertos fraudes y falsedades. Ver: C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 55 (Fraud and False Statements), Sección 1026.
- (56) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 107 (Rape), Sección 2224.
- (57) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Secciones 240, 241, 274 y 824.
- (58) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Secciones 466, 467, 2152 y 2153.
- (59) La malicia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta el propósito deliberado de quitar la vida injustamente a una persona; es tácita cuando no resulta considerable provocación o cuando las circunstancias que concurren en la muerte muestran un corazón perverso o maligno. En el idioma original la fórmula es la siguiente:
"Malice, as referred to by section 1181 of this title, may be express or implied. It is express when there is manifes-

ted a deliberate intention unlawfully to take away the life of a fellow creature. It is implied when no considerable - provocation appears, or when the circumstances attending the killing show an abandoned or malignant heart" (C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1182).

- (60) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1183, La pena prevista para el "asesinato" en primer grado es la de - muerte, salvo que existieran circunstancias atenuantes en cuyo caso es de privación perpetua de libertad; para el asesinato en segundo grado, la pena es de privación de libertad por no menos de 10 años.
- (61) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1186. Para el homicidio voluntario la pena es de privación de libertad por no más de 10 años; para el homicidio involuntario la pena es de privación de libertad por no más de 1 año o multa de 1.000 dólares o, a discreción del tribunal, privación de libertad por no más de 10 años (C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1187).
- (62) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1190.
- (63) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 61, Sección 1191.
- (64) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 23, Sección 502 y sgts.
- (65) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 71, Secciones 1341 y sgts.
- (66) C.Z.C., Título 6, Parte 1, Capítulo 11 (Secciones 302 y 303) y Capítulo 79 (Sección 1563) respectivamente.
- (67) Sobre las infracciones penales aquí mencionadas véase: Rex A. COLLINGS Jr., "Les infractions contre les personnes", Le système pénal des Etats-Unis D'Amerique, Institut de Droit Comparé de L'Université de Paris, Paris, 1964, ps. 59-81; y, Francis A. ALLEN, "Les infractions contre la propriété", Le système pénal des Etats-Unis D'Amerique cit., ps. 83-117.
- (68) Además del "Tratado del Canal de Panamá", en estricto sentido, hay los siguientes documentos:
 - a) Acta convenida sobre el Tratado del Canal de Panamá;
 - b) Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá;

- c) Acta Convenida sobre el Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá;
 - d) Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado - del Canal de Panamá;
 - e) Acta Convenida sobre el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá;
 - f) Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá; y,
 - g) Acuerdo sobre ciertas actividades de los Estados Unidos de América en la República de Panamá;
- (69) Ver: Tratado del Canal de Panamá; Artículo VI, número 2.
- (70) Las áreas de funcionamiento y vivienda también incluyen la "penitenciaria" de la Zona del Canal que durante los tres primeros años de vigencia del Tratado permanecerá bajo la autoridad de los Estados Unidos. Luego pasará a formar parte de la jurisdicción panameña. Ver: Anexo A del Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá.
- (71) "La Comisión del Canal de Panamá es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, constituida de conformidad con las leyes de dicho país. Su directiva está integrada por cinco ciudadanos norteamericanos y cuatro panameños y está encargada la dirección general del Canal. Véase, al respecto: Tratado del Canal de Panamá, Artículo III, números 3, 4 y 5.
- (72) El Tratado tiene una serie de definiciones sobre lo que debe entenderse por empleado ciudadano de los Estados Unidos y sus dependientes, en el ámbito "civil":
- A) De acuerdo con lo que dispone el Acuerdo para la Ejecución del Artículo III "empleados ciudadanos de los Estados Unidos" significa: a) Los nacionales de los Estados Unidos a quienes se les expidan pasaportes de dicho Estado, que fueren empleados por la Comisión y que hubieren sido asignados para el desempeño de sus funciones en la República de Panamá. Este término comprende a los empleados de otros organismos civiles de los Estados Unidos que presten servicios temporales en la Comisión o que estuvieren visitando el área por asuntos oficiales de los Estados Unidos; b) Las otras categorías de personas que las partes pudieran acordar" (Artículo I, número 2).

- B) De acuerdo con lo que dispone el Acuerdo para la Ejecución del Artículo III "dependientes" significa: El cónyuge y los hijos de empleados ciudadanos de los Estados Unidos y otros parientes que dependan de ellos para su subsistencia y que vivan habitualmente con ellos bajo el mismo techo" (artículo I, número 3).

En el ámbito "militar" el Tratado también define qué debe entenderse por miembros de las fuerzas, componente civil y sus dependientes:

- A) Según el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV miembros de las fuerzas armadas significa:
El personal militar de las Fuerzas de los Estados Unidos en servicio activo, que se encuentran en la República de Panamá para los fines específicos del Tratado del Canal de Panamá, y como de otro modo ambos gobiernos pudieran acordar. Este término incluye al personal militar de las Fuerzas de los Estados Unidos en servicio activo y presente en la República de Panamá en servicio provisional de otras estaciones o a bordo de aviones o barcos de las Fuerzas de los Estados Unidos que se encuentren en tránsito o en visita oficialmente (artículo I, número 3).
- B) Según el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV miembros del componente civil significa:
- a) Nacionales de los Estados Unidos, a quienes se les han expedido pasaporte de los Estados Unidos, que están empleados por las Fuerzas de los Estados Unidos y asignados a los sitios de defensa en la República de Panamá.
 - b) Nacionales de terceros países empleados por las Fuerzas de los Estados Unidos, asignados a los sitios de defensa y que no residan habitualmente en la República de Panamá.
 - c) Otras categorías de personas que, por vía de excepción, pudieran ser acordados por ambos Gobiernos. Este término incluye al personal en servicio provisional o a los miembros civiles de la tripulación de aeronaves o naves de las Fuerzas de los Estados Unidos que se encuentran en tránsito o de visita oficial. Para los propósitos de esta definición, no se considerará como residencia en la República de Panamá la presencia en ésta con motivo del empleo con las Fuerzas de los Estados Unidos. (Artículo I, número 2).

- c) Según el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV dependientes significa: El cónyuge y los hijos de los miembros de las Fuerzas o del componente civil, y otros parientes que dependan de ellos para su subsistencia y vivan habitualmente con ellos bajo el mismo techo.
- (73) Entre otros, véase: Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá, Artículo XIX, número 2; también, el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá, Artículo VI, número 1.
- (74) La regulación de lo que debe entenderse por "violación carnal" en el Derecho panameño, según el Tratado, es más restringida que la contenida en el Código Penal panameño, puesto que éste incluye un supuesto adicional no contemplado en el Tratado (Cf: art. 281 del C.P. panameño).
- (75) Véase: Acuerdo para la Ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá, Artículo XIX, número 7 respecto de los empleados ciudadanos y sus dependientes; también el Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá, Artículo VI, número 8 respecto de los miembros de las fuerzas armadas, del componente civil y sus dependientes.
- (76) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Consideraciones en torno a la pena de muerte" en Tercer Seminario Nacional de Criminología, Instituto de Criminología, Panamá, 1978, ps. 94 y sgts. (especialmente ps. 99-101).
- (77) Consideraciones en torno a la pena de muerte" en Tercer Seminario, cit., ps. 100-101.
- (78) Véase: Public Law 96-70 (Septiembre 27 de 1979), Title II, Chapter 1, Sections 2101 y 2201.
- (79) V. Public Law 96-70, Title II, Chapter 3, Section 2402.

Capítulo Décimo

LOS PROYECTOS DE REFORMA

- I. INTRODUCCION
- II. LOS PRIMEROS INTENTOS DE REFORMA
DEL CODIGO PENAL DE 1922
- III. EL PROYECTO DE CODIGO PENAL DE 1928
- IV. EL PROYECTO REVISADO DE 1943
- V. EL PROYECTO DE 1952
- VI. EL ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL
DE 1970

I. INTRODUCCION

Numerosos han sido los intentos por dotar al país de un nuevo Código Penal que sustituyera al de 1922, que se encuentra vigente desde el 17 de enero de 1923.

Se han creado una gran cantidad de "Comisiones Codificadoras", muchas de las cuales han trabajado durante años, sin que hayan cumplido con la labor que se les encomendaba.

En 1967 el Gobierno Nacional contrató los servicios profesionales del Licenciado José Manuel Faúndes para que elaborara el texto de un nuevo Código, pero la labor realizada por Faúndes se limitó a una revisión de algunos títulos del Código Penal vigente sin que se presentara el proyecto para el que se le había contratado.

De la labor de Faúndes no ha quedado documento alguno ni ha sido posible consultar el documento que contiene las propuestas por él realizadas para modificar algunos títulos del actual Código. Esta situación nos ha obligado a prescindir de toda mención a este respecto.

Se han elaborado diversos textos para sustituir al Código vigente en 1928, 1943, 1952 y 1970. La difusión de dichos trabajos ha sido escasa y en ningún caso se han publicado las "actas" de las respectivas comisiones, si es que las hubiera.

Obtener un ejemplar de estos documentos no ha sido nada fácil, ya que no existe copia de los mismos en ninguna biblioteca pública, salvo el texto del Anteproyecto de 1970 que ha sido el más reciente y del que se han efectuado dos impresiones.

Por otra parte, ha sido constante en nuestra tradición - que casi nunca se expidan leyes de "bases" al momento de pretender elaborar un nuevo proyecto de Código, por lo que resulta imposible tener un conocimiento de las directrices que se señala-

ban a los responsables de cada proyecto en su oportunidad.

Dentro de estas limitaciones hemos pretendido hacer una exposición general sobre dichos textos, señalando -hasta donde ello sea posible- sus posibles fuentes y principales diferencias con el Código Penal de 1922 que se deseaba en cada momento sustituir.

Hacemos uso de la doctrina patria en los aspectos que han sido objeto de atención por nuestros autores, aunque en la mayoría de los casos nos encontramos con textos que jamás han sido -objeto de un estudio, siquiera somero, por quienes en su oportunidad ostentaron la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Panamá o tuvieron alguna vinculación con el Derecho Penal, sea como jueces, magistrados, fiscales, o, simplemente, como abogados.

II. LOS PRIMEROS INTENTOS DE REFORMA DEL CODIGO PENAL DE 1922.

De la misma forma que contra el Código Penal de 1916 se hicieron críticas al poco tiempo de su vigencia, las críticas -contra el Código Penal de 1922 no tardaron en aparecer.

Promulgado el Código en cuestión en la Gaceta Oficial de 8 de diciembre de 1922 inmediatamente se formularon objeciones contra el mismo, que dan lugar antes de los dos meses de su promulgación y pasados los 15 días de su vigencia al Decreto 17 de 1923 (1), por medio del cual se creó una Comisión para la revisión del Código Penal recién promulgado.

La profesora GUERRA DE VILLALAZ sostiene que dicha comisión se nombró "después de tomar en consideración el hecho de que esa nueva compilación legal fue aprobada sin el conocimiento previo del público y sin que la Asamblea Nacional tuviera oportunidad para discutir y analizar con el detenimiento requerido en es

tos casos, su contenido" (2).

En este mismo sentido se manifiestan MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ cuando señalan que el Código de 1922 "como el de 1916 tampoco tuvo la aceptación de los miembros del foro y del Organo Judicial, debido a que fue aprobado sin haber sido ampliamente consultado y sin darse la oportunidad de que se debatiera pormenorizadamente en el seno de la Asamblea Nacional" (3).

El Decreto aludido justificó la creación de tal comisión, cuando el Código tenía apenas 15 días de estar rigiendo, en los tres "considerandos" que textualmente señalan lo siguiente:

"Que el nuevo Código Penal, elaborado por la Comisión revisora de la Codificación Nacional fue aprobado sin que el público lo conociera previamente y sin que en la misma Asamblea tuviera lugar la más mínima discusión;

Que dicho Código encierra disposiciones que han provocado fuertes censuras de parte de abogados, jueces y - agentes del Ministerio Público y que han alarmado a la - sociedad;

Que por estos motivos el Consejo de Gabinete ha considerado inaplazable una revisión concienzuda de la citada excerta así como de las consiguientes reformas que - aconseje esa revisión o indique si es preferible la vigencia del Código Penal anterior a la del nuevo".

La labor de la Comisión que se creaba por medio del Decreto 17 de 1923 tenía que circunscribirse a indicar al Ejecutivo "si es preferible poner en vigencia el Código Penal viejo o atenerse al nuevo e indicará el procedimiento que estime conveniente para corregir las deficiencias del Código nuevo, para lo cual cuenta con un término de cinco días hábiles contados desde que ella se instale" (4).

Como miembros de dicha Comisión fueron designados, en el propio Decreto, los señores Julio J. FABREGA, Osvaldo LOPEZ y Juan Demóstenes AROSEMENA. Actuó como Secretario de la comisión

José GUARDIA VEGA.

Luego de instalada, a pesar de la brevedad del término concedido y de la naturaleza de la función encomendada, la Comisión rindió el informe respectivo con fecha 23 de febrero de 1923.

En el "informe" en cuestión, remitido al Secretario (hoy Ministro) de Gobierno, la Comisión, entre otras consideraciones, señalaba lo siguiente:

"El término angustioso fijado para tan delicada labor, en atención a la urgencia del trabajo, no nos ha permitido hacer una verdadera y completa revisión de la excerta mencionada; pero hemos puesto el mayor empeño, con la eficaz cooperación del Secretario de la Comisión, señor José Guardia Vega en subsanar sus deficiencias más salientes y, sobre todo, en adaptarla a las condiciones del país de modo que no ofrezca dificultades en su aplicación, dados nuestros escasos medios para poner en práctica ciertas reformas que han dado excelentes resultados en países más avanzados pero que, entre nosotros, por razones del medio y de la falta de personal preparado para ponerlas en ejecución, podrían dar lugar a hondas perturbaciones en la administración de justicia.

"Entre las reformas a que nos referimos, las más importantes y de mayor trascendencia sin duda son la suspensión de las sentencias en los casos de primera delincuencia ocasionales (Art. 29 del Código) y la elasticidad de las penas, dejando en cada caso al Juez una gran diferencia entre el máximo y el mínimo de la sanción.

"La primera de las reformas apuntadas se practica - desde hace buen número de años en muchos grandes países, no ya de experimento, sino de institución por todos aceptada, y ha dado, como decimos arriba, excelentes resultados, sobre todo en los países anglo-sajones; pero para que tal reforma pueda operar satisfactoriamente, se requiere una organización de que nosotros no disponemos ni nos es dado improvisar.

"La otra reforma, la de la elasticidad de la pena,

que también ha pasado ya del estado experimental en muchas naciones y que en algunos países se ha llevado más lejos aún, con las condenas indeterminadas, tiende al ideal de la individualización del delito con el criterio subjetivo en que se funda, jueces no solo de alta probidad y hábiles juristas, sino profundos psicólogos que nosotros no tenemos ni podemos improvisar tampoco.

"A nuestro modo de ver y considerando las cosas no en abstracto, sino en relación con el medio y con nuestro estado cultural, ni la una ni la otra de esas bien intencionadas reformas son practicables en la República de Panamá, y por eso las hemos suprimido eliminando el artículo 29 del Código en revisión y reformado el sistema de aplicación de las penas en sentido más conforme con las condiciones del momento, o sea estableciendo tres grados para la clasificación de la delincuencia y haciendo depender ésta de la constatación de circunstancias agravantes y atenuantes que nos ha parecido bien fijar igualmente.

"Tales son los cambios de mayor importancia que nos parece conveniente introducir al Código Penal de 1922, aparte de algunas modificaciones de detalle que pasamos a expresar.

.....

"Concluida la labor de revisión, pensamos cristalizar nuestras recomendaciones en un proyecto de ley reformativo del Código; pero en definitiva hemos creído más conveniente presentar un nuevo proyecto de Código, que es, en sustancia, el mismo de 1922, con las modificaciones indicadas, pensando que así se facilita la consulta y aplicación de la ley. Al efecto, acompañamos a este informe dicho proyecto, recomendando encarecidamente al Poder Ejecutivo hacerlo publicar antes de someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional a fin de que, conocido oportunamente, pueda ser estudiado y modificado a su vez según se crea conveniente.

.....".

Aunque el informe completo aparece en el Diario "La Estrella de Panamá" de 24 de febrero de 1923, no tenemos conocimiento

de que el texto que se adjuntaba sobre nuevo proyecto de Código haya sido efectivamente editado por el Gobierno Nacional. Además, por otra parte es preciso anotar que no hay constancia de que el informe respectivo haya sido remitido a la Asamblea Nacional, al igual que el proyecto, para su consideración legislativa.

En todo caso, la labor antes descrita no parece haber tenido mayor fortuna, toda vez que mediante la Ley 5 de 1926 se creó una Comisión a la que se encargó la preparación de un proyecto de Código Penal y otro de Enjuiciamiento Penal (5).

Esta Ley 5 de 1926 creó una nueva Comisión, compuesta de tres miembros, a la que encargó la elaboración de los proyectos mencionados en el plazo de nueve meses, contados a partir del nombramiento de la Comisión en referencia.

De acuerdo con esa Ley la Comisión "oír la opinión de los Magistrados de la Corte, Juez Superior de la República, Jueces de Circuito en lo Criminal, Procurador General de la Nación, Fiscal del Juzgado Superior y Fiscales de Circuito, así como de todos los abogados y hombres notables del país" (6).

La ley comentada facultó al Ejecutivo para proceder a la reglamentación de la misma y a efectuar el nombramiento de los miembros de la Comisión Codificadora.

Publicada la Ley 5 de 1926 en 6 de octubre siguiente no fue, sin embargo, hasta el 16 de noviembre cuando se nombró la esperada Comisión Codificadora.

En efecto, mediante Decreto 212 de 1926 se nombró a los señores Antonio Papi AIZPURU, Honorio GONZALEZ GIL y Héctor VALDES como miembros de la Comisión aludida y se dispuso que empezara su labor el 20 de noviembre de ese mismo mes, debiendo reunirse, por lo menos, dos veces por semana (7).

Se estipuló que una vez terminadas sus labores la Comi-

sión debía presentar los proyectos encomendados, con los respectivos informes, al Ejecutivo quien luego los remitiría a la Asamblea Nacional para los trámites respectivos.

Vencido el plazo de nueve meses concedido por la Ley 5 de 1926, los trabajos no habían dado resultado positivo alguno, por lo que se prorrogó el plazo aludido mediante el Decreto 130 de 1927 (8).

A pesar de la prórroga concedida la Comisión creada por la Ley de 1926 no presentó los proyectos en el término que se le había prorrogado.

En 1928 Héctor VALDES, miembro de la Comisión en referencia, redactó y entregó, a título personal, un proyecto de Código Penal que fue editado por el Gobierno Nacional en ese mismo año (9).

La edición oficial de este "Proyecto" (10) carece de una "exposición de motivos" que explique las razones que justifican o fundamentan las directrices seguidas por su autor en la elaboración de dicho texto. Sobre este trabajo nos ocuparemos a continuación.

III. EL PROYECTO DE CODIGO PENAL DE 1928

A) INTRODUCCION

Luego de elaborado el proyecto por tanto tiempo esperado, mediante la Ley 132 de 1928 (11) se atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la revisión del texto elaborado por Héctor VALDES.

En esa ley se señaló que la Corte Suprema de Justicia podía introducirle al proyecto reformas y adiciones que estimase necesarias, "de acuerdo con nuestro medio y los adelantos de la ciencia penal" (12).

La labor encomendada a la Corte debía realizarse con prontitud, ya que en la misma ley se disponía que, de ser posible, el fruto de dicha revisión debía remitirse a la Asamblea Nacional - para que fuese considerado en las siguientes sesiones ordinarias de la cámara legislativa.

No hemos encontrado prueba alguna de que efectivamente la Corte Suprema de Justicia haya realizado el encargo asignado ni que la Asamblea Nacional, por su parte, haya llegado a discutir el Proyecto realizado por H: VALDES ni documento alguno que se fundamentara en él.

B) FUENTE Y CONTENIDO

Podemos señalar que el texto elaborado por Héctor VALDES sigue muy de cerca los lineamientos del Código Penal de 1922 vigente en aquél momento.

Esto es así, ya que tanto en el Libro I denominado "De la ley penal en general" como en el Libro II llamado "De los delitos y sus penas" se sigue casi sin modificación el orden de los títulos que integran el Código de 1922, aunque, es preciso anotar, que en muy contadas ocasiones se modifica la denominación - de algún título o se introducen uno nuevo.

Además de inspirarse en el Código Penal de 1922, el Proyecto de VALDES introduce al texto del Código de 1922 las modificaciones que en su oportunidad propusieron los miembros de la comisión que en 1923 revisó el Código Penal vigente y en no pocas ocasiones en su Proyecto introduce numerosos artículos del Código Penal de 1916 que sustituyen la regulación que traía el Código de 1922.

No está demás recordar que algunas de las modificaciones que le hizo VALDES al Código vigente al momento de redactar su propio proyecto procedían del mismo Código Penal de 1916, incor-

poradas a su vez por los miembros de la Comisión revisora del Código de 1922 al texto que proponían en 1923 para modificar aquél.

En cuanto al proyecto de H. VALDES podemos señalar que constaba de 542 artículos y dos disposiciones adicionales denominadas "disposiciones finales".

El Proyecto tenía dos libros: LIBRO PRIMERO denominado "De la ley penal en general" que estaba dividido de la siguiente forma: "De la vigencia y aplicación de la ley penal" (Título I); "De las penas" (Título II); "De la ejecución de las penas y sus consecuencias" (Título III); "De la responsabilidad penal y de las circunstancias que la excluyen" (Título IV); "Circunstancias atenuantes y agravantes, graduación de los delitos y aplicación de las penas" (Título V); "De la tentativa y del delito frustrado" (Título VI); "De la cooperación de varios individuos en la comisión de un mismo hecho punible" (Título VII); "De la concurrencia de hechos punibles ejecutados por un mismo individuo" (Título VIII); "De la reincidencia" (Título IX); "De la extinción de la acción y de la condena penales" (Título X); LIBRO SEGUNDO con el título "De los delitos y sus penas", "Delitos contra los poderes públicos" (Título II); "De los delitos contra los jefes y representantes de los gobiernos extranjeros" (Título III); "Disposiciones comunes a los títulos anteriores" (Título IV); "De los delitos contra la libertad" (Título V); "De los delitos contra las cosas públicas" (Título VI); "De los delitos contra la administración de justicia" (Título VII); "De los delitos contra el orden público" (Título VIII); "Delitos contra la fe pública" (Título IX); "De los delitos contra la conservación de los intereses públicos o privados" (Título X); "Delitos contra la honestidad" (Título XI); "Delitos contra la vida" (Título XII) "Delitos contra el honor" (Título XIII) y, finalmente, "Delitos contra la

propiedad" (Título XIV).

C) PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CODIGO PENAL DE 1922

El Proyecto de 1928 presenta una serie de "innovaciones" concretas respecto al Código de 1922 y, además, "prescinde" de diversas disposiciones del mismo Código, que implican una transformación importante de éste aunque no sea por ello un Código nuevo ni radicalmente distinto del texto de 1922.

Si bien se reconoce, en términos idénticos al Código vigente, el principio de legalidad de los delitos y penas (13), en el proyecto se declara expresamente prohibida la imposición de penas por analogía (14).

A diferencia del Código de 1922, nada señala el proyecto sobre los delitos de contrabando, defraudación fiscal y electorales ni de las inmunidades reconocidas en el Derecho Internacional que excluyen a ciertas personas del ámbito territorial de validez de la ley penal panameña (15).

Aunque las penas principales son iguales en ambos textos (16), se elimina la sujeción a la vigilancia de las autoridades como pena accesoria.

Al igual que en el "informe" de 1923 sobre la revisión del Código Penal de 1922, el proyecto de 1928 elimina del Código vigente la suspensión condicional de la ejecución de la pena (17).

Respecto del lugar en donde deben cumplirse las diversas penas privativas de libertad, a diferencia del Código vigente, se establece en el proyecto con toda exactitud el lugar donde debían cumplirse dichas penas, siempre de acuerdo con la naturaleza de la pena respectiva y su duración (18).

En cuanto a los condenados que contrajeran una enfermedad mental o estado análogo, se disponía su conducción a un esta

blecimiento hospitalario por todo el tiempo necesario; asimismo, se disponía que no podía ejecutarse pena alguna en la persona - del condenado que se hallare en grave peligro de muerte o se le hubiere muerto ascendiente, descendiente o cónyuge, sino pasados nueve días del hecho (19).

Aunque el proyecto no describe las conductas punibles a título de "falta", dispone que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta (20).

El proyecto señalaba la presunción de voluntariedad de las acciones u omisiones penadas en la ley (21), pero eliminaba las disposiciones del Código de 1922 sobre la embriaguez y el cumplimiento de la ley (22).

Si bien el Código de 1922 mantenía en un texto confuso la fundamentación de los delitos culposos, en el proyecto de 1928 esta disposición desaparece, Ello no obstante, mantiene el criterio del numerus clausus a este respecto (23).

Totalmente nuevas son las disposiciones que contienen un amplio catálogo de circunstancias atenuantes (24) y circunstancias agravantes (25). Por ello resultaba fuera de ubicación la atenuante de haber actuado por razón de un impulso de ira que aparecía en un título anterior (26).

Establece este proyecto tres diversos grados para la aplicación de las penas (27) y las penas respectivas de acuerdo con el grado en que se califique el hecho punible (28).

Además de las conocidas figuras de tentativa y frustración ya existentes en el Código Penal de 1922, el proyecto introduce la figura del "delito imposible" con un criterio totalmente subjetivo (29).

Respecto de la reincidencia, es preciso anotar que varía el régimen de sanciones previstas para el reincidente y los pre-

supuestos de la reincidencia específica (30).

Se declara que la responsabilidad penal se extingue por el cumplimiento de la condena respectiva y se reducen los indultos a los supuestos de delitos políticos (31).

Por lo que se refiere a los "delitos y sus penas" es preciso señalar que el Proyecto de 1928 adopta el sistema de describir las conductas punibles y luego señalar únicamente el límite máximo de la condena que puede imponerse, pero nada señala respecto del límite mínimo. En este aspecto el proyecto se aparta considerablemente del "informe de 1923" que propugnaba por reducir el margen de discrecionalidad concedido a los jueces al establecer una gran diferencia entre el mínimo y el máximo de una pena.

El casuismo del proyecto es tremendo ya que utiliza el método de describir las conductas punibles y en numerosos casos a continuación enumera hasta dieciseis supuestos distintos en los que se incurre también en responsabilidad por el delito descrito con anterioridad.

En la descripción de las figuras típicas el proyecto copia textualmente, intercalados entre sí, artículos que vienen del Código de 1916 o del código de 1922, con lo que da como resultado un texto híbrido con influencias tanto española como italiana (32).

Modifica el proyecto la denominación de algunos títulos previstos en el Código de 1922, tales como los delitos contra la seguridad de la nación (33), los delitos contra los poderes públicos (34), los delitos contra la conservación de los intereses públicos y privados (35), los delitos contra la honestidad (36), los delitos contra la vida (37) y, era nuevo, formalmente, al menos, el título sobre delitos contra el honor (38).

En el proyecto se equiparaba al delito de traición al pán

nameño que ejecutaba un acto contra la conservación, el servicio y la protección del Canal de Panamá (39), aunque esa fecha dicho canal estaba bajo la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos toda vez que el territorio de la llamada "Zona del Canal" estaba fuera de la jurisdicción panameña.

Entre las principales modificaciones existentes en las diversas figuras delictivas previstas en el Libro II es preciso señalar que el delito de homicidio incluía en el mismo capítulo la regulación del aborto, que dejaba de estar regulado en un capítulo propio.

Se distinguía a propósito de los delitos contra la vida humana independiente las figuras de parricidio, asesinato y homicidio propiamente tal (40), además de mantenerse las otras figuras contenidas en el Código de 1922 (41).

Respecto del aborto el proyecto declara impune la tentativa de aborto de una mujer soltera, cuando fuera la primera preñez de la mujer, y, además, consagraba la exención de pena en algún supuesto muy concreto (42).

Desapareció en el proyecto la disposición que consagraba una "excusa absolutoria" a favor del marido que causaba la muerte de su mujer sorprendida en adulterio y la sustituyó por una atenuación de pena (43).

En lo que respecta a los delitos contra la propiedad, se establecía en el hurto y la estafa, abuso de confianza y otros fraudes el criterio de fijar la sanción de acuerdo con el valor de la cosa objeto material del delito (44).

Además, más criticable era que la pena prevista para el robo se podía aumentar más allá de lo establecido en la figura respectiva al añadir a dicha pena cuatro meses adicionales de reclusión por cada veinticinco balboas del valor del objeto mate-

rial del delito (45).

D) CONSIDERACION FINAL

Si bien es cierto que este proyecto no llegó nunca a ser discutido en la Asamblea Nacional, las razones que fundamentan dicha situación son hasta la fecha desconocidas con exactitud.

El proyecto de 1928 no mejoró la situación existente en aquella fecha y, por el contrario, por el método utilizado en su elaboración, contribuyó a hacer más confusa la situación.

Este proyecto es una buena muestra de lo que no puede hacerse en una seria labor de codificación: copiar indiscriminadamente artículos de textos dispares entre sí sin ningún criterio científico.

Además, se corre el peligro de no efectuar una adecuada "depuración" de los textos importados al trabajo que se efectúa, pues en ocasiones se olvidan los que ello hacen que hay que modificar la denominación de las penas de los textos incorporados al propio trabajo, de modo que concuerden las penas de los delitos traídos de otros textos con las penas previstas en la propia labor desarrollada.

En este sentido, por ejemplo, es inconcebible que se señale como pena en el art. 411, que regula el asesinato, la de "presidio" cuando dicha pena no figura en el catálogo de penas previstas en el art. 19 del propio proyecto realizado por Héctor VALDES.

A nuestro juicio, aunque este proyecto contenía algunas disposiciones claramente mejores que las contenidas en el Código Penal de 1922, son más los aspectos que lo empeoraban que los que le beneficiaban.

Por otra parte, nos resta señalar que el proyecto acentúa considerablemente el margen de discrecionalidad concedido al juzgador a pesar de que contra ese margen había reaccionado la socie

dad panameña al ser aprobado el Código en 1922 (46).

IV. EL PROYECTO REVISADO DE 1943

Sobre el Proyecto revisado de Código Penal de 1943 es muy poco lo que en Panamá se conoce.

Los profesores MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ señalan que fueron designados en 1943 los señores Emilio GONZALE LOPEZ, Ricardo A. MORALES y Alejandro TAPIA para que revisaran un proyecto de Código Penal que había sido presentado al Gobierno Nacional para su consideración por la Comisión Codificadora (47).

La labor de las personas señaladas se limitó a efectuar una revisión del proyecto ya elaborado por una Comisión previa. No fueron, en consecuencia, los autores del proyecto sometido a su consideración.

Hoy día desconocemos a ciencia cierta la paternidad del Proyecto que luego fue sometido a revisión en 1943 y demás detalles relacionados con dicho proyecto.

Es posible que sea el Dr. Juan LOMBARDI -autor del proyecto que luego fue el Código de 1922- el autor del proyecto en cuestión, toda vez que a él se le encomendó en 1941 la redacción de un nuevo proyecto de Código Penal (48), pero al respecto no hay ninguna seguridad.

En la actualidad no podemos precisar si LOMBARDI concluyó la labor encomendada ni si el proyecto revisado en 1943 sea el - que elaboró LOMBARDI, en el caso de que efectivamente haya confeccionado un proyecto.

La imposibilidad de poder contar con actas, archivos y documentos que expliquen lo sucedido dificulta sobremanera efectuar una reconstrucción de nuestra tradición legislativa (49).

Respecto del texto revisado en 1943 JIMENEZ DE ASUA señala que "Este Proyecto no está a la altura que la época exige. La ausencia de medidas de seguridad, el casuismo en la aplicación de la pena y el enunciado taxativo de atenuantes y agravantes copiado del Código español, denuncia su vieja tendencia, aunque - técnicamente sea estimable y haya mejorado mucho el texto del Código vigente en Panamá" (50).

Por su parte QUINTANO RIPOLLES señala que "Es ciertamente más científico que el vigente, lo que no es decir demasiado, pero persiste, quizá aún con mayor fidelidad, y desde luego con mayor acierto, en la línea general del clasicismo hispánico"(51).

El Proyecto revisado por la Comisión antes señalada fue remitido a la Asamblea Nacional en 1943, pero no fue sometido a discusión ni se aprobó jamás (52)

A pesar de nuestros esfuerzos realizados desde 1975, no hemos podido obtener nunca un ejemplar de este documento. Ni en el Archivo Nacional de Panamá, ni en los archivos del Ministerio de Gobierno y Justicia, en la Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Universidad de Panamá o de la Facultad de Derecho existe un ejemplar de dicho proyecto de 1943.

Por otra parte, ninguno de los destacados abogados que para esa fecha ejercían la profesión o desempeñaban cargos en la administración de justicia tienen un ejemplar del proyecto en cuestión ni conocen de alguien que pueda saber algo al respecto.

Muy ciertas y lacerantes son para nosotros las palabras de CASABO RUIZ en el Derecho español cuando señala que "La mayor dificultad que encuentra el penalista español en su tarea por estructurar científicamente el Derecho propio, es la falta de fuentes sobre su origen y evolución más inmediatos, Generalmente debe conformarse con los textos legales y la doctrina de los comen

taristas, pero no tiene fácil acceso a otras fuentes de información tan valiosa como los proyectos que se han elaborado o los trabajos preparatorios de las comisiones codificadoras, tanto - por la dificultad de encontrar tales documentos, como por tratarse en su mayor parte de manuscritos o de impresos con muy escasa difusión" (53).

Resulta triste y ensombrecedor reconocer que, a menos de 40 años de la revisión del proyecto y su remisión a la Asamblea Nacional de 1943, no haya rastro alguno de dicho trabajo.

V. EL PROYECTO DE 1952

A) INTRODUCCION

En vista de que el Proyecto revisado en 1943 por Emilio GONZALEZ LOPEZ, Ricardo A. MORALES y Alejandro A. TAPIA no tuvo acogida en el seno de la Asamblea Nacional se creó en 1944 una nueva Comisión Codificadora (54).

Esta Comisión quedó integrada por personas de reconocida capacidad, servidoras todas del Estado, a fin de evitar los gastos en que se incurriría si fueren designados particulares especialmente contratados (55).

El fracaso de la Comisión antes mencionada obligó al Ejecutivo a reorganizar en 1947 la referida Comisión a la que se le concedió un plazo de cinco meses para realizar su labor (56).

Como el tiempo transcurría y no se presentaba el proyecto de nuevo Código la Asamblea Nacional designó en 1950 una nueva Comisión encargada de elaborar el proyecto en cuestión (57). Esta Comisión Codificadora fue la más numerosa que hasta esa fecha se había designado.

Del trabajo de dicha Comisión es el Proyecto de Código

Penal de diciembre de 1952 y del que son autores los señores Manuel A. HERRERA LARA, Dámaso A. CERVERA, M.A. GRIMALDO, José Dolores MOSCOTE y Benito REYES TESTA.

El Proyecto aludido tuvo escasa difusión a pesar que introducía, a diferencia del Código de 1922 y del proyecto de 1943, un incipiente sistema de medidas de seguridad y regulaba con mayor amplitud la suspensión de la ejecución de la pena.

B) FUENTES DEL PROYECTO DE 1952

Muy poco es lo que con seguridad sabemos de este Proyecto de 1952. Carece de una exposición de motivos y no se publicaron las actas, si las hubieron, de las discusiones de los miembros de la Comisión Codificadora.

Su estructura se diferencia de los Códigos de 1916 y 1922, aunque las materias que contiene el Código de 1922 las mantiene, casi en el mismo orden, aunque con modificaciones y adiciones - que no sabemos de donde provienen.

Este proyecto difiere sustancialmente del proyecto de - Héctor VALDES de 1928, toda vez que regula ampliamente la suspensión de la ejecución de la pena, fija límites mínimos y máximos en todas las penas señaladas en el Libro II y consagra medidas de seguridad.

Si hay alguna influencia del Proyecto de 1943, por las razones ya apuntadas en este mismo capítulo, este extremo no ha podido ser determinado.

Todo lo anteriormente expuesto no significa que el proyecto comentado sea toda una innovación en nuestro país, ya que en términos generales sigue los lineamientos del Código Penal de 1922 con alguna modificación tomada del Código de 1916.

En algunas cuestiones este Proyecto se aparta de los Có-

digos y proyectos anteriores, toda vez que, por ejemplo, respecto de las medidas de seguridad no hemos encontrado antecedentes en nuestra legislación.

C) CONTENIDO

El Proyecto de Código Penal de 1952 contaba de 470 artículos distribuidos en un título preliminar y dos libros. Como en todos los textos anteriores, no regulaba las "faltas" que continuaban en el Código Administrativo:

En el TITULO PRELIMINAR estaba la regulación "De la ley penal en general": "Aplicación y alcance de las leyes penales" (Capítulo I) y "De la extradición" (Capítulo II); el LIBRO PRIMERO Trataba "Del delito y de las sanciones en general": "Del delito" (Título I) y "De las penas" (Título II); el LIBRO SEGUNDO versaba "De los delitos en particular": "De los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado" (Título I); "De los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional" (Título II); "De los delitos contra Jefes y representantes de naciones extranjeras" (Título III); "De los delitos contra los funcionarios públicos" (Título IV); "De los delitos contra la administración pública" (Título V); "De los delitos contra la administración de justicia" (Título VI); "De los delitos contra la honestidad y el orden de la familia" (Título VII); "De los delitos contra la integridad moral" (Título VIII); "De los delitos contra las personas" (Título IX); "De los delitos contra la fe pública" (Título X); "De los delitos contra la seguridad pública" (Título XI); "De los delitos contra la libertad individual" (Título XII); "De los delitos contra la propiedad" (Título XIII); "Delitos contra la economía nacional" (Título XIV) y "Disposiciones finales" (Título XV).

En el título final se disponía que el Código entraría a regir a los noventa días de su publicación (58) y, además, que quedaban derogadas a partir de ese momento todas las leyes especiales vigentes, ya que en el Proyecto se incorporaban al texto todas las existentes para aquel momento (59).

Se recogía el principio de legalidad (60) y se declaraba terminantemente prohibida aplicar penas por analogía (61). El proyecto reconocía la retroactividad de la ley penal favorable, aunque el condenado estuviere cumpliendo la pena respectiva (62).

Respecto al ámbito de aplicación de la ley penal panameña señalaba que regía en todo el territorio nacional y establecía que debía entenderse por "territorio nacional" (63). Quedaban exceptuados de la aplicación del proyecto los delitos de contrabando, defraudación fiscal y electorales (64).

El proyecto remitía la regulación de la extradición a lo dispuesto en los tratados internacionales y prohibía la extradición de los nacionales en términos generales y la de los extranjeros por delitos "político-sociales" (65).

Por lo que respecta al concepto de delito, se establece la distinción entre delitos doloso y delito culposo (66) y las distintas formas de ejecución tales como la tentativa, frustración, desistimiento de la consumación y delito imposible (67).

Declaraba exentos de responsabilidad penal tanto al enajenado mental o al intoxicado (68) como a los menores de dieciocho años (69). Además, se reconocía la exención de la responsabilidad penal en casos de fuerza irresistible, obediencia jerárquica, mero accidente con motivo de acciones u omisiones lícitas, cumplimiento de la ley o ejercicio legítimo de un derecho, legítima defensa y estado de necesidad (70).

El proyecto contenía un amplio catálogo de circunstan-

cias de mayor o menor peligrosidad (71) y permitía el reconocimiento de cualesquiera otra atenuantes análogas a las expresamente aceptadas (72).

A propósito del concurso de delitos consagraba la figura del delito continuado (73), concurso ideal (74) y concurso material (75). La reincidencia suponía una agravación de pena para el sujeto y la relegación del mismo a una colonia agrícola penal según criterios tanto objetivos como subjetivos (76).

Las penas se dividían en principales (77) y accesorias (78). Aquellas eran, reclusión, prisión, confinamiento, multa o interdicción; éstas eran a su vez, interdicción, suspensión del ejercicio de un arte, profesión o industria, expulsión del territorio nacional para los extranjeros, suspensión en el ejercicio del empleo, cargo público o pérdida del mismo, multa, comiso y sujeción a la vigilancia de las autoridades.

El máximo de la reclusión por un solo delito era de veinte años y dieciocho años en el caso de prisión (79), pero en caso de varios delitos el máximo de condena establecido era de treinta años (80).

Se consagraban algunas disposiciones sobre la responsabilidad civil derivada del delito, aunque la exigencia de la misma se regía por lo dispuesto en el Código Judicial que remitía a la jurisdicción civil (81).

Con respecto a las medidas de seguridad se distinguía entre medidas aplicables a los mayores de 18 años de las previstas para los menores de tal edad (82). Para aquellos se establecía la internación en un manicomio o casa de salud, la prohibición de asistir a cantinas y lugares públicos de diversión y la libertad vigilada; para éstos, no obstante haber declarado el Proyecto antes que quedaban fuera de la aplicación del mismo (83), la

internación en una escuela de trabajo o en un reformatorio adecuado, la prohibición de aistir a cantinas y lugares públicos de diversión, la libertad vigilada y el trabajo en obras y empresas públicas.

Las medidas de seguridad aludidas se imponían por tiempo indeterminado (84) y, aunque fueren revocadas por el tribunal, si se apreciaba nuevamente la peligrosidad del sujeto a quien se le había dejado sin efecto una medida antes aplicada, se podía revocar dicha orden y volverla a imponer nuevamente al sujeto peligroso (85).

Procedía la suspensión de la pena si ésta era de prisión y no excedía de dos años, siempre que el sujeto hubiere demostrado buena conducta anterior y no fuese peligroso para la sociedad (86).

D) PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CODIGO PENAL DE 1922

Las principales diferencias existentes en este proyecto de 1952 respecto del Código Penal de 1922, todavía hoy vigente, podemos abordarlas en dos aspectos: diferencias de carácter fundamental e innovaciones en la descripción de las figuras delictivas.

Respecto a las diferencias de carácter fundamental podemos señalar cuestiones tanto formales como sustanciales.

Entre las cuestiones formales, la inclusión en un título preliminar de lo relacionado con la vigencia y aplicación de la ley penal y la estructuración del libro primero en dos títulos, dedicados, respectivamente, a la teoría del delito uno, y a la teoría de la pena el otro, implican una modificación total del sistema que se ha utilizado en los códigos anteriores e, incluso, en el Proyecto de 1928.

Como cuestiones sustanciales en el libro primero debemos anotar la regulación de un sistema de medidas de seguridad, en el título relativo a las penas, y la incorporación de una amplia regulación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que en el Código de 1922 apenas tenía una acogida muy reducida (87).

Por lo que respecta a las innovaciones en la configuración de las conductas típicas, se incorporan al proyecto las disposiciones que sobre drogas, calumnia e injuria, contagio venéreo, cheques sin fondo, seguridad pública y usura se encontraban en leyes especiales (88).

El proyecto dedica especial consideración a los "delitos contra la economía nacional" que por primera vez se incriminan en nuestra legislación, si bien haya sido notoriamente deficiente la regulación efectuada (89).

Mención aparte merecen las disposiciones que sobre homicidio piadoso (90), homicidio consentido (91) y la punición de la inducción al suicidio no consumado (92) que no debieran existir, toda vez que aquellos consagran figuras privilegiadas que pugnan con la protección de toda vida humana y el último sanciona una inducción que no produce ningún resultado lesivo (93).

E) CONSIDERACION FINAL

Una valoración de conjunto del proyecto de 1952 nos obliga a reconocer que no supone, salvo lo relacionado con la suspensión de la ejecución de la pena, una mejora sustancial de nuestro ordenamiento penal a pesar de que, además, de la pena, consagra un sistema de medidas de seguridad como reacción ante el delito.

En cuanto a los delitos en particular, previstos en el

libro segundo, es preciso señalar que el proyecto adolece de un tremendo casuismo en la descripción de las figuras típicas.

Ademas, utiliza el sistema de crear a propósito de numerosos delitos una serie de agravantes específicas en donde se incluyen una gran cantidad de circunstancias que determinan un aumento de pena para el sujeto infractor.

Por otra parte, fuera de estos defectos político-criminal, es preciso señalar la gran cantidad de errores "técnicos" en la redacción del libro segundo. Así, por ejemplo, se menciona a propósito de las multas previstas en algunos delitos la moneda "pesos" que no existe en Panamá (94).

De la misma manera, repetidamente, se incurre en el error de señalar como penas privativas de libertad para algunos delitos tanto la pena de "presidio" (95) como la de arresto (96) que no aparecen en el catálogo de penas que el proyecto trae.

Sin duda los autores de este proyecto pasaron por alto cambiar la denominación de "pesos" o la alusión a "presidio" y "arresto" que venía en los textos que utilizaron como modelos (97).

Por último, resulta sumamente criticable que en algunos delitos contra la propiedad se utilice como criterio para fijar la pena el valor progresivo de la cosa objeto material del delito, como sucede en el robo, hurto y estafa.

En el hurto, por ejemplo, se llega a establecer como pena un año de privación de libertad por cada mil balboas del valor de la cosa hurtada (98), en el robo, se aumenta de diez a veinte meses de privación de libertad por cada mil balboas del valor de la cosa robada (99); y, en la estafa, se señalan seis meses de reclusión por cada mil balboas de valor de la cosa estafada (100), sin que en ningún caso la pena así resultante pueda

exceder del máximo previsto para cada especie de pena.

Este criterio permitía, en consecuencia, llegar en estos delitos hasta veinte años de reclusión por un delito en donde la culpabilidad del sujeto no juega ningún papel, puesto que la pena se determina desde un plano objetivo (101).

VI. EL ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL DE 1970

A INTRODUCCION

A casi seis meses de instalado el gobierno militar que el 11 de octubre de 1968 había derrocado al Presidente de la República, la Junta Provisional de Gobierno (102) y los miembros del Gabinete, que de acuerdo con las normas jurídicas impuestas a consecuencia del levantamiento militar, ejercían las facultades legislativas al haber disuelto la Asamblea Nacional, dictó - el Decreto de Gabinete 121 de 1969 (103), por medio del cual se creaba la "Comisión Codificadora Nacional" y se ordenaba, asimismo, la elaboración de los anteproyectos de códigos penal, civil, judicial y administrativo.

Como plazo fijado para la entrega de los anteproyectos se estableció en el citado Decreto de Gabinete el término de siete meses.

Antes de que dicho plazo venciera, sin embargo, mediante el Decreto de Gabinete 349 de 1969 se extendió el término original de siete a diez meses para la presentación de los anteproyectos (104).

Para la confección del anteproyecto de Código Penal se contrató al Licenciado Aristides ROYO, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Panamá (105), con un salario mensual de mil quinientos balboas.

La Comisión Codificadora designada empezó sus labores el 16 de marzo de 1969 y dentro del plazo de diez meses Aristides ROYO presentó su anteproyecto de Código Penal, que fue entregado al Gobierno Nacional el 5 de marzo de 1970 (106).

En casi diez meses de trabajo unipersonal ROYO concluyó el encargo que se le había efectuado y presentó un anteproyecto de 476 artículos, precedido de una "Declaración Preliminar" y una "Exposición de Motivos", todo ello en una edición "mimeografiada" que circuló en forma reducida.

A pesar de que en el Decreto de Gabinete 121 de 1969 se ordenaba la elaboración de "anteproyectos" ROYO denominó a su trabajo como "Proyecto de Código Penal" y así ha seguido circulando.

Con toda razón ha dicho la profesora GUERRA DE VILLALAZ que la "divulgación de este proyecto, como la de los anteriores, ha sido muy limitada; en este caso, su área de difusión se extiende al número de ejemplares distribuidos por el autor" (107).

Durante el período comprendido entre el momento de su elaboración hasta el año de 1973 casi nada se escribió sobre este anteproyecto (108). En gran parte ello se debió, como anota CEVILLE (109), al momento político que vivía el país debido a la reforma constitucional que culminó en octubre de 1972.

De esta época son unas breves observaciones formuladas por el Dr. Jaime O. DE LEON, Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y por el Licenciado A. HERRERA, Magistrado del 2º Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que aparecieron en diarios de la ciudad de Panamá.

No fue hasta 1974 cuando se efectuó la primera edición en una imprenta del anteproyecto de Aristides ROYO. Dicha publicación, bajo el título de "Anteproyecto de Código Penal. Panamá,

1974" se editó en la Imprenta de la Universidad de Panamá.

Una edición posterior se efectuó en 1975 en la imprenta del "Centro de Impresión Educativa" bajo el título de "Código Penal (Proyecto)", sin que en ninguna de dichas ediciones el texto de marzo de 1970 sufriera modificación alguna.

B) FUENTES DEL ANTEPROYECTO

1. Generalidades

Como bien señala el propio autor del anteproyecto, su texto sigue muy de cerca la "Declaración de Principios" que ya antes orientaba los trabajos de la Comisión Redactora de un Código Penal Tipo para Latinoamérica (110).

Las ideas fundamentales del Proyecto de Código Penal Tipo fueron expuestas por el profesor Eduardo NOVOA MONREAL ante el directorio del Instituto de Ciencias Penales del Chile, a cuyo cargo quedó la responsabilidad de hacer cuanto fuera necesario para la realización de esta trascendental obra (111).

Para la época en que ROYO realizaba la labor a él encomendada paralelamente se desarrollaba el trabajo de la Comisión Redactora del Código Tipo que ya había efectuado diversas reuniones en distintas ciudades de América Latina, aunque la aprobación final del texto de la "parte general" no se produjo sino hasta la reunión de 1971 que se realizó en Sao Paulo, Brasil (112).

El texto de la "Declaración de Principios" del Código Tipo que sirvió de base al trabajo de Aristides ROYO es el siguiente (113):

- I. Nadie puede ser condenado en razón de un hecho que no haya sido previamente declarado punible por la ley.
- II. Nadie puede ser condenado a penas que no hayan sido expresamente conminadas por ley anterior al hecho cometido.

- III. Nadie puede ser condenado por disposiciones que no tengan el carácter formal de leyes previas.
- IV. Las leyes penales deben describir hechos punibles de manera precisa e inequívoca, sin dejar dudas sobre su prohibición. En ningún caso se podrán configurar hechos punibles o imponer penas por aplicación analógica de la ley penal.
- V. Las leyes penales se aplican por igual a todas las personas, sin discriminación alguna.
- VI. No hay delito sin culpabilidad. Las leyes penales deberán proscribir toda forma de responsabilidad objetiva.
- VII. La responsabilidad es estrictamente personal. Las medidas de seguridad sólo pueden ser aplicadas a quienes reúnan las condiciones previstas en la ley penal.
- VIII. Nadie puede ser condenado sino en virtud del debido proceso legal previo, seguido ante Tribunal competente y constituido de modo regular. La defensa libre es condición indispensable para el debido proceso. En ningún caso se admitirá el juzgamiento por tribunales de excepción.
- IX. La persona juzgada regular y definitivamente no podrá serlo de nuevo por el mismo hecho.
- X. La persona sometida a proceso penal se presume inocente - mientras no sea condenada.

Sin lugar a dudas esta "Declaración" persigue encuadrar la tarea del legislador dentro de unos límites democráticos, pues se trata de principios universales del Derecho, no siempre acatados en la actualidad, que han inspirado las modernas codificaciones penales respetuosas de un verdadero Estado de Derecho.

No se crea, sin embargo, que el anteproyecto de Aristides ROYO tiene como fuente de inspiración única y directamente el Código Penal Tipo, pues como señala FABREGA el autor del anteproyecto "procura escoger las tendencias actuales que prevalecen en Europa y América Latina, así como con otros matices, en algu-

nos países socialistas, tales como a los códigos de Yugoslavia y Bulgaria (1951), Checoslovaquia (1956-1961)" (114).

Además de los textos citados el propio ROYO en su "exposición de motivos" menciona como fuente de su anteproyecto, en forma frecuente, los trabajos de Sebastián SOLER para Guatemala (115), Luis JIMENEZ DE ASUA para Venezuela (116) y Guillermo PADILLA CASTRO para Costa Rica (117).

Otros autores mencionados alguna vez por ROYO son MANZINI (118), Antonio Vicente ARENAS de Colombia (119) y FONTAN BALESTRA de Argentina (120).

También son mencionados en la "exposición de motivos" del anteproyecto los códigos de Argentina (121), España (122), Cuba (123), Grecia (124), Italia 1889 y 1930 (125), Perú (126) y Francia (1810), así como los proyectos de PECO para Argentina (128) y el alemán de 1956 (129).

2. El Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica

El proyecto de Código Penal Tipo, cuya "parte general" estaba prácticamente elaborada para 1970 constituye la fuente directa y principal del articulado del Libro I del anteproyecto de 1970. En menor medida son fuentes los otros textos y autores citados.

No es nuestra intención efectuar un estudio detallado - del Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica, aunque nos interesa destacar algunas de sus características más sobresalientes.

En general, sobre su génesis pueden confrontarse los volúmenes editados bajo la dirección de Francisco GRISOLIA que, además del texto en español trae la versión del mismo en portugués, contiene una cronología de las distintas reuniones plenarias -

efectuadas por la Comisión Redactora del Código, proyectos de las diversas "comisiones" nacionales, observaciones a dichos proyectos, actas, etc. (130).

La "parte general" del Código Penal Tipo consta de 110 artículos y está dividida de la siguiente forma: TITULO I, APLICACION DE LA LEY PENAL: Capítulo I, "Aplicación de la ley penal en el espacio"; Capítulo II, "Aplicación de la ley penal en el tiempo"; Capítulo III, "Aplicación de la ley penal a las personas"; TITULO II, EL DELITO: Sección A, Capítulo I, "Forma, tiempo y lugar del hecho punible"; Capítulo II, "Causas de justificación"; Capítulo III, "Imputabilidad"; Capítulo IV, "Culpabilidad"; Sección B, Capítulo Unico, "Autores y partícipes"; Sección C, Capítulo Unico, "Tentativa"; TITULO III, LAS SANCIONES: Sección A, Capítulo Unico, "Las penas y sus clases"; Sección B, Capítulo Unico, "Medidas de seguridad"; Sección C, Capítulo I, "Unidad y pluralidad de hechos y de delitos"; Capítulo II, "Reincidencia, habitualidad y profesionalidad"; Capítulo III, "Individualización judicial de la pena"; Capítulo IV, "Condena de ejecución condicional"; Capítulo V, "Conversión de las sanciones"; Capítulo VI, "Libertad condicional"; Capítulo VII, "Rehabilitación"; TITULO IV, RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO; TITULO V, EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA.

El proyecto acoge al principio de la territorialidad de la ley penal, aunque permite su aplicación a ciertos hechos ocurridos en el extranjero (131); reconoce la retroactividad de la ley favorable al reo (132) y establece excepciones personales a su aplicación (133).

Por lo que respecta al delito, el Código Penal Tipo señala que el hecho punible puede ser realizado tanto por acción como por omisión (134) y admite la posibilidad de la "comisión por

omisión" (135). Consagra, además, disposiciones sobre el lugar (136) y el tiempo (137) de la realización del hecho punible.

Entre las causas de justificación menciona el cumplimiento de la ley (138), el ejercicio legítimo de un derecho (139), la legítima defensa (140) y el estado de necesidad (141). El "exceso" del sujeto produce una atenuación de pena en los casos anteriores (142), a menos que sea debido a una excitación o perturbación que las circunstancias hiciere excusable (143).

La enfermedad mental, el desarrollo psíquico incompleto o retardado o la grave perturbación de la conciencia hacen al sujeto inimputable, siendo sometido, en consecuencia, a una medida de seguridad de carácter curativo (144); si las causas anteriores no lo fueren plenamente, es decir, que no priven al sujeto de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho realizado o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, la pena se atenúa considerablemente (145), pero si el agente se coloca - en dicho estado para realizar el hecho punible o procurarse una excusa, la pena podrá ser aumentada por el juzgador (146).

Lo antes dispuesto se aplica en toda su extensión a la embriaguez, si ésta fuere fortuita o accidental, o si fuere intencional, imprudente o para facilitar la comisión del hecho o procurarse de una excusa. (147).

La menor edad también constituye una causa de inimputabilidad, aunque el Código Tipo no señala el límite cronológico respectivo (148).

A propósito de la culpabilidad, se señala que todo hecho punible se atribuye al sujeto como realizado dolosamente, salvo los casos de culpa que se señalan expresamente como figuras punibles (149); en los casos de delitos cualificados por el resultado se exige que el sujeto, por lo menos, haya actuado imprudentemen

te (150).

Además de definir las nociones de dolo y culpa (151), el Código Tipo establece que constituyen causas de exclusión de la culpabilidad el error (152), sea sobre el tipo o sobre la prohibición, el estado de necesidad (153), la coacción moral (154) y la obediencia jerárquica (155).

Respecto a la pluralidad de personas, consagra las nociones de autor y coautor (156), instigador (157), complicidad necesaria (158) y complicidad secundaria (159). Para las tres primeras señala la pena prevista para el delito, mientras que para la última una pena no menor de la mitad del mínimo ni más de la mitad del máximo de la pena prevista para el delito respectivo.

Consagra la figura de la tentativa (160), el desistimiento voluntario de la consumación (161) y la no punición de la tentativa cuando fuere imposible la respectiva consumación (162). Nada dispone acerca del delito frustrado.

Por lo que se refiere a las sanciones penales, acoge el sistema dualista de penas y medidas de seguridad (163).

Las penas se dividen en principales y accesorias (164). Como penas principales se mencionan únicamente la prisión y la multa; como accesorias, la inhabilitación absoluta o especial, aunque se permitía que se les aplicara como principales al describir las diversas conductas típicas (165)

El límite máximo de la pena de prisión era de 25 años y la inhabilitación podía llegar hasta 15 años (166).

Para la determinación de la cuantía de la pena de multa se utiliza el criterio de "días-multa", entendiéndose por tal al que sea equivalente a la entrada diaria del sancionado, según una serie de aspectos que deben ser tomados en consideración por el juzgador (167).

El máximo de la cuantía de la pena de multa se fija en 500 días-multa, siendo posible el pago fraccionado de la misma; en caso de impago de la multa, procede la prisión sustitutiva por un término que no puede exceder de un año (168).

La pena de inhabilitación implica la pérdida de todo cargo público, incapacidad de obtenerlos, pérdida de derechos políticos y la incapacidad de ejercer la tutela, curatela o patria potestad, si fuere absoluta (169), o, alguno de estos derechos, si fuere especial (170).

En lo que respecta a las medidas de seguridad, éstas pueden ser curativas, de internación y de vigilancia (171), teniendo cada una sus peculiaridades que la justifican y diferencian de las demás (172). Además, cada una tiene un término de duración distinto: así, por ejemplo, las curativas se aplican por tiempo indeterminado (173), las de internación no más de quince años (174) y las de vigilancia hasta un máximo de diez años (175).

Aunque las medidas aplicables pueden ser sustituidas por otras, consideradas más adecuadas en cada caso por el juzgador (176), tanto las de internación y vigilancia se extinguen por prescripción, pero ninguna es afectada por la amnistía o el indulto (177).

El Código Tipo regula los supuestos de concurso material (178) y concurso ideal (179), que en ningún caso pueden ser sancionados con pena mayor de la señalada para la respectiva clase de pena (180).

Se regulan los casos de reincidencia, habitualidad y profesionalidad (181), que suponen un aumento de pena para el sujeto y, en ocasiones, se la puede sustituir por medidas de seguridad (182).

La individualización de la pena se lleva a cabo con cri-

terios que combinan diversos aspectos objetivos y subjetivos inherentes al sujeto o de acuerdo con particularidades del hecho mismo (183).

Se permite, por otra parte, la condena de ejecución condicional de las penas no mayores de dos años de prisión, pero no respecto de la pena de multa o de las penas accesorias (184).

Para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena se establecen diversos requisitos (185) y se imponían numerosas obligaciones al favorecido con dicha suspensión (186), que en caso de incumplimiento producen la revocación de tal concesión o si comete un nuevo delito.(187).

Tratándose de condenas a penas de prisión de corta duración, el Código Tipo permite la sustitución de la misma por multa o trabajo a favor del Estado (188), sin que este beneficio - pueda concurrir, simultánea o sucesivamente, con la condena de ejecución condicional (189).

La libertad condicional es objeto de una amplia regulación (190), pudiendo concederse a quienes hayan sido condenados a una pena de prisión de más de dos años y cumplan ciertos requisitos.

Con la rehabilitación, regulada con notable amplitud, se permite al sancionado la recuperación de los derechos que se le privaron o restringieron en la respectiva condena (191).

Aunque el Código Penal Tipo contiene algunas disposiciones referentes a la responsabilidad civil derivada del delito - (192), no atribuye el reconocimiento de la misma al propio tribunal penal en el respectivo proceso, aunque expresamente dispone que su extinción, en todo caso, se regula de acuerdo con la ley civil (193).

Como causas de extinción de la acción penal y de la pena

aparecen la muerte del sujeto (194) y la amnistía (195); sólo - produce efecto respecto de la acción penal el perdón del ofendido en aquellos casos de delitos de "acción privada" (196) y el in dulto queda reducido a la extinción de la pena o su conmutación por otra más leve (197).

Diversos plazos de prescripción se establecen, según se trate de la acción penal (198) o de la pena (199).

3. Otras fuentes

A pesar de que el autor del anteproyecto de 1970 cita mu merosos textos en su "exposición de motivos", a parte del Código Penal Tipo que casi copia en el Libro I del anteproyecto, otros pocos textos tienen cierta influencia en todo su trabajo, aunque siempre en menor trascendencia que el mismo Código Tipo.

No en vano FABREGA ha señalado con toda exactitud que - "En la parte general el autor adopta con algunas variantes el Có digo Penal Tipo para Latinoamérica, elaborado por una comisión de juristas que a través de una serie de reuniones en distintos países vienen tratadndo, desde 1961 (sic), unificar el derecho - penal de este hemisferio" (200).

Así, por ejemplo, podemos señalar que algunos pocos artí culos del anteproyecto elaborado por Aristides ROYO proceden del anteproyecto venezolano de 1967 elaborado por JIMENEZ DE ASUA y José Agustín MENDEZ (201) y algunos vienen de anteproyecto argen tino de 1960. elaborado por Sebastián SOLER (202), todos ellos re feridos al libro primero.

Respecto del libro segundo, sobre los delitos, el ante- proyecto de 1970 sigue muy de cerca los lineamientos del Código Penal vigente aunque en ocasiones se aparta de aquél en algunas cuestiones trascendentales (203); además, por otra parte, en oca

siones refleja alguna influencia del Código Italiano de 1930 (204) y de otros textos penales hispanoamericanos, todo ello de acuerdo con la práctica jurisprudencial patria (205).

C) ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto de Código Penal de 1970 consta de 476 artículos y una "disposición final" que contiene una cláusula derogatoria; está dividido en dos libros y no incluye la regulación de las "faltas".

Al libro primero pertenecen los primeros 146 artículos y el resto están ubicados en el libro segundo sobre los delitos.

La estructura de este anteproyecto es la siguiente LIBRO I, denominado DE LA LEY PENAL EN GENERAL: "Disposiciones preliminares" (Título I); "Los hechos punibles" (Título II); "Responsabilidad por los hechos punibles" (Título III); "las penas" (Título IV); "Extinción de las acciones penales y de las penas" (Título V); "De las medidas de seguridad" (Título VI); y, "Responsabilidad civil derivada del delito" (Título VII); LIBRO II denominado DE LOS DELITOS: "De los delitos contra la personalidad del Estado" (Título I); "Delitos contra la libertad" (Título II); "Delitos contra la administración pública" (Título III); "Delitos contra la administración de justicia" (Título IV); "Delitos contra el orden público" (Título V); "Delitos contra la fe pública" (Título VI); "Delitos contra la seguridad colectiva" (Título VII); "Delitos contra el pudor y las buenas costumbres" (Título VIII); "De los delitos contra la vida" (Título IX); "delitos contra los bienes patrimoniales" (Título X); y, "Delitos contra la economía nacional, la agricultura, ganadería y el comercio" (Título XI).

D) CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto contiene una serie de principios básicos

sobre los que descansa: el principio de legalidad, la prohibición de la analogía y la retroactividad de la ley favorable al reo (206).

También establece el principio de la territorialidad de la ley penal panameña, las excepciones del mismo (207) y señala los efectos de la sentencia dictada en el extranjero respecto a la ley nacional para determinados supuestos (208).

Contiene, además, numerosas disposiciones relativas a la aplicación de la ley penal en el tiempo y en cuanto a las personas (209).

Por lo que respecta a los hechos considerados como punibles el anteproyecto establece en qué momento se entiende cometido el hecho punible y cuál es el lugar de su realización (210). Como formas del hecho punible establece la acción, la omisión y la comisión por omisión (211).

Regula a continuación la tentativa y el desistimiento voluntario de la consumación, omite toda mención sobre el delito frustrado (212) e incrimina el delito imposible cuando se trata de "absoluta" inidoneidad de los medios empleados (213).

Contiene un amplio catálogo de circunstancias atenuantes ordinarias (214), circunstancias agravantes (215), la perpetración del hecho en un momento de arrebató o de intenso dolor determinado por una injusta provocación constituye una circunstancia "especialmente atenuante" (216) y el hecho de ser el agraviado pariente cercano del ofensor figura como circunstancia atenuante o agravante según se trate (217).

Con causas de justificación se mencionan el cumplimiento de la ley (218), el estado de necesidad (219) y la legítima defensa (220). En caso de "exceso" se establece una atenuación significativa de la pena que, en caso de ser debida a una "excita-

ción o perturbación experimentada por el agente" permite al Tribunal eximir al sujeto de toda pena (221).

En lo que respecta a la culpabilidad se dispone que no se puede imponer pena alguna si el sujeto no ha actuado con dolo o culpa (222). Sobre estas nociones el anteproyecto precisa en qué caso existe dolo en el agente (223) y establece como categorías de culpa tanto la llamada culpa inconsciente como la culpa consciente (224).

A propósito de las causas que excluyen la culpabilidad del sujeto se incluyen el error de hecho y de derecho (225), la obediencia jerárquica (226), el estado de necesidad (227) y la exigibilidad de otra conducta cuando se usa coacción o amenaza (228).

Mención aparte merecen las nociones de reincidencia (229), habitualidad (230), profesionalismo (231) y peligrosidad (232) que trae el anteproyecto dentro del título sobre los hechos punibles, en especial la última que pugna con un auténtico derecho penal por el hecho (233).

En lo que respecta a la "responsabilidad por los hechos punibles" se dedica especial consideración a la imputabilidad e inimputabilidad y a las nociones de autor y partícipe.

Se establece el principio de que nadie puede ser penado por un hecho previamente como delito si no ha sido declarado imputable y culpable (234) y se señalan luego, las nociones de enfermedad mental, total o parcial, sean debidas a trastornos permanentes o transitorios (235) y la embriaguez, sus causas y efectos (236).

Por lo que se refiere a la autoría el anteproyecto hace uso a este respecto del criterio del "dominio del acto típico" para establecer la distinción entre autores y partícipes (237),

aunque utilice una fórmula notablemente confusa y hasta contradictoria (238).

Como categorías de partícipes encontramos la complicidad (239) y la instigación (240). Los cómplices, a su vez, pueden ser primarios (241) o secundarios (242).

En cuanto a las penas el anteproyecto, siguiendo con una tradición que viene desde el Código de 1922, mantiene los lineamientos del Código Penal Tipo que establece unas penas principales y otras como accesorias (243). Como principales figuran la prisión, el extrañamiento y la multa; como accesorias, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, oficio, arte o industria y la interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso.

Se señala que tanto la pena como la medida de seguridad deben ejercer una acción "rehabilitadora" sobre el condenado y que el límite máximo de la pena de prisión es de 25 años (244).

El extrañamiento consiste en la expulsión de un extranjero del territorio nacional por el tiempo de la condena impuesta (245).

Para la determinación de la cuantía de la multa se utiliza el criterio o sistema de "días-multa", se señala que su máximo es de 500 días-multa y que cada uno no puede exceder del cincuenta por ciento del salario diario del sujeto (246).

Queda el Tribunal facultado para conceder al sujeto la posibilidad del pago fraccionado de la multa e, inclusive, su conversión por trabajo remunerado a favor de entidades públicas (247) y se prevé en caso de impago de la multa que se imponga al sujeto la prisión sustitutoria que no podrá exceder, en ningún caso, de un año (248).

En el anteproyecto se consagra una amplia facultad discrecional a favor de los tribunales para que al momento de aplicar las penas respectivas tengan en cuenta la "mayor o menor peligrosidad del agente" (249) y las diversas circunstancias modificativas de la responsabilidad reconocidas en cada caso (250). Esta facultad llega a límites tan extremos que incluso se permite al tribunal atenuar discrecionalmente una pena (251).

El anteproyecto establece en qué casos la ejecución de una condena o de la detención preventiva decretada en la instrucción del proceso deberá ser aplazada (252) y consagra, además, en reemplazo de las penas de prisión inferiores a tres años la prisión en días y horas no laborables, el trabajo forzoso sin prisión y la reclusión domiciliaria (253), llegando a permitir también la sustitución de las penas de prisión que no excedan de un año por la reprensión pública o privada (254).

Además de lo anterior, el anteproyecto consagra la suspensión condicional de la ejecución de la pena o condena condicional de las penas de prisión que no excedan de tres años si se cumplen los requisitos que se establecen al respecto (255).

Para la concesión de la libertad condicional se establecen diversos requisitos en cuanto al tiempo de la condena impuesta y se permite luego de haber cumplido determinado tiempo de privación de libertad según el tiempo de aquella (257).

A propósito de la extinción de las acciones penales y de las penas se consagran en el anteproyecto como tales la muerte del sujeto (258), la amnistía y el indulto (259) y la prescripción (260).

En los delitos de acción privada el perdón del ofendido, o de su representante legal, extingue la acción penal, pero no la condena sino en los casos expresamente señalados por la ley

(261).

También extinguen la acción penal y la pena el matrimonio entre el procesado y la ofendida, cuando fuere legalmente posible en los delitos contra las buenas costumbres, siempre que - no hubiere oposición por parte de los representantes legales de ésta y del Tribunal Tutelar de Menores (262).

El perdón judicial extingue la pena en los supuestos en que este se permite (263), aunque en el anteproyecto se mencionan expresamente diez casos al respecto.

Expresamente se dispone que la concesión de la amnistía, el indulto, la rehabilitación, el perdón judicial, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional no afectan la existencia de la responsabilidad civil ni el comiso (264).

A propósito de las medidas de seguridad previstas en el anteproyecto es preciso anotar que se consagra el principio de legalidad de las mismas (265), que en todo caso sólo pueden ser impuestas por las autoridades judiciales (266) a los sujetos comsiderados como "peligrosos" que hayan cometido un hecho delictivo(267).

Se consagra, en consecuencia, que las medidas de seguridad previstas en el anteproyecto son las que se imponen como consecuencia de un delito, no siendo posible aplicar medidas predelictuales (268).

Procede imponer una medida de seguridad cuando se trata de inimputables, delincuentes habituales o profesionales, cuando la prostitución, el homosexualismo, la toxicomanía o el alcoholismo son habituales y determinaron la conducta delictiva, cuando - se trata de un delito imposible y el sujeto sea considerado peligroso y cuando la eficacia de la pena pueda estimarse nula o in-

suficiente (269).

Como medidas de seguridad de carácter personal el anteproyecto incluye las siguientes: a) internamiento en un hospital psiquiátrico; b) internamiento en un establecimiento especial y educativo; c) internamiento en una colonia agrícola o establecimiento de trabajo; d) libertad vigilada; e) prohibición de residir en determinado lugar; f) prohibición de frecuentar lugares abiertos al público donde se expendan bebidas alcohólicas (270); como medidas de carácter patrimonial se mencionan: a) la caución de buena conducta y, b) el comiso (271).

Respecto a la responsabilidad civil derivada del delito se dispone que en la sentencia condenatoria dictada en el propio juicio criminal se podrá ordenar la indemnización del daño material o moral producido y la restitución de la cosa objeto del delito o su valor equivalente (272).

Sobre la responsabilidad civil, además, el anteproyecto contiene una amplia regulación de cuestiones tales como la extensión de la misma a los tutores y curadores de los inimputables (273), la solidaridad de los partícipes (274), la transmisión de la misma (275), la responsabilidad de terceras personas (276) y la forma de extinción de la propia responsabilidad civil derivada del delito (277).

E) INNOVACIONES RESPECTO DEL CODIGO PENAL VIGENTE

1. Generalidades

Hay una serie de cuestiones de suma trascendencia que se incluyen en el anteproyecto que no tienen antecedentes en nuestra legislación o, en algunos casos, suponen una regulación radicalmente distinta de la actualmente prevista.

A continuación, nos interesa resaltar brevemente cada

uno de las mismas y señalar la situación existente al respecto en la legislación vigente.

Para tal fin consideramos oportuno la distinción en cuatro grandes grupos, a saber: a) las vinculadas con la teoría de la ley; b) las referentes a la teoría del delito; c) las relacionadas con la teoría de la pena y medidas de seguridad; y, finalmente, d) las relacionadas con los delitos en particular.

2. Innovaciones en la teoría de la ley

En lo que respecta a la teoría de la ley penal el anteproyecto contiene algunos aspectos totalmente nuevos en nuestra legislación: la prohibición expresa de la analogía (278), la regulación de los efectos de la sentencia dictada en el extranjero (279) y la declaración de que los hechos ocurridos durante la vigencia de una ley temporal se resuelven de acuerdo con lo que ella disponga (280).

Desde el punto de vista formal, el título primero del Libro I dedica sendos capítulos a los problemas relacionados con el ámbito de validez de la ley penal (tiempo, espacio y personas).

3. Innovaciones en la teoría del delito

En cuanto a la teoría del delito señalar la estructuración de los "hechos punibles" a partir del concepto de acción.

De esta forma se establece que el hecho punible puede ser realizado por "acción", "omisión" y por "comisión por omisión" (281), mientras que en el Código vigente nada se dispone al respecto.

El delito imposible que no se regula en el Código de 1922 es objeto de especial consideración y permite la aplicación de una medida de seguridad al sujeto (282).

A propósito de las causas de justificación, se incluye

el estado de necesidad que se distingue del estado de necesidad inculpable regulado en la culpabilidad (283) con lo que se aparta el anteproyecto del criterio mantenido en el Código vigente de que el estado de necesidad siempre constituye una causa de justificación.

Por lo que respecta a la culpabilidad las innovaciones son mayores. En efecto, a diferencia del Código actual se consagra el principio de que no hay pena sin culpabilidad (284) y se precisan los conceptos de dolo y culpa que no se mencionan en el Código actual (285). Además, la regulación que trae el anteproyecto del problema del error es radicalmente distinta a la prevista actualmente (286).

Una innovación en materia de culpabilidad es la aceptación de la obediencia jerárquica como causa de inculpabilidad que en el Código de 1922 figura como una causa de justificación (287). Por otra parte, el anteproyecto incluye como causa de inculpabilidad la coacción o amenaza que no aparece en el Código vigente mencionada como tal (288).

A diferencia del Código de 1922 que nada señala al respecto, el anteproyecto consagra un concepto de autoría que se basa en el "dominio del acto típico" (289).

4. Innovaciones en la teoría de la pena y medidas de seguridad

Es en este aspecto en donde encontramos las principales innovaciones o radicales modificaciones respecto del Código Penal vigente desde el 17 de enero de 1923.

En lo que atañe a las penas privativas de libertad el anteproyecto solo consagra una, la de prisión, mientras que el Código vigente menciona, además, la reclusión y el arresto (290).

Para la determinación de la multa el anteproyecto utiliza

el sistema de "días-multa", frente al criterio de multa global del Código actual (291).

Como pena principal el anteproyecto incluye el "extrañamiento" que no figura en la actualidad como tal (292).

Carecen de antecedentes en el Código vigente las facultades concedidas al tribunal para aplazar la ejecución de la pena impuesta en algunos casos (293), para sustituir las penas cortas por otras consecuencias penales (294), para otorgar el perdón judicial (295), para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena o condena condicional (296) y la incorporación de una serie de circunstancias comunes modificativas de la responsabilidad (297).

Tampoco tienen ningún precedente en nuestro Código actual el pago fraccionado de la pena de multa (298), la noción de habitualidad (299), profesionalismo y peligrosidad (300), la renuncia de la prescripción de la acción penal (301) y la regulación de la responsabilidad civil derivada del delito (302).

Mención aparte merece la regulación de las medidas de seguridad que encontramos en el anteproyecto, toda vez que el sistema de medidas que trae dicho texto difiere radicalmente del consagrado en la legislación patria, que ciertamente no está incluido en el Código vigente. (303).

5. Innovaciones en el Libro II

Por lo que respecta a la regulación de las diversas figuras delictivas, en el anteproyecto se incorporan al libro segundo algunos delitos previstos en distintas leyes especiales y se crean algunas nuevas figuras punibles que no tienen antecedente en nuestra legislación.

Quedan incorporados al anteproyecto los delitos relacio-

nados con drogas (304, contagio venéreo (305) y sobre cheques sin provisión de fondos (306) que ya estaban previstos en leyes especiales.

Constituyen nuevas figuras típicas en nuestra legislación el genocidio (307), la exacción ilegal (308), la piratería (309), el rufianismo (310), la trata de blancas, (311), el incumplimiento de los deberes familiares (312), el homicidio piadoso (313), el homicidio por imprudencia con vehículos (314), la tentativa de suicidio (315), los delitos de aborto preterintencional (316) y aborto culposo (317), los delitos contra la economía nacional (318) y la incriminación de las prácticas de monopolio, competencia desleal, uso de derechos ajenos y la insolvencia fraudulenta (319):

F) JUICIOS EMITIDOS SOBRE EL ANTEPROYECTO

A pesar de que durante el lustro comprendido entre 1975-1980 se han escrito diversos trabajos sobre el anteproyecto de código penal de 1970 (320) este hecho, sin embargo, no significa que se haya señalado cuanto procedía sobre el contenido del mismo.

Cierto es que el trabajo de los profesores MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ (321) constituye el estudio más acabado al respecto, pero hay que reconocer que en él no se abordan todos los aspectos que contiene el anteproyecto sino tan solo los más sobresalientes.

El anteproyecto de 1970 es el texto más acabado que en nuestro país se ha elaborado para sustituir al Código vigente, aunque adolezca de fallos e imprecisiones.

No en vano los citados autores señalaban en 1974 respecto del anteproyecto que "cabe hacer una revisión integral y sis-

temática de toda la materia que aparece regulada, a efecto de - ubicar y distribuir ordenadamente, cada una de las instituciones penales que se contemplan dentro de los títulos y capítulos correspondientes" (322).

Y, posteriormente, en otra publicación los mismos autores señalaban que dicho anteproyecto "en conjunto, supera en gran medida al Código Penal vigente especialmente en los aportes científicos que hace. No obstante, antes de que dicho proyecto se - convierta en Ley de la República, sería conveniente hacerle una revisión integral destinada a coordinar y reubicar adecuadamente toda la materia" (323).

"Los defectos formales y sustanciales de que adolece el proyecto obedecen -sin duda- al breve lapso en que él mismo fue elaborado (10 meses) y al esfuerzo individual que lo generó, tratándose de una obra que por su propia naturaleza, exige el aporte colectivo de los sectores de opinión estrechamente vinculados a la materia" (324).

En un trabajo anterior hemos señalado que "el Anteproyecto es producto de una época determinada y fiel reflejo de las - concepciones en ese momento imperantes. Se puede afirmar que a pesar de haber sido elaborado en 1970, se trata de un texto inspirado en principios de la década de los 60, pues en esa fecha se gesta en Chile (1963) el Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica, que ha servido en gran medida de modelo al Anteproyecto" (325).

Es por ello que el modelo utilizado por ROYO no supone casi ningún avance en la materia para aquella época en que aquél se redactó, por lo que poco pudo el anteproyecto aprovechar de - su modelo, que no cabe duda es un modelo de unificación del Derecho penal en hispanoamérica, más no de su reforma como ha puesto

de manifiesto el profesor BACIGALUPO (326).

De esta forma el anteproyecto, más que nada, se preocupa por "la reordenación de los presupuestos de la pena" (327) de modo que la solución de los problemas teóricos relativos a la acción típica, la antijuridicidad y la culpabilidad ocupan un lugar preponderante en el mismo.

No en vano ha dicho BUSTOS RAMIREZ respecto del Código Tipo y la reforma penal en hispanoamérica, y por ende perfectamente aplicable al anteproyecto de 1970, que "aquellos que se basan en el Código Penal Tipo, utilizan un lenguaje demasiado técnico y tienen una tendencia a clasificar y definir las diversas cuestiones a que se hace referencia en la teoría del delito. En tal sentido, más se asemejan a un tratado de Derecho penal que a un Código" (328).

Por otra parte, once años después de la elaboración del anteproyecto de 1970 resulta interesante indagar acerca de la actualidad del mismo, más aún si como anota ROXIN las "reformas de los últimos diez años han conducido a cambios radicales en el derecho penal de las de los cien años anteriores" (329).

Cierto es que las bases en que descansa el Código Penal Tipo se encuentran actualmente cuestionadas por la más autorizada doctrina hispanoamericana. En este sentido, los trabajos de los profesores BACIGALUPO y BUSTOS RAMIREZ (330) han puesto de manifiesto las contradicciones existentes en las recientes reformas habidas en el continente americano que tienen, casi todas, su punto de partida en el Código Tipo.

En lo que atañe al anteproyecto de 1970 nos interesa destacar en forma breve, algunas cuestiones de considerable trascendencia.

Por una parte, llama poderosamente la atención el exceso

de definiciones dogmáticas que tornan difícil la labor interpretativa de los tribunales de justicia (331).

En este sentido, por ejemplo, la mención del "dominio del acto típico" como criterio fundamental en la concepción de la autoría no permite a los tribunales la construcción de un concepto de autor fuera de los términos de la norma aludida.

Esta mención a la teoría de la acción final quizás hará más problemática la labor interpretativa de nuestros tribunales, ya que nuestros jueces y magistrados están formados en las concepciones clásicas o positivistas del Derecho penal de principios de siglo, pero carecen de una formación jurídica actualizada de acuerdo con las modernas transformaciones del Derecho penal.

Otra cuestión importante en el anteproyecto es la consagración del principio de culpabilidad (332) que, sin embargo, se ve reducido a la pretendida exclusión de supuestos de responsabilidad objetiva. Y usamos esta expresión "pretendida exclusión" toda vez que en la descripción de las figuras delictivas contenidas en el Libro segundo del anteproyecto existen diversos supuestos de delitos cualificados por el resultado, con lo que el beneficio que significaba tal principio queda reducido prácticamente a nada (333).

Por otra parte, cómo puede conciliarse con tal principio la determinación de diversas penas en base a ciertos resultados que exceden, en ocasiones, por completo de la culpabilidad del sujeto, como sucede en las lesiones dolosas en donde la mayor o menor gravedad del daño producido determina diversos tipos delictivos con penas más o menos graves (334).

A once años de su redacción, contrario a lo que antes hemos opinado, estimamos que el anteproyecto de 1970 debe ser dese

chado al momento de pretender sustituir nuestra legislación penal vigente.

Y es que no todas las soluciones que nos enseña el Derecho comparado pueden importarse, simple y llanamente, sin tomar en cuenta una serie de factores de los que depende la exitosa - aplicación de las normas existentes en otras latitudes.

Sólo nos interesa destacar al respecto que la solución que se quiere importar debe corresponder exactamente al problema planteado, para lo cual se requiere, entre otros aspectos, una identidad en el nivel jurídico de ambas sociedades, de modo que las soluciones aceptadas desde afuera puedan estar al alcance y comprensión de quienes tienen la tarea de administrar justicia, pues de lo contrario sería letra muerta ya que nadie comprendería el verdadero significado y contenido de la solución importada.

El Derecho comparado siempre tendrá un notable valor al momento de efectuar una reforma penal, pero no debe olvidarse que la utilización del mismo plantea -como anota el profesor RODRIGUEZ DEVESA- una serie de problemas y dificultades que deben tenerse en cuenta (335).

Cuan fácil ha sido en nuestra historia legislativa copiar indiscriminadamente, al elaborar nuestras leyes penales, - otros textos extranjeros.

G) LA REVISION DEL ANTEPROYECTO

1. Introducción

El Anteproyecto de Código Penal de 1970 ha sido sometido a revisión y actualización durante 1976-1978, con el fin de adecuar sus disposiciones con otros textos legales del país, proyectos sobre procedimientos también en fase de aprobación y exami-

nar los principios y bases en que se funda a la luz de las concepciones modernas.

La más destacada doctrina penal panameña había formulado serias críticas al Anteproyecto (336) y propugnaba una revisión integral del texto de 1970, aunque como CEVILLE ha señalado, "los proyectos no constituyen en modo alguno el criterio del Gobierno Nacional" y "solo "son sugerencias coherentes de sus autores quienes los concibieron con libertad" (337).

Se propugnaba por "una revisión integral y sistemática de toda la materia que aparece regulada, a efecto de ubicar y distribuir ordenadamente, cada una de las instituciones penales que se contemplan dentro de los títulos y capítulos correspondientes" (338).

Para esta tarea se dispuso la designación de una amplia "Comisión Revisora" de los Anteproyectos, cuya composición tenía la representación de amplios sectores de la sociedad panameña.

La labor de coordinación de los trabajos de la Comisión Revisora quedó a cargo de la "Comisión de Legislación" del Consejo Nacional de Legislación (en esa fecha así se denominaba al Organo Legislativo panameño), que procedió a designar a los miembros de la Comisión Revisora que habían recomendado los diversos organismos consultados.

La Comisión Revisora quedó fraccionada en las subcomisiones siguientes: a) procedimiento civil; b) código penal; y, c) procedimiento penal y organización judicial, siendo en cada una de ellas el coordinador de las mismas un miembro de la "Comisión de Legislación" del Consejo Nacional de Legislación.

2. La "Comisión Revisora" del anteproyecto

Para la integración de la Comisión Revisora de los anteproyectos la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de Le-

gislación realizó una serie de consultas entre diversos sectores de la sociedad panameña.

Fueron consultadas las Facultades de Derecho de la Universidad de Panamá (oficial) y de la Universidad Santa María La Antigua (privada), el Colegio Nacional de Abogados y organismos sindicales, de educadores y empresariales.

Cada uno de estos organismos designó sus representantes para integrar cada una de las subcomisiones aludidas, a las que se añadieron miembros del Organo Judicial y del Ministerio Público (Ministerio Fiscal).

Por lo que respecta a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el representante fue el Lcdo. Luis A. Shirley, profesor de Principios de Ciencia Política. Su designación se debió a que los catedráticos de Derecho Penal manifestaron su imposibilidad de asistir regularmente a las sesiones de trabajo de la Comisión Revisora, por lo que consideraban prudente no aceptar la propuesta que se les ofreció.

En cuanto al Colegio Nacional de Abogados, se designó a diversos abogados en ejercicio para que formaran parte de la Comisión, aunque -lamentablemente- no tenían ninguna preparación o experiencia en el campo del Derecho Penal.

Como representante de la Universidad Santa María La Antigua fue designado el Lcdo. Rafael Rodríguez, Profesor Asistente de Derecho Penal, quien desde hace muchos años desempeña también la labor de fiscal.

El Ministerio Público designó para integrar la Comisión Revisora al Lcdo. Carlos Pérez Castrellón, quien ocupaba el cargo de Procurador de la Administración y hasta hacía poco tiempo había sido profesor de Derecho Penal (Parte general) de la Universidad de Panamá.

Fuera de estas personas conocedoras del Derecho, fueron designados los representantes de los obreros, del Magisterio Panameño Unido (educadores) y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

Constituía la Comisión Revisora del Anteproyecto de Código Penal de 1970 se efectuó la primera sesión de trabajo el 7 de julio de 1976, concurriendo, además de sus 13 miembros, el autor del anteproyecto, quién realizó una breve exposición sobre el contenido del mismo y sus principios orientadores.

Como coordinador de la Comisión Revisora del Anteproyecto fue designado el señor Sergio Pérez Saavedra, miembro de la Comisión de Legislación. Posteriormente Pérez Saavedra es sustituido por Oscar Ceville, quien era Asistente de la Comisión de Legislación.

La Comisión Revisora acordó que las sesiones de trabajo se efectuarían un día a la semana, estableciéndose para tal fin la tarde de los miércoles.

Una Comisión Revisora como la señalada estaba destinada a fracasar, Ello, en parte, se debió a la falta de preparación de la mayoría de sus miembros en la materia objeto de discusión, ya que sólo 4 de ellos tenían algunos conocimientos al respecto, puesto que eran miembros de la carrera judicial o fiscales,

"Como es costumbre reiterada de las comisiones de trabajo, y esta no fue una excepción, se produjo una deserción inicial, situación que fue subsanada, reforzando la misma con otros especialistas en la materia y complementándola con la participación de profesionales de la psicología y sociología" (339).

Puesto que la Comisión Revisora del Anteproyecto carecía de un "relator", a finales de julio se designa a Carlos Enrique Muñoz Pope, quien inmediatamente se incorpora a la Comisión. Co-

mo relator, sin embargo, sólo desempeñó el cargo en una sesión, ya que a la siguiente fue designado miembro de pleno derecho de la Comisión, siendo sustituido por Eric Sierra González en el cargo de "relator".

Las decisiones tomadas por los miembros de la Comisión Revisora mostraban el deseo de transplantar el Código de 1922 al nuevo texto, situación que significaba mantener unas estructuras penales que tenían una antigüedad de más de un siglo.

En muchas ocasiones se señaló que era "más adecuado man tener la redacción de las disposiciones del Código Penal vigente por considerar que en la práctica han resultado más efectivos o porque en su redacción resultaban más claros y comprensibles que las presentadas por el anteproyecto de "Codigo Penal" (340).

Tal actitud, asumida de modo general por los "prácticos" que formaban parte de la Comisión Revisora, hizo necesaria la in corporación de los profesores de Derecho Penal de la Universidad de Panamá, quienes lucharon por la aprobación de un texto que no significara una vuelta al siglo pasado.

Es por esta razón, fundamentalmente, que se incorporaron la profesora Aura E. Guerra de Villalaz, catedrática de Derecho Penal, y el profesor Campo Elías Gonzalez Ferrer, profesor Asistente de la Universidad de Panamá.

De allí en adelante, hay que señalrlo, los profesores de Universidad de Panamá mantuvieron un bloque compacto para evitar el "injerto" del Código Penal de 1922 en el texto objeto de revi sión.

La revisión del Libro I del Anteproyecto se aceleró posteriormente cuando se acuerda por parte de los miembros de la Co misión Revisora aumentar las sesiones de trabajo de cada semana. Así, ya no sólo se trabajaba los miércoles, sino también los jue

ves en horas de la noche.

El mayor o menor medida la revisión del Anteproyecto de 1970 es obra de las siguientes personas: Aura E. Guerra de Villalaz, Carlos Pérez Castrellón, Campo Elías González Ferrer, Jorge Luis Cisneros, Jorge Arosemena, Rafael Rodríguez, Oscar Ceville, Ramón E. Fábrega, Enrique Bernabé Pérez, Luis Armijo, Eric Sierra, Fulvia de Sánchez y Carlos Enrique Muñoz Pope.

La revisión del Libro I del Anteproyecto concluyó en el mes de marzo de 1977 y enseguida se comenzó la revisión del Libro II sobre los delitos en particular. Al mismo tiempo, del seno de la Comisión Revisora del Anteproyecto se nombró una subcomisión, escogida por los mismos miembros de aquella, a fin de - que coordinarán todo lo relativo a la redacción, forma y algunas cuestiones de fondo que se estimaran necesarias.

CEVILLE señala que esta subcomisión fue designada para "perfeccionar la materia aprobada mediante un cuidadoso repaso de los aspectos formales y de fondo del Libro I del Anteproyecto" - (341). Formaron parte de esta subcomisión las siguientes personas: Aura E. Guerra de Villalaz, Carlos Pérez Castrellón, Ramón E. Fábrega, Oscar Ceville y Carlos Enrique Muñoz Pope.

Al iniciar sus trabajos esta subcomisión se planteó la conveniencia de modificar la estructura formal del Libro I aprobado por el pleno de la Comisión, que había quedado así: TITULO I: Disposiciones preliminares; TITULO II: El hecho punible; TITULO III: Las penas; TITULO IV: Extinción de las acciones penales y de las penas; TITULO V: Medidas de seguridad; y, TITULO VI: - Responsabilidad civil derivada del delito.

En la subcomisión que estudiaba detenidamente la revisión al Libro I se propuso modificar la división del Libro I, para que quedara de la siguiente forma: TITULO I: Disposiciones -

preliminares; TITULO II: El hecho punible; TITULO III: Las sanciones; y, TITULO IV: Responsabilidad civil derivada del delito.

Esta proposición fue formulada por Carlos Enrique Muñoz Pope quien pretendía la redistribución de la materia contenida en varios títulos, de modo que se refundieran en uno solo todas las disposiciones sobre penas, medidas de seguridad y las causas de extinción de la acción penal y de la pena.

Luego de considerada la propuesta, se prefirió mantener la estructura del Anteproyecto revisado por el pleno de la Comisión Revisora de éste.

Por lo que respecta a la revisión del Libro II del Anteproyecto de 1970, siguiendo las recomendaciones de los profesores MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ (342) se dejó de lado la distribución de este libro que traía el Anteproyecto y se procedió a ordenar la materia distinguiendo, al menos implícitamente, diversas categorías de infracciones.

Así se llegó a establecer la prioridad en la descripción de las figuras delictivas de las infracciones contra el individuo, seguidas de las infracciones contra la colectividad, concluyendo con las infracciones contra el Estado.

De esta forma, la revisión del Libro II adoptó el siguiente orden para la Parte especial: Título I: Delitos contra la vida e integridad personal; Título II: Delitos contra la libertad; TITULO III: Delitos contra el honor (343); TITULO IV: Delitos contra el patrimonio; TITULO V: Delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil; TITULO VI: Delitos contra el pudor y la libertad sexual; TITULO VII: Delitos contra la seguridad colectiva; TITULO VIII: Delitos contra la fe pública; TITULO IX: Delitos contra la personalidad jurídica del Estado; TITULO X: Delitos contra la administración pública; TITULO XI: Delitos contra

la administración de justicia; y, TITULO XII: Delitos contra la economía nacional.

La labor de la "Comisión Revisora" del Anteproyecto de 1970 concluyó a finales de 1978. Han sido más de dos años de trabajo regular y constante en donde los miembros de la Comisión - han colaborado con entusiasmo, dinamismo y sin devengar beneficio económico alguno.

De este trabajo no hay "actas", pero se conservan las transcripciones de todas las sesiones de la citada Comisión, ya que éstas fueron grabadas.

Lamentablemente esta transcripción es, en muchos casos, incoherente y sin sentido, ya que las sesiones de trabajo carecían del formalismo necesario y no se pudieron "grabar" adecuadamente las distintas intervenciones y luego "transcribir" con fidelidad las exposiciones de los miembros de la Comisión.

3. Principales modificaciones al Anteproyecto de 1970

Las principales modificaciones que se le han hecho al anteproyecto de 1970 tienen el propósito de propiciar un cambio en las estructuras penales del país, al mismo tiempo que conceden al sancionado una mayor atención. No hay que olvidar que sobre éste recae la sanción penal (344).

Dejando de lado las cuestiones meramente formales o dogmáticas (345), hay en el anteproyecto revisado una determinada concepción del Derecho Penal.

La Comisión Revisora entiende que el Derecho Penal debe ser la última de las medidas utilizadas por el Estado para controlar y disminuir la delincuencia. De esta manera la pena "solo debe imponerse allí donde no sean suficientes otros medios menos radicales para combatir o impedir fenómenos de perturbación social

(346).

En este sentido, la función de la pena privativa de libertad es la "reinserción social" del sancionado, de modo que pueda llevar una vida sin cometer nuevos hechos delictivos.

Esto supone que se considera al sujeto que delinque no - como un ser perverso al que hay que segregar, sino como un ser humano necesitado de ayuda.

Como consecuencia de lo anterior, el límite máximo de la pena privativa de libertad es rebajado de veinticinco a veinte años, siendo la pena del homicidio simple o básico fijada entre cinco y doce años de prisión y las figuras agravadas entre doce y veinte.

Por otra parte, la pena de multa es objeto de mayor utilización en el anteproyecto revisado que en el texto original de 1970, al tiempo que se reduce el máximo de la misma de 500 días-multa a sólo 365.

La revisión ha optado por eliminar del anteproyecto de 1970 las medidas que se pretendían utilizar para sustituir las penas cortas de privación de libertad, potenciando en su caso el uso de la pena de multa o la conversión de la prisión de corta - duración por multa o reprensión judicial (347).

Se han suprimido los casos en que se permitía la concesión del "perdón judicial", institución que en una sociedad como la nuestra, con jueces y fiscales generalmente mal preparados, podría resultar enormemente perjudicial.

El sistema de medidas de seguridad ha sufrido ciertas modificaciones (348). Se distinguen ahora las medidas de seguridad según su finalidad en preventivas, educativas y curativas. La posibilidad de imponer una medida de seguridad al sujeto cuando la eficacia de la pena pueda estimarse mala o insuficiente ha sido

eliminada.

Las medidas de seguridad educativas o curativas que el - anteproyecto revisado consagra son las siguientes: a) internamiento en un hospital psiquiátrico o en establecimientos de tratamiento especial y educativo al que se somete a los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y sujetos de imputabilidad disminuida; b) internamiento en una colonia agrícola para los delincuentes habituales o profesionales; y, c) sujeción a la vigilancia de las autoridades, cuando cumplida o suspendida una pena o medida de seguridad el tribunal lo juzgue conveniente (349).

Este sistema sigue siendo, sin embargo, muy imperfecto; aquí radica -hemos señalado anteriormente- el defecto más acusado del anteproyecto revisado (350).

Por lo que respecta al Libro II, es preciso destacar que se ha reducido apreciablemente la pena prevista para el homicidio simple, actualmente penado con privación de libertad por cinco a quince años, que ahora se pretende sancionar con prisión de cinco a doce años.

Han sido eliminados del anteproyecto la regulación del - homicidio piadoso, homicidio cometido por imprudencia con vehículos, el homicidio preterintencional (351) y la tentativa de suicidio.

Por lo que respecta al aborto, se mantienen las eximentes de responsabilidad cuando se trata de una violación carnal o existen posibilidades de peligro para la vida de la madre o de propio producto de la concepción. En estos casos se autoriza el aborto, pero en un centro de sanidad del Estado.

En los delitos contra el honor encontramos una regulación nueva que no figuraba en el anteproyecto de 1970. De esta forma se pretende darle mayor relevancia al honor de las personas.

nas, creando los delitos de calumnia e injuria, que en todo caso se incriminan con pena de multa (352).

Por lo que respecta a los delitos contra la propiedad, se ha tratado de no incurrir en el error del Código vigente de señalar en algunos delitos penas que son idénticas que las previstas para el homicidio, por lo menos en su límite mínimo. En estos delitos el Código actual ha llegado a triplicar las penas que tenía en su versión original.

A propósito de los delitos contra la salud pública, incluidos dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, la regulación de los delitos relacionados con las drogas es radicalmente distinta a la prevista en el anteproyecto de 1970, toda vez que se ha pretendido adecuar la normativa en cuestión con los convenios y tratados internacionales suscritos al respecto por Panamá (353).

Nos interesa destacar la nueva regulación de la expedición de cheques sin provisión de fondos, que ahora se incluye como un delito contra la fe pública y es sustraído del título de los delitos contra el patrimonio, toda vez que afecta considerablemente la fe que el público en general tiene respecto de este importante instrumento de pago. En este caso la pena prevista es de prisión y multa, pero si el sujeto cancela el valor del cheque dentro de las 48 horas que se le conceden al efecto, se le impone únicamente la pena de multa (354).

También debemos destacar la nueva regulación de los delitos de quiebra, de modo que no sea necesaria la remisión al Código de Comercio para saber qué se debe entender por quiebra (355).

Hay otras muchas modificaciones al anteproyecto de 1970, pero las anteriores son una amplia muestra de las reformas introducidas al texto elaborado por Aristides Royo.

4. El Anteproyecto revisado (Proyecto de 1978)

Concluida la labor de la revisión del anteproyecto de 1970, el texto que ha resultado ha sido denominado por la doctrina nacional como anteproyecto revisado o Proyecto de 1978.

Como es costumbre en Panamá, los proyectos no se publican en la Gaceta Oficial, pero ha circulado una copia del mismo que confeccionó la propia "Comisión de Legislación" al concluirse la revisión del anteproyecto original.

El 19 de junio de 1979 el texto resultante fue entregado formalmente al Excelentísimo Señor Presidente de la República, en sesión pública a la que asistieron los que participaron en la labor de revisión de todos los anteproyectos, así como miembros del Organo Judicial, Ministerio Público y algunos Ministros de Estado.

En aquella ocasión, a nombre de los miembros de la Comisión Revisora del Anteproyecto de 1970 señalábamos, entre otros aspectos, que el texto revisado "sin ser represivo sanciona la más variada gama de conductas que el común de la población reconoce como contrarias a la normal convivencia y que lesionan o ponen en peligro una serie de valores que, por tanto, deben ser objeto de protección penal por parte del ente jurídico estatal".

"En el seno de una Comisión Revisora ideológicamente homogénea se ha otorgado preponderancia a los bienes jurídicos personales".

"Como consecuencia de ello la regulación de los distintos delitos contra la vida y la integridad personal ha iniciado el catálogo de figuras delictivas contenidas en el Libro Segundo, pues hemos estimado que la vida es la fuente de todo derecho susceptible de ser ejercido por el hombre" (356).

A finales de 1979 este Proyecto ha sido remitido al Con-

sejo Nacional de Legislación para su consideración. Desde febrero de 1980 la "Comisión de Legislación" del Consejo Nacional de Legislación ha iniciado una serie de consultas con el propósito de estudiar cuáles eran las bases que sustentaban el texto remitido por el Organo Ejecutivo.

Esta labor se ha limitado, sin embargo, a volver a consultar a los miembros de la anterior "Comisión Revisora" del anteproyecto de 1970 y a los miembros del Organo Judicial y del Ministerio Público.

En la actualidad, marzo de 1981, la situación no ha variado. Dicho texto está pendiente de discusión en el seno del Consejo Nacional de Legislación.

5. Consideraciones finales

La revisión del anteproyecto de 1970 ha puesto de manifiesto el desconocimiento del Derecho Penal por un amplio sector de la "Comisión Revisora", que ha pretendido trasplantar al nuevo texto el Código Penal de 1922.

En la "Comisión Revisora" muchos de los que la integran han señalado que con severas penas se combate adecuadamente la criminalidad. La pena así concebida no cumple otros fines que la retribución por el hecho cometido, ya que -piensan algunos- jueces y magistrados panameños- debe ser impuesta como un castigo al "condenado" (ser perverso al que hay que segregar de la sociedad) sin perseguir otras finalidades.

Para nosotros esta postura es inadmisibile. Urge un cambio de mentalidad en todos los estamentos de nuestra sociedad a este respecto y mayor comprensión por parte de nuestros jueces.

"La idea -anota ROXIN- de que el derecho penal tiene que ser "fragmentario" o "subsidiario", esto es, que ha de preferirse a la aplicación del derecho penal la de cualquier otro instru

mento efectivo de control social, es mucho más antigua que el - proyecto sustitutorio, pero ha sido defendida por éste con particular energía. Ella tiene su origen en la convicción de que la sanción penal a menudo perjudica desventajosamente la posición social de los afectados por aquella y que, por lo tanto, también puede ser socialmente nociva; en consecuencia, solo resulta aceptable cuando es el único medio de evitar perjuicios sociales aún más graves" (357).

De aprobarse un nuevo Código, el mismo no significa la solución de todos nuestros problemas penales. Necesitamos además, otros nuevos textos sobre procedimiento penal, ejecución de penas privativas de libertad y una profunda restructuración de la administración de justicia penal, entre otros muchos aspectos dignos de tener en cuenta.

De nada vale tener mejores textos penales si nuestros juzgadores continúan administrando justicia con los conocimientos caducos y obsoletos que tienen. Todavía hoy en Panamá se pretende solucionar los problemas que se nos plantean con las soluciones positivistas ya superadas.

Miremos al futuro con nuevas soluciones.

NOTAS

- (1) Decreto 17 de 2 de febrero de 1923. Publicado en la Gaceta Oficial número 4049, de 27 de febrero de 1923.
- (2) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "Breves comentarios sobre el proyecto de código penal Royo" en LEX, Mayo de 1973, Nº 2, p. 24.
- (3) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 99.
- (4) Decreto 17 de 1923, art. 2º
- (5) Ley 5 de 2 de octubre de 1926. Publicada en la Gaceta Oficial número 4962, de 6 de octubre de 1926.
- (6) Ley 5 de 1926, art. 1º.
- (7) Decreto 212 de 16 de noviembre de 1926. Publicado en la Gaceta Oficial número 4994, de 23 de noviembre de 1926.
- (8) Decreto 130 de 1927.
- (9) En la portada de lee lo siguiente: "Proyecto de Código Penal para la República de Panamá preparado por Héctor Valdés, miembro de la Comisión Codificadora Penal, creada por la ley 5 de 1926. Panamá. Imprenta Nacional, 1928).
- (10) Ha sido costumbre en nuestra historia denominar "Proyecto de Código Penal" al texto que el Ejecutivo encomienda a una Comisión Codificadora, ya sea integrada por una o varias personas, cuando en realidad se trata de un "anteproyecto" que debe presentarse al Ejecutivo.
- (11) Ley 132 de 28 de diciembre de 1928. Publicada en la Gaceta Oficial número 5433.
- (12) Ley 132 de 1928, art. 1º:
- (13) Proyecto, art. 1º, inc. 1º.
- (14) Proyecto, art. 3.

- (15) C.P. 1922, art. 5.
- (16) C.P. 1922, art. 17; Proyecto, art. 19.
- (17) C.P. 1922, art. 29
- (18) Proyecto, art. 32
- (19) Proyecto, arts. 40 y 41.
- (20) Proyecto, art. 44; se mencionan las faltas también en los arts. 6 y 86.
- (21) Proyecto, art. 45.
- (22) C.P. 1922, arts. 46 y 50.
- (23) C.P. 1922, art. 43.
- (24) Proyecto, art. 62.
- (25) Proyecto, art. 63
- (26) Proyecto, art. 54; véase, también el art. 62, ordinal 6º
- (27) Proyecto, art. 65
- (28) Proyecto art. 66.
- (29) Proyecto, art. 70, inc. final.
- (30) Proyecto, arts. 83 y sgts.
- (31) Proyecto, art. 90, ordinales 2º y 4º respectivamente.
- (32) Veamos un ejemplo: los artículos 45 y 46 del Proyecto, entre otros, procedían de los artículos 41 y 42 del C.P. de 1916; los artículos 49, 50, 51 y 52 del Proyecto, entre - otros, procedían de los artículos 47, 48, 49, y 50 del C.P. de 1922. Otros casos se detectan con facilidad, pero aunque son numerosos nos basta lo antes señalado.
- (33) Proyecto, Libro II, Título I: delitos contra la seguridad de la nación; C.P. 1922, Libro II, Título I: delitos contra la patria.

- (34) Proyecto, Libro II, Título II: delitos contra los poderes - públicos; C.P. 1922, Libro II, Título II: delitos contra los poderes de la nación.
- (35) Proyecto, Libro II, Título X: delitos contra la conservación de los intereses públicos o privados; C.P. 1922, Libro II, Título X: delitos contra la seguridad.
- (36) Proyecto, Libro II, Título XI: delitos contra la honestidad; C.P. 1922, Libro II, Título XI: delitos contra las buenas costumbres y contra el orden de la familia.
- (37) Proyecto, Libro II, Título XII: delitos contra la vida; C. P. 1922, Libro II, Título XII: delitos contra las personas.
- (38) Proyecto, Libro II, Título XIII: delitos contra el honor, C.P. 1922, Libro II, Título XII, pero como capítulo VII.
- (39) Proyecto, art. 106.
- (40) Proyecto, arts. 410, 411, 412 y 414.
- (41) Homicidio preterintencional (Proyecto, art. 416; C.P. 1922, art. 315); infanticidio por causa de honor (Proyecto, art. 417; C.P. 1922, art. 316) y homicidio culposo (Proyecto, art. 418; C.P. 1922, art. 318).
- (42) Proyecto, arts. 424 y 423 respectivamente.
- (43) Proyecto, art. 434; C.P. 1922, art. 323, literal c).
- (44) Proyecto, arts. 478, 515, 516 y 517 respectivamente.
- (45) Proyecto, art. 304
- (46) Cf.: supra, Ps. 359-360.
- (47) MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 99.
- (48) Decreto 141 de 9 de agosto de 1941.
- (49) Ya hemos anotado anteriormente que en 1974, cuando se procedió a la remodelación del antiguo Palacio Legislativo se ordenó por la autoridad militar que tenía bajo su control di-

recto el edificio en cuestión la destrucción de los archivos y Biblioteca de la antigua Asamblea Nacional. Casi todo nuestro patrimonio legislativo desde 1904 hasta 1968 ha desaparecido.

- (50) JIMENEZ DE ASUA, p. 1121.
- (51) QUINTANO RIPOLLES, p. 149.
- (52) Cf: MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p. 99.
- (53) José Ramón CASABO-RUIZ, El proyecto de código criminal de 1830, Estudio preliminar y edición, Universidad de Murcia, 1978, p. 2.
- (54) Decreto-Ley 51 de 25 de mayo de 1944. Publicado en la Gaceta Oficial número 9413, de 30 de mayo de 1944. En desarrollo de este "Decreto-Ley" se dictó el Decreto número 967, de 25 de mayo de 1944, por medio del cual se designaron como miembros de la Comisión Codificadora encargados de elaborar el proyecto de Código Penal a los señores Dr. Miguel Angel Grimaldo y Licenciado Víctor A. de León S. (Gaceta Oficial número 9413, de 30 de mayo de 1944).
- (55) Aunque luego se les asignó un sueldo mensual a los miembros de la citada Comisión, dependiendo éste de que tuvieran o no alguna otra remuneración del Estado. Esto se debía, fundamentalmente, a que la Constitución de 1941, en esa fecha vigente, establecía que los empleados públicos solo podían devengar más de un sueldo en los casos especiales en que así lo dispusieren las leyes.
- (56) Decreto-Ley 41 de 21 de julio de 1947. Publicado en la Gaceta Oficial número 10.367, de 8 de agosto de 1947.
- (57) Ley 11 de 7 de febrero de 1950. Publicada en la Gaceta Oficial número 11138, de 10 de marzo de 1950.
- (58) Proyecto, Libro II, Título XV, art. 468.
- (59) Proyecto, Libro II, Título XV, art. 470.
- (60) Proyecto, art. 1º, inc. 1º.
- (61) Proyecto, art. 1º, inc. 2º

- (62) Proyecto, art. 4.
- (63) Proyecto, arts. 5 y 6 respectivamente.
- (64) Proyecto, art. 10
- (65) Proyecto, art. 11
- (66) Proyecto, art. 13
- (67) Proyecto, arts. 15, 17 y 18.
- (68) Proyecto, art. 22
- (69) Proyecto, art. 23
- (70) Proyecto, art. 25.
- (71) Proyecto, arts. 26 y 27.
- (72) Proyecto, art. 31.
- (73) Proyecto, art. 35
- (74) Proyecto, art. 34.
- (75) Proyecto, art. 36.
- (76) Proyecto, arts. 37 y sgts.
- (77) Proyecto, art. 43.
- (78) Proyecto, art. 52.
- (79) Proyecto, arts. 45 y 46.
- (80) Proyecto, art. 62.
- (81) Proyecto, arts. 71 y sgts.
- (82) Proyecto, art. 74.
- (83) Proyecto, art. 23.
- (84) Proyecto, art. 78.

- (85) Proyecto, art. 79.
- (86) Proyecto, arts. 88 y sgts.
- (87) Proyecto, art. 88; C.P. 1922, art. 29.
- (88) Confróntese, supra, capítulo V, "La legislación especial".
- (89) Proyecto, Libro II, Título XIV.
- (90) Proyecto, art. 299.
- (91) Proyecto, art. 308.
- (92) Proyecto, art. 307.
- (93) Cf: MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, Observaciones, p. 127
- (94) Proyecto, arts. 184, 186 y 188.
- (95) Proyecto, arts. 217, 387, 397 y 435.
- (96) Proyecto, art. 188.
- (97) Las disposiciones que aluden a "presidio" y "arresto" provienen del C.P. de 1916; las que aluden a "pesos" deben provenir de algún texto colombiano o argentino que eran de uso frecuente en los trabajos de reforma penal.
- (98) Proyecto, art. 435, inc. final.
- (99) Proyecto, arts. 430 y 432.
- (100) Proyecto art. 442.
- (101) En este sentido el profesor RODRIGUEZ DEVESA señala que - "Repugna a los sentimientos de justicia ligados a la idea de la proporcionalidad de las penas, el que determinados ataques contra la propiedad, v.gr., el hurto, puedan llegar a ser castigados con la misma pena abstracta que señala la ley para el delito de homicidio..." (RODRIGUEZ DEVESA, P. Especial, p. 369).
- (102) Con dicha denominación se designó al Ejecutivo integrado

por dos "coroneles", en situación de retiro, que se denominaron Presidente y Miembro de la Junta Provisional de Gobierno, que eran nombrados por los Comandantes Jefes de la Guardia Nacional.

- (103) Decreto de Gabinete número 121 de 8 de mayo de 1969. Publicado en la Gaceta Oficial número 16.365 de 21 de mayo de 1969.
- (104) Decreto de Gabinete 349 de 14 de noviembre de 1969. Publicado en la Gaceta Oficial número 16.496, de 1 de diciembre de 1969.
- (105) Aristides Royo es egresado de la Universidad de Salamanca y antes de ser contratado como profesor de Derecho Penal - lo había sido como profesor de Derecho Mercantil.
- (106) Véase: GUERRA DE VILLALAZ, p. 25; MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, p. 1.
- (107) GUERRA DE VILLALAZ, p. 25.
- (108) El trabajo de la profesora GUERRA DE VILLALAZ citado fue el primer estudio doctrinal que se publicó sobre el anteproyecto. Apareció en el número de Mayo de 1973 de la Revista LEX.
- (109) CEVILLE, p. 19.
- (110) ROYO, "Declaración Preliminar", Proyecto de Código Penal, p. 6.
- (111) La idea fue expuesta originalmente por el profesor Eduardo NOVOA MONREAL ante el Directorio del Instituto de Ciencias Penales de Chile en la sesión del día 8 de octubre de 1962 (Cf: Código Penal Tipo para Latinoamérica publicado bajo la dirección de Francisco GRISOLLA, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, volumen 1, Santiago, 1974.
- (112) Enrique RAMOS MEJIA, "El primer fruto de un valioso esfuerzo: la parte general del código penal tipo para latinoamérica" en N.P.P., Año 1 (1972), ps. 163 y sgts.
- (113) Código Penal Tipo para Latinoamérica, Tomo II, ps. 155-156.

- (114) Jorge FABREGA PONCE, La nueva codificación panameña, Impresora Panamá; S.A. Panamá, 1970, p. 10.
- (115) ROYO, Exposición de Motivos, ps. 32, 50 y 52.
- (116) ROYO, Exposición de Motivos, ps. 14,22,26,28,29 y 50 entre otras.
- (117) ROYO, Exposición de Motivos, ps. 31,50 y 52.
- (118) ROYO, Exposición de Motivos, p. 56.
- (119) ROYO, Exposición de Motivos, p. 56.
- (120) ROYO, Exposición de Motivos, p. 28.
- (121) ROYO, Exposición de Motivos, p. 27.
- (122) ROYO, Exposición de Motivos, p. 23
- (123) ROYO, Exposición de Motivos, p. 23
- (124) ROYO, Exposición de Motivos, p. 52.
- (125) ROYO, Exposición de Motivos, ps. 52 y 115.
- (126) ROYO, Exposición de Motivos, p. 32.
- (127) ROYO, Exposición de Motivos, p.52.
- (128) ROYO, Exposición de Motivos, p. 52
- (129) ROYO, Exposición de Motivos, p. 19. La referencia que da Aristides ROYO respecto de un proyecto alemán de 1956 es incierta. Descartando que se refiera a la República Democrática Alemana la mención parece apuntar a la República Federal Alemana, ya que ha mencionado la doctrina penal de este país.
Siendo ello así, parece ser que ha errado la fecha del proyecto toda vez que, según la propia doctrina alemana federal, no hubo proyecto en 1956.
En este sentido ha señalado ROXIN que desde la vigencia del Código de 1871 se han sucedido proyectos en 1911, 1919, - 1922, 1926, 1927, 1930, 1958, 1960 y 1962 (CF: Claus ROXIN, Iniciación al derecho penal de hoy, trad. de Fco. Muñoz Con

de y D.M. Luzón Peña, Universidad de Sevilla, 1981, p. 64).

(130) Código Penal Tipo para Latinoamérica, Tomo II en dos volúmenes. En adelante citado como PCPT.

(131) PCPT, arts. 12 y sgts.

(132) PCPT, art. 8.

(133) PCPT, art. 11

(134) PCPT, art. 12, inc. 1º

(135) PCPT, art. 12, inc. 2º

(136) PCPT, art. 14.

(137) PCPT, art. 13.

(138) PCPT, art. 15.

(139) PCPT, art. 15.

(140) PCPT, art. 16.

(141) PCPT, art. 17

(142) PCPT, art. 18, inc. 1º

(143) PCPT, art. 18, inc. 2º.

(144) PCPT, art. 19

(145) PCPT, art. 20.

(146) PCPT, art. 21

(147) PCPT, art. 22

(148) PCPT, art. 23

(149) PCPT, art. 24, inc. 1º

(150) PCPT, art. 24, inc. 2º

- (151) PCPT, arts. 25 y 26 respectivamente.
- (152) PCPT, arts. 27 y 28.
- (153) PCPT, art. 30.
- (154) PCPT, art. 31.
- (155) PCPT, art. 32.
- (156) PCPT, art. 33.
- (157) PCPT, art. 34.
- (158) PCPT, art. 35.
- (159) PCPT, art. 36.
- (160) PCPT, art. 39.
- (161) PCPT, art. 40.
- (162) PCPT, art. 41.
- (163) PCPT, arts. 42 y sgts. y 55 y sgts.
- (164) PCPT, art. 42.
- (165) PCPT, art. 42.
- (166) PCPT, arts. 43 y 51 respectivamente
- (167) PCPT, arts. 45 y sgts.
- (168) PCPT, art. 45, inc. 4º.
- (169) PCPT, art. 49.
- (170) PCPT, art. 50.
- (171) PCPT, art. 57.
- (172) PCPT, arts. 57 y sgts.
- (173) PCPT, art. 58.

- (174) PCPT, art. 59, inc. 1º.
- (175) PCPT. art. 59, inc. 2º.
- (176) PCPT, art. 61.
- (177) PCPT, art. 62.
- (178) PCPT, art. 66.
- (179) PCPT, art. 65.
- (180) PCPT, art. 67.
- (181) PCPT, arts. 69 y stgs.
- (182) PCPT, art. 72.
- (183) PCPT, art. 73.
- (184) PCPT, art. 74, inc. 1º
- (185) PCPT, art. 74, literales a), b) y c).
- (186) PCPT, art. 75
- (187) PCPT, art. 77.
- (188) PCPT, art. 80.
- (189) PCPT, art. 81.
- (190) PCPT, arts, 82 y sgts.
- (191) PCPT, arts. 87 y sgts.
- (192) PCPT, arts. 93 y sgts.
- (193) PCPT, art. 96.
- (194) PCPT, art. 98.
- (195) PCPT, art. 99.
- (196) PCPT, art. 101.

- (197) PCPT, art. 100
- (198) PCPT, art. 102.
- (199) PCPT, art. 108.
- (200) FABREGA PONCE, La nueva codificación panameña, cit., p.11.
- (201) Así, por ejemplo, el art.54 sobre "autores".
- (202) Así, por ejemplo, el art. 55 sobre "cómplices primarios"; al respecto, véase: José M^a. RODRIGUEZ DEVESA, "El anteproyecto de código penal argentino de 1960 de Sebastián Soler" en Anuario, Tomo XIII (1960), ps. 359 t sgts.
- (203) Introduce, por ejemplo, la figura del homicidio piadoso y contiene una amplia regulación de atenuantes y eximentes en el delito de aborto, objeto de críticas por la doctrina patria, y sólo en los delitos contra la vida.
- (204) ROYO, Exposición de Motivos, p. 115.
- (205) ROYO, "Declaración Preliminar", Proyecto de Código Penal, p. 5.
- (206) Anteproyecto 1970, arts. 1, 3 y 4 respectivamente.
- (207) Anteproyecto 1970, arts. 5 y sgts.
- (208) Anteproyecto 1970, art. 10.
- (209) Anteproyecto 1970, arts. 12 y sgts.
- (210) Anteproyecto 1970, arts. 18 y 19 respectivamente.
- (211) Anteproyecto 1970, art. 20
- (212) Anteproyecto 1970, art. 22
- (213) Anteproyecto 1970, art. 23.
- (214) Anteproyecto 1970, art. 25.
- (215) Anteproyecto 1970, art. 26.
- (216) Anteproyecto 1970, art. 24.
- (217) Anteproyecto 1970, art. 28.

- (218) Anteproyecto 1970, art. 29.
- (219) Anteproyecto 1970, art. 30.
- (220) Anteproyecto 1970, art. 31
- (221) Anteproyecto 1970, art. 33.
- (222) Anteproyecto 1970, art. 34.
- (223) Anteproyecto 1970, art. 35.
- (224) Anteproyecto 1970, art. 36.
- (225) Anteproyecto 1970, arts. 37 y 38 respectivamente.
- (226) Anteproyecto 1970, art. 41.
- (227) Anteproyecto 1970, art. 42.
- (228) Anteproyecto 1970, art. 43.
- (229) Anteproyecto 1970, arts. 44 y 45.
- (230) Anteproyecto 1970, art. 46.
- (231) Anteproyecto 1970, art. 47.
- (232) Anteproyecto 1970, art. 48.
- (233) Véase la crítica que a este respecto formula BACIGALUPO, p.7.
- (234) Anteproyecto 1970, art. 49.
- (235) Anteproyecto 1970, arts. 50 y 51.
- (236) Anteproyecto 1970, art. 53.
- (237) Anteproyecto 1970, art. 54.
- (238) Que parece tomada del Anteproyecto venezolano de 1967, Cf:
ROYO, Exposición de Motivos, p. 26).
- (239) Anteproyecto 1970, arts. 55 y 56.

- (240) Anteproyecto 1970, art. 57.
- (241) Anteproyecto 1970, art. 55.
- (242) Anteproyecto 1970, art. 56.
- (243) Anteproyecto 1970, art. 61.
- (244) Anteproyecto 1970, art. 62.
- (245) Anteproyecto 1970, art. 63.
- (246) Anteproyecto 1970, art. 64.
- (247) Anteproyecto 1970, arts. 65 y 66 respectivamente.
- (248) Anteproyecto 1970, art. 67.
- (249) Anteproyecto 1970, art. 71.
- (250) Anteproyecto 1970, arts. 74 y sgts.
- (251) Anteproyecto 1970, art. 82.
- (252) Anteproyecto 1970, arts. 83 y 84.
- (253) Anteproyecto 1970, arts. 85 y sgts.
- (254) Anteproyecto 1970, art. 87.
- (255) Anteproyecto 1970, arts. 90 y sgts.
- (256) Anteproyecto 1970, arts. 94 y sgts..
- (257) Anteproyecto 1970, arts. 99 y sgts.
- (258) Anteproyecto 1970, art. 102.
- (259) Anteproyecto 1970, art. 103.
- (260) Anteproyecto 1970, arts. 105 y sgts. (de la acción); arts.
111 y sgts. (de la pena).
- (261) Anteproyecto 1970, art. 104.

- (262) Anteproyecto 1970, art. 116.
- (263) Anteproyecto 1970 art. 117.
- (264) Anteproyecto 1970, art. 120.
- (265) Anteproyecto 1970, art. 121.
- (266) Anteproyecto 1970, art. 122.
- (267) Anteproyecto 1970, art. 123.
- (268) En la actualidad en la legislación panameña es posible imponer medidas de seguridad por hechos que no sólo constituyen delito, sino también "faltas".
- (269) Anteproyecto 1970, art. 125.
- (270) Anteproyecto 1970, art. 131.
- (271) Anteproyecto 1970, art. 133.
- (272) Anteproyecto 1970, art. 136.
- (273) Anteproyecto 1970, art. 137.
- (274) Anteproyecto, arts. 141 y 143.
- (275) Anteproyecto 1970, art. 142.
- (276) Anteproyecto 1970, art. 144.
- (277) Anteproyecto 1970, art. 146.
- (278) Anteproyecto 1970, art. 3.
- (279) Anteproyecto 1970, arts. 10 y 11.
- (280) Anteproyecto 1970, art. 15.

- (281) Anteproyecto 1970, art. 20.
- (282) Anteproyecto 1970, art. 23.

- (283) Anteproyecto 1970, arts. 30 y 42 respectivamente.
- (284) Anteproyecto 1970, art. 34.
- (285) Anteproyecto 1970, arts. 35 y 36 respectivamente.
- (286) Anteproyecto 1970, arts. 37-40.
- (287) Anteproyecto 1970, art. 41.
- (288) Anteproyecto 1970, art. 43.
- (289) Anteproyecto 1970, art. 54.
- (290) Anteproyecto 1970, art. 61.
- (291) Anteproyecto 1970, art. 64.
- (292) Anteproyecto 1970, art. 63.
- (293) Anteproyecto 1970, arts. 83 y 84.
- (294) Anteproyecto 1970, arts. 85-89.
- (295) Anteproyecto 1970, arts. 117 y sgts.
- (296) Anteproyecto 1970, arts. 90-93.
- (297) Anteproyecto 1970, arts. 24-28
- (298) Anteproyecto 1970, art. 66.
- (299) Anteproyecto 1970, art. 46.
- (300) Anteproyecto 1970, arts. 47-48 respectivamente.
- (301) Anteproyecto 1970, art. 114.
- (302) Anteproyecto 1970, arts. 136-146.
- (303) Anteproyecto 1970, arts. 121-135.
- (304) Anteproyecto 1970, arts. 345-351.
- (305) Anteproyecto 1970, art. 343.

- (306) Anteproyecto 1970, art. 436.
- (307) Anteproyecto 1970, art. 174.
- (308) Anteproyecto 1970, art. 229.
- (309) Anteproyecto 1970, art. 334.
- (310) Anteproyecto 1970, art. 374.
- (311) Anteproyecto 1970, arts 375
- (312) Anteproyecto 1970, arts. 389 y sgts.
- (313) Anteproyecto 1970, art..395.
- (314) Anteproyecto 1970, art. 397.
- (315) Anteproyecto 1970, art. 399.
- (316) Anteproyecto 1970, art. 410.
- (317) Anteproyecto 1970, art. 411.
- (318) Anteproyecto 1970, arts. 452-459.
- (319) Anteproyecto 1970, arts. 460-476.
- (320) Durante este período se ha publicado la Revista LEX, que le ha dedicado particular atención a las cuestiones penales, aunque ya en 1973 dicha revista se publicó por primera vez. Ahora en 1981 se ha comenzado a publicar Tribuna Penal (Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Panamá y Capítulo panameño de la A.I.D.P.), Marzo de 1981, Nº. 1, que contiene, entre otros, los siguientes trabajos que también aluden al Anteproyecto: Luis M. CARRASCO, "La violación carnal en la revisión del anteproyecto de Código Penal de 1970", ps. 73-82; Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "El delito de homicidio en el Código Penal panameño", ps. 123-143 (sobre la revisión del Anteproyecto de 1970 ps. 142-143).
- (321) Originalmente se publicó una primera parte y, luego, ya completo, en 1975 (Véase: "Observaciones al Anteproyecto de Có-

digo Penal elaborado por el Dr. Aristides Royo" en Revista Jurídica Panameña, N.º 4, Marzo-Diciembre de 1974, ps. 83-109).

- (322) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ y Campo Elias MUÑOZ RUBIO, "Observaciones al Anteproyecto de Código Penal elaborado por el Dr. Aristides Royo" en Revista Jurídica Panameña cit., p. 108.
- (323) MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, Observaciones, p. 161
- (324) MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, Observaciones, p. 161.
- (325) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Perspectivas futuras del derecho penal panameño" en Anuario, Tomo XXXI (1978), p. 344.
- (326) BACIGALUPO, p. 22.
- (327) Como bien ha ~~expuesto~~ anteriormente BACIGALUPO al ocuparse del Código Penal Tipo y la reforma penal latinoamericana, que indudablemente ha servido de modelo a nuestro Anteproyecto de 1970 (BACIGALUPO, p. 6.).
- (328) BUSTOS RAMIREZ, p. 24.
- (329) Claus ROXIN, "Modificaciones actuales del derecho penal" en Universitas, Volumen XVII, Diciembre de 1979, Número 2, p. 109.
- (330) Véase los trabajos de BACIGALUPO y BUSTOS RAMIREZ ya citados.
- (331) Se definen, entre otros, los conceptos de dolo y culpa (Anteproyecto 1970, arts. 35 y 36 respectivamente).
- (332) Anteproyecto 1970, art. 34.
- (333) Como sucede en el delito de aborto (Anteproyecto 1970, arts. 407 y 408).
- (334) Anteproyecto 1970, arts. 401 y sgts.
- (335) Recientemente el profesor RODRIGUEZ DEVESA ha señalado algunos problemas que se presentan al respecto. Véase: José Ma-

ría RODRIGUEZ DEVESA, "El derecho comparado como método de política criminal" en Anuario, Tomo XXXII (1979), ps. 5 y sgts (especialmente 6 y 7).

- (336) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ y Campo Elías MUÑOZ R., "Observaciones al anteproyecto de código penal elaborado por el Dr. Aristides Royo" en Revista Jurídica Panameña, 1974, nº 4, ps. 83-109.
- (337) CEVILLE, p. 20.
- (338) GUERRA DE VILLALAZ y MUÑOZ R., "Observaciones al anteproyecto...", Revista Jurídica Panameña, cit., p. 108.
- (339) CEVILLE, p. 20.
- (340) CEVILLE, p. 21.
- (341) CEVILLE, p. 21.
- (342) MUÑOZ R. y G. DE VILLALAZ, Observaciones, ps. 47-48.
- (343) La versión original del Anteproyecto de 1970 no incluía la regulación de los delitos contra el honor.
- (344) BACIGALUPO ha señalado que "El problema penal no se define hoy en día a través de la imagen del enfrentamiento de policías y ladrones, sino como una cuestión mucho más compleja de política social, que debe encararse, ante todo, desde - puntos de vista muy distintos si es que quiere encontrarse le una solución que a la vez no sea un peso sobre nuestras conciencias. Hace ya tiempo dijo Nietzsche: =Nuestro delito contra los delincuentes es tratarlos como canallas=. Tomemos conciencia de ello y encontraremos el camino de la reforma penal latinoamericana" (BACIGALUPO, p. 22).
- (345) Sobre éstas cuestiones, confróntese: Campo Elías GONZALEZ FERRER, "La revisión de la teoría jurídica del delito en el anteproyecto de código penal" en Actas, ps. 25-31.
- (346) Claus ROXIN, Iniciación al derecho penal de hoy cit., p.30
- (347) Arts. 82 y sgts. del anteproyecto revisado. Sobre el particular, confróntese: Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "Regulación de las penas en el proyecto Royo" en Actas, ps. 33-40.

- (348) Cf: Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Medidas de seguridad y responsabilidad civil en la revisión del anteproyecto de código penal de 1970" en Actas, ps. 41-47.
- (349) Arts. 112 y sgts. del anteproyecto revisado.
- (350) Cf: Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Fundamentos político-criminales de la revisión del anteproyecto de código penal de 1970" en LEX, Nº 11, Septiembre-Diciembre de 1978, ps. 15 y sgts. (especialmente, ps. 19-20); el mismo, "La arte general del proyecto de 1978" en LEX, Nº. 16, Mayo-Agosto de 1980, ps. 39 y sgts. (especialmente, ps. 43-44).
- (351) En el art. 138 del texto revisado se consagra un delito de lesiones agravado por el resultado muerte.
- (352) Arts. 172-180 del anteproyecto revisado.
- (353) Cf: Campo Elías GONZALEZ FERRER, "La revisión del anteproyecto de Código penal en materia de tutela del patrimonio, la seguridad colectiva y la economía nacional" en LEX, Nº 11, Septiembre-Diciembre de 1978, ps. 21 y sgts. (especialmente, ps. 24-26).
- (354) Cf: Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "Algunas de las principales innovaciones de la parte especial del proyecto revisado" en LEX, Nº 11 Septiembre-Diciembre de 1978, ps. 28 y sgts. - (especialmente, ps. 30-31).
- (355) Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "La reforma penal de los delitos en particular" en LEX, Nº 16, Mayo-Agosto de 1980, ps 45 y sgts. (especialmente, p. 51).
- (356) Carlos Enrique MUÑOZ POPE, "Entrega de proyectos de códigos penal y judicial al Ejecutivo" en LEX, Nº 13, Mayo-Agosto de 1979, ps. 10-12 (especialmente, p. 11).
- (357) Claus ROXIN, "Las transformaciones de la criminología y la situación actual de la política penal" en Universitas, Vol. XVII, Junio de 1980, Nº. 4, p. 251.

CONCLUSIONES

I

Al separarse Panamá de la Corona Española en 1821 y unirse voluntariamente a la "Gran Colombia" del Libertador Simón Bolívar sigue rigiendo en el territorio panameño la legislación española que regía en Colombia, con las modificaciones que las autoridades colombianas habían aprobado en su país.

II

Hasta 1837 no se promulga el primer Código Penal colombiano, que tiene como fuente de inspiración al Código Francés de 1810 y, en cierta medida, al proyecto español de 1821 que luego se convirtió en el Código de 1822.

III

Al separarse Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903 regía en el territorio nacional el Código colombiano de 1890, que en esencia era el de 1837 con sucesivas reformas y adiciones.

IV

Cuando Panamá se constituye en Estado independiente en 1903 continúa rigiendo el Código colombiano de 1890, con las modificaciones inherentes al cambio político y las que aprobaron las autoridades panameñas.

V

En 1914 la Asamblea Nacional de Panamá deroga todas las disposiciones contenidas en el Código colombiano de 1890 que se referían a la pena de muerte, que queda abolida en la legislación panameña.

VI

Mediante la reforma constitución de los años 1917 y 1918 se prohíbe terminantemente la aplicación de la pena de muerte en

Panamá.

VII

El primer Código Penal panameño se aprueba en 1916 y comienza a regir el 1º de julio de 1917. En esa fecha queda sin vigencia el colombiano de 1890.

VIII

Este Código de 1916 tiene como antecedente directo al hondureño de 1906, que a su vez procedía de los códigos hondureños de 1880 y 1898, siendo este último influenciado por el Código español de 1870.

IX

El Código Penal panameño de 1916 rigió hasta el 17 de enero de 1923, fecha en que comienza la vigencia del segundo Código Penal panameño, el de 1922.

X

La vigencia del Código Penal de 1922 se extiende hasta nuestros días, a pesar de los numerosos intentos de sustituirlo en 1928, 1943, 1952 y 1970.

XI

Nuestro Código de 1922 es "prácticamente" una copia del "Proyecto" que en 1912 elaboró el Dr. José Vichente Concha para sustituir en Colombia al Código Penal de 1890. Este proyecto colombiano es también una copia "casi literal" del Código italiano de 1889.

XII

La actual legislación penitenciaria es anacrónica. Carecemos de un verdadero "sistema penitenciario".

XIII

Nuestro país tiene un deficiente sistema de medidas de seguridad, que permite la imposición de medidas de seguridad por parte de las autoridades administrativas. Dicho sistema solo exige para las mujeres.

XIV

La legislación sobre menores concede amplias facultades al Tribunal Tutelar de Menores en lo relacionado con la conducta irregular de los menores de 18 años y faculta a dicho Tribunal para juzgar a los adultos responsables de algunas conductas en perjuicio de los menores.

XV

Una amplia y variada legislación especial ha regido en Panamá. En algunos casos esta legislación ha creado figuras delictivas que imponían hasta 15 años de privación de libertad por la vía administrativa.

XVI

Desde la vigencia del Código Penal de 1922 han sido numerosas las leyes que han modificado el articulado del mismo. En el Libro II las reformas se han reducido casi exclusivamente al imponer penas más severas.

XVII

El Código Administrativo de Panamá consideraba como "falta policiva" la vagancia. Modificaciones posteriores aumentaron las penas para la vagancia, llegándose a imponer la pena de confinamiento por 3 años en la Isla Penal de Coiba.

XVIII

En la actualidad las autoridades administrativas son com

petentes para sancionar con hasta un año de arresto algunos hechos que se consideran como faltas policivas. Entre ellos, algunos hurtos, apropiaciones indebidas y estafas de pequeña cuantía.

XIX

Las diversas Constituciones panameñas han contenido siempre disposiciones que aluden a cuestiones penales. Así, por ejemplo, sobre la pena de muerte, sistema penitenciario, obediencia jerárquica, entre otras.

XX

La llamada "Zona del Canal" ha estado sometida a una legislación propia, diferente de la panameña, aplicada por tribunales norteamericanos expresamente creados al respecto. Se trata de un derecho "codificado" en donde los tribunales allí radicados no utilizan el common law.

XXI

El Canal Zone Code de 1963, todavía vigente con las modificaciones que supone el Tratado del Canal de Panamá de 7 de septiembre de 1977, contiene una amplia regulación de las infracciones penales en la Zona del Canal. Estas infracciones son de dos clases: felony (delito) y misdemeanor (falta).

XXII

El aludido Tratado de 1977 devuelve a la República de Panamá parte de su jurisdicción sobre lo que fue la antigua Zona del Canal y crea un especial régimen de jurisdicción penal a favor de los empleados de la "Comisión del Canal de Panamá" que sean ciudadanos norteamericanos o dependientes de estos.

XXIII

En este Tratado de 1977 se crea también un especial régi

men de jurisdicción penal a favor de los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, el componente civil de dichas fuerzas y los dependientes de ellos.

XXIV

En algunas materias concretas (por ejemplo, pena de muerte y violación carnal) las estipulaciones del Tratado del Canal de Panamá entran en colisión directa con la Constitución panameña o con el Código Penal vigente.

XXV

Desde que empezó la vigencia del actual Código Penal se han realizado numerosos intentos de sustituirlo. Se han creado, asimismo, numerosas comisiones codificadoras de las que no queda constancia del trabajo que han realizado.

XXVI

El Anteproyecto de Código Penal de 1970 es el intento más reciente por sustituir nuestro Código Penal de 1922. Este anteproyecto se inspira, en cuanto a las disposiciones de carácter general (Libro I) en el Código Penal Tipo para Latinoamérica y en la descripción de las figuras típicas (Libro II), en el Código vigente, las leyes especiales y la jurisprudencia patria.

XXVII

Aunque la revisión del anteproyecto de 1970 ha mejorado notablemente el articulado del texto en cuestión, el resultado de la revisión es un texto al que todavía se le pueden introducir algunas mejoras sustanciales. El anteproyecto ya revisado - (o Proyecto de 1978) requiere algunas modificaciones, fundamentalmente, en cuanto a la culpabilidad y las medidas de seguridad.

XXVIII

La experiencia ha puesto de manifiesto con qué facilidad nuestros legisladores y autores de proyectos han copiado textos extranjeros, propios de sociedades tan disímiles a la panameña.

XXIX

En algunas ocasiones los "proyectos" para sustituir al Código vigente no han sido "corregidos" para ser utilizados en Panamá. De esta forma, en algunos proyectos panameños se mencionan monedas propias del país de donde proviene el texto que sirve como modelo. En otros casos se mencionan en la descripción de las figuras típicas ciertas "penas" que no figuran incluidas en el catálogo de penas que trae en el Libro I el mismo proyecto.

XXX

Una verdadera reforma del Código Penal panameño tiene que hacerse consultando a los especialistas en la materia, dejando de lado las cuestiones políticas o demagógicas.. El gran defecto de la "Comisión Revisora" del anteproyecto de 1970 fue el designar a educadores, obreros, empresarios y abogados sin formación penal especializada para una misión de tal envergadura.

XXXI

La "Comisión Revisora" del Anteproyecto de 1970, formada en su mayoría por personas no especialistas en la materia, han obstaculizado una reforma a cabalidad del anteproyecto. En cierta medida ello se debe a la intervención de los miembros de la judicatura y del Ministerio Público que se han resistido a los cambios.

BIBLIOGRAFIA

- Bernardino ALIMENA, Principios de Derecho Penal, Trad. de E. Cuello Calón, Vol. I, Librería General de Victoriano Suárez Madrid, 1915.
- Francis A. ALLEN, "Les infractions contre la propriété" en Le système penal des Etats-Unis D'Amerique, Institut de Droit Comparé de L'Université de Paris, Paris, 1964, ps. 83 y sgts.
- José ANTON ONECA, Derecho Penal, Parte General, Madrid, 1949.
- "El código penal de 1870" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXIII (1970), ps. 229 y sgts.
 - "Historia del Código Penal de 1822" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias penales, Tomo XVIII (1965), ps. 263 y sgts.
- Ruben AROSEMENA GUARDIA, "Notas y documentos sobre el Código Penal panameño" en Anuario de Derecho, Universidad de Panamá, Vol. V (1962), ps. 259 y sgts.
- Enrique BACIGALUPO, "El sistema de reacciones penales en las recientes reformas y proyectos latinoamericanos" en Cuadernos de Política Criminal, 1977, Nº 2, ps. 3 y sgts.
- Miguel BAJO FERNANDEZ, "Prólogo" a la edición española de H. ZIPF, Introducción a la política criminal, Trad. de Miguel Izquierdo Macías-Picavea, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979.
- Marino BARBERO SANTOS, Estudios de Criminología y Derecho Penal, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1972.
- Política y Derecho Penal en España, Tucur Ediciones, S.A. Madrid, 1977.
 - Marginación social y derecho represivo, Bosch, Barcelona, 1980.
- Teresa BENAVIDES, Enrique GONZALEZ DURO y otros, Las drogas... a lo claro, Editorial Popular, S.A., Madrid, 1980.

Antonio BERISTAIN, Medidas penales en derecho contemporáneo, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1974.

Giuseppe BETTIOL, Diritto Penale. Parte generale, Nona edizione, Cedam, Padova, 1976.

-Instituciones de Derecho Penal y Procesal, Trad. de P. Gutiérrez Alvis, Bosch, Barcelona, 1977.

Francisco BUENO ARUS, "Las normas penales de la Constitución española de 1978" en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, julio de 1979, ps. 25 y sgts.

Juan BUSTOS RAMIREZ, "Consideraciones respecto a la estructura del delito en la reforma penal latinoamericana" en La reforma del Derecho Penal, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1980, ps. 23 y sgts.

Juan BUSTOS RAMIREZ y Hernán HORMAZABAL MALAREE, "Pena y Estado" en Papers, Universidad Autónoma de Barcelona, ps. 97 y sgts.

Luis M. CARRASCO, "La violación carnal en la revisión del anteproyecto de código penal de 1970" en Tribuna penal, 1981, ps. 73 y sgts.

José Ramón CASABO RUIZ, El proyecto de código criminal de 1830, Estudio preliminar y edición, Universidad de Murcia, Murcia, 1978.

Federico CASTEJON, Derecho Penal, Tomo I, Reus, Madrid, 1931.

- "El proyecto Piniés de profilaxis social de 1922 y la Ley relativa a vagos y maleantes de 4 de agosto de 1933" en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 163 (1933), ps. 214 y sgts. y ps. 435 y sgts.

- "Las ideas penales en la época del código penal de 1870" en Conmemoración del Centenario de la Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1970, ps. 53 y sgts.

José CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, Tomo I, Editorial Tecnos, Madrid, 1976.

Oscar CEVILLE, "Motivos orientadores de la revisión (del anteproyecto de 1970)" en Actas. Primer Seminario de Actualización en Ciencias Penales, Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, 1977, ps. 17 y sgts.

Manuel COBO, "El sistema de penas y el arbitrio judicial en el Código Penal de 1870" en Conmemoración del centenario de la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial y del Código Penal de 1870, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1970, ps. 67 y sgts.

Manuel COBO DEL ROSAL y Tomás S. VIVES ANTON, Derecho penal, Parte General, Tomo I, Universidad de Valencia, Valencia, - 1980.

Código Penal Tipo para latinoamérica, Publicado bajo la dirección de Francisco Grisolia, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1974, 2 tomos en 3 volúmenes.

Rex A. COLLINGS Jr., "Les infractions contre les personnes", Le système pénal des Etats-Units D'Amerique cit., ps. 59 y sgts.

José Vicente CONCHA, "Proyecto de Código Penal y exposición de motivos" en La reforma penal en Colombia, Tomo I, Bogotá 1924.

Juan CORDOBA RODA, "La pena y sus fines en la Constitución" en La reforma del Derecho Penal cit., ps 151 y sgts.

Eugenio CUELLO CALON, Derecho Penal, Tomo I, Volumen 1, por Camargo, Bosch, Barcelona, 1980.

Robert, S. DE ROPP, Las drogas y la mente, Trad. de R. Carrasco Ruiz (de la 2ª edición inglesa de 1976), Compañía Editorial Continental, S.A., México, 1978.

Juan DEL ROSAL, "La palabra y la expresión en el código penal de 1870" en Conmemoración del Centenario cit., ps. 203 y sgts.

-Tratado de Derecho Penal Español. Parte General, Tomo I, Madrid, 1968.

- Fabián ECHEVERS, "Cincuenta años de vigencia del Código Penal" en Anuario de Derecho, Universidad de Panamá, Año IX (1970-71), Nº 9, ps. 123 y sgts.
- José M. ESCRIBA GREGORI, "Algunas consideraciones sobre Derecho Penal y Constitución" en Papers cit., ps. 141 y sgts.
- Federico ESTRADA VELEZ, Manual de Derecho Penal, Edijus, Medellín 1975.
- Jorge FABREGA PONCE, La nueva codificación panameña, Impresora Panamá, S.A. Panamá, 1970.
- Antonio GARCIA-PABLOS DE MOLINA, "La supuesta función resocializadora de Derecho Penal: utopía, mito y eufemismo" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXII (1979). ps. 645 y sgts.
- Joaquín GARRIGUEZ y DIAZ CAÑABATE, Sobre algunos puntos del código penal, Editorial Reus, S.A. Madrid, 1920
- Enrique GIMBERNAT ORDEIG, Autor y cómplice en Derecho Penal, Sección de Publicaciones e intercambio, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1966.
- Estudios de Derecho Penal, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1976.
- Introducción a la parte general del Derecho penal español, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1979.
- Campo Elías GONZALEZ FERRER, "La revisión de la teoría jurídica del delito en anteproyecto de código penal" en Actas, ps. 25 y sgts.
- "Secuestro extorsivo" en LEX, Revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Septiembre-Diciembre de 1977, Nº 8, ps. 171 y sgts.
- "La tutela penal del patrimonio, la seguridad colectiva y la economía nacional en la revisión del anteproyecto de código penal" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1978, Nº 11 ps. 21 y sgts.

Campo Elías GONZALEZ FERRER y Carlos Enrique MUÑOZ POPE, La jurisdicción penal en el Tratado Torrijos-Carter, Autoridad del Canal de Panamá, Panamá, 1979.

Luigi GRANATA, Compendio di Diritto Penale Italiano. Parte generale, Edizioni Dell'Ateneo, Roma, 1953.

Filippo GRISPIGNI, Diritto Penale Italiano, Volume primo, Giuffrè, Milano, 1952.

Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, "El delito de subversión del orden público" en Anuario de Derecho, Universidad de Panamá, Año X (1972), Nº 10, ps. 163 y sgts.

- "Breves comentarios sobre el proyecto de código penal de Royo" en LEX, Mayo de 1973, Nº. 2, ps. 23 y sgts.

- "Regulación de las penas en el proyecto Royo" en Actas cit., ps. 33 y sgts.

- "Algo más sobre el delito de expedición de cheques sin fondo" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1977, Nº 8, ps. 159 y sgts.

- "Algunas de las principales innovaciones de la parte especial del anteproyecto revisado" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1978, Nº 11, ps. 28 y sgts.

- "La reforma penal de los delitos en particular" en LEX, Mayo-Agosto de 1980, ps. 45 y sgts.

Aura E. GUERRA DE VILLALAZ y Campo Elías MUÑOZ RUBIO, "Observaciones al anteproyecto de código penal elaborado por el Dr. Aristides Royo" en Revista Jurídica Panameña, Marzo-Diciembre de 1974, Nº. 4, ps. 83 y sgts.

José HIGUERA GUIMERA, La previsión constitucional de la pena de muerte, Bosch, Barcelona, 1980.

Luis JIMENEZ DE ASUA, "Ley de vagos y maleantes. Un ensayo legislativo sobre peligrosidad sin delito" en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 163 (1933), ps. 577 y sgts.

- Tratado de Derecho Penal. 2ª. edición, Tomo I, Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1956.
- "Historia de la ciencias jurídico-penal en hispanoamérica" en El Criminalista, 2ª. serie, Tomo III, Víctor P. de Zavalia, editor, Buenos Aires, 1960, ps. 53 y sgts.
- Lombroso, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1960.

- Luis JIMENEZ DE ASUA y José ANTON ONECA, Derecho Penal conforme al código de 1928, Editorial Reus, S.A., Tomo I, Madrid, 1929.

- Agustín JORGE BARREIRO, Las medidas de seguridad en el derecho español, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1976.

- José LATOUR BROTONS, "Las libertades religiosas y políticas en el código penal de 1870" en Commemoración del Centenario cit., ps. 131 y sgts.

- Ricardo LEVENE (h) y Eugenio Raúl ZAFFARONI, Códigos penales latinoamericanos, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 1978.

- Vincenzo MANZINI, Tratado de Derecho Penal, Trad. de S. Sentís Melendo, Tomo I, Ediar Editores, Buenos Aires, 1948.

- Heinz y Herta MATTES, Problemas de Derecho Penal Administrativo, Trad. de J. Ma. Rodríguez Devesa, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, Madrid, 1979.

- Luis Eduardo MESA VELASQUEZ, Lecciones de Derecho Penal, 2ª, edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1974.

- Edmund MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Trad. de J.A. Rodríguez Muñoz, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, Madrid, 1935.

- Santiago MIR PUIG, Función de la pena y la teoría del delito en el estado social y democrático de derecho, Bosch, Barcelona, 1979.

Francisco MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, 3ª, edición, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979.

- "La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito" en Cuadernos de Política Criminal, nº 7 (1979), ps. 91 y sts.

Carlos Enrique MUÑOZ POPE, El concepto de autor en derecho penal, tesis (no publicada) Universidad de Panamá, Panamá, 1976.

- "El concepto de autor de los delitos dolosos en la legislación penal panameña" en LEX, Enero-Abril de 1976, Nº 3, ps. 147 y sgts.
- "Medidas de seguridad y responsabilidad civil en la revisión del anteproyecto de código penal de 1970" en Actas cit., ps. 41 y sgts.
- "Perspectivas futuras del derecho penal panameño" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXI (1978), ps. 339 y sgts.
- "Consideraciones en torno a la pena de muerte" en Tercer Seminario Nacional de Criminología, Panamá, 1978, ps. 94 y sgts.
- "Fundamentos político-criminales de la revisión del anteproyecto de código penal de 1970" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1978, Nº 11, ps. 15 y sgts.
- La pena capital en centroamérica, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1978.
- "En torno al código penal vigente y su posible reforma" en LEX, Mayo-Agosto de 1979, Nº 13, ps. 83 y sgts.
- "Las infracciones de menores en Panamá" en LEX, Septiembre-Diciembre de 1979, Nº 14, ps. 107 y sgts.
- "Perspectivas del derecho penal panameño. Parte especial" en LEX, Enero-Abril de 1980, Nº 15, ps. 153 y sgts.
- "La parte general del proyecto de 1978" en LEX, Mayo-Agosto de 1980, Nº 16, ps. 39 y sgts.
- "El delito de homicidio en el código penal panameño" en Tribuna Penal, Marzo de 1981, ps. 123 y sgts.

Carlos Enrique MUÑOZ POPE y Campo Elías GONZALEZ FERRER, "El peculado por error" en LEX, Enero-Abril de 1978, Nº 9, ps. 63 y sgts.

-La detención preventiva en el Tratado Torrijos-Carter, Publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, Panamá, 1979.

Campo Elías MUÑOZ RUBIO, El delito de malversación de caudales en los códigos penales de España y Panamá, Tesis doctoral (no publicada), Universidad Complutense, 1971.

-El peculado (su análisis-dogmático jurídico en el código penal panameño), Impresora Panamá, S.A., Panamá, 1973.

-Examen de la competencia de la jurisdicción militar y del procedimiento en el juzgamiento de Victoriano Lorenzo" en Revista Jurídica Panameña cit., ps. 126 y sgts.

-"La participación criminal" en LEX, Mayo-Agosto de 1975, Nº 1, ps. 119 y sgts.

Campo Elías MUÑOZ RUBIO y Campo Elías GONZALEZ FERRER, Derecho Penal Panameño, Parte Especial, Tomo I, Publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, Panamá, 1980.

Campo Elías MUÑOZ RUBIO y Aura E. GUERRA DE VILLALAZ, Observaciones al anteproyecto de código penal elaborado por el Dr. Aristides Royo, Imprenta Universitaria, Panamá, 1975.

-Derecho Penal Panameño. Parte General, 2ª. edición, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1980.

Ruperto NUÑEZ BARBERO, La reforma penal de 1870, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1970.

Francisco-Felipe OLESA MUÑIDO, Las medidas de seguridad, Bosch, Barcelona, 1951.

-"Sistemática de los delitos contra la propiedad en el código penal de 1870", en Conmemoración del centenario cit., ps. 179 y sgts.

Luis Carlos PEREZ, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Editorial

Temis, Bogotá, 1967.

-Manual de Derecho Penal. Partes general y especial, 2ª. edición, Editorial Temis, Bogotá, 1969.

Enrico PESSINA, "Il diritto penale in Italia da Cesare Baccaria sino alla promulgazione del Codice penale vigente" en Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, dirigida por E. Pessina, Volume secondo, Società Editrice Libreria, Milano, 1906, ps. 539 y sgts.

Ugo PIOLETTI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 2ª. edizione, Jovene, Napoli, 1969.

Antonio QUINTANO RIPOLLES, La influencia del derecho penal español en las legislaciones hispanoamericanas, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1953.

-Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal Español, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, Madrid, 1962.

César QUINTERO, Derecho Constitucional, Tomo I, Lehmann, San José, 1967.

Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Los delitos especiales y la teoría de la participación en el derecho penal español, Editorial Cymys, Barcelona, 1974.

Enrique RAMOS MEJIA, "El primer fruto de un valioso esfuerzo: la parte general del código penal tipo para latinoamerica" en Nuevo Pensamiento Penal, Año 1. (1972), ps. 163 y sgts.

Silvio RANIERI, Manuale di Diritto Penale, Volume primo, Parte generale, 4ª, edizione, Cedam, Padova, 1968.

Alfonso REYES ECHANDIA, Derecho Penal. Parte general, 6ª, edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1979.

Humberto E. RICORD, "Los derechos humanos penales en el derecho panameño y en el Código de la Zona del Canal" en Anuario

de Derecho, Universidad de Panamá, Año IX (1970-71), nº 9, ps. 129 y sgts.

- "Motivaciones político-sociales del juicio contra Victoriano Lorenzo" en Revista Jurídica Panameña cit., ps. 121 y sgts.

Esteban RIGHI, "Defensa social y menores infractores", ponencia presentada a las Terceras Jornadas Latinoamericanas de Defensa Social celebradas en la ciudad de México 3-7 de diciembre de 1979.

Víctor ROBINSON, "Acerca de la cannabis indica" en El libro de la hierba, Trad. de C. Trias, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977, ps. 175 y sgts.

Luis RODRIGUEZ MANZANERA, Criminología, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.

José M^a. RODRIGUEZ DEVESA, Derecho Penal Español, Parte General, Séptima edición, Madrid, 1979.

- Derecho Penal Español. Parte Especial, Octava edición, Madrid, 1980.

- "Las medidas de seguridad" en Actas cit., ps. 97 y sgts.

- "Alegato contra las medidas de seguridad en sentido estricto" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XXXII (1979), ps. 5 y sgts.

- "El derecho comparado como método de política criminal" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXII (1979), ps. 5 y sgts.

- "Inobservancia de los principios básicos y reglas establecidas en la parte general del Proyecto de 1980 en su parte especial, con algunos otros defectos sobresalientes de éste" en La reforma penal y penitenciaria, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1980.

- "El anteproyecto de código penal argentino de 1960 de Sebastián Soler" en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XIII (1960), ps. 359 y sgts.

Gonzalo RODRIGUEZMOURULLO, "Dogmática de los delitos contra la vida en el código penal de 1870" en Conmemoración del

Centenario cit., ps. 153 y sgts.

-Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1977.

Luis Eduardo ROMERO SOTO, Derecho Penal. Parte General, Editorial Temis, Tomo I, Bogotá, 1969.

Claus ROXIN, "Las nuevas corrientes de política criminal en la República Federal Alemana" en Nuevo Pensamiento Penal, Año 1 (1972), Nº 3, ps. y sgts.

-"Modificaciones actuales del derecho penal" en Universitas, Vol XVII, Diciembre de 1979, Nº. 2, ps. 103 y sgts.

-"Las transformaciones de la criminología y la situación actual de la política penal" en Universitas, Vol. XVII, Junio de 1980, Nº 4, ps. 251 y sgts.

-"Iniciación al derecho penal de hoy", Trad. de F. Muñoz Conde y D.M. Luzón Peña, Universidad de Sevilla, 1981.

Aristides ROYO, Proyecto de Código Penal. Exposición de Motivos, Panamá, 1970, (edición mecanográfica).

José A. SAINZ CANTERO. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, I, Bosch, Barcelona, 1979.

Arturo SANTORO, Manuale di Diritto Penale, Volume primo, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino, 1958.

Pablo A. SEGURA, Evolución del Derecho Penal colombiano, Tip. Omega, Bogotá, 1924.

Alfonso SERRANO GOMEZ, "Temas de Derecho Penal en la nueva constitución" en Lecturas sobre la Constitución Española, Tomo II, UNED, Madrid, 1978, ps. 71 y sgts.

José Enrique SOBREMONTÉ MARTÍNEZ, Indultos y amnistía, Universidad de Valencia, Valencia, 1980.

Juan B. SOSA y Enrique J. ARCE, Compendio de historia de Panamá, edición facsímil de la de 1911, con un estudio preliminar de C.M. Gasteazoro, Editorial Universitaria, Panamá, 1977.

Juan TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social y estado de derecho, Akal editor, Madrid, 1981.

Giuliano VASSALLI, "Codice Penale" en Enciclopedia del Diritto, volume VII, Giuffrè editore, 1960, ps. 261 y sgts.

